

LA MALA HORA EN COLOMBIA

Una perspectiva histórica del conflicto

FORREST HYLTON



LA MALA HORA EN COLOMBIA

Una perspectiva histórica del conflicto

FORREST HYLTON

LA MALA HORA EN COLOMBIA,
Una perspectiva histórica del conflicto
FORREST HYLTON

Traducción: Aixela Valentín y Johan Misler.

Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

ISBN: 978-980-7238-21-2
Depósito legal: lf78420083204792
Noviembre, 2008
República Bolivariana de Venezuela

Prólogo

Gonzalo Sánchez Gómez¹

Este libro es el producto de un encantamiento. El encantamiento con Colombia de este joven investigador americano que reparte sus preocupaciones investigativas entre la Colombia de Álvaro Uribe y la Bolivia de Evo Morales.

La deuda intelectual que he podido rastrear en la breve correspondencia que he tenido con el autor determina en gran medida su perspectiva. Formado en la escuela de la historia social británica (E. Hobsbawm, E.P. Thompson, Christopher Hill), remozada con los estudios subalternos de los orientalistas (Ranjit Guha, Partha Chatterjee) y con el ojo crítico del intelectual y militante pro-palestino Edward W. Said, el encantamiento de Forrest Hylton le llevó a buscar la lógica, o si se quiere, la crítica de la razón del conflicto en Colombia. A la postre, y seguramente muy a pesar de su espíritu combativo, la pesquisa le dejó la sensación de que la historia colombiana está dominada por

1. Profesor emérito de Historia, Universidad Nacional de Colombia. Director de la Comisión de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

un insuperable movimiento pendular que oscila entre la irrupción de la protesta y la demanda radical-popular, y la subsiguiente oleada represiva, cuya respuesta inevitable es a su vez la rebelión armada. Tal rebelión armada se traduce, por la vía de la recurrencia, en lo que el autor llama una hipertrofia militar de la resistencia popular. Eso es al menos uno de los nudos que deja traslucir este libro, denso y militante.

El libro, repito, es producto de un encantamiento, pero es también producto de un desencanto, el desencanto del autor con los desenfoques de la violencia que se han venido generalizando y según los cuales la violencia no tiene nada que ver con la situación socioeconómica, con el cierre o restricciones del sistema político, o con la pobreza que revelan a diario las estadísticas comparadas. Desprovistos de toda explicación hemos venido quedando mudos frente a una especie de entronización de lo que podríamos llamar la inmaterialidad de la violencia. El texto es un mentís, una vigorosa respuesta a estos vaciamientos de razones y sentidos y una búsqueda clara de la sustancia del conflicto colombiano.

En su desarrollo el texto está organizado alrededor de tres elementos o bloques temáticos destacables en la larga duración.

El primero se refiere a la forma específica de construcción del orden político, a lo largo del siglo XIX, caracterizada por la debilidad del Estado, la centralidad de los partidos y la fragmentación de las élites, en cuyas hegemonías no resueltas yace una de las principales razones de las crónicas guerras civiles. En realidad, las élites son tan fragmentadas como la topografía del país. Pero a esa fragmentación tampoco escapan las fuerzas contestatarias, llámense sindicatos, organizaciones campesinas, guerrillas o frentes políticos. En este contexto, la “democracia oligárquica” y bipartidista se ha mantenido con violencia, pero sin los sobresaltos institucionales que en otros países produjeron los populismos, las revoluciones sociales agrarias o las dictaduras. Más aún, el republicanismo radical popular, que tuvo una irrupción vigorosa y promisoriosa entre 1849 y 1854, y que puso a Colombia según el autor a la vanguardia del reformismo liberal y de la movilización política republicana en el mundo Atlántico, fue desarticulado primero con la regeneración a fines del siglo XIX y de nuevo a mediados del siglo XX con *la Violencia*. Adicionalmente, y en contraste con una tradición que ha puesto particular atención a las filiaciones ideológicas, Forrest Hylton, sin descartar éstas, se interesa más por las prácticas, los rituales y la política cotidiana de los de

abajo (indígenas, artesanos, afro-colombianos, colonos y comunidades campesinas) lo que le imprime un sello especialmente dinámico a los cambiantes escenarios que describe y analiza en este enjundioso texto.

El segundo eje temático se refiere a la dinámica del orden social, que también desde el siglo XIX se mueve en torno a las luchas por la tierra, a los procesos de colonización y de migración intrarrural o rural urbana, y a los infructuosos esfuerzos de ruptura de los campesinos con las redes clientelistas. Después de repetidos altibajos de reforma y violencia, esta arquitectura social culmina al filo del milenio con la aplastante contrarreforma agraria –una moderna refeudalización del campo por parte de los paramilitares y narcotraficantes, que no es solo expropiación-concentración de la propiedad, sino reversión de los limitados procesos de democratización rural de décadas precedentes y reconfiguración de las hegemonías y las exclusiones en una amplio número de departamentos, las divisiones territoriales de Colombia.

El tercer núcleo argumentativo se pregunta por los modos de estructuración del poder y la violencia, desde los años cincuenta del siglo XX hasta la época actual, en un escenario de competencia entre la sobe-

ranía limitada del Estado y las pretensiones de soberanía concurrente de insurgencia y contrainsurgencia, concurrencia cuyo resultado más abultado es la privatización de los poderes de coerción.

Desde luego esta privatización, enormemente descentralizada, trae otras secuelas: ha oscurecido, mucho antes de que Michael Ignatief en su brillante *The Warrior's Honour* lo hubiera constatado como una de las características de las guerras contemporáneas, las fronteras entre civiles y combatientes. En ese terreno han sentado funesta doctrina en Colombia presidentes como Laureano Gómez en los años cincuenta, y Turbay Ayala con su estatuto de seguridad a fines de la década de los setenta, cuyo sabor a Guerra Fría encuentra eco todavía hoy bajo la fórmula de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Los momentos son, desde luego, distinguibles, pero hay algo en común a todos estos regímenes, incluido el actual: manifiestan una irreprimible repugnancia por ideas como la de “resistencia civil”, “comunidades o territorios de paz”, “neutralidad indígena”, y en general todo esfuerzo de deslinde de los cuerpos armados. La población es vista, o como prolongación del ejército, o como prolongación de la insurgencia.

Haciéndole eco a esta constatación de Hobsbawm, “*I discovered a country in which the failure to make a social revolution had made violence the constant, universal, and omnipresent core of public life*”, quizás pueda decirse que para el autor de *La mala hora* la historia de Colombia ha sido una historia de contención obstinada de una profunda demanda de revolución social. Una revolución social derrotada, primero, por la regeneración en la *era del capital*, a fines del siglo XIX; abortada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y, en especial, durante *la Violencia* de los años cincuenta; y finalmente truncada con el colapso de la Unión Soviética, la crisis del socialismo real y las involuciones del ciclo revolucionario centroamericano, con breves destellos reformistas entre uno y otro ciclo.

Las consecuencias de tal trayectoria histórica son desde luego duraderas. No es la misma la mentalidad de un país que ha tenido una revolución, aunque después esta haya sido interrumpida (caso México, o Nicaragua) que la de un país que se ha mostrado incapaz de realizarla. En los primeros, el ejercicio del poder popular, así fuera transitorio, dejó una enorme confianza en la capacidad transformadora de la acción colectiva, en tanto que en el segundo, el caso de Co-

lombia, se ha acentuado un profundo pesimismo histórico frente a la posibilidad del cambio radical. Esto explicaría también por qué en Colombia pesa tanto la memoria como trauma sobre la memoria como celebración heroica.

Esta no es desde luego una pura y simple evidencia. Tal singularidad sólo resulta comprensible en el marco de una cuidadosa reflexión histórica. El “dónde estamos” sólo se nos aclara en la medida en que logremos establecer los determinantes estructurales, es decir, el “de dónde venimos”. Es cierto que a lo largo del siglo XIX Colombia era representativa de las innumerables guerras civiles que agitaron el subcontinente. Pero, en tanto para la mayoría de los países latinoamericanos, en el siglo XX las guerras civiles se habían convertido en un anacronismo, y se abrían a experiencias de incorporación social y política, bajo la fórmula del populismo (Vargas en Brasil, Perón en Argentina), Colombia habría de padecer esa prolongada guerra civil no declarada, llamada *la Violencia*, definida por Eric Hobsbawm como una compleja “revolución frustrada”. Colombia dejó entonces de ser representativa y se convirtió cada vez más en excepcional en el contexto de la política latinoamericana.

Tomando nota de esta singularidad, el libro es pues un viaje al descubrimiento de la excepcionalidad colombiana, una excepcionalidad comprensible solo, según el autor, en el contexto de la historia global de América Latina y de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos y con el capitalismo occidental.

Introducción

Recordando a Colombia

El olvido es un elemento clave del sistema,
tal como lo es en la historia colombiana.

Es un factor de poder.

*Jacques Gilard, Veinte y cuarenta años
de algo peor que la soledad (1988)*

Contexto

A finales de 2005, cerca de trescientos representantes de resguardos indígenas y comunidades negras colombianas confluyeron en Quibdó, la capital del departamento colombiano del Chocó, con el propósito de delinear estrategias para sobrevivir en una guerra donde ellos, o más bien las comunidades que representan, y su modo colectivo y no liberal de administrar los recursos y el territorio son el blanco. De acuerdo con la Constitución colombiana de 1991, considerada como una de las más progresivas del mundo, los indígenas tienen derecho a tener autonomía –lo

que incluye manejo colectivo de la tierra y autodeterminación, tanto política como cultural–, a través de los cabildos, que funcionan como células de gobierno local. En 1993, bajo la Ley 70, los afro-colombianos aseguraron derechos semejantes a aquellos consagrados en la Constitución para los pueblos indígenas: títulos de tierra colectivos manejados por los consejos comunales. Tanto los afro-colombianos como los pueblos indígenas se construyeron sobre tradiciones no liberales para constituirse como ciudadanos y comunidades democráticas.

Sin embargo, estos grupos estaban en peligro de extinción. Como parte de un movimiento de protesta y basándose en los derechos existentes –conquistados a través de procesos de organización que comenzaron en los años setenta y culminaron en la Asamblea Constituyente de 1991–, delegados indígenas y afro-colombianos redactaron cuatro cartas que presentaban el *dramatis personae* y explicaban resumidamente los temas más importantes de la fase actual del conflicto colombiano que ha tenido lugar en los últimos sesenta años. Más de una década después de la conquista de la ciudadanía, el departamento de Chocó aún tenía las tasas más altas de pobreza y mortalidad infantil en un

país en el que más de la mitad de la población vivía en pobreza.² Las comunidades y resguardos estaban desposeídos a merced de tres grupos: los insurgentes armados de la izquierda, los contrainsurgentes paramilitares y las Fuerzas Armadas Colombianas junto a la Policía Nacional –éstos últimos con un apoyo por parte del gobierno de los EE UU que supera con creces el apoyo dado a las fuerzas armadas de ningún país, excepto Egipto, Israel, Irak y Afganistán.³

Las comunidades representadas en la 7ª Conferencia de la Solidaridad Interétnica esbozaron una visión de los conceptos de “identidad, territorio, cultura, autonomía e independencia” diferente a la sostenida por los grupos que amenazan su existencia con la “expropiación violenta”. Delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la insurgencia más pequeña del país, pidieron respeto por la autonomía política y la soberanía territorial. Al ELN, quienes han estado en gran medida ausentes de la región por largo tiempo, se les

2. Para estadísticas sobre el Chocó, ver Grace Livingstone, *Inside Colombia: Drugs, Democracy and War*, New Brunswick, NJ, 2004, p. 75. Para la historia de la extracción de recursos naturales en el Chocó entre la década del setenta y ochenta, ver Peter Wade, *Blackness and Race Mixture*, pp. 131-48. Para categorías raciales, tales como mestizo y negro, ver *Ibid.*, pp. 8-28. Una nota sobre las estadísticas: asumo que son parte de luchas políticas para definir la verdad en vez de ser abstracciones numéricas neutrales, y las uso más con el propósito de ilustrar que buscando ser preciso.

3. Para cifras sobre la ayuda militar y policial de EE UU a Colombia, ver Adam Isaacson, “Number Three No More”, 19 abril 2005, en: www.ciponline.org.

pidió que se mantuvieran fuera de los resguardos indígenas y las comunidades negras. Fundado a mediados de la década de los sesenta y asentado a partir de los años ochenta en las regiones petroleras del norte y en los enclaves de exportaciones multinacionales (de carbón, oro y esmeraldas), el ELN cuenta con entre 3.500 y 4.500 combatientes, que, a diferencia de la mayoría de las áreas donde el grupo ha operado, el ELN apenas ha llegado en épocas recientes al Chocó. La represión estatal y, especialmente, la represión paramilitar contra su limitada base de apoyo los ha debilitado o derrotado en áreas rurales donde por mucho tiempo han dominado, y todas sus milicias urbanas han sido por decir menos diezmadas. De ahí que, en 2005, comenzaron conversaciones preliminares para el proceso de paz con el gobierno de derecha de Álvaro Uribe Vélez.

A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se les pidió que se mantuvieran al margen de las deliberaciones de los cabildos indígenas y los consejos comunales afro-colombianos. Las FARC se formaron a mediados de la década de 1960 y cuentan con entre 18.000 y 22.000 combatientes en sus filas. Para mediados de la década de 1990, tenían presencia en más de la mitad de todos los municipios, con gran

poder en la selva y en los llanos y en las zonas de frontera poco pobladas del sur y el sureste. Para finales de la década de 1990, las FARC y el ELN influyeron en la política de más del 90 por ciento de los municipios fronterizos. En la carta dirigida a las FARC, éstas fueron objeto de duras críticas:

Rechazamos la intrusión del FARC en nuestros consejos comunales y cabildos, pues compromete nuestra autonomía y nuestra identidad cultural; impide el libre ejercicio de nuestras actividades diarias; sirve de pretexto para la ausencia de las inversiones sociales que el Estado debe hacer; impide la puesta en práctica de las reglas y regulaciones internas; y afecta nuestra propia seguridad. Ustedes amenazan y estigmatizan a nuestra gente con acusaciones infundadas que no pueden ser refutadas, y crean un manto de sospecha sobre aquellas personas que se desplazan hacia y desde zonas rurales a capitales municipales, alegando que son informantes del Ejército. Por todas estas razones, reiteramos que ustedes no deben estar presentes ni en las comunidades negras ni en los resguardos indígenas.⁴

4. "No en nuestros territorios", 15 de noviembre de 2005, en: www.codhes.co; para la traducción al inglés ver Adam Isaacson, "Not in our territories, dicen los líderes del Chocó", en: www.ciponline.org.

Aún así, los ataques insurgentes y la intimidación a comunidades afro-colombianas y a los resguardos indígenas –aunque hechos representativos de la degradación del conflicto armado en Colombia–, no se comparan con la cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por la organización paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Esta cifra pasó del 65 a cerca del 80 por ciento del total durante el Plan Colombia (2000-2005), financiado por los EE UU.

Aunque las guerrillas hacen uso de tácticas terroristas, como la utilización de bombas, el secuestro, el asesinato selectivo y la extorsión, se llegan a pocos entendimientos dándoles la etiqueta de “terroristas”. Echarle la culpa a la guerrilla por la mayoría de los problemas del país (algo común en algunos académicos y en los medios de comunicación) es hacer las cosas al revés. Esto pasa por alto el hecho de que, durante toda la historia moderna, el terror de Estado ha suministrado el “oxígeno” sin el cual el terror insurgente “no podría arder por mucho tiempo”.⁵

5. Jon Wiener, “Mike Davis talks about the ‘Heroes of Hell’”, en *Radical History Review*, 85, 2003, pp. 227-37.

A diferencia de la insurgencia de izquierda, el dominio paramilitar ha estado íntimamente vinculado con la política oficial, lo que se evidencia en mayor grado en la zona de Antioquia, patria chica del Presidente Álvaro Uribe Vélez, así como en los Santanderes, el eje cafetero y la región de la costa Atlántica. Los paramilitares pueden definirse mejor como ejércitos privados que:

Colaboran con el ejército o asumen tareas que deberían ser responsabilidad del ejército, como la lucha contra las guerrillas. O, para decirlo con más exactitud, se encargan de los trabajos sucios y vergonzosos de esta lucha: la masacre de aquellos sospechosos de colaborar con la guerrilla (“paraguerrillas”) y el desplazamiento de la población civil desarmada que podría actuar como el “agua para el pez” para la guerrilla, para usar la metáfora maoísta.⁶

Al presidente Uribe se le recordó que después de que las comunidades denunciaron el incremento, bajo el amparo paramilitar, del cultivo de coca y el tráfico de drogas en la región desde 2003, el Gobierno no hizo nada al respecto, aparte de señalar colectivamente

6. Antonio Caballero, “¿Infiltrados o reinsertados?”, en *Semana*, 30 de abril de 2006.

territorios ocupados para la “expropiación violenta”, bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas. Recordando su denuncia sobre la coordinación paramilitar y militar en 2004, protestaron contra la puesta en práctica del modelo neoliberal de exportación agrícola a expensas de sus comunidades:

La palma africana pone en peligro nuestros títulos colectivos de propiedad, afecta nuestro frágil ecosistema, destruye nuestra agricultura, afecta las cosechas tradicionales, crea un enclave económico, agrava la crisis alimentaria e implica un largo proceso de acumulación de capital que solamente beneficiaría a grandes inversionistas, en perjuicio de nuestras comunidades... Lejos de ser una alternativa próspera, la palma africana representa una estrategia contrainsurgente que está exacerbando el conflicto en el Chocó.

El documento se refiere a inversionistas, a la acumulación de capital y a las economías extractivistas de enclave (aspectos decisivos en la integración colombiana a los circuitos de producción, consumo y

distribución dominados por los EE UU), resultado del desplazamiento del café y de la protegida manufactura industrial que empezó en la década de 1970.⁷ Los delegados mencionan una estrategia de contrainsurgencia, que, violando el Protocolo II de la Convención de Ginebra, exige lealtad y colaboración de parte de los ciudadanos con la policía y las Fuerzas Armadas, y que ayuda a expandir la agricultura de monocultivo para exportación con efectos potencialmente destructivos para el ecosistema y las etnias.

La carta al presidente Uribe trata del dominio paramilitar sancionado por el Estado en las regiones fronterizas periféricas donde el gobierno central nunca ha tenido poder, y en donde compañías petroleras, bananeras, auríferas y madereras han funcionado como fuente básica de recursos (condición necesaria para la expansión y la consolidación insurgente). Continuan-

7. Para el concepto de economías de enclave, ver Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, *Dependency and Development in Latin America*, Berkeley, 1979 [1971], p. xix: “En las economías de enclave el capital extranjero invertido *se origina en el exterior*, es incorporado en los procesos productivos locales y parte de éste se transforma en sueldos e impuestos. Su valor se incrementa por la explotación de las fuerzas laborales locales, que transforman los recursos naturales y producen bienes que hacen efectivo en el *mercado externo*”. (Cursivas en el original.) Para una discusión crítica, ver Catherine LeGrand, “Living in Macondo: Economy and Culture in a United Fruit Company Banana Enclave in Colombia”, en Gilbert M. Joseph, Catherine C. LeGrand, y Ricardo D. Salvatore, eds., *Close Encounters of Empire: Writing the History of US-Latin American Relations*, Durham, NC, 1998, pp. 334-37.

do con el precedente establecido durante la época de la Violencia en la década de 1950, el presidente Uribe comenzó a institucionalizar la impunidad paraestatal con el propósito de fortalecer la autoridad del gobierno central sobre las zonas de frontera –una peligrosa repetición del pasado–. La expropiación violenta se comparaba a la de inicios de la década de 1950, con 3 millones de desplazados en el siglo XXI, principalmente en enclaves multinacionales de exportación o en áreas fronterizas recientemente pobladas. En la mayoría de los casos, esto es llevado a cabo con la excusa de luchar contra el “enemigo interno”.⁸

Aunque las élites de los partidos políticos ya no lideran el proceso, la extrema derecha paramilitar, y en menor grado las guerrillas insurgentes de izquierda, continúan desplazando por la fuerza a los campesinos de sus tierras.⁹ Por lo tanto, los delegados de la Confe-

8. Iván Orozco Abad, “La democracia y el tratamiento del enemigo interior”, en *Análisis Político*, 6, enero-abril 1989, pp. 54-79.

9. Cifras tomadas de Human Rights Watch, “Colombia: Resumen de país”, enero 2006, en: www.hrw.org. Sobre desplazamiento, ver Nora Segura Escobar, “Colombia: Guerra y desplazamiento forzoso”, en *Análisis Político*, 43, mayo-agosto 2001, pp. 85-106. Sobre género y desplazamiento, ver Donny Meertens, “Victims and Survivors of War in Colombia: Three Views of Gender Relations”, en Charles Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia, 1990-2000: Waging War and Negotiating Peace*, Wilmington, DE, 2001, pp. 151-70; para bibliografía, ver Flor Alba Romero, “Población desplazada por la Violencia en Colombia y otros países”, en *Análisis Político*, 34, mayo-agosto 1998, pp. 126-43.

rencia de la Solidaridad Interétnica exigen el fin de la impunidad, de la expropiación, y del desplazamiento forzado, así como la indemnización por los crímenes cometidos contra sus comunidades. Además de apoyar un plan para la reincorporación de ex combatientes paramilitares a la vida civil, la carta al presidente Uribe advertía también que la desmovilización paramilitar podría traer como consecuencia el surgimiento de “nuevas estructuras paramilitares”, y abogaba por “el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil [...] en un ambiente de respeto a la verdad, la justicia, la indemnización y la no repetición”. En honor a su “autonomía”, pidieron que “la reinserción no se convierta en un mecanismo para la expropiación de nuestras tierras ancestrales”.

El énfasis hecho sobre aspectos como la memoria, la verdad, la justicia, la indemnización y la expropiación fue una respuesta a la ley 975 del presidente Uribe sobre la desmovilización de los paramilitares, que no ofrece nada de esto.¹⁰ Como *Human Rights Watch* destacó, la ley no hizo nada por dismantelar el poder paramilitar y “violaba flagrantemente” normas

10. Para temas de justicia, indemnizaciones y reconciliaciones, ver Iván Orozco Abad, “La posguerra colombiana”, en *Análisis Político*, 46, mayo-agosto 2002, pp. 78-99.

internacionales sobre asuntos de verdad, justicia e indemnización a las víctimas y a sus familias.¹¹ Con su extensa costa pacífica, su espesa selva, su densa red fluvial y su frontera montañosa con Panamá, el Chocó se convirtió en un corredor estratégico para la contrainsurgencia, que (al menos por el momento) ha derrotado a las FARC. Tanto la insurgencia como la contrainsurgencia han obligado a las comunidades afro-colombianas e indígenas a pagar impuestos y tributos, y se disputan el uso de su territorio para la siembra de coca, el procesamiento y transporte de cocaína y el tráfico de armas.

Vale la pena repetir que los grupos contrainsurgentes trabajaron con el ejército colombiano, se infiltraron en las instituciones oficiales, se “desmovilizaron” bajo una ley que regulaba su impunidad y se convirtieron en un paraestado (un Estado que está dentro y al lado del Estado oficial). Sin embargo, por lo menos en teoría, los insurgentes lucharon para derrocar el Estado colombiano y llegaron a controlar más del 40 por ciento del territorio nacional. Mientras más ha apoyado el Gobierno norteamericano a las Fuerzas Armadas Colombianas y a la Policía Nacional en la lucha contra

11. Human Rights Watch, “Colombia: Resumen de país”, enero 2006, en: www.hrw.org

la insurgencia, más fuerte se ha tornado el paraestado de derecha. Ésta es, así, una de las consecuencias accidentales de una política contrainsurgente pensada para fortalecer un Estado débil.

La guerra colombiana ha traído como consecuencia el segundo mayor desplazamiento interno de población en el mundo después de Sudán, donde la población afro-colombiana compone la mayoría desplazada y los pueblos indígenas representan, asimismo, un porcentaje desproporcionadamente alto.¹² Siendo el tercer país en tamaño de la región, Colombia tiene la segunda población más grande de afro-descendientes en América Latina.

Estos modelos de expropiación reflejan, a largo plazo, la continuidad histórica en la tenencia de tierra, la explotación de recursos naturales y el uso del terror

12. Como en toda América Latina, las categorías raciales no son rígidas y la identificación con el otro cambia según los procesos políticos y los resultados. De acuerdo al observatorio de derechos humanos del Gobierno colombiano, aproximadamente uno de cuatro colombianos era afro-descendiente, mientras que, según el ex gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, la verdadera cifra era de entre 36 y 40 por ciento. Un 80-85% de pueblos indígenas representaban un estimado de entre ochocientos mil a un millón de personas, tal vez dos por ciento de una población nacional de 44 millones de personas, de acuerdo con la Organización Nacional de Indígenas Colombianos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ver Luis Gilberto Murillo, “El Chocó: El corazón africano de Colombia”, en *Colombia Update: Colombia Human Rights Network*, invierno/primavera 2001, pp. 12-13.

político en una república democrática parlamentaria que se fundó sobre los problemas sin resolver heredados de la conquista, la colonización y la esclavitud.¹³ Bajo el colonialismo español, por ejemplo, los esclavos africanos eran traídos desde Cartagena, principal puerto de comercio de esclavos en la región andina, para trabajar en minas de oro y en fincas ganaderas en el Chocó, lo que provocó el desplazamiento o la expropiación de los grupos indígenas. Buscando escapar de una economía extraactivista de enclave y de latifundios de gran extensión, pero con propietarios ausentes, los indígenas, al igual que los esclavos liberados y fugitivos, huyeron hacia las regiones selváticas que son hoy el ojo del huracán.¹⁴

El Foro de Solidaridad Interétnica exhortó a todas

13. Para el concepto de colonialismo interno en Colombia y América Latina, ver Peter Wade, *Blackness and Race Mixture: The Dynamics of Racial Identity*, Baltimore, MD, 1993, pp. 147-48; idem, *Race and Ethnicity in Latin America*, Londres, 1997, pp. 64-67. Esquemáticamente hablando, las formaciones sociales estructuradas por el colonialismo interno reproducen, con frecuencia en nuevas formas, relaciones de violencia, dominación y explotación derivados del colonialismo. En América Latina, la pequeña minoría que se encuentra en las altas esferas (donde la riqueza y el poder político se concentra más que en cualquier otra región del mundo) es casi exclusivamente criolla (es decir, descendiente de españoles), mientras que los delgados sectores intermedios generalmente se adhieren al ideal criollo cualquiera que sea su tendencia. La mayoría de los trabajadores rurales y urbanos son individuos de piel oscura, descendientes de africanos, grupos indígenas y mestizos (producto de la mezcla de europeos, nativos americanos y africanos).

14. Ver William F. Sharp, *Slavery on the Spanish Frontier: The Colombian Chocó, 1680-1810*, Norman, OK, 1976.

las partes a buscar una salida política y negociada al conflicto, en oposición a la salida militar, ofreciendo una visión de paz, seguridad, democracia y justicia –y, sobre todo de verdad– distinta a la ofrecida por el Estado, la derecha paraestatal y la insurgencia de izquierda. Algunas formas comunitarias de democracia no liberal y de ciudadanía, vinculadas a un nuevo movimiento electoral de izquierda, representan un avance, pero debido a las violentas restricciones tanto del sistema político como del modelo económico neoliberal reinante este camino está obstaculizado.

Objetivo

Aunque la guerra civil en Colombia ha sido una de las más largas y violentas, su fondo histórico no es reconocido con frecuencia. Considerado el país latinoamericano menos entendido y estudiado en los EE UU, ganó su puesto en el mapa de los planificadores de la contrainsurgencia en el nuevo panorama imperial del siglo XXI.¹⁵ Considerando la proximidad geográfica en-

15. Ver Roland Marchal y Christine Messiant, “Las guerras civiles en la era de la globalización: nuevos conflictos y nuevos paradigmas”, en *Análisis Político*, 50, enero-abril 2004, pp. 20-34. Para una comparación de Colombia con Italia, Líbano y Angola, ver Nazih Richani, *Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia*, Albany, NY, 2002, pp. 157-71.

tre Colombia y los EE UU, así como la amplitud y profundidad del compromiso militar estadounidense con Colombia, es inquietante el relativo silencio que muestran los eruditos anglohablantes y el debate público.

Este libro se basó casi en su totalidad en el trabajo de investigadores, particularmente historiadores y científicos sociales, así como de periodistas y de trabajadores del área de derechos humanos, con el propósito de unir y esclarecer el pasado y el presente.¹⁶ La bibliografía existente sobre el período contemporáneo por lo general contiene un capítulo sobre la historia de la violencia política en Colombia, pero es necesaria una perspectiva histórica más profunda para comprender el momento actual. Sin embargo, las síntesis históricas existentes rechazan de plano a los movimientos populares radicales, enfatizando, en cambio, las acciones de las élites, los dos partidos políticos que estos han dominado y el surgimiento de la nación-Estado.

16. Un número importante de trabajos de ciencias sociales e historia no se citan más abajo. No pretendo ser exhaustivo; debido a que mi trabajo es esencialmente interpretativo, cito solo trabajos que utilicé. A aquellos no-especialistas que estén interesados en leer más les recomiendo consultar los ensayos bibliográficos incluidos en David Bushnell, *The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself*, Berkeley, 1993; Frank Safford y Marco Palacios, *Colombia: Divided Land, Fragmented Society*, Oxford, 2001; y Ricardo Peñaranda, "The War on Paper: A Balance Sheet on Works Published in the 1990s", en Charles Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia: 1990-2000*, Wilmington, DE, 2001, pp. 179-94.

Este libro intenta enmendar este problema en la bibliografía sobre el tema. Es cierto que en proporción a la progresiva hipertrofia de las sublevaciones armadas de izquierda, la movilización popular radical en Colombia ha sido comparativamente débil y fragmentada desde la década de 1960, pero no siempre fue así. Los movimientos populares radicales han marcado la historia colombiana en coyunturas específicas, con efectos duraderos, y una comprensión de su historia nos da una visión más completa de la nación-Estado, de los partidos y de la formación de la clase dominante. También ayuda a explicar los niveles extraordinariamente altos de la violencia política en Colombia, lo que la condujo por un rumbo diferente y más sangriento que el de sus países vecinos durante la Guerra Fría (la era más oscura del terror político en América Latina desde la conquista). Mientras los movimientos populares radicales y los partidos electorales socialdemócratas llegaban al poder en toda América Latina a comienzos del siglo XXI, en Colombia "la violencia 'invadía progresivamente más y más espacios públicos y privados' y se convertía en 'el factor desestabilizador de la política, la sociedad y la economía'".¹⁷

17. Sánchez, "Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia", en Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*, p. 19.

La afirmación principal de este libro es que para comprender la guerra civil colombiana hoy, es necesario apreciar las múltiples capas de los conflictos previos y el peso acumulado de las contradicciones sin resolver.¹⁸ El pasado y el presente se “iluminan recíprocamente” e indican el peligro, en el caso colombiano, de repetir el trauma político y colectivo.¹⁹ El conflicto contemporáneo en Colombia refleja el pasado, con importantes transferencias de propiedad y tierra a los más ricos y poderosos, además de una amnesia oficial hacia los crímenes de guerra –decretados en nombre de la “paz” y la “reconciliación nacional”–. Ubico estos debates actuales sobre memoria, verdad, justicia y reparaciones a las víctimas teniendo en cuenta el pasado. Como nos

18. La caracterización del conflicto es el tema del debate en curso. Seguí a tres estudiosos de la vida rural colombiana: William Ramírez Tobón, “¿Guerra civil en Colombia?”, en *Análisis Político*, 46, mayo-agosto 2002, pp. 151-63; Darío Fajardo, “La internacionalización de la guerra”, en Jairo Estrada Álvarez, comp., *El Plan Colombia y la intensificación de la guerra: aspectos globales y locales*, Bogotá, 2002, p. 71; Alfredo Molano, “¿Neutralidad?”, en *El Espectador*, 8 de mayo de 2005. Ver también Alfredo Rángel, “Guerra civil de baja intensidad”, en *El Tiempo*, 23 de mayo de 2004.

19. Fernand Braudel, “History and the Social Sciences” (1958), en *On History*, trans. Sarah Matthews Chicago, 1980, p. 37; idem, “La historia operacional: La historia y la investigación del presente” (1971), *Contrahistorias*, 2, México, DE, marzo-agosto 2004, pp. 29-40; Marc Bloch, *The Historians' Craft*, New York, 1953, pp. 43-47; y E.H. Carr, *What is History?*, New York, 1961, pp. 28-29, 35, 69. En Colombia, el trabajo realizado por Darío Betancourt y Marta Luz García resalta esta conexión. Ver Daniel Pécaut, “Los aportes de Darío Betancourt Echeverry”, en Gonzalo Sánchez et al., *Los intelectuales y la política*, Bogotá, 2004, pp. 107-19. Betancourt fue secuestrado y “desaparecido” en 1999.

recuerda un estudioso del terror de Estado en América Latina, “la recuperación empieza con la memoria”, y este libro se presenta como parte de la lucha contra el olvido.²⁰ Un efecto del uso del terror político a largo plazo en Colombia y en otras partes del mundo ha sido borrar el recuerdo de las alternativas políticas a las que el terror respondió.

Los temas

En las altas esferas políticas en Washington y Bogotá, se argumenta a menudo que Colombia padece de una cultura de la violencia, como si los colombianos tuviesen una propensión innata a matarse los unos a los otros.²¹ Como comúnmente se plantea, ésta es una explicación histórica y tautológica del porqué la polí-

20. Alison Brysk, “Recovering from State Terror: The Morning After in Latin America”, en *Latin American Research Review*, Vol. 38: 1, febrero 2003, p. 239; Elizabeth Jelin, *State Repression and the Labors of Memory*, Minneapolis, MN, 2003, pp. 46-49.

21. Me refiero a interpretaciones comunes que plantean una predilección por la violencia, que no está ubicada en el tiempo ni sujeta a cambios. Mientras estas interpretaciones prevalecen en las esferas políticas, más visiones como la de Álvaro Tirado Mejías resaltan el desarrollo de instituciones educativas, cultura política y regulación de la vida privada más autoritarias bajo la regeneración y a través de *La violencia* (1880-1964). Estos aspectos, por supuesto, merecen una consideración más seria. Ver Fabio López de la Roche, “Cultura política de las clases dirigentes en Colombia: permanencias y rupturas”, en López de la Roche, comp., *Ensayos sobre cultura política colombiana*, Bogotá, 1990, pp. 119-20, n.32.

tica colombiana está caracterizada por altos niveles de terror, en contraste con sus países vecinos, más bien caracterizados por gobiernos de centroizquierda y por la movilización popular. Este planteamiento pasa por alto el hecho de que hasta el final del siglo XIX, Colombia, al contrario de Brasil, México, Chile y Argentina, se definía “no por su violencia masiva, sino por la falta de la misma”.²² Bien sea al considerar las comparaciones con otros países de la región o la diferencia entre los siglos XIX y XX, los investigadores generalmente advierten sobre el error de interpretar la violencia de finales siglo XX como el resultado lógico de los patrones del siglo XIX. Las pruebas históricas son insuficientes para respaldar la idea de que una “cultura de violencia” explica la política colombiana.

Para explicar el inusual rumbo de Colombia, dos versiones clásicas de la historia comparativa latinoamericana recalcan la durabilidad de la democra-

22. James S. Sanders, *Contentious Republicans: Popular Politics, Race and Class in Nineteenth-Century Colombia*, Durham, NC, 2004, p. 197. Mary Roldán, *Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, 1946-53*, Durham, NC, 2002, p. 14. Ver también Malcolm Deas, “Algunas interrogantes sobre la relación entre las guerras civiles y la Violencia”, en Gonzalo Sánchez y Ricardo Pañaranda, eds., *Pasado y presente de la Violencia en Colombia*, Bogotá, 1986, pp. 41-46; y David Bushnell, “Politics and Violence in Nineteenth-Century Colombia”, en Charles Bergquist et al., eds., *The Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective* (Wilmington, DE 1992), pp. 11-30.

cia oligárquica, institucionalizada a través de dos partidos políticos.²³ Más recientemente, la idea de una “oligarquía” ha estado sujeta a críticas escépticas, aunque todavía es útil para comprender la violencia en Colombia en relación con un orden político excluyente.²⁴

Podemos definir a la oligarquía como un grupo casi corporativo, donde la mayoría de sus miembros disfrutaban de privilegios basados en su ascendencia y en algo parecido al rango, complementados por la aparición de nuevos elementos, principalmente de la clase media, y, ocasionalmente, de la clase obrera y campesina. Con elecciones presidenciales celebradas puntualmente cada cuatro años, la democracia oligárquica colombiana cuenta con el sistema bipartidista de más larga data en el mundo; de hecho, la diarquía conservadora-liberal ha sobrevivido casi 150 años, manteniéndose en apariencia intacta hasta el siglo XXI, a pesar de las elecciones legislativas controladas por la representación proporcional.

23. Cardoso y Faletto, *Dependency and Development*, pp. 96-99; Tulio Halperín Donghi, *The Contemporary History of Latin America*, Durham, NC, 1992 [1967], p. 282, 383.

24. Ver Daniel Pécaut, *Orden y violencia: Colombia, 1930-53*, vol. I, Bogotá, p. 18; David Bushnell, *The Making of Modern Colombia*, p. 284; Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994*, Bogotá, 1995, p. 237.

Después de 1848, cuando se estableció el dominio liberal y conservador, ninguna fracción de la oligarquía unía a la clase como un todo, junto con los grupos subordinados, en un proyecto hegemónico; ninguna podía representar sus intereses como los de la nación. Aunque esto era común en Europa y América Latina en el siglo XIX, en Colombia duró hasta el siglo XXI. Por consiguiente, las élites fueron forzadas a establecer pactos políticos con grupos subordinados que no llevaron a cabo rituales públicos de respeto y mucho menos asimilaron las normas y valores de sus gobernantes.²⁵ Por el contrario, estos grupos exigieron y lucharon por la igualdad; pero en vez de la hegemonía capitalista burguesa, el clientelismo católico autoritario, financiado por el aumento del capitalismo en la exportación de café y el Partido Conservador, dominó por un periodo de cincuenta años después de 1880 y anuló la ola de movilización popular radical que había caracterizado a Colombia durante la “era del capital” (1848-75).

El revanchismo y el grado de desarrollo tecnológico creciente se complementaron durante el *boom* de la exportación del café, la era del capital en Colombia, que,

25. Además de *The Prison Notebooks*, New York, 1971[1929-35], mi comprensión de la hegemonía de la clase dominante y la fragmentación territorial se ha visto influenciada también por el libro de Antonio Gramsci, *The Southern Question*, West Lafayette, IN, 1995, traducido y presentado por Pasquale Verdichio.

en vez de conducir a una expansión de la autoridad del gobierno central, fortaleció a los dos partidos políticos en un país geográficamente fragmentado, donde las oligarquías terratenientes mantuvieron la supremacía regional y local ante los desafíos que se ven más adelante. En mi opinión, el poco alcance del Gobierno central, la influencia de los dos partidos, el acentuado regionalismo basado en la tenencia de la tierra y la desunión de la clase dominante han sido las constantes en la historia republicana.

A medida que la frontera cafetera se establecía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sectores campesinos identificados con los blancos y con el progreso capitalista aseguraron sus derechos de propiedad e incorporación política a uno de los dos partidos a través de redes de financiamiento y clientelismo.²⁶ La mayoría de los campesinos, así como los afro-colombianos e indígenas, tenían derechos precarios en cuanto a la propiedad, una limitada incorporación a los dos partidos

26. Siguiendo las palabras de Catherine Le Grand, *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1850-1936*, Albuquerque, NM, 1986, p. 207, uso el término “campesino” para referirme a “pequeños cultivadores rurales que dependen del trabajo familiar para producir lo que consumen. Los aparceros, arrendatarios, pequeños propietarios y pobladores de la frontera serían, de acuerdo con esta definición, llamados campesinos”. Los campesinos son forzados a pagar un tributo en productos comestibles, ganado y, más frecuentemente, en dinero a una gama de funcionarios e instituciones religiosas y de Estado.

políticos y, además, vivían bajo la amenaza de violencia y/o arrebato de sus bienes. Cuando las reformas que venían de arriba coincidieron con la movilización de los de abajo, en la década de 1860, y de nuevo en la de 1930, los terratenientes reaccionaron en el campo movilizándolo a sus clientes para proteger sus privilegios étnicos y raciales, su monopolio político y el control sobre su propiedad. Estos movimientos de contrarreforma, así como los movimientos populares radicales a los que respondieron, eran organizados en el ámbito local y regional. Esto reflejaba la naturaleza de la riqueza de los terratenientes, el poder político y la autoridad en Colombia –fracturada y principalmente rural en la década de 1950.

El contraste entre Colombia y el resto de América Latina en las décadas de 1930 y 1940 no podía ser más marcado: México con Cárdenas, Argentina con Perón, Brasil con Vargas, Bolivia con Toro y Busch, o, como se muestra en estudios recientes, Cuba con Batista, República Dominicana con Trujillo, y Nicaragua con Somoza;²⁷ es decir, una forma de política que incluía a

27. Daniel James, *Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976*, Cambridge, 1988; Jeffrey Gould, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979*, Chapel Hill, NC, 1990; Alan Knight, "Populism and Neo-Populism in Latin America, especially Mexico", en *Journal of Latin American Studies*, 30: Parte 2, mayo 1998, pp. 223-48;

esos excluidos de las repúblicas oligárquicas con el fin de anticiparse a las amenazas, verdaderas o imaginadas, de la revolución: el populismo triunfando brillantemente. Aunque la clase media y fragmentos de las viejas oligarquías pudieron haberse beneficiado más que otros grupos, la clase obrera y la clase campesina se beneficiaron más de lo que se habían beneficiado antes o hasta ese momento.

No obstante, en Colombia el populismo fue vencido en las décadas de 1930 y 1940 y, cuando levantó su cabeza otra vez en las décadas de 1970 y 1980, fue decapitado por el terror estatal y paraestatal. Irónicamente, esto sólo ha debilitado la ya frágil legitimidad del Gobierno central y ha reforzado, al menos militar y territorialmente, a las guerrillas de izquierda y a la contrainsurgencia derechista. Los estudiosos del tema creen, por consenso, que esto hace que la situación de Colombia sea única.²⁸ Yo sostengo que cuando

idem, "Revolutionary and Democratic Traditions in Latin America", en *Bulletin of Latin American Research* 20:2, 2001, 147-186; Robert Whitney, *State and Revolution in Cuba: Mass Mobilization and Political Change, 1920-40*, Chapel Hill, NC, 2001; Richard L. Turits, *Foundations of Despotism: Peasants, the Trujillo Regime and Modernity in Dominican History*, Durham, NC, 2004. Entre los ensayos clásicos tenemos a Ernesto Laclau, *Politics and Ideology in Marxist Theory*, London, 1982, pp. 143-98; y Carlos Vilas, "Latin American Populism: A Structural Approach", en *Science and Society*, 56:4, invierno 1992-93, pp. 389-420.

28. Jeremy Adelman, "Impasses andinos", en *New Left Review*, 18, nov-dic 2002, pp. 41-72, describe a Perú y Venezuela como carentes de tradiciones populistas.

el Gobierno central intentó hacer la reforma agraria bajo la presión de los movimientos populares radicales, ésta fue obstruida y la contrarreforma se fortaleció en las regiones y los municipios. Como la guerra sectaria se extendió en las décadas de 1940 y 1950, cientos de miles de familias campesinas desplazadas colonizaron fronteras agrarias en regiones de tierras bajas escasamente pobladas, o se asentaron en las periferias urbanas de numerosas ciudades intermedias colombianas, en zonas alejadas del epicentro de autoridad del Gobierno central.

El Gobierno central delegó la represión, primero, a través de la guerra sectaria entre los dos partidos y, después, a través de la contrainsurgencia de la Guerra Fría, cuando se enfrentó a los desafíos insurgentes. Esto era común en el terror de Estado contrainsurgente que comenzó en Guatemala en 1954, Brasil y Bolivia en 1964 y se extendió a través del cono sur en la

Como Fernando Coronil sostiene en “Magical Illusions or Revolutionary Magic? Chávez in Historical Context”, en *North American Congress on Latin America*, 33:6, mayo-junio 2000, el régimen de Chávez se puede entender de mejor manera si se compara con los antecedentes históricos del populismo petrolero de la década de 1970. A comienzos de esa década tanto el régimen de Velasco en Perú como la administración de Pérez en Venezuela eran populistas –especialmente si los comparamos con el presidente colombiano Misael Pastrana (1970-74)–. Ver Marcos Palacios, “Presencia y ausencia populista: un contrapunto colombo-venezolano”, en *Análisis Político*, 39, enero-abril 2000, pp. 33-51

década de 1970. Como en muchos lugares del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, los mecenas del gobierno de los EE UU mantenían “cierta distancia sin dejar de involucrarse” en América Latina y “el terror contrarrevolucionario estaba inextricablemente relacionado con el imperio”.²⁹

Aún así, dos cosas caracterizaron el terror de Estado en Colombia. En primer lugar, una parte de la clase campesina, vinculada con las élites a través de intermediarios de la clase media, que soñaban con ser dueños de las propiedades, ahuyentó de la región a la otra parte a través del terror, el desalojo y la expropiación –algo más o menos análogo a lo que Marx llamó la “acumulación primitiva” de capital en el campo inglés.³⁰ En segundo lugar, con el tiempo, las organizaciones paramilitares obtuvieron una relativa autonomía del Estado, convirtiéndose en un paraestado. Esto concentró

29. Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*, Chicago, 2004, p. 188.

30. Para acumulación primitiva, ver Karl Marx, *Capital*, vol. 1, New York, 1992[1867], pp. 871-940; David Harvey, *The New Imperialism*, Oxford, 2003; Silvia Federici, *Caliban and the Witch*, New York, 2004; Retort, *Afflicted Powers*, New York, 2005; Mike Davis, *Planet of Slums*, New York, 2006. Mientras el marxismo clásico veía la acumulación primitiva como una etapa en el desarrollo histórico precedente a la revolución industrial, es más útil considerarlo como una característica recurrente del desarrollo capitalista en el que la fuerza laboral se crea a través de la expropiación y privatización de tierras, bosques y ríos que forman las bases materiales de los medios de vida comunitarios.

la tierra en cada vez menos manos, inclusive redistribuyéndose una pequeña cantidad pequeña de la misma entre un selecto número de clientes subalternos.³¹ Las ciudades crecieron junto a los asentamientos de fronteras agrarias abiertas, donde se replicó la dinámica anterior del conflicto,³² y los colombianos, en el transcurso de apenas cincuenta años, pasaron de ser una sociedad en la que dos tercios de la población vivía de y en el campo –patrón y campesino; criollo, mestizo, mulato, indio y negro– a una donde dos tercios habita las ciudades.

Aunque Colombia se ha convertido en una sociedad que gira en torno a una red de ciudades conectadas por aire y tierra, los terratenientes conservan el dominio político en ciertas regiones y localidades. La política colombiana puede ser vista como un sistema

31. Tomado de Antonio Gramsci, “subalterno” ha sido definido en el contexto del estudio del colonialismo y nacionalismo en Asia del Sur como “un nombre para el atributo general de subordinación, bien sea que se exprese en términos de clase, casta, edad, género y estudios o de cualquier otra manera... Reconocemos que, por supuesto, esa subordinación no puede ser entendida excepto como uno de los términos constitutivos en una relación binaria en la que la otra parte es la dominante”. Ranajit Guha, “Preface”, *Subaltern Studies I: Writing of South Asian History and Society*, Delhi, 1982, p. vii. Lo uso para reproducir la heterogeneidad de los grupos subordinados en Colombia.

32. En “La colonización de La Macarena en la historia de la frontera agrícola”, en Alfredo Molano et al., *‘Yo le digo unas cosas’: La colonización de la reserva Macarena*, Bogotá. 1989, p. 203, Darío Fajardo denominó esto como el ciclo de “violencia-migración-colonización-violencia” del conflicto.

parlamentario autoritario en el que los terratenientes, en vez de entrar en conflicto con grupos emergentes de industriales y comerciantes, se han fusionado con ellos.³³ La actividad comercial, caracterizada por una división poco clara entre lo lícito e ilícito le ha proporcionado continuamente a la oligarquía iniciativas frescas y foráneas, cuando sectores de movilidad social ascendente trataron (y lograron) entrar en la jerarquía de la oligarquía a través de iniciativas empresariales despiadadas.³⁴

Las nuevas élites comerciales y manufactureras relacionadas con el negocio de exportación de café se unieron a la oligarquía terrateniente a finales del siglo XIX, y esto, en vez de debilitar el poder del latifundismo dentro la oligarquía, lo reforzó. La alianza reaccionaria caracterizó a la república cafetera bajo el dominio conservador después de 1880, sobrevivió intacta al desafío gaitanista en la década de 1940, proporcionó las bases para las políticas del Frente Nacional durante la década de 1980 y, gracias a la “guerra contra las drogas” del Gobierno norteamericano, asumió nuevas dimensiones con el aumento constante del negocio de

33. Como está esbozado en Barrington Moore, *The Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Boston, 1969, pp. 437-38.

34. Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, p. 280.

la cocaína en la década de 1990. El narcotráfico invirtió en la construcción, la comunicación y los servicios y sus importaciones de contrabando se vendían a precios más bajos que los de la industria nacional. Como latifundistas, poseían la mayor parte de las mejores tierras y los bienes raíces urbanos del país. Con base en la tenencia de tierra, el poder continuó dispersándose desde un centro débil hacia las regiones, especialmente en las áreas fronterizas que estaban más allá del alcance del Estado.

Las nuevas élites comerciales y manufactureras relacionadas con el negocio de exportación de café se unieron a la oligarquía terrateniente a finales del siglo XIX, y esto, en vez de debilitar el poder del latifundismo dentro la oligarquía, lo reforzó. La alianza reaccionaria caracterizó a la república cafetera bajo el dominio conservador después de 1880, sobrevivió intacta al desafío gaitanista en la década de 1940, proporcionó las bases para las políticas del Frente Nacional durante la década de 1980 y, gracias a la “guerra contra las drogas” del Gobierno norteamericano, asumió nuevas dimensiones con el aumento constante del negocio de la cocaína en la década de 1990. El narcotráfico invirtió en la construcción, la comunicación y los servicios

y sus importaciones de contrabando se vendían a precios más bajos que los de la industria nacional. Como latifundistas, poseían la mayor parte de las mejores tierras y los bienes raíces urbanos del país. Con base en la tenencia de tierra, el poder continuó dispersándose desde un centro débil hacia las regiones, especialmente en las áreas fronterizas que estaban más allá del alcance del Estado.

El “déficit crónico” del Estado colombiano es bien conocido entre los investigadores y aquellos que viven en medio del conflicto. Especialistas y actores sociales con opiniones opuestas sobre la política colombiana concuerdan en que el Estado colombiano es débil y su autoridad, frágil. En cualquier informe sobre la violencia en Colombia, esto debe clasificarse como uno de los principales factores que explican la fuerza de la insurgencia y del paramilitarismo. La soberanía siempre ha estado circunscrita y fragmentada a nivel regional. El Gobierno central nunca ha monopolizado legítimamente la fuerza, ni ha administrado la mayoría del territorio bajo su jurisdicción. Esto ha traído como resultado un largo período de conflicto entre facciones de la élite que se volcó a la guerra civil durante la primera mitad del siglo XX.

Sin embargo, para finales de la década de 1950, el dominio bipartidista sobre la representación política formal fue apoyado por un compromiso compartido con la economía de mercado liberal, en la que el Estado jugaba un papel limitado. El anticomunismo de la Guerra Fría, por su parte, cimentó la unión de los dos partidos en el Frente Nacional. La riqueza, especialmente en lo referente a las tierras, se mantuvo fuertemente concentrada y su distribución fue bastante desigual, aunque un período de crecimiento económico sostenido, –basado en la exportación de café y la manufactura para el mercado interno, amplió la clase media urbana y provincial en ciudades y municipios–. El consenso de la élite sin hegemonía absorbió a segmentos de grupos subordinados a través de redes de financiamiento y clientelismo, incorporándose cada vez más a este nuevo orden una clase media modesta, así como subalternos de la clase campesina y obrera. Pero, con la criminalización de la protesta, la disidencia y la misma pobreza que las políticas económicas gubernamentales reprodujeron, el Frente Nacional excluyó a la mayoría en los pueblos y el campo.

La contrainsurgencia del Frente Nacional estimuló el crecimiento de la insurgencia de izquierda. Fue así

como en las décadas de 1970 y 1980, las áreas rurales y urbanas recién colonizadas y sin presencia estatal se convirtieron en terreno fértil para los movimientos electorales de izquierda con alcance nacional, sin distinción de clases y multiétnicos. Puesto que estos movimientos eran liderados por insurgentes de izquierda que buscaban abrir el sistema político o derrocarlo, las milicias de los terratenientes –con el apoyo de una nueva facción de la clase gobernante de empresarios de la cocaína–, lucharon para proteger el derecho a la propiedad privada de la amenaza “subversiva”, liquidando a la amplia izquierda.

Creadas como auxiliares del ejército y de las fuerzas policiales del Estado, quienes eran incapaces de parar la propagación de la insurgencia, las organizaciones paramilitares estaban listas para convertirse en los nuevos gobernantes de la región a comienzos del siglo XXI. El suyo fue un “gangsterismo que se había convertido en sociedad”.³⁵ Las organizaciones paramilitares evolucionaron en un paraestado, penetrando los partidos políticos así como las agencias gubernamentales, desde la Corte Constitucional hasta los servicios de inteligencia, nominalmente bajo el control presiden-

35. Moore, *op. cit.*, p. 215.

cial. En muchas regiones, las organizaciones paramilitares administraron el territorio y monopolizaron las instituciones públicas. Las insurgencias funcionaron como puntos estatales de recolección tributaria, cobrando impuestos y vacunas a traficantes de cocaína, a empresas extractivas transnacionales y a hacendados, así como a los habitantes de sus “zonas”. Los regímenes de “soberanía de parcela” y de “paz fragmentada” condujeron a una crisis internacional humanitaria que sobrepasó las fronteras nacionales y amenazó la soberanía de los Estados vecinos.³⁶ Este es, entonces, el resumen de la historia y la política de un país que se ha convertido en el principal aliado del gobierno de los EE UU (además del principal receptor de su ayuda militar) en el hemisferio occidental.

36. Tomé prestada la primera frase de Perry Anderson, *Passages from Antiquity to Feudalism*, London, 1974, p. 148, y la última de Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia”, en Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*, Bogotá, 2004, p. 58.

Republicanism radical y popular (1848-1880)

**Debemos ser tratados como ciudadanos de una
república y no como los esclavos de un sultán.**

Barquero afro-colombiano de Dagua, 1851

Este capítulo presenta los aspectos generales en materia económica, demográfica y política de la Colombia republicana en sus primeros tiempos y analiza la historia social de la política. A pesar de los rasgos de dominio oligárquico que Colombia compartió con repúblicas vecinas posterior a las guerras de independencia, en la llamada “era del capital” (1848-1875), la movilización política popular radical la puso a la cabeza de las democracias republicanas atlánticas.³⁷ Al observar con más detalle el Cauca, una de las regiones colombianas clave en el siglo XIX, queda demostrado que, al contrario de lo que muchos estudiosos han asu-

37. “Democracias republicanas atlánticas”, se refiere a los partidos políticos en los EE UU, Europa y América Latina. Ver Eric Hobsbawm, *The Age of Capital, 1848-75*, New York, 1975.

mido normalmente, los grupos y clases étnicas y raciales oprimidas lucharon para tener derecho a un lugar en la nueva república. Forjaron tradiciones políticas que desafiaban la esclavitud y los procesos posteriores a la conquista. Una mirada más detallada a estas tradiciones nos aleja de las imágenes estáticas y desligadas de la historia de una oligarquía terrateniente todopoderosa y unida dominando a una clase campesina dependiente y desafortunada, y nos revela dinámicas locales y regionales más complejas. En contraste con el largo período de reacción que le siguió y en comparación con los vecinos de la época, Colombia se distinguió por su política popular radical.

Desde el comienzo hacia abajo

Después de las guerras de independencia, Colombia surgió como una de las naciones latinoamericanas más devastada, desunida y deprimida económicamente, con comunicaciones míseras, poco comercio exterior, sin instituciones bancarias y con una baja capacidad fiscal. Las obras públicas eran inexistentes y el mercado interno era minúsculo. Un ejemplo de ello es que para el año 1890 costaba más transportar café de

Medellín a Bogotá que de Medellín a Londres.³⁸ En las décadas de 1850 y 1860, breves *booms* en las exportaciones de quinina y tabaco, éste último con un pico en la demanda durante la Guerra Civil estadounidense, no condujeron a una transformación socio-económica y la pobreza de la aristocracia –consumista en exceso, pero improductiva– de Bogotá era el tema de un nostálgico lamento.³⁹ Debido a la escasez de créditos, los comerciantes prestamistas antioqueños (que se habían enriquecido gracias a las ganancias producto de la minería del oro en los períodos de finales de la era colonial e inicios de la era republicana) funcionaron como financistas, pero no trataron de unir facciones dirigentes detrás de ellos. En 1854, incluso armaron un escándalo al decir que se separarían de Colombia para volverse parte de los EE UU.⁴⁰

La diferenciación geográfica extrema ha sido siempre un factor ineludible en la política colombiana y ha permitido que las élites afiancen su poder en lo referente a las tierras, los cargos políticos y la participación

38. Malcolm Deas, "The Fiscal Problems of Nineteenth-Century Colombia", en *Journal of Latin American Studies*, vol. 14, no. 2, 1982, pp. 287-328.

39. M. Samper, *La miseria de Bogotá*, Bogotá, 1867; citado en Daniel Pécaut, *Orden y violencia*, vol. I, p. 33.

40. Pécaut, *Orden y violencia*, pp. 29-37.

de mercado a nivel regional y local. El país está rasgado por tres grandes cordilleras que se abren en forma de abanico desde el sur, y que a su vez están divididas por los ríos Cauca y Magdalena. Hacia el sureste se abre sobre una vasta extensión de tierras bajas tropicales, que tijeretean el ecuador, entrecruzadas por innumerables ríos que desembocan en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Hacia el norte y el oeste se extienden las costas del Caribe y el Pacífico y la selva impenetrable del istmo de Panamá, mientras que en la provincia del este de Arauca y el norte de Santander, delante de la frontera venezolana, se encuentran las principales reservas de petróleo del país. La mayoría de la población ha estado siempre concentrada en las regiones montañosas subtropicales más frías. Bogotá, a 8.660 pies sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 14° C. Pero las ciudades propiamente dichas estuvieron por siglos separadas por tortuosos caminos y montañas intransitables, tal como permanecieron para los campesinos en las zonas fronterizas.

El mal transporte y el aislamiento geográfico han tenido un efecto crítico en la conformación de los grupos dirigentes. El control militar centralizado era intrínsecamente más difícil en Colombia que en sus

vecinos; relativo a la población, el ejército fue siempre cerca de un tercio del tamaño de los ejércitos en Perú o Ecuador.⁴¹ Los grupos civiles –y la Iglesia– se volvieron, así, mucho más importantes como líneas de transmisión del poder que en cualquier otro lugar. Pero, tampoco pudieron escapar a la lógica de la fragmentación territorial. Al delegar autoridad en los dirigentes partidistas locales, los terratenientes-comerciantes-legisladores de Bogotá ayudaron a intensificar, en vez de mitigar, las divisiones y desigualdades regionales. La ciudadanía de la Colombia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no adoptó un sentido de pertenencia común con la nación –representado por un gobierno central–, sino una membresía exclusiva con uno de los dos partidos políticos. La política, definida en términos de amigo-enemigo, fue un asunto de suma cero en las regiones y municipios, y las afiliaciones partidistas trascendieron las líneas raciales, de clase, étnicas y regionales.⁴²

Aunque los dos partidos con frecuencia han derramado la sangre el uno del otro, el paradigma político

41. James Payne, *Patterns of Conflict in Colombia*, New Haven, 1968, pp. 121-22.
42 . Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, 2002, pp. 56-57; Bushnell, *The Making of Modern Colombia*, p. 126. Con la posible excepción de México o Uruguay, esa identificación con los partidos políticos no se dio tan profundamente en ninguna otra parte de la región.

clásico (estructurado, con líneas ibéricas, por una división oligárquica entre conservadores y liberales) ha persistido. Este sistema, que era característico de los nuevos Estados independientes latinoamericanos del siglo XIX, donde una élite dominante de terratenientes, legisladores y comerciantes manipulaba un sufragio restringido en el que aquellos que tenían el voto eran clientes en vez de ciudadanos, típicamente se dividía en dos alas. Los conservadores eran devotos en primer lugar y sobre todo al orden y, como sus contrapartes en Europa, a la religión, con una alianza cercana con la Iglesia católica. Los liberales se declararon a sí mismos a favor del progreso y anticlericales. Económicamente, hablando, la riqueza terrateniente tendía a ser más del ala conservadora y las fortunas comerciales más liberales, aunque las diferencias ocupacionales no eran particularmente pronunciadas y mucho menos decisivas. Aparte del anticlericalismo liberal, no había mayores líneas ideológicas divergentes tampoco. La división civil, casi puramente sectaria, estaba salpicada por pronunciamientos y tomas de poder por parte de los jefes militares rivales, en nombre (pero no siempre con la aprobación) de uno u otro de los partidos políticos opuestos.

Aunque el país estaba dividido entre dos grandes lealtades políticas, esto no mostró un patrón regional sistemático. Pocas zonas exhibieron un predominio claramente definido de uno u otro partido al principio. El litoral del Caribe era liberal y Antioquia era conservadora: esas eran las excepciones.⁴³ El poder era una maraña intrincada de rivalidades locales al micro-nivel de comunidades pequeñas o municipios, codo a codo dentro de cada región. Los liberales y conservadores fueron desde el comienzo, y continúan siendo, altamente facciosos como organizaciones nacionales.

Originalmente, la división entre liberales y conservadores tenía una fundación ideológica racional en la sociedad colombiana. Los liberales eran miembros de la élite de terratenientes y comerciantes con una mentalidad laica, seguidores de Santander y hostiles a lo que se entendía como los compromisos militaristas y clericales del último período de la carrera de Bolívar como Libertador. Los conservadores, que tenían vínculos más cercanos con la aristocracia colonial o los círculos oficiales, se identificaban con el orden centra-

43. Para el proceso a través del cual Antioquia se volvió una región conservadora, ver Nancy Applebaum, *Muddied Waters*, pp. 45-47. Para el predominio liberal en la costa atlántica ver Helen Delpar, *Red Against Blue: The Liberal Party in Colombian Politics, 1863-99*, Alabama, 1981, pp. 16-21; Eduardo Posada Carbó, *The Colombian Caribbean: A Regional History, 1870-1950*, Oxford, 1996, pp. 235-51.

lizado y la disciplina social de la religión. Las ideas importaban en las disputas entre ambos, comenzando con la directriz del gobierno de Santander de que el tratado de Bentham sobre legislación penal y civil fuese de estudio obligatorio en la Universidad de Bogotá ya para el año 1825 (algo inconcebible hasta en Inglaterra inclusive cincuenta años después). La furiosa reacción clerical finalmente condujo a la reintroducción de los jesuitas –quienes habían sido expulsados de las colonias por la monarquía española en 1767–, para dirigir escuelas secundarias; y luego sobrevino su reexpulsión en 1850.⁴⁴

Desde el final hacia arriba

Colombia estaba a la vanguardia de la revolución liberal en el mundo atlántico del siglo XIX y los líderes del Partido Liberal, confiados de su misión histórica, estaban comprometidos con las reformas radicales. La esclavitud y la pena de muerte fueron abolidas, el Estado y la Iglesia separados, fueron levantados los *quittents* clericales, el divorcio legalizado, el ejército reducido y comenzó el sufragio universal para los hombres.

44. Frank Safford y Marco Palacios, *Colombia: Fragmented Land, Divided Society*, Oxford, 2001, pp. 115, 126, 142, 151, 204.

En este escenario, las comunidades indígenas, vistas como parte de un legado colonial pernicioso que debía ser superado, no tenían cabida en la república, que debía estar fundada, en cambio, sobre las bases de pequeños propietarios minifundistas. Esta había sido la visión de Bolívar.

En el Cauca, los afro-colombianos, indígenas y pobladores de la frontera provenientes de Antioquia presionaron por sus derechos y participaron activamente en la política. Una cultura política de “regateo republicano” se desarrolló a partir de 1848. Los subalternos votaron en las elecciones y participaron en los concejos municipales, en las sociedades democráticas, en demostraciones, boicots, disturbios, motines y guerras civiles, haciendo de Colombia una de las democracias republicanas más participativas del mundo durante la era del capital (1848-1876). En ningún otro lugar del llamado mundo atlántico de 1850 y comienzos de 1860 los descendientes de esclavos africanos podían votar y unirse a sociedades democráticas y en ningún otro lugar los miembros de las comunidades indígenas ejercieron su derecho al voto como ciudadanos.

En la década de 1850, ninguna facción de gobierno era lo suficientemente poderosa para implantar una hegemonía regional, mucho menos nacional, en Colombia. Cada grupo que aspiraba al poder estatal tenía que, en diversos grados, forjar alianzas a nivel local –y regional– con grupos que habían sido previamente privados del derecho al voto, cuyas demandas incluían el fin de las desigualdades derivadas de los patrones de dominación y explotación colonial. Las élites del Cauca tenían que lidiar con artesanos y trabajadores-ciudadanos-soldados rurales: indígenas, afro-caucanos y pobladores fronterizos antioqueños. Los gobernantes y los gobernados en Colombia no tenían un entendimiento compartido de democracia republicana ni un compromiso conjunto para la igualdad. Los conservadores y muchas élites liberales pensaban que la democracia no debía dar paso a un proceso de igualdad y a una “república de iguales” en la cual la “anarquía” reinaría, mientras que para los afro-caucanos la igualdad significaba el final de la esclavitud y del dominio de los hacendados conservadores, así como el acceso a la propiedad de la tierra. Para los indígenas del Cauca, la igualdad significaba el derecho a existir como un grupo para ejercer la administración colectiva de la tierra y practicar el autogobierno de la aldea. En el norte, para

las aldeas de pobladores antioqueños, la igualdad significaba protección contra los especuladores conservadores comerciantes de tierras.

El choque entre liberales y conservadores, entonces, no se basaba sólo en asuntos de educación, ni tampoco era un asunto puramente entre élites. La Revolución Liberal de 1849-1853 estuvo precedida y se profundizó con las sublevaciones (*zurriagos*) de, en su mayoría, insurgentes afro-colombianos ex esclavos contra los hacendados conservadores en el valle del Cauca, con saqueos, incendios provocados, destrucción de cercas y ocupaciones de tierras en toda su extensión a partir de 1850. La hacienda del clan conservador líder, Japio, fue ocupada al final de la guerra en 1851, ya que los afro-caucanos ejercían la tenencia comunal de la tierra y el uso colectivo de los bosques y ríos. Éstos sembraron para producir y comercializar tabaco y azúcar libres del dominio de los hacendados. En la capital, Bogotá, los artesanos radicales republicanos, estimulados por las barricadas parisienses de 1848 y los escritos de Proudhon y Louis Blanc, se movilizaron también. Como en Europa, los liberales colombianos abandonaron a sus artesanos partidarios a los rigores del libre comercio y comenzaron a disolver

tierras indígenas sostenidas en comunidad. No prescindieron de sus aliados afro-caucanos; en vez de eso, fomentaron la propagación de las llamadas sociedades democráticas, que supervisaban el desempeño de los funcionarios electos, presentaban peticiones al gobierno nacional y local sobre asuntos como la educación primaria, los derechos sufragistas, las pensiones, la distribución de la tierra, el acceso a la Cámara de los Comunes, e impuestos sobre el aguardiente.

Las divisiones liberales, debido al miedo racial y al rechazo a los liberales insurgentes afro-caucanos, trajo como consecuencia un resurgimiento de los conservadores en las elecciones de 1853, ya que éstos habían forjado una alianza efímera con los indígenas que se oponían a la privatización de las tierras comunes que beneficiaba a los especuladores ávidos de corteza de quina (quinina). En 1854, José María Melo dirigió un levantamiento liberal que encontró apoyo entre los artesanos republicanos radicales de Bogotá, pero que causó que muchas élites liberales apoyaran dedicadamente a los conservadores. En Cauca, los conservadores, redefiniendo la guerra civil como un estallido de vandalismo criminal, se vengaron de los recién acuñados ciudadanos-soldados-trabajadores afro-caucanos

al hacer más estrictas las leyes de vagos y maleantes, reinstaurar la pena de muerte y tratar de vedar las sociedades democráticas. Aunque los derechos sufragistas no fueron abolidos, la meta era privar del derecho al voto a los ex esclavos y se usaron una variedad de medios, incluido el terror, para evitar que los afro-caucanos votasen. Los liberales pagaron caro su subestimación del peso de las comunidades indígenas, pero los conservadores no fueron lo suficientemente astutos para diseñar una contraparte a las sociedades democráticas, a fin de cimentar una alianza con los resguardos indígenas.

A finales de la década de 1850, Tomás Cipriano de Mosquera, líder de los conservadores del Cauca antes de 1848 y descendiente de la “familia real de Nueva Granada”, guió la insurgencia liberal. Junto al clan conservador de Arboleda, con quienes tenían estrechos vínculos, los Mosqueras eran los mayores terratenientes de la región. Mosquera luchó bajo el mando de Bolívar y ocupó importantes puestos bajo los gobiernos protoconservadores, pero, en su puja para derrocar a Mariano Ospina, desertó para irse al lado liberal y buscó aliados entre los afro-caucanos, indígenas y pobladores antioqueños. Los liberales pidieron revocar las odiadas leyes

de vagancia, la pena de muerte, a la vez que pidieron detener la arremetida contra los resguardos indígenas. Reconocieron los autogobiernos de las aldeas a través de la Ley 90 en 1859, protegieron a los pobladores antioqueños en María de los especuladores (con quienes el conservador Ospina tenía conexiones personales) en la zona montañosa de Quindío, y congelaron, asimismo, los impuestos de consumo sobre el licor.

Como los conservadores no lograron trabajar en alianzas duraderas con las comunidades indígenas, los liberales le sacaron provecho a sus seguidores en masa afro-caucanos para derrotar a sus rivales en una guerra civil (1860-1863) en la que, de acuerdo con un conservador, las tropas de Mosquera estaban “compuestas de negros, zambos y mulatos, asesinos y ladrones del valle del Cauca”. Las fuerzas populares de piel oscura pelearon bajo el mando de Mosquera, aunque de los grupos indígenas, sólo los Páez (Nasa) se pusieron abiertamente del lado de los liberales. Los conservadores alienaron a los antiguos aliados indígenas, al reclutar a los hombres adultos y colgar a aquellos que se resistiesen. Contaban con una delgada base de apoyo de parte de los minifundistas mestizos y de algunas aldeas o pueblos antioqueños.

Una vez que Mosquera se convirtió presidente en 1863, el Cauca se convirtió en la región a la cabeza, ya que Mosquera le devolvió los derechos sufragistas a los estados (devolviendo así el derecho al voto de los afro-caucanos), embargó las tierras de la Iglesia, descentralizó la Constitución, abolió las leyes de vagos y la pena de muerte y reconoció tanto los resguardos indígenas como los derechos de los pobladores. Los magistrados y diputados en la legislatura estatal, así como los presidentes estatales y los concejos municipales eran elegidos cada dos años. La votación tenía lugar durante el año. Los liberales controlaban los resultados de las elecciones estatales, pero los conservadores ganaron puestos en las legislaturas estatales y compitieron en las elecciones locales.

La combinación de una cortina de políticas liberales, supremacía electoral y la irrupción de la democracia radical-popular y participativa dentro del partido liberal obligó a que surgiera un conservadurismo más intransigente, clerical e internamente colonial. Con la división entre las élites liberales y sus aliados subalternos extendiéndose a las líneas raciales y de clase, y con el aumento en los enfrentamientos sobre los significados de una democracia republicana a finales de la década de 1870, se había llegado a los límites de la alianza.

Termidor tropical

Las élites liberales no estaban dispuestas a desmantelar las haciendas, lo que habría reconfigurado radicalmente el poder político basado en la tenencia de la tierra y en la explotación de la mano de obra esclava. Decididos a detener la ola creciente de lo que ellos denominaban como “anarquía” bajo el mando de los liberales radicales (la propiedad privada estaba siendo atacada, los bandidos y ladrones de ganado surgían de las montañas cercanas, los arrendatarios y aparceros se negaban a trabajar o a pagar la renta), los liberales de las élites conocidos como los independientes rompieron filas. La sagrada trinidad era “familia, propiedad y religión”. Los independientes tenían el apoyo de los antiguos pobladores antioqueños liberales en María, así como de los minifundistas blancos y mestizos del norte del Cauca, mientras que las comunidades indígenas permanecieron neutrales.

Esto permitió que los conservadores dirigieran un sangriento, pero exitoso, golpe religioso en el Cauca entre 1878-1879, lo que puso fin al experimento republicano popular radical del Cauca y de Colombia.⁴⁵

45. Esto es comparable con la experiencia de los EE UU después de la reconstrucción, cuando se llevó a cabo un ataque contra las comunidades nativas y afro-americanas, así como contra sus libertades y derechos, en nombre del “progreso”

Los conservadores, contrarios a lo que denominaban como “democracia salvaje”, en la que los “elementos bárbaros predominaban”, apoyaron con fervor a los independientes y estaban decididos a recular tantos cambios nuevos como fuese posible. A finales de la década de 1870, encontraron un vehículo político –las sociedades católicas– a través del cual consiguieron el apoyo de los minifundistas de la frontera, algunos de ellos ex liberales, para llevar adelante tal proyecto. Al proveer educación religiosa, las sociedades católicas combatían agresivamente las reformas educativas anticlericales de los liberales. El conservadurismo modernizado, promovido por los independientes caucanos y los minifundistas republicanos populares llevó al contragolpe conocido como la Regeneración bajo el mando de Rafael Núñez.

Esta perspectiva de la historia del conflicto étnico, racial y de clases revela que en cualquier búsqueda por un futuro más equitativo, democrático y pacífico los colombianos pueden mirar atrás hacia una cultura política que se caracterizó por los amplios canales de participación subalterna desde la década de 1850 hasta la de 1870. Esto muestra que la propagación del cliente-

agro-industrial. Ver Nell Irvin Painter, *Standing at Armageddon: The United States from 1877-1916*, New York, 1988.

lismo autoritario que caracterizó el final del período evolucionó como una reacción contra la amenaza que se cernía sobre la propiedad privada, los privilegios raciales y el monopolio político. La Regeneración (el tema del siguiente capítulo) afectó la vida política en el siglo XX tan profundamente que muchas veces se olvida lo vitales que fueron y han sido las tendencias democráticas que le precedieron.

De la reacción a la rebelión (1880-1930)

Tres razas distintas forman la población de la república. Cada estado tiene sus climas diversos, sus costumbres y sus trabajos. Hay solo dos vínculos que los unen: el idioma y la religión. No han podido quitarnos el idioma, pero tratan de arrancar de raíz nuestras creencias. ¡Bárbaros! Expulsaron a Dios y a la ley del gobierno y de la educación superior y ahora ustedes serán el resultado: si no estamos irremediablemente arruinados, es sólo porque Cristo aún reina en los corazones y las mentes.

*Monseñor Rafael
María Carrasquilla, 1885*

La implementación de un proyecto centralista autoritario supervisado por la Iglesia católica y el Partido Conservador marcó el período de cincuenta años posterior a 1880. Éste proscribía la política radical-popular al fortalecer un clientelismo arraigado en el *boom* de la exportación de café, que comenzó

en la década de 1880 y les dio importancia nacional a las élites bancarias y comerciales conservadoras de Antioquia. Este grupo de empresarios pagaron y se beneficiaron de los poblados en la frontera cafetalera, que les brindaba a los aparceros y arrendatarios dispuestos a migrar la esperanza de tener propiedad de tierras. La figura idealizada de la conservadora Antioquia, simbolizada por los pobladores fronterizos de piel clara y dueños de sus propiedades, se convirtió en la medida del progreso nacional, en contraste con los arrendatarios y aparceros o terratenientes comunales de piel oscura del Cauca.⁴⁶

Capitalismo cafetalero y clientelismo

La Regeneración, que comenzó en 1880, puso en marcha cinco décadas de reacción, truncando las esperanzas de los liberales que deseaban ver a Colombia al lado de las democracias atlánticas más destacadas. Las élites de Colombia principalmente “desistieron del intento de incorporar ciudadanos disciplinados, y en vez de eso, concentraron sus esfuerzos en gobernar a

46. Para formación racial y la *racialización* de Antioquia y el Cauca a partir de 1880, ver Nancy Applebaum, *Muddied Waters: Race, Region and Local History in Colombia, 1846-1948*, Durham, NC, 2003, pp. 31-51. Para Antioquia, el Chocó y la costa atlántica, ver Wade, *Blackness and Race Mixture*, pp. 66-105.

sujetos recalcitrantes”.⁴⁷ La Constitución de 1886 fortaleció el poder central, dándole al Presidente la autoridad de designar gobernadores provinciales y extendiendo los períodos de permanencia en los cargos, que pasaron de dos a seis años para el Poder Ejecutivo y de dos a cuatro para el Legislativo, con el fin de reducir la frecuencia de las elecciones. Las demostraciones públicas fueron prohibidas, las sociedades democráticas perseguidas y el “orden” se convirtió en la consigna del día a día. El país estaba “ideológicamente encarcelado” y los gramáticos católicos, amantes del español, como Miguel Antonio Caro (el arquitecto de la Constitución de 1886), eran sus guardias.⁴⁸

Los subalternos eran forzados a trabajar y obedecer a los criollos y la esfera de la política fue reducida para excluirlos. Un ejército profesional reemplazó a las milicias populares y la pena de muerte fue reinstaurada para detener los ataques a la propiedad. El nuevo concordato con el Vaticano aseguró un vínculo estrecho con las corrientes más autoritarias de la Iglesia, quie-

47. Los párrafos anteriores resumen los capítulos 3-6 de Sanders, *Contentious Republicans*, pp. 58-183. La cita aparece en la p. 184.

48. Gonzalo Sánchez, “Intelectuales... Cultura... Poder”, en Sánchez, ed., *Los intelectuales en la política*, pp. 60-65; Malcolm Deas, *El poder y la gramática*, Bogotá, 1993. Ver también, Miguel Ángel Urrego, “La noción de la ciudadanía bajo la Regeneración: Colombia, 1880-1900”, en Rossana Barragán et al., eds., *El siglo XIX: Bolivia y América Latina*, La Paz, 1997, pp. 651-62.

nes enviaban olas sucesivas de fanáticos religiosos curtidors por la guerra, provenientes de otros escenarios de lucha –europeos o latinoamericanos–, para fortalecer la fe en Colombia y dirigir el sistema de escuelas públicas. A fines del siglo, el régimen de la Regeneración aplastó la resistencia liberal, asociada con la emergente burguesía cafetalera, en la sangrienta Guerra de los Mil Días (1899-1903) que dejó 100.000 muertos. El presidente Marco Fidel Suárez, un mestizo proveniente de una familia campesina antioqueña que se había unido a la élite, abandonó a Panamá a las manos de los EE UU, cuyo dominio de los asuntos hemisféricos fue indiscutible a partir de ese momento.⁴⁹

La Regeneración cimentó el control oligárquico (que no fue seriamente amenazado durante la Guerra de los Mil Días) y cerró los caminos para la participación democrática popular-radical que una coalición heterogénea de trabajadores rurales, legisladores municipales de clase media (también conocidos como tinterillos) y artesanos urbanos habían abierto después de la mitad del siglo.⁵⁰ Los indígenas, artesanos y afro-colombia-

49. También gramático, Suárez es el autor de *Sueños gramaticales de Luciano Pulgar*. Para la Guerra de los Mil Días, ver Charles Bergquist, *Coffee and Conflict in Colombia: Origins and Outcome of the War of a Thousand Days, 1886-1910*, Durham, NC, 1978.

50. Bergquist, “La guerra popular en la Guerra de los Mil Días”, en *Análisis Político*,

nos vieron sus derechos ciudadanos restringidos bajo el mando de los conservadores y la raza católica antioqueña, mitificada en la imagen del poblador terrateniente antioqueño, se convirtió en el eje cultural de un nuevo orden político y económico.

El camino antidemocrático y autoritario de Núñez estaba pavimentado por los cuerpos de aquellos que lucharon por proyectos republicanos alternativos, participativos y más incluyentes. Fijó los parámetros para la política nacional hasta el siglo XXI. Las razones para tal persistencia tienen evidentemente que ver con la topografía: desde la llegada de la Regeneración, la configuración geográfica de Colombia le ha concedido a las élites conservadoras y liberales una ventaja logística excepcional en la imposición de controles clientelistas parroquiales desde arriba, mientras obstaculizan o suprimen las movilizaciones nacionales provenientes de los niveles más bajos. Después de que las élites liberales tropezaran con sus propias contradicciones en la década de 1870, lo que los partidos perdieron en cohesión horizontal, lo ganaron en adhesión vertical de parte de sus seguidores. Las intensas fuerzas ideológicas y materiales de su mutua

52, septiembre-diciembre 2004, pp. 77-89.

contención se aplicaban en ámbitos íntimos de las bases. La fuerza excepcional del clientelismo establecido durante la Regeneración sin duda le debe mucho a la ubicación particular de estas presiones.

Otra característica de las zonas rurales colombianas reformó el clientelismo y le dio un giro político inusual al mismo. Me refiero al descubrimiento, que tuvo lugar a partir de 1870, de que grandes extensiones de las tierras altas de la frontera eran terreno ideal para el cultivo del café que les dio a los comerciantes colombianos un importante producto básico de exportación, generando ganancias sustanciales y el prospecto de una transformación capitalista. Comenzó en Santander, como una extensión de las fincas cafetaleras venezolanas, luego los campesinos comenzaron a plantar hacia el oeste en Cundinamarca y, ya para el final del siglo, incluían las zonas de Tolima, Antioquia y Viejo Caldas (Caldas, Risaralda, Quindío). Después de la Primera Guerra Mundial, Colombia se había convertido en el segundo mayor productor del mundo después de Brasil, pero el patrón de su economía cafetalera era muy distintivo. En Brasil y Guatemala predominaban las grandes plantaciones donde trabajaban campesinos endeudados o trabajadores jornaleros. En Colom-

bia estas propiedades eran más modestas, llegaban al máximo rápido como en Santander y tenían menos peso en el patrón general de cultivo, mientras que las parcelas pequeñas o medianas eran cada vez más numerosas, quizás hasta en la misma medida que en Costa Rica. Sin embargo, comparadas con las grandes *fazendas* de São Paulo, la base social de la agricultura del café en Antioquia, Viejo Caldas y partes de Tolima –aunque muy desiguales– le ofreció a los arrendatarios y aparceros la oportunidad de ser dueños de su tierra y de tener control sobre la producción. Medida en términos de distribución de la tierra, la economía de exportación de café era comparativamente democrática. Con importantes excepciones regionales, tales como Cundinamarca y el este de Tolima, la producción no estaba controlada por los que sembraban sino por las familias campesinas que trabajaban en terrenos de pequeña y mediana extensión a altitudes de nivel medio, de entre 1.000 y 2.000 metros.

Sin embargo, la comercialización de la cosecha estuvo siempre en las manos de la élite acaudalada, establecida en Antioquia a partir de 1890. Estos les daban créditos a los pequeños hacendados, arrendatarios y aparceros, compraban la producción y financiaban su

exportación.⁵¹ Los pequeños productores fueron, de esta manera, empujados a un conflicto con los comerciantes de créditos y con los especuladores de bienes raíces sobre títulos de tierras, términos de venta para sus cosechas y comercio de contrabando en licor. Aún en grandes propiedades en Cundinamarca, los comerciantes terratenientes, como hicieran los hacendados en el Cauca antes que ellos, tenían que lidiar con arrendatarios rebeldes que cazaban furtivamente, robaban, contrabandeaban, invadían, hacían tratos bajo cuerda y armaban motines en cuanto al aumento de los impuestos.⁵² Los márgenes de ganancia dependían de la manutención de un monopolio oligárquico, tanto en el mercado como en la política partidista, pero los poderosos hacendados con contactos estaban lejos de ser todopoderosos.⁵³ No obstante, en el eje cafetalero de

51. En términos marxistas, el excedente era principalmente extraído en el punto de intercambio en vez de en la producción, como se observa en idem “The Labor Movement in Colombia (1930-1946)”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia*, p. 68.

52. Michael Jiménez, *Struggles on an Interior Shore*, de próxima aparición.

53. Mario Arango, *Café e Industria 1850-1930*, Bogotá, 1977; Absalón Machado, *El café: de la aparcería al capitalismo*, Bogotá, 1977; Charles Bergquist, *Coffee and Conflict in Colombia, 1886-1910*, Durham, NC, 1978; Marco Palacios, *Coffee in Colombia: An Economic, Social and Political History*, London, 1980; Michael Jiménez, “Traveling Far in Grandfather’s Car: The Life Cycle of Central Colombian Coffee Estates: The Case of Viotá, 1900-1930”, en *Hispanic American Historical Review*, vol. 69, no. 2, 1989, pp. 185-219; idem, “At the Banquet of Civilization: The Limits of Planter Hegemony in Early-Twentieth-Century Colombia”, en William Roseberry et al., eds., *Coffee, Society and Power in Latin America*, Baltimore, 1995, pp. 262-93.

las tierras altas occidentales, la interconexión general entre los minifundistas de abajo y los distribuidores poderosos de arriba distinguió las relaciones de producción e intercambio comercial durante el período de gobierno conservador. Los vínculos coloniales de dependencia se reproducían de nuevas formas, reforzando los lazos clientelistas verticales e idealizando al trabajador, deferente pero independiente –y, más importante aún ni negro ni indígena– poblador cafetalero. En todos los demás lugares de América Latina, este patrón ha dado paso a una amplia política urbana en la que los partidos populistas radicales –forjando coaliciones entre clases, que incluyen al trabajo organizado, los sectores intermedios en expansión y los campesinos movilizados– han exigido cambios estructurales en la organización del Estado, la sociedad y la economía.

Ascendencia antioqueña

La región más rica y poderosa de todas las regiones cafetaleras en Colombia era Antioquia, cuya élite se distinguía por su lealtad a la Iglesia, el culto al “orden”, la *fetichización* del “progreso” capitalista, la devoción por la supremacía blanca y el compromiso compartido

con un gobierno tecnocrático y bipartidista, religiosamente sectario entre las clases. El aumento de las fuerzas conservadoras de “orden y progreso” –durante un período de segregación racista científica en el mundo negro atlántico (el sur de los EE UU, Brasil, Cuba) y de liberalismo en detrimento de las etnias en Meso-América y los Andes– tuvo su base económica en el *boom* de la exportación del café. El control del café (particularmente de lo que se refiere al transporte, crédito y distribución) ayudó a que los banqueros/comerciantes de Medellín se convirtieran en los fabricantes industriales punteros del país. Las élites *paisas* (antioqueñas) disfrutaron de preeminencia política nacional desde 1910 hasta 1930.

El movimiento de pobladores hacia las fronteras cafetaleras en las tierras altas del centro y oeste –generalmente considerada como la transformación histórica más importante del período conservador– no llevó a una mayor igualdad en el acceso a la riqueza, los recursos o el poder político, aunque sí consiguió que los pequeños agricultores se alinearan con las élites de uno de los dos partidos.⁵⁴ El *boom* de la expor-

54. Debido a la propagación de dueños de propiedades, algunos científicos sociales norteamericanos de mediados del siglo XX y excepcionalistas antioqueños alabaron al capitalismo cafetalero encabezado por los *paisas*, y lo acogieron como un proceso de modernización capitalista democrática. Ver James Parsons, *Antioqueño*

tación del café trajo consigo también el desarrollo de la banca e instituciones de crédito modernas, el crecimiento de la industria manufacturera (de bebidas, textiles, procesamiento de comida, vidrio y de trabajos con hierro) que inicialmente se basó en el trabajo de las mujeres migrantes, así como la construcción de una nueva infraestructura de transporte.⁵⁵ Conexiones férreas unieron a Medellín con Puerto Berrío y el río Magdalena en 1914 y a Cali con Buenaventura y el Pacífico en 1915, haciendo del valle del Cauca y de su modernizada industria azucarera un polo rival de desarrollo capitalista.

Para fomentar las exportaciones de café y la producción industrial para el mercado interno, el gobierno conservador, apoyado por el Partido Liberal de oposición, financió por primera vez obras públicas y la educación. La ingeniería, institucionalizada en la Escuela de Minas de Medellín a partir de 1888, produjo futuros presidentes (Pedro Nel Ospina, Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez) y guió la implementación de

Colonization in Western Colombia, Berkeley, CA, 1949; William Paul McGreevy, *An Economic History of Colombia, 1845-1930*, Cambridge, 1971; Keith Christie, “Antioqueño Colonization in Western Colombia: A Reappraisal”, en *Hispanic American Historical Review*, 58:2, mayo 1978, pp. 260-63; Ann Twinam, *Miners, Merchants and Farmers in Colonial Colombia*, Austin, TX, 1982, pp. 20-21.

55. Ann Farnsworth-Alvear, *Dulcinea in the Factory: Medellín's Industrial Experiment, 1900-1950*, Durham, NC, 2000.

proyectos tecnocráticos. Inspirada en la *UC Berkeley's School of Mines*, la Escuela de Minas fue el semillero de socialización para el cuadro de dirigentes del nuevo orden. La escuela ayudó a formar una élite de tecnócratas de negocio (con poca inversión en ciencias naturales experimentales o sociales y mucho menos en las artes) que no sólo sobrevivió sino también prosperó en el duro frío de la Regeneración. Las doctrinas del papa León XII reconciliaban el positivismo científico aplicado con la fe tradicional.⁵⁶

Estos desarrollos eran contemporáneos con los discursos racistas científicos y las prácticas de colonialismo interno con respecto a los indígenas, las razas mixtas (mestizos) y los afro-colombianos en la periferia regional y en el eje cafetalero propiamente. En profundo contraste con las élites Caucanas, cuyas opiniones estaban divididas en cuanto a la relación con los afro-caucanos, los dirigentes *paisa* integraron exitosamente elementos de la cultura popular en una ideología regional y racial hegemónica e internamente coherente de

56 . Sánchez, "Intelectuales...Cultura...Poder", pp. 68-69; Fabio López de la Roche, "Cultura política de las clases dirigentes en Colombia", en de la Roche, ed., *Ensayos sobre cultura política colombiana*, Bogotá, 1990, p. 111. Ver también, Frank Safford, *The Ideal of the Practical: Colombia's Struggle to form a Technical Élite*, Austin, TX, 1976; Alberto Mayor Mora, *Ética, trabajo, productividad en Antioquia*, Bogotá, 1984; Pamela Murray, "Engineering Development: Colombia's School of Mines, 1887-1930", en *Hispanic American Historical Review*, 74:1, 1994, pp. 63-82.

poder blanco y de medios empresariales: un yanquismo tropical.⁵⁷ Los comerciantes antioqueños se beneficiaron de la extracción de recursos naturales, como el oro y el petróleo, desarrollaron extensos ranchos ganaderos diseñados para alimentar una población urbana en vías de expansión (que se quintuplicó entre 1912 y 1951) y fomentaron una cultura nacional de pequeña agricultura comercial del café. Debido a que las corporaciones estadounidenses controlaban las industrias bananeras, auríferas y petroleras, las fortunas de los industrialistas, banqueros y comerciantes *paisa* giraban en torno al control sobre el café, los créditos, la industria manufacturera y la especulación en bienes raíces.⁵⁸ Aún con el café, en todo caso, el control lo ejercían las firmas de importación norteamericanas, la política de gobierno y los consumidores de café de los EE UU.

De esta manera, los colombianos reentraban permanentemente en la economía capitalista mundial bajo el liderazgo de los elementos de su élite que eran más avanzados técnicamente, pero más retrógrados

57. Nancy Applebaum, *Muddied Waters*, pp. 33-40.

58. Mario Arango, *Los funerales de Antioquia la grande*, Medellín, 1990; Fernando Botero Herrera, *Medellín, 1890-1950: Historia urbana y juego de intereses*, Medellín, 1996; Michael F. Jiménez, "From Plantation to Cup: Coffee and Capitalism in the United States, 1830-1930", en William Roseberry et al., eds., *Coffee, Society and Power in Latin America*, Baltimore, MD, 1995, pp. 38-64.

socialmente. Así como el trabajo organizado, en su fase socialista y anarco-sindicalista, se estaba haciendo sentir en el resto de la región, el dominio conservador recibía un nuevo soplo de vida debido al crecimiento en las exportaciones de café. La producción había pasado de un millón de sacos en 1913 a dos millones en 1921 y tres millones en 1930. Después de la Primera Guerra Mundial, el capital extranjero invirtió en el sector del café y Wall Street abrió generosas líneas de crédito en lo que luego se conoció como la “Danza de los Millones” –lo que refrescó a la élite exportadora, pero no le dio tregua ni a los agricultores luchadores, arrendatarios y aparceros, y mucho menos a los artesanos y proletarios. Como resultado del informe presentado por Walter Kemmerer, un profesor de economía de Princeton que dirigió una misión a nivel continental para evaluar las finanzas en los gobiernos suramericanos, los préstamos de los EE UU se agotaron para 1927 y la fuga de capital sumergió a la economía colombiana en una depresión. En 1929, un cambio decisivo ocurrió en la política elitista cuando los precios del café cayeron súbitamente de 60 a 34 céntimos el kilo, lo que significó un desastre para la economía de exportación, desastre que se consumó luego con el colapso en octubre de ese año de

Wall Street. Los conservadores se dividieron cuando los líderes de la Iglesia apoyaron a candidatos rivales en la sucesión para las elecciones de 1930.⁵⁹

¿Un nuevo mundo?

La burguesía antioqueña “había intentado convertir a Colombia en su propia imagen idealizada, pero había fallado” y los signos de un nuevo radicalismo popular estaban despertando aún cuando las exportaciones de café alcanzaron nuevas alturas.⁶⁰ La política autoritaria de la Regeneración y el dominio conservador trabajaron en función de expandir los derechos de propiedad a un sector de pobladores fronterizos e incluirlos en redes bipartidistas de mecenazgo y clientelismo. Esta medida de democracia económica reforzó el conservatismo político, pero dejó a la mayoría de los subalternos (afro-colombianos, comunidades indígenas y muchos pobladores de la frontera) dando tumbos, fuera del alcance de un gobierno central cuyos grupos subordinados pedían ser defendidos del poder de los

59. Vernon Lee Fluharty, *Dance of the Millions: Military Rule and the Social Revolution in Colombia*, Pittsburg, 1957; Paul Drake, *The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 1923-33*, Durham, NC, 1989; Charles Bergquist, “The Labor Movement (1930-46) and the Origins of the Violence”, p. 57.

60 . Roldán, *Blood and Fire*, p. 31.

terratenientes. En 1914, un aparcerero llamado Quintín Lame fue nombrado líder supremo de las tribus indígenas de Colombia, aunque no hablaba la lengua nativa, nasa. Lame había luchado del lado liberal en la Guerra de los Mil Días y, como cualquier otro soldado campesino andino en este período, él y su movimiento exigieron al Estado que protegiese las formas de ciudadanía colectiva y no-liberal frente a las ofensivas de los terratenientes reaccionarios.⁶¹ Debido a sus esfuerzos para organizarse, Lame pasó una década dentro y fuera de la cárcel, pero el movimiento que dirigió, conocido como la Quintinada, ganó terreno a través de ocupaciones colectivas de tierras al sur de Colombia, pasando del Cauca a Tolima en 1922.⁶²

Los ánimos políticos estaban ahora marcadamente diferentes, ya que las ideas anarco-sindicalistas y socialistas habían comenzado a avanzar en el movimiento sindical que le siguió a las revoluciones mexicana y rusa y a la Primera Guerra Mundial, al tiempo que el capital estadounidense comenzaba a hacer sus primeras incursiones en América del Sur.⁶³ En 1926, el primer

61. Brooke Larson, *Trials of Nation-Making: Liberalism, Race and Ethnicity in the Andes, 1810-1910*, Cambridge, 2004, p. 252.

62. Joanne Rappaport, *The Politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes*, 2ª ed., Durham, NC, 1998, p. 114.

63. Gary Long, "The Dragon Finally Came: Industrial Capitalism, Radical Artisans

vehículo independiente de la tutela del Partido Liberal y Conservador, el Partido Socialista Revolucionario (PSR), organizó una lucha proletaria en los enclaves de exportación transnacional del Caribe y a lo largo de las fronteras cafetaleras. El segundo vicepresidente del PSR, Raúl Eduardo Mahecha –un sastre que, al igual que Quintín Lame, era un veterano del bando liberal de la Guerra de los Mil Días– ayudó a fundar el sindicato de los trabajadores del petróleo, USO, y, en 1926, encabezó una huelga en contra de Tropical Oil (una subsidiaria de *Jersey Standard*) en la región de Magdalena Medio. La primera vicepresidenta del partido y oradora legendaria, María Cano, hija de una familia oligarca de Medellín perteneciente al mundo del periodismo, realizó una gira por las zonas rurales del país entre 1925 y 1927, organizando y haciendo campaña a favor del cambio radical. Con Mahecha, Cano lideró la potente huelga de 4.000 trabajadores de la industria bananera contra United Fruit cerca de Santa Marta entre noviembre y diciembre de 1928.

En la versión de la huelga de los trabajadores bananeros de 1928 inmortalizada por Gabriel García Márquez en *Cien años de soledad*, miles de ellos eran masacrados

and the Liberal Party in Colombia, 1910-1948", Ph.D. Thesis, University of Pittsburgh, 1995.

y cargados en furgones de mercancías y el recuerdo de la represión era borrado a través de la amnesia oficial.⁶⁴ En la realidad, el incidente fue minuciosamente investigado y hecho público por un joven abogado que recientemente había regresado de la Italia de Mussolini. Un diputado del Cámara Baja del Congreso, Jorge Eliécer Gaitán, usó la masacre para lanzar su carrera como el primer político populista dentro del Partido Liberal, consolidando, así, su alianza con los costeños liberales de izquierda.⁶⁵ En su estudio sobre Gaitán, Herbert Braun lo etiqueta, acertadamente, como un reformista pequeño-burgués; pero al darle voz oficial a las demandas populares y colocar los “asuntos sociales” en el centro del debate parlamentario nacional, Gaitán se ganó la enemistad de la fracción oligarca dominante dentro de su propio partido, así como la de la derecha más conservadora.⁶⁶

64. Eduardo Posada Carbó, “Fiction as History: The *bananeras* and Gabriel García Márquez’s *One Hundred Years of Solitude*”, en *Journal of Latin American Studies*, vol. 30, part 2, 1998, pp. 395–414. Marco Palacios observa la falta de consenso sobre el número exacto de masacrados: el cónsul norteamericano colocó la cifra en 1.000, el líder del ataque, Alberto Castrillón, en 1.500 y el general a cargo de la masacre en 47; ver *Entre la legitimidad y la violencia*, p. 120. David Bushnell, citando a Roberto Herrera Soto y Rafael Romero Castañeda, considera como “definitiva” la cifra de entre 60-75. *The Making of Modern Colombia*, p. 180.

65. Ver W. John Green, *Gaitanismo, Left Liberalism and Popular Mobilization in Colombia*, Gainesville, FL, 2003.

66. Herbert Braun, *The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia*, Madison, WI, 1986, pp. 8-9, 45-46, 54-55. Braun sostiene que el *gaita-*

En 1929, los “bolcheviques del Líbano” del PSR se alzaron en una insurrección fallida al norte de Tolima. Esta fue la primera revuelta explícitamente socialista en Colombia y representó la alianza que los artesanos radicales e intelectuales provinciales habían forjado con los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios de tierras.⁶⁷ En efecto, los campesinos tomaron la ofensiva, organizando toma de tierras a lo largo de todo el eje cafetalito y el proletariado de exportación llevó a cabo uno de los mayores ataques hasta la fecha en los enclaves multinacionales. El capitalismo cafetalero bajo el mando conservador católico creó esperanzas en cuanto a tener propiedad sobre las tierras, al control de los trabajadores y a salarios más altos, que no pudo cumplir, así que se derrumbó de frente a la vasta movilización popular radical.

Las regiones se racializaban a medida que sectores privilegiados de los campesinos eran incorporados a redes de mecenazgo y clientelismo. Aquellos que estaban excluidos de los beneficios del capitalismo cafetalero se movilaron en protestas. La rebelión indígena campesina se extendió a partir de 1914; los sindicatos

nismo tuvo poco impacto sobre los trabajadores organizados, pero Green muestra lo contrario.

67. Gonzalo Sánchez, “Los bolcheviques de Libano”, en *Ensayos de historia social y política del siglo XX*, pp. 11-111.

atacaron los enclaves capitalistas de petróleo y bananas después de 1925; y una ola de toma de tierras por parte de campesinos multiétnicos barrió con las fronteras cafetaleras en 1928. Los movimientos populares radicales alcanzaron más independencia y autonomía de los dos partidos que en el pasado a través de la acción directa y la formación de partidos revolucionarios de izquierda.

La pausa liberal (1930-1946)

Colombia fue, y continúa siendo, prueba de que la reforma gradual en el marco de la democracia liberal no es la única, ni siquiera la más plausible alternativa de revoluciones sociales, incluyendo aquellas que fallaron o que fueron abortadas. Descubrí un país en el que la imposibilidad de hacer una revolución social ha hecho que la violencia sea la esencia constante, universal y omnipresente de la vida pública.

*Eric Hobsbawm, Interesting Times:
A Twentieth-Century Life, 2002.*

A pesar de que sus efectos fueron duraderos, el largo período de dominación conservadora se apoyó en bases inestables y sufrió de una contradicción básica: dio pie a expectativas de titularidad de propiedad que no podía satisfacer. La “pausa liberal” duró de 1930 a 1946, anunciada por olas de movilización masiva. Nuevas fuerzas se integraron perfectamente con la izquier-

da del Partido Liberal –agrupado alrededor del liderazgo carismático de Jorge Eliécer Gaitán– para constituir el primer movimiento popular radical de perspectiva nacional. De hecho, el nacionalismo de Gaitán sobrepasaba clases, era multiétnico y antielitista, lo que le permitía a la clase trabajadora colombiana superar sus debilidades con respecto a las firmas y empresarios capitalistas basándose en su carácter inclusivo.⁶⁸ En 1945, la urbanización acelerada, la clase media y trabajadora politizadas y la presión campesina a favor de las reformas agrarias conllevaron a una disminución del peso político de los propietarios en todo el continente. Sin embargo, en Colombia, los propietarios vencieron a los arrendatarios y aparceros, ya que los industrialistas superaron a los trabajadores sindicados.

Mientras que en otras partes de la región las movilizaciones masivas crearon nuevos partidos, forzaron la reforma agraria, la legislación laboral y derrocaban gobiernos, en Colombia ni el populismo urbano ni la social democracia agraria duraron como fuerza nacional.⁶⁹

68. W. John Green, "Sibling Rivalry on the Left and Labor Struggles in Colombia during the 1940s", en *Latin American Research Review*, vol. 35, no. 1, 2000, pp. 93, 115.

69. Para la extraordinaria apertura democrática que ocurrió en América Latina entre 1944 y 1946, antes de que se estableciera la gran inmovilización luego de 1948, ver Leslie Bethell y Ian Roxborough, eds., *Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948*, Cambridge, 1992; Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*, Chicago, 2004, p. 176.

Populismo incipiente

Los trabajadores organizados, los movimientos campesinos radicales, el Partido Comunista colombiano y Gaitán experimentaron con organizaciones y movilizaciones fuera del Partido Liberal en la primera mitad de los años 30, antes de reincorporarse al partido luego de 1935. En conjunción con esta nueva ola de movilización popular-radical, la cual tenía para ese momento un horizonte y un enfoque nacional, la poco entusiasta reforma agraria liberal y la legislación laboral encontraron una fuerte oposición por parte del Partido Conservador. Los conservadores, bendecidos por la Iglesia católica, redoblaron sus esfuerzos para gobernar sin contrincantes en áreas rurales y para buscar un equilibrio por el territorio que los liberales habían ganado en las ciudades. Esto explica por qué, a pesar de que la social democracia triunfó en toda América Latina a finales de la Segunda Guerra Mundial, la contrarrevolución católica triunfó en Colombia a través del terror político institucionalizado.

Una vez que la base económica del mandato conservador estuvo fuera del mapa temporalmente y su cohesión política se vio deshecha, a los liberales se les abrió una puerta para recuperar la Presidencia luego de cin-

cuenta años a la deriva. Su candidato, Olaya Herrera, había sido embajador en Washington en el gobierno de los conservadores, con quienes él mantenía buenas relaciones y su voto fue menor a aquel de los rivales conservadores combinados. No hubo mayores salidas políticas pero Gaitán se separó del Partido Liberal en 1933 para fundar la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR) y aprobó la fundación de ligas campesinas para competir con aquellos apoyados por el Partido Liberal y, crucialmente, contra los del Partido Comunista Colombiano (PCC).⁷⁰

El PCC fue fundado en 1930 por líderes del PSR, dos de los cuales, José Gonzalo Sánchez y Dimas Luna, habían liderado el movimiento de la Quintina indígena a principios de los años 20. Hubo cierta continuidad con las luchas de Cauca y Tolima y el PCC inicialmente dio prioridad a las luchas campesinas en las fronteras cafetaleras, específicamente en Tolima y en Cundinamarca, donde las mayores plantaciones pertenecían a banqueros mercantiles de Bogotá, a alemanes y estadounidenses. El PCC estableció ligas para capitalizar en la ola de ocupaciones territoriales luego de 1928 y, a principios de los años 30, ganó legiti-

70. Sánchez, “Las Ligas Campesinas en Colombia”, en *op. cit.*, pp. 152-68.

dad política a través de su “agrarismo revolucionario” basado en la “formación y protección de comunidades minifundistas autónomas”.⁷¹ Gaitán acusó al PCC de haber evadido etapas de desarrollo histórico: mientras las ligas campesinas comunistas aspiraban acomodarse en la revolución socialista, la UNIR fue designada para remover los bloques feudales en el desarrollo de la agricultura capitalista. El interior del país era un terreno político altamente controversial a principios de los años 30 y –este era el tercer período sectario de la Internacional Comunista– el PCC consideraba a la UNIR como su principal contrincante político, específicamente en Tolima y Cundinamarca.⁷²

Cuando los liberales ganaron de nuevo, sin oposición alguna, los conservadores sabotearon las elecciones. Su líder era Alfonso López Pumarejo, el descendiente de una familia banquera rica y antiguo

71. Marc Chernick y Michael Jiménez, “Popular Liberalism, Radical Democracy and Marxism: Leftist Politics in Contemporary Colombia, 1974–1991”, en Barry Carr y Steven Ellner, eds., *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika*, Boulder, 1993, p. 66.

72. En el Tercer Período de la Internacional Comunista (1928-1935), los partidos comunistas fueron instruidos por Stalin y por la burocracia soviética para competir con otras organizaciones de la izquierda y para evitar coaliciones entre clases. Ver C.L.R. James, *The Rise and Fall of World Revolution: The Third International, 1919-36*, London, 1937. Para la fundación de la Internacional Comunista, ver E.H. Carr, *The Bolshevik Revolution, 1917-1923*, vol. 3, New York, 1953.

empleado de la firma estadounidense de inversión Baker-Kellogg. Por haberse criado en Inglaterra y en los Estados Unidos, sus admiradores consideraban a López Pumarejo como el Roosevelt de los Andes. La “revolución en marcha” que proclamaba López era un asunto limitado, más radical en su retórica que en sus reformas, pero que generaba esperanzas de redistribución populista y de arbitraje del estado del conflicto de clase.⁷³ Los impuestos subieron. Se gastaba más en escuelas y vialidad y la legislación laboral fue liberada, lo que abrió las puertas a un mayor crecimiento de la sindicalización, proceso que había comenzado bajo el mandato de Olaya. Lo que es aún más importante es que las expectativas populares sobre los resultados de la participación política se dispararon.

Se hicieron grandes esfuerzos, principalmente, en la revisión de la Constitución de 1886, con el fin de asegurar la separación de la Iglesia del Estado, pero, junto con otras medidas, esto era suficiente para traer a Gaitán de vuelta al bando liberal en 1935. Esto impulsó al PCC, alineado con las políticas del Frente Popular, a influenciar el régimen de López, desmovi-

73. Para un punto de vista escéptico, ver Richard Stoller, “Alfonso López Pumarejo y el radicalismo liberal en la Colombia de los años 30”, en *Journal of Latin American Studies*, 27, 1995, pp. 367-97.

lizando sus ligas campesinas y renunciando a sus ambiciones revolucionarias vanguardistas.⁷⁴ Con el apoyo del PCC –partido que dominaba los sindicatos clave en el sector de transporte y en los enclaves de exportación– López creó la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) con el objetivo de convertir el trabajo organizado en un bloque clientelista bajo el control del Partido Liberal.

Dos pasos hacia atrás

A pesar de que la “república liberal” duró hasta 1946, su promesa se derrumbó durante el segundo período de López, entre 1942 y 1945. López, involucrado en escándalos de corrupción, rechazó reformas tales como la de la jornada laboral de ocho horas o la de seguridad social, reformas que aún eran de gran importancia para los trabajadores sindicados. López rechazó, asimismo, la reforma de terreno limitado en 1944 y la cambió por la Ley 100, también conocida como “la revancha”.⁷⁵ La Ley 100 demostraba la inhabilidad del

74. En contraste con el tercer período, durante el Frente Popular (1935-1939), Stalin y la burocracia soviética ordenaron a los partidos comunistas aliarse con los reformistas burgueses y competidores de la izquierda en nombre de la unidad contra el fascismo.

75. Nazih Richani, *Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia*, pp. 20-23.

Partido Liberal para resolver “los asuntos agrarios” entre los campesinos y los propietarios, además de que subrayó la influencia de estos últimos dentro de la clase dominante. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Patriótica Económica Nacional (APEN) promovieron la Ley 100, lo que le cerró las puertas a los sueños de los aparceros de convertirse en minifundistas independientes. Dicha ley protegía la propiedad y los contratos laborales, prohibía el cultivo de cosechas que pudieran competir en el mercado y legalizaba la expulsión de aparceros y arrendatarios. Los grupos hacendados con mayor antigüedad tenían la posibilidad de crear alianzas con la nueva élite de exportación de café con el fin de preservar sus privilegios. La Ley 100 abrió las puertas para la guerra de clases entre las clases superiores y los arrendatarios y aparceros movilizados en Cauca, Tolima y Cundinamarca, donde la lucha campesina había sido vigorosa en los años 30.

Una interpretación importante sugiere que el movimiento laboral anticapitalista, en alianza con los movimientos campesinos e indígenas de los años 20 fue cooptado e institucionalizado en los años 30, in-

cluso cuando las luchas campesinas se intensificaron, lo que llevó a la aprobación de la Ley 200 en 1936. La Ley 200 fue una reforma. Dicha ley establecía la ocupación efectiva de la tierra como base legal de tenencia y se ha discutido que dicha victoria parcial de los trabajadores del café –era parcial porque los propietarios se beneficiaban mucho más– por haber asegurado el acceso a tierras fronterizas en los años 30 conllevó, irónicamente, al aislamiento de sindicatos militantes en otros sectores, tales como el sector del petróleo y del transporte. Sin embargo, por más que el sector del transporte creció y se fortaleció, no pudieron afectar al área central de la economía, de ahí la fragmentación subsiguiente del movimiento laboral como un todo y, en consecuencia, el fortalecimiento de los dos partidos tradicionales. Mucho antes de la Violencia –para desarrollar el argumento– las políticas de clases independientes habían sido eclipsadas, mientras que los minifundistas en la faja cafetera ganaban terrenos familiares, y fueron integradas a una de los dos partidos, mientras que Gaitán y los trabajadores sindicados encajaban en el bando del Partido Liberal. Durante la Violencia, la competencia entre las clases para evitar la “proletarianización”, mediada por las prácticas clientelistas y por la asociación de

cultivadores de café, tomó un giro fanáticamente sangriento, mientras que el movimiento laboral urbano era relegado.

Mientras que en otras partes de Latinoamérica el campesinado movilizado jugaría un papel clave en las coaliciones radicales, en Colombia la solidaridad entre los trabajadores desapareció⁷⁶ luego de que los cultivadores de café conquistaron sus terrenos familiares en los años 30 y 40. A pesar de que este hecho explica el desarrollo clave del campo cafetero, también ignora el reto radical que el gaitanismo propuso como el primer movimiento radical-popular en la historia de Colombia para unir grupos subordinados nacionalmente que habían sido desunidos por divisiones raciales, regionales y de clase. Este hecho también minimizó la importancia del mensaje del gaitanismo, por un lado, de lucha de clases por los proletarios rurales, arrendatarios y aparceros excluidos del derecho a la propiedad y, por el otro, de la mayoría de trabajadores urbanos fuera de la esfera del trabajo organizado.⁷⁷

76. Charles Bergquist, "The Labor Movement (1930-46) and the Origins of the Violence", pp. 52, 62, 69-70. Christopher Abel y Marco Palacios ofrecen una interpretación similar en "Colombia: 1930-58", en Leslie Bethell, ed., *The Cambridge History of Latin America*, Cambridge, 1991, vol. 8, p. 592.

77. Michael Jiménez, "The Many Deaths of the Colombian Revolution", en *Colombia Papers on Latin America*, no. 13, 1990; Green, "Sibling Rivalry on the Left", pp. 99-112.

A principio de los años 40, luego de la recuperación de la exportaciones cafeteras de 1936 y después de casi una década con un crecimiento anual de manufactura de 10 por ciento, emergió un consenso entre los grupos dominantes colombianos y se determinó que era tiempo de regresar a la ortodoxia económica liberal que había prevalecido en el mundo capitalista hasta los años 30. Las reformas sociales y las políticas pro-laborales no tendrían lugar. En 1944, la élite conservadora fabricante de la ciudad creó la Organización de Industriales de Colombia (ANDI) y, en 1945, los comerciantes del café crearon Fedecafé. A pesar de que tuvieron diferencias en la década siguiente, estos grupos, unidos por endogamia, dictaron consiguientemente las políticas económicas de los gobiernos sucesivos a espaldas de la opinión pública.⁷⁸ La Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) fue establecida por la Iglesia católica en Medellín en 1946 y se convertiría en el modelo por excelencia para las federaciones de trabajadores organizados.

El liberal Alberto Lleras Camargo, antiguo intelectual marxista y embajador de Colombia en Washing-

78. Ver Medófilo Medina, "Violence and Economic Development: 1945-50 and 1985-88", en Bergquist et al, *Violence in Colombia: Historical Perspective*, pp. 157-58; Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, pp. 58-59; y Eduardo Sáenz Rovner, *La ofensiva empresarial: Industriales, políticos, y violencia en los años 40 en Colombia*, Bogotá, 1992.

ton, tomó el poder luego de que López Pumarejo renunciara antes de que terminara su período. Lleras Camargo acrecentó la represión en contra de los trabajadores organizados. En 1945, Lleras Camargo aplastó la huelga comunista de trabajadores del río –su sindicato, Fedenal, había sido el más exitoso de la CTC y era el único en haber logrado una empresa en la que todo el personal está sujeto a un sindicato. Al conectar las montañas andinas con la costa atlántica, los trabajadores de Fedenal (navegantes, carpinteros de barcos, estibadores y mecánicos) llevaban el café colombiano a los mercados mundiales. Su posición estructural en la economía les dio la oportunidad de cerrarla. Su derrota en 1945 representó el mayor retroceso de la clase trabajadora como un todo.

Hacia la Violencia

Gaitán estaba limitado por sus propias contradicciones. Él no abandonaría al Partido Liberal, pero tampoco podía cumplir con las exigencias de su circunscripción electoral dentro del sistema oligárquico bipartidista. Sin embargo, sólo Gaitán –el abogado laboral líder del momento, quien había ejercido puestos de Senador, concejal, alcalde de Bogotá, ministro de Edu-

cación y del Trabajo– refutó dichos desarrollos a través de canales oficiales, lo que le ayudó a ganar seguidores entre el electorado liberal. A pesar de que el liderazgo del PCC se resistía a él, Gaitán disfrutaba del apoyo del Partido Comunista y los trabajadores organizados de los sectores del petróleo, transporte y telecomunicaciones lo apoyaban entusiastamente.⁷⁹ Cuando el sistema liberal lo sacó del panorama como el candidato del partido para la Presidencia en 1946, Gaitán se postuló por su cuenta. A pesar de que Gaitán ganó en muchas ciudades –Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Santa Marta–, el resultado fue dividir el voto liberal y permitir que el candidato conservador, Mariano Ospina Pérez, ganara, como lo habían planeado los conservadores.

Se dice que el periodo conocido simple, aunque erróneamente, como *la Violencia* –el momento definitorio del corto siglo XX para Colombia– comenzó con la muerte de Gaitán en 1948. Pero eso implicaría restarle tres años, si no dos décadas. Para entender sus raíces es necesario retroceder hasta los orígenes de la república liberal.⁸⁰ Cuando el dominio conservador se

79. Green, “Sibling Rivalry on the Left”, p. 103.

80. Pécaut en *Orden y violencia*, vol. I, pp. 286-302 argumenta de manera contundente este punto.

terminó en 1930, las tensiones que venían aumentando en el interior del país comenzaron a explotar. Los recuerdos de la masacre partidaria de la Guerra de los Mil Días –cuando los líderes liberales y conservadores movilizaron sus milicias campesinas para que se mataran en una batalla que le costó la vida a uno de cada veinticinco colombianos– aún están vívidos en muchas localidades. Apenas Olaya Herrera había tomado el poder cuando los liberales tomaron su venganza en Santander y en Bogotá.⁸¹ El miedo de los conservadores no era del todo irracional. Una vez que los liberales se habían afianzado en el poder, echaron mano a la intimidación, a la violencia policial y al fraude. En retalia- ción, los conservadores boicotearon cada elección pre- sidencial hasta 1946. A principios de los años 40, los liberales convirtieron a la policía en un apéndice de su partido, acción que tendría graves consecuencias du- rante la Violencia, cuando la policía era “conservado- ra”. A lo largo de la “pausa liberal”, se dio un escenario amenazador de matanzas en los municipios, mientras que la polarización política y la violencia terratenien- te, aún cuando estaba considerablemente localizada, se propagaba.

81. Para un vívido recuento de estos eventos y de su trasfondo, ver James Hen- derson, *Modernization in Colombia. The Laureano Gómez Years, 1889–1965*, Gaines- ville, FL, 2001, pp. 183-89.

Si, en Boyacá y en los Santander, la lógica del “feudo defensivo” entre las comunidades locales contrincantes, cada una con recuerdos y miedos de penosas heridas, se implementó desde el principio, dos desarrollos nacionales sobre-determinaron esta dinámica subyacente.⁸² El primero fue el cambio en el balance electoral entre los dos partidos, una vez que incluso un grado moderado de urbanización –y en Colombia era aún bastante moderado– había to- mado posesión. La fuerza de la lealtad conservadora había dependido de la influencia del clérigo, el cual era mucho más fuerte en pueblos pequeños y en el interior del país. Una vez que la proporción de los ciudadanos sobrepasó cierto umbral en 1940, los liberales comenzaron a controlar una mayoría per- manente en las votaciones. Esto se evidenció en las elecciones presidenciales de 1946, las cuales perdie- ron. Los dos candidatos liberales totalizaron más del 60% de los votos, nivel que se había convertido en la norma desde entonces.

De parte de los conservadores, la pérdida de po- der había incrementado la influencia del ala más ex- tremista del partido. Bajo el carismático liderazgo de

82. La noción del feudo defensivo de desarrolla en Payne, *Patterns of Conflict in Colombia*, pp. 161-67.

Laureano Gómez, el partido se inclinaba a expandir su dominio en el interior del país para recuperar las pérdidas en las ciudades. Apodado “el Hitler criollo” por sus adversarios, Gómez había sido visto en ese momento, y a partir de allí, como un demagogo fascista ya que llevaba a su partido a extremos fanáticos y sumergía al país en la guerra civil. En el mezquino mundo de la élite política colombiana, Gómez fue buen amigo tanto de López Pumarejo como de su sucesor, Eduardo Santos, y se benefició de los antiguos vínculos financieros. Él tenía el apoyo clave y sólido de los gremios, como Fedecafé y ANDI. A mediados de los años treinta, Gómez había hecho ataques devastadores a Mussolini y a Hitler, pero él era un integrista católico. En los años 30 y 40, Latinoamérica estaba llena de movimientos y líderes, no todos reaccionarios, que estaban sorprendidos por el éxito del fascismo alemán e italiano: Toro y Busch en Bolivia, Vargas en Brasil y Perón en Argentina.

Lo que era distintivo en Colombia era que el mismo tipo de atracción llevó a Gómez y a su partido hacia Franco como una versión tradicionalista y religiosa de contrarrevolución, libre de cualquiera de las connotaciones populistas de los regímenes italianos o alema-

nes. El resultado fue una intensificación retórica –a niveles de la Guerra Civil Española– de las enemistades históricas con el liberalismo, en ese momento presentado como indistinguible del comunismo. Los insultos verbales racistas y caricaturas de Gaitán –y de sus seguidores– fueron implacables. Gaitán era conocido en las élites políticas bogotanas como “el Negro Gaitán”, un epíteto que, basado en sus rasgos fenotípicos y su descendencia afro-colombiana y caribeña, buscaba ridiculizarlo y descalificarlo. Los negros eran “perezosos”, “indisciplinados” e “inmorales”. Los hispanófilos y la reconquista católica los pondría a ellos y a sus líderes –en los sindicatos de trabajadores de río, ferrovías y vías– en su lugar.⁸³

Como lo hizo Núñez setenta años atrás, Gómez pretendía hacer regresar a la sociedad colombiana a una idealizada totalidad colonial interna, en la que los subalternos supieran cuál era su puesto. Pero Gómez vivió en la época de guerra total y ayudó a promover el terror político a niveles impensables. A mediados de los años 40 se presentó un breve momento de apertura democrática-radical en casi toda

83. W. John Green, “Vibrations of the Collective: The Popular Ideology of Gaitanismo on Colombia’s Atlantic Coast, 1944-48”, en *Hispanic American Historical Review*, 76: 2, 1996, pp. 283-311.

Latinoamérica, cuando los populistas arrasaron y tomaron el poder. En Colombia ocurrió un agresivo asalto contrarrevolucionario católico contra los trabajadores organizados y contra los movimientos campesinos radicales.

La Violencia (1946-1957)

La violencia ha sido desencadenada, ordenada y estimulada más allá de los riesgos, por control remoto. La violencia más típica de nuestras luchas políticas es aquella que atrozmente produce humildes víctimas en el interior del país, en pueblos y en barrios urbanos... Pero el combustible de dicha violencia ha sido enviado desde escritorios urbanos, todo ha sido pensado y calculado en frío y ha sido astutamente elaborado para producir sus frutos de sangre.

Alberto Lleras Camargo, 1946

*L*a Violencia (1946-57) fue una mezcla de terror oficial, sectarismo partidario y políticas de tierra quemada que resultaron de la crisis de la república del café, la debilidad del Estado central y de la competencia por los derechos de propiedad. Se distinguió por el “terror concentrado” que se usó para suprimir las políticas radicales-populares y confinar los crecientes con-

fictos raciales-étnicos y de clase entre canales bipartidarios.⁸⁴ La violencia, que siempre ha sido un elemento básico en las políticas de regiones y municipalidades, se desató por primera vez a nivel nacional contra las insurrecciones gaitanistas que estallaron en la capital y en las ciudades y pueblos provinciales en todo el país luego de que Gaitán fuera asesinado en 1948. La apreciación de la amenaza que las juntas gaitanistas significaban para la autoridad del gobierno central –así como también lo eran las jerarquías raciales y los derechos de propiedad– nos permite evidenciar la magnitud del revés sufrido por las fuerzas populares-nacionales nacentes. La Violencia comenzó en las zonas cafetaleras de Santander y Boyacá, y se enfocó en el centro cafetalero del norte del valle del Cauca, Viejo Caldas y Tolima.⁸⁵ Las masacres ocurrieron como lo habían hecho durante la Guerra de los Mil Días, pero el derramamiento de sangre duró mucho más. Aproximadamente 300.000 personas, de las cuales 80% eran hombres y la mayoría de ellos eran campesinos analfabetas, resultaron muertos, mientras que 2.000.000 tuvieron que ser desplazados a la fuerza cuando la guerra terminó

84. Gonzalo Sánchez, *Guerra y política en la sociedad colombiana*, Bogotá, 1991, p. 31.

85. Bergquist, “The Labor Movement”, pp. 60-61.

oficialmente en 1964.⁸⁶ Esto no puede entenderse sin reconocer la incorporación dependiente de la mayoría de cultivadores de café al aparato clientelista de cada partido en las áreas minifundistas de Boyacá, Santander, Antioquia y a lo largo del eje cafetero.⁸⁷

La participación de Colombia en la Guerra Fría fue internacional pero también nacional. El presidente Laureano Gómez envió al Batallón Corea a pelear con la 31ª Infantería de los Estados Unidos en 1951. En 1952, el Presidente envió al primer grupo de colombianos entrenados en la *Army Ranger School* en Ft. Benning, GA. Tres años más tarde, bajo el mando del general Rojas Pinilla, el gobierno de los Estados Unidos patrocinó la guerra química –bajo la forma de bombas de *napalm* hechas en Colombia– contra las “repúblicas independientes” comunistas del Sur. Los veteranos colombianos de la guerra coreana dirigie-

86. Roldán, en *Blood and Fire*, pp. 22-29, presenta una concisa visión general de la bibliografía, la cual es significativamente vasta para citarla por completo. Sin embargo, dos estudios clásicos merecen ser mencionados: Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, *La violencia en Colombia*, Bogotá, 1962, el impacto que desencadenó el debate del Congreso; y *Violencia, conflicto, y política en Colombia*, de Paul Oquist, Bogotá, 1978, donde se discute que la *Violencia* resultó de un “colapso parcial del Estado”, lo que estimuló nuevas vías de investigación.

87. La lucha agraria que ocurrió desde los años 10 hasta los años 40 era individualizada, mientras que en Tolima y en Cundinamarca era una lucha colectiva y trans-local. Betancourt y García, *Matones y cuadrilleros: Origen y evolución de la Violencia en el occidente colombiano, 1946-65*, Bogotá, 1990, pp. 19, 23-24, 177.

ron la campaña, en coordinación con asesores estadounidenses. Ese fue el primero de muchos fracasos contrainsurgentes.

El Bogotazo como revolución fallida

En abril de 1948, entre el creciente conflicto sectario y la polarización partidaria, el presidente Mariano Ospina Pérez fue el anfitrión del Noveno Congreso Panamericano en Bogotá. El secretario de Estado de los Estados Unidos, George C. Marshall, junto con varios presidentes y diplomáticos de América Latina, asistieron a dicho congreso para aclarar el papel de los Estados Unidos en el periodo posguerra. A pesar de que el supuesto propósito de la visita del secretario Marshall era fortalecer las alianzas y establecer la Organización de Estados Americanos, la prioridad del líder de Washington era mantener su largo poderío e influencia frente a una posible “amenaza” soviética. Los dirigentes colombianos estaban deseosos por ser considerados como actores regionales importantes en los eventos mundiales y como militantes anticomunistas que seguían fielmente los pasos de las antiguas actitudes criollas con respecto a las movilizaciones populares-radicales. Este fue el agitado panorama en el que Gaitán fue asesinado.

Fidel Castro, mientras asistía a una conferencia de líderes estudiantiles antiimperialistas, conoció a Gaitán en Bogotá y ambos planificaron reunirse nuevamente en la tarde del día siguiente –del día 9 de abril–, pero Gaitán fue asesinado ese mismo día cuando se dirigía a almorzar. Las noticias de su asesinato desencadenaron los mayores disturbios de la historia Colombia del siglo XX, el llamado Bogotazo –una revuelta socio-política que arrasó tanto con las provincias como con la capital–. En la capital, luego de casi sorprender a los débiles guardias del palacio presidencial, grandes multitudes de los vecindarios periféricos se reunieron en el centro de la ciudad. Los saqueadores atacaban los negocios –especialmente los que pertenecían a los comerciantes considerados como “extranjeros”– en contra del hambre y de la especulación. Mientras los disturbios continuaban, los saqueadores expropiaban comida, ropas, mercancías consumibles, herramientas y ferretería. Los pirómanos incendiaron iglesias y edificios gubernamentales, al igual que el periódico de Gómez, *El Siglo*. Profesionales y estudiantes radicalizados gaitanistas de la Universidad Nacional tomaron las ondas radioeléctricas e hicieron llamados a establecer las juntas revolucionarias en todo el país –una referencia a los

cuerpos políticos formados durante las guerras de independencia del colonialismo español—.

Esto ayudó a motivar a las provincias. Luego del 9 de abril, la resistencia popular-radical, otras organizaciones y la rebelión en áreas de asentamiento reciente pusieron las bases políticas de la república en crisis. Este fue el caso en Magdalena Medio, en los valles de Sinú y San Jorge, en la frontera de Antioquia y Córdoba, al igual que al noreste de Antioquia, Cali, norte del valle, Cundinamarca y Tolima. Los trabajadores organizados establecieron juntas revolucionarias en Bogotá, Cali, Remedios, Zaragoza, Puerto Berrío, Barrancabermeja y en docenas de municipios.⁸⁸ A pesar de que los objetivos eran modestos, la movilización popular luego de la muerte de Gaitán era tan intensa y generalizada que podía “transformar” el “contenido reformista” de las exigencias. El mundo se puso al revés brevemente en términos de poder y de autoridad. Los perseguidos se convirtieron en los poderosos, los prisioneros ejecutaban a los guardias, la policía se puso del lado del pueblo gaitanista, los campesinos robaban ganado y se apoderaban de las tierras y los trabajadores del petróleo mantenían la

88. Gonzalo Sánchez, *Los días de la Revolución: Gaitanismo y 9 de abril en la provincia*, Bogotá, 1983.

refinería de Barranca. Los insurgentes hablaron de un nuevo orden revolucionario respaldado por las milicias populares.⁸⁹

Sin embargo, las juntas, por falta de apoyo de la capital y por falta de unidad entre ellas, fueron derrotadas rápidamente. A pesar de que el Bogotazo fue una expresión de ira popular, no conllevó a la toma del poder, excepto en las provincias y por muy poco tiempo. El populismo que Gaitán había esbozado en la izquierda del liberalismo era una creciente amenaza para la oligarquía del país, la cual era catalogada como tal por el mismo Gaitán. Desde un punto de vista comparativo, sin embargo, dicho populismo era relativamente débil. La dispersión de la población de la gran ciudad en al menos cuatro centros regionales —Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, cuya población no excedía el medio millón de habitantes para 1940 en ninguno de los casos— privó a un potencial populismo colombiano de una masa crítica de organización de la clase trabajadora urbana. El mismo Gaitán notó en 1943 que menos del 5 por ciento de la fuerza trabajadora del país estaba sindicalizada y que, a pesar de que las juntas tomaron el poder en el país, no eran capaces de man-

89. Idem, “The Violence: An Interpretive Synthesis”, pp. 77, 81-83.

tenerlo. El secretario Marshall vio a la Unión Soviética y a su herramienta, el “comunismo internacional”, como la mano invisible que dirigió el Bogotazo. Fidel Castro regresó a Cuba el 10 de abril, pero presentó una interpretación diferente. “Nadie puede adjudicarse la organización de lo ocurrido el 9 de abril porque lo que menos estaba presente el 9 de abril era precisamente eso, la organización. Esa es la clave. No había organización en absoluto”.⁹⁰ Sin preparación, liderazgo o un programa de autogobierno, las insurrecciones gaitanistas no lograron liderar la revolución.⁹¹ Sin embargo, en el marco de nuevos estudios, la perspectiva clásica de la Violencia como una reacción en contra del empuje radical del gaitanismo es persuasiva.⁹²

La Resistencia y la Reconquista

En cambio, el conflicto partidario se expandió en todo el eje cafetalero, siguiendo el precedente que se inició en 1945 en Boyacá y en los Santander. Los líderes liberales en los distritos cafetaleros de Quindío y

90. Citado en Kirk, *More Terrible than Death*, p. 21.

91. Brevemente, el “sustitucionismo” puede definirse como la noción de que un partido o ejército vanguardista organizado pueda hacer una revolución sin tener en cuenta la debilidad de los movimientos campesinos y de la clase trabajadora.

92. Ver Antonio García, *Gaitanismo y el problema de la revolución colombiana*, Bogotá, 1955.

Tolima, con temor a una venganza conservadora por el levantamiento –que se materializó en una ola de asesinatos locales–, movilizaron a los clientes campesinos a milicias guerrilleras con la esperanza de obtener un resultado diferente a aquel de la Guerra de los Mil Días. A diferencia de los conflictos militares del siglo XIX dominados por los líderes oligárquicos, durante la Violencia, los comandantes liberales eran campesinos con *noms de guerre* como “Sangrenegra” y “Capitán Desquite”.

La meta de dichas guerrillas liberales-comunistas era derrocar al gobierno conservador, mas no establecer una nueva sociedad. No obstante, esta resistencia sirvió de catalizador para la contrarrevolución en el interior del país. El “orden” se restauró en la capital cuando las tropas y voluntarios vinieron de la cercana Boyacá conservadora y reforzaron al Ejército, el cual se mantuvo leal a los conservadores. Los voluntarios, conocidos como *chulavitas*, sirvieron en principio en el condado Chulavita, en Boyacá, donde la violencia liberal se había difundido en los años 30. Pero, en 1949, el candidato presidencial liberal, Darío Echandía, fue asesinado en Bogotá. Entonces, los conservadores usaron a los *chulavitas* en Boyacá y en la capital durante y

después del Bogotazo y luego en el eje cafetalero al sur: Tolima, valle del Cauca y Viejo Caldas (Caldas, Risaralda, Quindío). Los *chulavitas* eran devotos de la Virgen del Carmen. Esa guerra era para ellos una “guerra santa” para librar al país de ateos, masones y comunistas o, en una palabra, de los liberales.⁹³

En Antioquia, apoyadas por el clérigo, las legiones católicas de Gómez se movilizaron a las municipalidades “conservatizadas” antes de las siguientes elecciones; en Nariño hicieron lo mismo. Los de Nariño, en cambio, fueron reclutados para ayudar a “conservatizar” la parte norte del valle, donde la avanzada conservadora era total. Las comunidades liberales desertaron masivamente en un acto de autopreservación una vez que la “policía civil conservadora” reemplazó a la policía liberal entre 1947-1948, para luego organizarse en una fuerza profesional de asesinos políticos en 1949-1950.

Cuando la guerra estalló luego de la muerte de Gaitán, el PSD –ya vetado por Ospina– se enfocó en el trabajo clandestino en el interior del país, abogando la autodefensa armada.⁹⁴ En 1949, sus primeros grupos

93. Sánchez, “The Violence: An Interpretive synthesis”, en Bergquist, et al., eds., *Violence in Colombia*, pp. 83-86.

94. El contraste con Chile es instructivo. Allí, los comunistas eran expulsados del interior del país y, a partir de 1948, se orientaron estrategias hacia los sindicatos

se formaron a lo largo de la línea férrea en Santander, en las enclaves petroleras de Shell, Socony y Tropical Oil en la parte norte de Santander y Ariari; y, lo que es más importante dados los eventos subsiguientes, en Tolima y Cundinamarca, donde las ligas campesinas del PCC y de la UNIR se habían consolidado en los años 30. A finales de 1949, los jefes liberales, respaldados por el gobernador departamental y por los líderes comerciantes y propietarios, se acercaron al partido en busca de ayuda para establecer la guerrilla. En 1950, con el sectarismo oficial operando de manera febril, los gaitanistas organizaron un frente guerrillero con combatientes del PSD en la parte sur de Tolima. La fuerza estaba dirigida por el clan Loayza, uno de cuyos miembros, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o “Tirofijo”, lidera a las FARC actualmente.⁹⁵

La respuesta al 9 de abril y a las juntas revolucionarias fue la represión bárbara. Los conservadores, por ejemplo, le cortaron la lengua y le sacaron los ojos al menos a 40 liberales y destriparon a otros en San Rafael, en valle del Cauca. Los puestos gaitanistas en el condado –había habido muchos en Valle en 1948– fueron

urbanos y las barriadas.

95. Medófilo Medina, “La resistencia campesina en el sur de Tolima”, en Sánchez y Ricardo Peñaranda, eds., *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, pp. 233-65.

sujetos de “trabajitos” o asesinatos selectivos llevados a cabo por *los pájaros*. Estos eran asesinos que trabajaban para los conservadores y que circulaban en carros negros sin placas y “retornaban” a la vida cotidiana en los pueblos como carniceros, conductores, mesoneros, sastres, lavanderos o inspectores de policía católicos. Su líder, León María Lozano, “El Cóndor”, comenzó su participación en la violencia contra los gaitanistas en Cali en la defensa de una capilla donde él había erigido un altar a la Virgen María Auxiliadora. Muy pronto, Lozano dirigiría la pandilla más grande y mejor protegida de pistoleros conservadores católicos del norte del valle, además de que trajo profesionales de Boyacá, Antioquia, Santander, Tolima y Quindío y reclutó a otros en aldeas y municipios cercanos a Tuluá.

El coronel Gustavo Rojas Pinilla, encargado de la Tercera Brigada en el Valle, apareció con “El Cóndor” en una fotografía. Rojas Pinilla y el gobernador conservador planificaron la supresión de la revuelta gaitanista que se había apoderado del Palacio de San Francisco, en Cali. Este era un paso importante en el ascenso político de Rojas, el cuál aseguró a través de la destitución de juntas revolucionarias en todo el departamento. De allí en adelante, Lozano y *los pájaros*, junto con la po-

licía secreta, aterrorizaban a la región. Bajo el mando del gobernador laureanista Nicolás Borrero Olano, dueño del diario de derecha *Diario del Pacífico*, la declaración de Rojas Pinilla de “neutralidad” en cuanto a la proliferación de la violencia con los *pájaros*, permitió la libre circulación de asesinos anónimos contratados para asesinar liberales. La “neutralidad” militar era esencial para el éxito de los “trabajitos” –o asesinatos– en los cuales la nueva policía conservadora participaba en pandillas de tres o cuatro, junto con los *pájaros*. Los comerciantes de café y ganado, al igual que los terratenientes medianos, crecieron en su sombra.⁹⁶

“El Cóndor” era sólo el más legendario de los que trabajaban en el negocio de asesinatos políticos. Él tenía contrapartes en Viejo Caldas y Tolima. Al igual que en Viejo Caldas, el negocio de la violencia creó vías para la ascensión de los sectores medios en el norte del Valle y Tolima. Las redes de patrocinio y protección en las que se movían los *pájaros* estaban dirigidas por políticos que ocupaban importantes puestos legislativos, diplomáticos y ministeriales después de que finalizó la Violencia.⁹⁷

96. Betancourt y García, *Matones y cuadrilleros*, pp. 76-127.

97. Sánchez, “The Violence: An Interpretive Synthesis”, pp. 88-89.

Mientras más “se enfatizara el contenido partidario de las oposiciones, más se les removía de su potencial político”, lo que llevó a la “desagregación, desorganización y desarticulación” de las fuerzas populares-radicales.⁹⁸ La oligarquía intentó en vano, bajo la sugerencia de López Pumarejo y la insistencia de Carlos Lleras Restrepo, recuperar el consenso bipartidario que se había roto. En 1949, en Bogotá, los conservadores incendiaron el periódico liberal *El Tiempo*, al igual que las casas de Lleras Restrepo y López Pumarejo, lo que demostró la imposibilidad de detener el *momentum* de los extremistas conservadores.⁹⁹ En zonas minifundistas cafetaleras, el objetivo no era alcanzar la victoria en el campo de batalla, sino expulsar al enemigo de la región. La conquista de territorio –la acumulación de tierras, ganado y café– era la meta, mientras que los asesinatos obedecían a un cálculo siniestro de dolor y crueldad. Las mujeres embarazadas eran destripadas y sus fetos eran destruidos para evitar que nacieran nuevos miembros del partido opositor.

En Tolima se usaron diferentes tipos de cortes para enviar el mensaje. En el corte “corbata”, halaban la len-

98. Idem, *Guerra y política*, pp. 31-32.

99. Idem, “Raíces de la amnistía o las etapas de la guerra en Colombia”, en *Ensayos de historia social y política*, pp. 215-75; Alfredo Molano, *Amnistía y violencia*, Bogotá, 1978.

gua de la víctima a través de una abertura en la garganta; en el corte “florista”, insertaban los miembros cortados en el cuello luego de la decapitación; en el “corte del mono”, colocaban la cabeza de la víctima en el pecho.¹⁰⁰ Las mutilaciones de orejas, dedos, penes y senos eran tan comunes como las violaciones. Miles y miles de personas fueron destripadas y lanzadas a ríos como el río Cauca, del que se dijo que se había vuelto rojo de tanta sangre. Los incendios provocados eran otra herramienta común de terror. Millones de campesinos tenían que ver cómo sus casas y cosechas se quemaban o tenían que dejarlas atrás.

En Antioquia, donde el consenso bipartidario era una tradición elitista bien establecida, los niveles de violencia eran menores que en las regiones cafetaleras del valle del Cauca, Viejo Caldas y Tolima. El radicalismo político, el colonialismo interno y la ubicación de los recursos naturales determinaban significativamente cuándo y dónde el terror permitido por el Estado aumentaba sin límites. Durante la segunda fase de la Violencia (1950-1953), aquellos que vivían en periferias regionales no acordaron aceptar las normas cultu-

100. Kirk, *More Terrible than Death*, pp. 26-27; de María Victoria Uribe, *Matar, rematar, contramatar: Las masacres de la Violencia en el Tolima, 1948-64*, Bogotá, 1996. Ver también, Fals Borda, Guzmán y Umaña, *La violencia en Colombia*.

rales blancas en el centro de Antioquia. Ellos sufrieron las consecuencias de la violencia armada y policial –o, en el este y en Urabá, la violencia de los propietarios privatizados– a un grado que no se había visto en la primera fase (1945-1949) que había estado enfocada a las municipalidades cafetaleras como Fredonia, ubicadas al sur y al suroeste. Allí, el conflicto se mantenía en límites estrictos bipartidistas designados para “conservatizar” las municipalidades liberales localizadas en las áreas conservadoras. Los políticos, periodistas e intelectuales de clase media ayudaron a polarizar la política según las líneas bipartidistas.

En la segunda fase, Laureano Gómez, presidente electo en 1950, estaba determinado a prevenir la repetición del Bogotazo y de sus variantes provinciales. Una vez que los laureanistas tomaron el poder, la Violencia en Antioquia estuvo concentrada en regiones que eran geográficamente periféricas, pero económicamente estratégicas donde las mayorías afro-colombianas –que se habían organizado en los años 40 como trabajadores ferroviarios, viales y mineros gaitanistas– apoyaban las políticas de oposición radical y la insurgencia armada.

Gómez renunció poco después de que su período comenzara, debido a problemas de salud, y Roberto

Urdaneta Arbeláez tomó el puesto como cabeza de gobierno en octubre de 1951, al tiempo que la violencia tomaba mayor intensidad, aparecía en nuevas formas y afectaba a nuevas regiones. Gómez fue el primer Presidente cuyo programa nacional sancionaba los desarrollos más reaccionarios en las regiones. El campesinado sufrió lo peor de la Violencia. Por ejemplo, una vez que regresaron de Corea, el Batallón Colombia masacró a 1.500 campesinos en un área rural a las afueras de El Líbano, Tolima, en 1952.

La cooptación clientelista de pequeños productores minifundistas a través de la guerra civil en el eje cafetero no pudo detener las políticas de clase independiente, pero sí cambió su enfoque a fronteras establecidas más recientemente. Las llanuras del este, por ejemplo, evolucionaron hacia una sociedad embriónica agraria revolucionaria en 1952-1953. La Ley 1 fue emitida en septiembre de 1952 luego de la reunión de los delegados de las organizaciones guerrilleras nacionales en “Red Viotá” (Cundinamarca) en agosto, lo que luego se convirtió en la Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional. Se organizó un rudimentario sistema de justicia con autoridades civiles y militares autodesignadas, estipulando reglas para

el uso de las tierras al igual que derechos y obligaciones individuales concernientes a la labor comunitaria. Además, se establecieron directrices para establecer granjas de producción diaria, asentamientos agrarios “revolucionarios” y se reguló el mercado del ganado (el elemento vital de la economía en las llanuras del este). Mientras que los esfuerzos para establecer una coordinación de guerrilla nacional avanzaban, la Ley 2 de las llanuras del este, escrita por José Alvear Restrepo, regulaba la vida en las vastas zonas liberadas y presentaba esbozos de revolución y gobierno popular.¹⁰¹

La ley establecía a un gobierno de asambleas populares y consejos distritales encargados de la planificación de producción, consumo y distribución. Dicha ley presentaba reglas concernientes a las relaciones entre los combatientes y los civiles y prohibía expresamente la tortura y las políticas de “tierra arrasada” que caracterizaban a la Violencia, además de que exigía un comportamiento civilizado para con los conservadores. Los enclaves comunistas eran los únicos territorios donde la vida *no* se regía a través del terror. La Ley 2 también hablaba del matrimonio civil, del divorcio, la equidad de las mujeres y de los derechos indígenas.

101. José Alvear Restrepo era un “abogado popular” y pensador radical cuyo legado ha sido honrado por el colectivo de abogados que lleva su nombre.

Las Leyes 1 y 2 de las llanuras del este representaban “el proyecto democrático más completo del movimiento armado”.¹⁰²

Dictadura de la Guerra Fría

Cuando Gómez intentó retomar su cargo en 1953, fue derrocado por el único golpe de Estado militar que ha ocurrido en Colombia en tiempos modernos, en parte, porque los conservadores se habían dividido entre los extremistas y los moderados. Estos últimos aborrecían el paraestado *contrachusma* y sus variantes, así como también la persecución e incriminación generalizada de intachables ciudadanos liberales. El general Rojas Pinilla, quien para el momento era jefe del Ejército, tomó el poder con el apoyo de los opositores facciosos de Gómez que estaban en el Partido Conservador, con quienes Rojas Pinilla tenía conexiones personales y familiares. Él comenzó a moldear a los trabajadores organizados y a convertirlos en un bloque clientelista. Su discurso anti-oligarca y nacionalista le permitió que algunos eruditos lo vieran como una figura similar al argentino Juan Perón. Pero Rojas Pinilla participó en

102. Sánchez, “The Violence”, p. 95-97; idem, *Guerra y política en la sociedad*, pp. 39-42.

derramamientos de sangre como comandante conservador –incluso la Embajada de los Estados Unidos se quejó de que él “veía a un comunista detrás de cada cafeto”– y, como Presidente, acumuló una fortuna en acuerdos corruptos de ganado y bienes raíces.¹⁰³ Rojas Pinilla también intervino en la liberación de “El Cóndor”, el líder de los *pájaros* de la cárcel de Buga.

Con una mayor represión descentralizada, la violencia rural estaba lejos de extinguirse bajo el mandato de Rojas Pinilla. La violencia, que comenzó con Gómez, se había convertido en parte de las políticas del gobierno central. El terror, que antes era únicamente regional, se había convertido en un terror nacional que, en vez de disminuir, aumentaba luego de que la “amenaza guerrillera” estuviera ausente. Las bases del estado de seguridad nacional de la Guerra Fría se habían erigido primero en Colombia que en cualquier otro país de América Latina, ya que dichas bases engranaban con las tradiciones criollas de sectarismo partidario.

Bajo el mandato de Gómez, el sectarismo partidario había hecho aflorar las diferencias en el propio sistema bipartidista. Sin embargo, y para el placer de

103 . Ver Henderson, *Modernization in Colombia*, pp. 370, 366.

los liberales, Rojas Pinilla hizo de la “reconciliación” entre los dos partidos su primera prioridad. En ese sentido, su acto más significativo como Presidente fue declarar la amnistía general para las guerrillas liberales. La primera desmovilización, apoyada por comerciantes, propietarios y jefes políticos, ocurrió en el centro de Tolima. Fue muy publicitada con el fin de invitar a los jefes guerrilleros del norte y el sur de Tolima a obedecer, lo cual hicieron. Comandantes como Rafael Rangel, quien operaba en el Magdalena medio y el capitán Franco Yepes en Antioquia, no estaban tan atrasados. Luego de cinco años de lucha, la guerrillas liberales más fuertes –una fuerza de aproximadamente 10.000 hombres en las llanuras del este– voltearon sus armas bajo el liderazgo de Guadalupe Salcedo.

El movimiento de la resistencia de la izquierda armada se fragmentó en respuesta a la oferta de Rojas Pinilla y, luego de que las guerrillas de las llanuras del este se desmovilizaran, le cortó las alas al bando revolucionario. Bajo una intensa presión militar, algunas milicias comunistas se desmovilizaron. Al sur de Tolima, una zona caracterizada por el liderazgo descentralizado, una microguerra que se desarrolló entre

antiguos aliados, como los liberales, para el momento reintegrados en el aparato partidario, logró expulsar a los comunistas de gran parte de la región.

A aquellos que habían mostrado un “exagerado apoyo o adhesión” al régimen de Gómez les dieron la amnistía en junio de 1954. Para erradicar a uno de los reductos comunistas que quedaban, Rojas Pinilla desencadenó la “Guerra de Villarrica” en 1955. El Batallón Colombia (los veteranos de Corea) tenía como objetivo un municipio del norte de Tolima que había sido la sede de sindicatos campesinos y del Frente Democrático Comunista de Liberación Nacional. Rojas Pinilla ordenó un bombardeo aéreo de 5.000 tropas, con bombarderos F-47 y B-26 que habían sido donados por los Estados Unidos. Además, se estableció un centro de tortura conocido como “El Campo de Concentración de Cunday”. Se difundía napalm en el área “objetivo”, como en Corea, mientras que las fuerzas del gobierno ocupaban el área. Un estimado de 100.000 campesinos fueron desplazados. La mitad de las guerrillas comunistas se trasladaron a Sumapaz, cruzando la frontera en Cundinamarca. Otra columna, con 100 hombres armados y 200 familias, hicieron la legendaria “larga marcha” sobre la cordi-

llera del este hasta las tierras bajas para fundar los asentamientos El Guayabero, al oeste del Meta y El Pato, al noroeste de Caquetá, mientras que los líderes sindicales y campesinos que estaban en las montañas se convirtieron en comandantes militares en las nuevas colonias de la frontera.¹⁰⁴

En general, la Violencia fue una gran regresión histórica en la que las hostilidades partidarias empantaron no sólo el legado del populismo de Gaitán, sino también la oportunidad de políticas de clase independientes basadas en el pueblo.¹⁰⁵ Este hecho engendró nuevas maneras de terror. En el siglo XIX, los términos del combate militar fueron acordados, pero durante la Violencia ninguna de las reglas o límites obtenidos –para hombres y mujeres adultos y para niños– fueron siempre respetados.¹⁰⁶ A pesar de que su geografía

104. Ver Eduardo Pizarro, *Las FARC: De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, 1991; Alfredo Molano, *Selva adentro*, Bogotá, 1987, pp. 36-48; e idem, *Trochas y fusiles*, Bogotá, 1994, pp. 91-103; para Sumapaz, ver José Jairo González Arias y Elsy Marulanda, *Historias de frontera: Colonización y guerras en el Sumapaz*, Bogotá, 1990; para la historia, ver Michael Jiménez, “Gender, Class and the Roots of Peasant Resistance in Central Colombia, 1900–1930”, en Forrest Colburn, ed., *Everyday Forms of Peasant Resistance*, New York, 1990, pp. 121-50.

105. Ver Charles Bergquist, *Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia*, Stanford, CA, 1986, pp. 276, 296, 312-14; e idem, “The Labor Movement (1930-46) and the Violence”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia*, pp. 51-72.

106. En esta Colombia era casi inusual. Eric Hobsbawm discute que una de las características distintivas de la guerra europea en el siglo XX, comparado con el

coincidía significativamente con las fronteras cafetaleras establecidas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como lo demuestra el caso de Antioquia, la Violencia era más que un aumento generalizado de la competencia bipartidaria y del conflicto sobre el patrocinio, votos, tierras, poder laboral y las materias primas.¹⁰⁷ En Antioquia, el colonialismo interno y la “racialización” de las periferias regionales a través del terror y la expropiación fueron cruciales en la derrota de la ola del gaitanismo.

A pesar de que la violencia recibió un decisivo empuje a nivel nacional con la elección como Presidente de Laureano Gómez en 1950, este movimiento era orquestado y controlado a niveles subnacionales. Los movimientos guerrilleros regionales, algunos de los cuales dejaron retoños que crecieron en duraderas insurgencias comunistas durante la Guerra Fría, formaron alianzas con el Partido Liberal en todo el país. Las

siglo XIX, era la ausencia de límites, el establecimiento deliberado de blancos en la población civil y el recrudecimiento de la tortura. Eric Hobsbawm, *The Age of Empire: 1876-1913*, New York, 1987; e idem, *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991*, New York, 1992. Para una evaluación de las guerras del siglo XIX en Colombia y Europa, ver Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003*, Bogotá, 2003, pp. 51-53.

107. Catherine LeGrand, “Agrarian Antecedents of the Violence”, en Bergquist et al. eds., *Violence in Colombia*, pp. 31-50; Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandideros, gamonales y campesinos: El caso de la violencia en Colombia*, Bogotá, 1983.

fuerzas paraestatales conservadoras tomaron muchos puestos de condados, pueblos y aldeas. A través del “asunto agrario”, el Partido Liberal hizo importantes incursiones en distritos rurales en los años 30 y 40, lo que propuso un reto al dominio conservador del interior de país por primera vez desde 1870.¹⁰⁸ Como sucedió setenta años antes de que la Regeneración ocurriera, la *reconquista* de Gómez tenía como objetivo hacer regresar a la sociedad colombiana a la idealizada totalidad colonial interna en la que los subalternos sabían cuál era su lugar.

Fue durante la Violencia que se estableció el precedente de la resolución sangrienta del asunto agrario a través del terror y de la expropiación. Se institucionalizaron formas de crueldad que se expandieron en la Colombia de finales del siglo XX en el desarrollo histórico más retrógrado de América Latina a mediados de siglo. Estas persistieron como parte del repertorio contrainsurgente de la Guerra Fría, lo que ayudó a preparar el terreno para la insurgencia endémica izquierdista.

108. Darío Betancourt y Martha Luz García, *Matones y cuadrilleros*, p. 64.

El Frente Nacional: cierre político (1957-1982)

¿No existe manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, pueda dignificarlos a través de la vida? Si Colombia no responde esta pregunta, yo profeso una maldición. El desquite volverá a vivir y se derramará sangre, dolor y lágrimas en la tierra.

Gonzalo Arango, 1966

Los acuerdos del Frente Nacional firmados en 1958 reconstruyeron la república del café en un eje que giró en torno al Partido Liberal, con los conservadores vencidos y con las expresiones populares-radicales vetadas. El olvido era el “*leit motiv* central” del periodo y el efecto era “matar el recuerdo” de la Violencia.¹⁰⁹ La profesión histórica contribuyó a este estado de negocios con su “compromiso privado para crear amne-

109 . Sánchez, *Guerra y política en la sociedad colombiana*, pp. 222-23; idem, “Intelectuales... Poder... Cultura nacional”, en *Los intelectuales y la política*, p. 84.

sia colectiva”.¹¹⁰ Reinó el crecimiento sin equidad. Los patrones de desigualdad fueron mantenidos o profundizados, y el clientelismo fue recreado.¹¹¹ Cuando las dictaduras militares derechistas patrocinadas por los Estados Unidos arrasaron con América Latina durante los años 60 y 70, Colombia se mantuvo como la muestra principal de democracia en la lucha por el “mundo libre”. En contraste con Venezuela, cuyo sistema político también fue elogiado durante la Guerra Fría, el Estado colombiano no logró ni neutralizar ni derrotar a la insurgencias guerrilleras, las cuales se mantuvieron intactas desde 1960. En parte, su longevidad se debe a la exclusión de exigencias populares (particularmente campesinas) del sistema político principal.

Contrainsurgencia

Cuando Rojas Pinilla aclaró su intención de quedarse indefinidamente en el poder, acabando con sus oponentes y simulando acciones populistas para el consumo urbano, la oligarquía, que siempre había apreciado las reglas civiles, cerró sus filas. Se vieron especialmen-

110 . Álvaro Tirado Mejía, “Introducción”, en *Nueva historia de Colombia*, vol. 1, Bogotá, 1989, p. xi.

111. Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila, *Clientelismo: El sistema político y su expresión regional*, Bogotá, 1994.

te amenazados por su intento de controlar el patrocinio y construir bases clientelistas independientes. A principios de 1957, no sólo ambos partidos políticos sino también los industrialistas, exportadores de café y la Iglesia querían que Rojas Pinilla abandonara el poder. Una huelga general organizada lo derrocó. Dos meses después, Gómez –exiliado en la España de Franco– firmó el Pacto de Sitges con Alberto Lleras Camargo.

Este hecho comprometió formalmente a los conservadores y liberales a crear un Frente Nacional que pudiera compartir equitativamente el poder entre los dos partidos, con la ocupación alternada de la Presidencia y la paridad en cuanto a la representación a niveles gubernamentales. Se programó que el pacto durara hasta 1974. Dicho pacto estaba apoyado por los líderes de negocios, la Iglesia y las élites partidistas. En la práctica, el pacto duró, con modificaciones menores, hasta 1990. La Iglesia, abandonando su afiliación exclusiva con el Partido Conservador, buscó unificar ambas formaciones.¹¹²

112 . Sólo en Colombia, la teología de la liberación se oponía a la jerarquía *en bloque* de la Iglesia (excepto Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura), y aquellos que escogían seguir este camino terminaban muertos o exiliados o, como los españoles Manuel Pérez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez, aumentando las exiguas filas del ELN. Ver Walter J. Broderick, *El guerrillero invisible*, Bogotá, 2000, p. 117.

Las esperanzas de unidad entre los grupos campesinos armados del país a lo largo de la cordillera desaparecieron cuando Guadalupe Salcedo fue asesinada en Bogotá en 1957 y, a pesar de que Laureano Gómez no duró como Presidente, él regresó triunfante políticamente en 1958 para presidir el Senado, donde enjuició a Rojas Pinilla. Ya que el anticomunismo era un pilar del punto de vista que él expresaba como columnista político, líder del Partido Conservador y presidente, las obsesiones paranoicas de Gómez con los “masones” y los “ateos” comenzaron a ser toleradas. Al igual que Rojas Pinilla, Gómez ayudó a institucionalizar la impunidad para la violencia política sancionada por el gobierno. Así que Gómez fue el que salió verdaderamente victorioso en la pugna de la Violencia. Los años 50 representaron un penoso regreso al siglo XIX, pero Gómez y sus seguidores estaban claramente en el siglo XX.¹¹³ Lo de ellos era un olvido despiadado, impuesto y basado en un mito histórico y en fantasías de dominio total.

El sistema tradicional bipartidista había atrofiado y cambiado la expresión de las oposiciones políticas pero no pudo represarlas en su totalidad. En los años 30 y 40, en una repetición del período del siglo XIX

113 . Sánchez, “The Violence”, pp. 110-11; idem, “Reseña: *Entre la legitimidad y la violencia*, por Marco Palacios”, en *Análisis Político*, 27, enero-abril, 1996, p. 104.

de hegemonía liberal (1862-1875), se desarrolló una dinámica izquierdista populista incipiente y el conservatismo se reforzó con una defensa flamante de la propiedad privada, la familia y el altar. A su manera, cada uno de ellos había escapado del control de las élites, desencadenando un conflicto sectario peor que el de la Guerra de los Mil Días, lo que eventualmente resultó en una amenaza a la propia diarquía. El Frente Nacional restauró el sistema bipartidista una vez que se habían limado todas las asperezas entre sus componentes. En condiciones de la Guerra Fría en Colombia, un Nuevo Trato había sido enterrado y la Cruzada Nacionalista se había unido con un referente compartido (el anticomunismo) que era suficiente para unificar a los dos partidos.

El resultado fue la proscripción de la expresión política de las exigencias radicales y reformistas, mientras que el Estado se convirtió en una maquinaria de intereses comunes de las élites que le adjudicaron, por adelantado, todas las oficinas y puestos gubernamentales a los conservadores y liberales. Las exportaciones de café crearon la base de presupuesto estatal y subsidiaron a una industria nacional protegida. En 1941, la organización privada de cultivadores de café, Fedeca-

fé, comenzó a dirigir el Fondo Nacional de Café sin supervisión pública. Este acuerdo continuó hasta los años 70. A pesar de los mecanismos intervencionistas reguladores introducidos por López Pumarejo en los años 30 y 40, el estado liberal se convirtió en un comité ejecutivo de la burguesía, pero que no tenía fracción hegemónica ni proyecto nacional.¹¹⁴

El poder político regional y local continuó siendo más importante que la autoridad del gobierno central en la mayor parte del país y, a pesar de que había sido oficialmente olvidada, “la violencia... formó la esencia de la vida rural y pueblerina” a través del Frente Nacional.¹¹⁵ Los efectos se evidenciaron particularmente en la proliferación del bandolerismo. Conservadores como Efraín González dirigían pandillas de hombres jóvenes que recorrían las cordilleras centrales y occidentales en busca de venganza por la muerte de sus seres queridos por medio de la atrocidad. Las guerrillas liberales y la *contrachusma* conservadora fueron las únicas que nunca se confrontaron entre sí durante

114. A pesar de que Sánchez, *ibid.*, p. 84, se refiere al esfuerzo de moldear al Estado en “la mano derecha de las clases capitalistas”, la efectividad de esto en proteger los intereses burgueses aún era cuestionable. Pécaut y otros han discutido convincentemente que la ineffectividad del Estado colombiano como vehículo para aprobar una agenda burguesa nacional y unificada conllevó a la reducción de las élites y a la proliferación de la violencia privada en las regiones.

115. *Ibid.*, p. 120.

la segunda fase de la Violencia en Antioquia (1950-1953). Esto mismo pasó con González y el “Capitán Desquite”, el capitán bandido contratado por los dueños de haciendas cafetaleras en Quindío para detener a Efraín González, el mismo que el escritor antioqueño Gonzalo Arango menciona en su epígrafe. Los bandoleros y las cuadrillas se movían constantemente entre la cordillera occidental y la central, entre Quindío y Tolima. Con muchas excepciones, los bandidos en el eje cafetalero no duraban bajo los acuerdos del Frente Nacional. Las Fuerzas Armadas colombianas, dirigidas por el Batallón Colombia del Ejército, el cual fue apoyado, entrenado y financiado por asesores militares de los Estados Unidos, los eliminaron.¹¹⁶

Los movimientos radicales-populares bajo el Frente Nacional fueron incriminados por la legislación de Estado de sitio que comparó una protesta con una subversión. Las fuerzas de oposición cuasioficiales, tales como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL)

116. Sánchez y Meertens, *Bandoleros, gamonales, y campesinos*; Betancourt y García, *Matones y cuadrilleros*, pp. 137-75. En principio, “Desquite” tenía la protección oficial de los líderes liberales en los pueblos y de los propietarios en el interior del país pero, eventualmente, tanto “Desquite” como Efraín González intensificaron las redes privadas de extracción en las haciendas cafetaleras, lo que conllevó a una guerra en contra de sus antiguos protectores y, una vez más, en contra de su base de apoyo. Esta era el patrón característico de la involución política en Tolima, Viejo Caldas y el norte del valle del Cauca.

dirigido por Alfonso López Michelsen, tenían apoyo en el interior del país, mientras que la Alianza Nacional Popular (Anapo), dirigida por Rojas Pinilla luego de que regresara del exilio, tenía una base creciente en las ciudades. Ambos tenían que postular candidatos en los frentes Liberales y Conservadores. El MRL atrajo a intelectuales marxistas, escritores radicales, estudiantes, trabajadores del sector público excluidos, burócratas modernistas y campesinos. La Anapo, en la cual el bandido conservador Efraín González participó activamente hasta su muerte en 1965, estaba basada en el clásico populismo de derecha: antiimperialismo combinado con ataques al control de natalidad y, luego, con el apoyo a la encíclica papal de Pablo VI en 1968. Los comunistas, ya vetados de las elecciones, se adhirieron al Partido Liberal, el cual constituyó la “columna vertebral” de las políticas del Frente Nacional mientras que el patrón establecido bajo el mandato de López se institucionalizaba.¹¹⁷

Entonces, el Frente Nacional consolidó una democracia oligárquica y excluyente, que persiste hasta nuestros días, en la que escasamente la mitad de la población votaba. Colombia tenía los menores índices

de participación electoral del continente. Si Colombia se salvó de la experiencia de dictaduras militares que diezmaron el radicalismo campesino y de la clase media y trabajadora en los otros países de América Latina durante los años 60 y 70, fue porque el Frente Nacional era una dictadura parlamentaria semiautoritaria. A pesar de que la militancia laboral aumentó a mediados de los años 60 en una situación económica que se deterioraba rápidamente causada por la caída de los precios del café, el movimiento laboral continuaba fragmentado y débil luego de la Violencia. Con el cierre del espacio político en el escenario civil bloqueando la reaparición del vibrante populismo urbano centrado en los sindicatos, parecía que sólo quedaba una vía disponible para la protesta social.

En los años 60 y 70, justo cuando la mayoría del país pasó de rural a urbana, el vehículo de elección para las fuerzas de oposición se basó en las insurgencias rurales. Las raíces de este hecho se encontraban en la larga historia de las luchas campesinas y ocupaciones territoriales en la frontera cafetalera, además de haber sido engullidos por la gran turbulencia de la Violencia, la cual persistió como bandolerismo a lo largo de los primeros años del Frente Nacional. Pero todavía existían

117. Palacios, *Entre la violencia y la legitimidad*, pp. 258, 261-62.

enclaves de resistencia comunista. En 1961, el Senador e hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez, acuñó el término “repúblicas independientes” para referirse a las dieciséis áreas sobre las que el gobierno central no ejercía soberanía territorial alguna. Bajo la presidencia liberal de Lleras Camargo (quien aplastó la huelga de los trabajadores del río de 1945 y fue elegido por Laureano Gómez como el candidato del Frente Nacional de 1958) dichas “zonas rojas” estaban rodeadas por un cordón militar que las aislaba efectivamente del mundo exterior.

Una vez que la revolución cubana puso a trabajar a Washington, surgió una nueva urgencia por erradicar a las fuerzas guerrilleras de Colombia. Durante la Alianza del Progreso, la contrainsurgencia anticomunista se movió a la segunda fase, ya que la misión de los militares latinoamericanos cambió de la “defensa hemisférica” a la “seguridad nacional”.¹¹⁸ La “amenaza externa” de la Unión Soviética era ser dominados por los Estados Unidos, como se demostró en la crisis de los misiles cubanos, mientras que la “amenaza interna” de subversión comunista sería manejada por la policía y las fuerzas armadas de un determinado país. Un joven

118. Francisco Leal Buitrago, *El oficio de la guerra: La seguridad nacional en Colombia*, Bogotá, 1994.

veterano de Vietnam, el coronel William Yarborough, lideró el Centro Especial de Guerra, en Ft. Braga y dirigió una misión militar a Colombia en 1962, quejándose de la falta de preparación y profesionalismo, además de que recomendó la organización de escuadrones locales de muerte que le rindieran cuentas únicamente al gobierno de los Estados Unidos.¹¹⁹

Una contrainsurgencia fragmentada territorialmente confrontó la reforma agraria cuando el presidente Lleras Camargo fundó una burocracia gubernamental, Incora, en 1961, que sería dirigida por el primo del presidente, el Senador Carlos Lleras Restrepo, quien creó un cuerpo de jóvenes economistas, muchos de ellos educados en los Estados Unidos. Su poder dentro del Estado aún estaba naciendo y estaba restringido a Incora pero su visión de progreso suponía la eliminación de los grandes bienes, vistos como subdesarrollados y poco productivos, y la conservación de los “siervos” hacia una ciudadanía de vasallos.¹²⁰ El proceso de reforma continuó con Gui-

119. Idem, “Defensa y seguridad nacional, 1958-93”, en Francisco Leal y Juan Gabriel Tokatlian, eds., *Orden mundial y seguridad: Nuevos desafíos para Colombia y América Latina*, Bogotá, 1994, pp. 131-72.

120. Albert O. Hirschman, “Land Use and Land Reform in Colombia”, *Journey Toward Progress: Studies in Economic Policymaking in Latin America*, New York, 1975[1963], pp. 102-3.

lermo Valencia, un poeta de la antigua ciudad colonial esclavista, Popayán. Pero Valencia simpatizaba con el general Franco y la falange española y una de sus principales promesas de campaña era eliminar las “repúblicas independientes”. Luego del crecimiento sostenido en el campo industrial y comercial de los años 50, la crisis económica de 1962, debido a la caída de los precios del café, llevó a los menores índices de crecimiento industrial desde principios de los años 30. Luego, en 1964, se generalizó el desempleo urbano. De allí en adelante se podrían garantizar las futuras fracturas en el Frente Nacional.

El Plan Lazo, una estrategia contrainsurgente de “corazón y mente” que estaba enfocada en una fuerza cívico-militar y en unidades especializadas designadas para cazar y matar a los supuestos seguidores del comunismo, determinó que los civiles siempre serían o colaboradores u blancos.¹²¹ Como lo explicó el general Alberto Ruiz Novoa en la Conferencia de las Fuerzas Armadas Americanas en la zona del canal de Panamá en 1963, la única manera de derrotar a las insurgencias era a través de la movilización y militarización de las comunidades rurales por medio de

121. Citas de Kirk, *More Terrible than Death*, pp. 47-50.

la “acción cívico-militar”.¹²² Ruiz Novoa había sido el comandante del Batallón Colombia en Corea y luchó contra el Ejército Popular de Liberación chino con los Osos Polares de la 31ª Infantería del Ejército de los Estados Unidos.

Ruiz estaba convencido de que para vencer a las guerrillas campesinas colombianas sería necesario secar el mar en el que ellos nadaban. Para ello, el Estado tendría que invertir en regiones de influencia comunista, además de enlistar a colaboradores civiles a las Fuerzas Armadas. El general Ruiz consideraba a esas fuerzas “campesinas de autodefensa” como un grupo élite entrenado para coordinar con el Ejército, particularmente en trabajos de inteligencia –algo similar a lo que el coronel Yarborough recomendó pero que rindiera cuentas a las autoridades colombianas–. El plan de Ruiz, conocido como el “Plan Lazo”, aislaría a las guerrillas de su potencial base de apoyo a través de las mejoras de infraestructura, salud y educación.¹²³

122. Sánchez, “The Violence”, p. 117.

123. “Plan Link”, o “Plan Latin American Security Operation”, en inglés.

Insurgencia

Las operaciones de contrainsurgencia del Frente Nacional desataron una ola de migraciones armadas de las tierras altas centrales a las selvas sureñas y llanuras orientales. El Plan Lazo falló dramáticamente a finales de mayo de 1964 cuando, en coordinación con sus aliados estadounidenses, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron la “Operación Marquetalia” para retomar la municipalidad de Marquetalia, una aldea comunista al extremo sur de Tolima, en la frontera de Cauca con Huila. Otro veterano de Corea, el teniente coronel José Joaquín Matallana, dirigió el asalto en el que se usaron helicópteros Huey, aviones de combate T-33, siete batallones del ejército, dos compañías contrainsurgentes especializadas y grupos de inteligencia (GIL) designados a arrasar con la comunidad y con su legendario líder, Tirofijo. Lograron recuperar el territorio en este y en otros ataques militares coordinados pero por muy poco tiempo. “El enemigo” aún andaba suelto. Luego de Marquetalia, las familias que fueron forzadas una vez más a huir encontraron su camino hacia el Cauca o hacia las tierras bajas tropicales de Caquetá y Meta. Los combatientes formaron una columna guerrillera ya que no podían establecerse en sus pueblos.

Tanto Matallana como Tirofijo acordaron que Marquetalia forzó a los comunistas agrarios a dejar de ser una milicia sedentaria de autodefensa y los obligó a convertirse en una fuerza móvil.¹²⁴ Asesores del gobierno de los Estados Unidos habían supervisado la “Operación Soberanía” desde una base militar cercana, pero justo después de que la operación fuera ejecutada, comandantes de Marquetalia, Río Chiquito y El Pato se reunieron como el Bloque Sur para emitir un nuevo programa agrario. Esta “respuesta popular a la violencia y a la agresión militarista” sería luego conmemorada con el nacimiento de las FARC, grupo que fue nombrado oficialmente en 1966. Según su historiador, las FARC funcionaron a lo largo de los años 70 como “una estructura regional de guerra social y de supervivencia colectiva e individual” y se desarrolló en el “escenario para la construcción del verdadero poder local”.¹²⁵ El secreto del éxito temprano de las FARC era la subordinación de metas organizacionales insurgentes a las exigencias y movimientos de minifundistas, arrendatarios y obreros rurales fronterizos.

124. Para un informe escrito por el estratega e ideólogo de las FARC, ver Jacobo Arenas, “La resistencia de Marquetalia”, en Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 68-74. Ver también, José Joaquín Matallana, “El operativo”, en *ibíd.*, pp. 74-77.

125. Pizarro Leongómez, “Revolutionary Guerrilla Groups”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia*, pp. 181-82.

Esto emerge con especial claridad en comparación con los competidores de la izquierda ya que otras dos fuerzas guerrilleras surgieron en esos años. El ELN se caracteriza como un grupo de clase media universitaria que siguió al pie de la letra la teoría del *foco* del Che. Un pequeño grupo de guerrillas móviles –en vez de la clase media o el campesinado– estaba convencida de que, dada la cantidad de campesinos en Colombia y dada la reciente historia de movilización armada popular durante la Violencia, ellos podrían desencadenar una insurrección que conllevaría a la revolución socialista. Esto era típico de los grupos que seguían a Guevara en esos años. Para ellos, la revolución era un acto de consciencia y sería capaz de superar las determinaciones materiales y políticas.

Sin embargo, apartando las diferencias estratégicas, el ELN no estaba menos arraigado en la historia del liberalismo popular, del comunismo y de la lucha proletaria campesina que las FARC. El patriarca del clan Vásquez había participado en la toma gaitanista del puerto petrolero del país, Barrancabermeja, en 1948, y dirigió las milicias liberales bajo el gobierno de Rafael Rangel durante la Violencia, donde murió. Los hermanos Vásquez, Fabio y Manuel, fueron a Cuba con un pequeño grupo de estudiantes becados durante la crisis de mi-

siles cubana en 1962. A su regreso, ellos establecieron el primer foco del ELN en San Vicente de Chucurí, en Santander, donde las guerrillas de Rangel habían estado activas como lo habían estado las guerrillas Liberales en la Guerra de los Mil Días antes que ellos.

El ELN contaba con el apoyo de parte del sindicato de los trabajadores del petróleo, USO, y, en 1963, al igual que los viejos ocupantes ilegales campesinos que lideraron el “levantamiento Bolchevique” en El Líbano, Tolima en 1929 y las *juntas gaitanistas* en 1948, se sumaron a la huelga en contra de la recién formada compañía petrolera estatal, Ecopetrol. Algunos cuadros habían luchado con Rangel, mientras que Fabio Vásquez comenzó en la joven ala del MRL en busca de una manera de vengar la muerte de su padre. Otros como Manuel Vásquez y Rodrigo Lara fueron a las guerrillas a través de la lucha estudiantil de la Universidad Industrial en Bucaramanga. El ELN anunció su presencia en la “toma de Simacota”, un pueblo de Santander, en enero de 1965 y más tarde, ese mismo año, aceptó al cura y sociólogo Camilo Torres Restrepo, quien murió prontamente en combate a principios de 1966. Esto le dio a la teología de la liberación su primer mártir.¹²⁶

126. Torres, quien estudió con el peruano Gustavo Gutiérrez en la Louvain, en Bélgica, inspiró el texto de Gutiérrez de 1967, *Liberation Theology*, como es dis-

En 1967, se formó el Ejército Popular de Liberación Maoísta (EPL) a partir de esa matriz de radicalismo agrario armado. Uno de sus fundadores, Pedro Vásquez Rendón, había sido el comisario político del PSD en Tolima del Sur durante la Violencia –él sugirió que Pedro Antonio Marín se llamara Manuel Marulanda, en honor a uno de los líderes del PSR en los años 20–. El PC-ML (Partido Comunista-Marxista-Leninista) surgió de la joven ala del PCC, en 1965, siguiendo la división Sino-Soviética. Con la ayuda del antiguo comandante de la guerrilla liberal y militante del MRL, Julio Guerra, el EPL estableció un *foco* en Urabá con el fin de proseguir con la prolongada guerra popular. Al igual que los maoístas, ellos creían que el campesinado, dirigido por un partido vanguardista, jugaría un papel protagónico en la realización de la revolución socialista¹²⁷ en los países rurales del Tercer Mundo, como Colombia.

cutido por Penny Lernoux en *Cry of the People*, New York, 1977, pp. 29–31. Ver Alfonso Ojeda Awad, “El ELN”, en Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 51–67; Carlos Medina Gallego, *ELN: una historia en dos voces contadas*, Bogotá, 1996; Fabiola Calvo Ocampo, *Manuel Pérez: un cura español en la guerrilla colombiana*, Madrid, 1998; Broderick, *El guerrillero invisible*.

127. Para este grupo, ver Ernesto Rojas, “EPL”, en Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 43–50; Fabiola Calvo Ocampo, *EPL: una historia armada*, Madrid, 1987; y Álvaro Villarraga y Nelson Plazas, *Para reconstruir los sueños: una historia del EPL*, Bogotá, 1994. Para Julio Guerra, ver Jaime Zuluaga Nieto, “La metamorfosis de un guerrillero: De liberal a maoísta”, en *Análisis Político*, 18, enero-abril 1993, pp. 103–16.

A pesar de la pátina internacionalista importada de Moscú y Beijing, los asuntos aún pendientes de la Violencia dieron pie a las tres insurgencias izquierdistas. Como gran parte del resto de los pueblos pequeños y de la sociedad rural colombiana, la guerrilla siguió estando marcada por la experiencia de la Violencia, incluso décadas después de que terminó oficialmente. Quindío y Risaralda, por ejemplo, eran regiones cafetaleras que habían sido el hogar de pistoleros conservadores y de pandillas de bandidos liberales, como la familia de Vásquez y de Tirofijo. El secuestro, la vacuna y el boleteo (el cobro de impuestos de guerra vía cartas de amenaza) se desarrollaron en principio en Viejo Caldas y en Valle del Norte. Luego, con nuevos nombres (la retención, el impuesto de guerra) estos conceptos se incorporaron al repertorio de las tácticas guerrilleras.

Tanto Fabio Vásquez como Tirofijo vieron cómo los conservadores asesinaron a sus padres. La venganza personal le dio a los movimientos guerrilleros continuidad con la violencia. Lo mismo ocurrió con Ricardo Franco y Ericito Espitia. Ambos habían estado con el jefe liberal regional, “Chispas” antes de tomar caminos diferentes. Espitia fue uno de los

miembros fundadores del ELN y Franco se convirtió en el comandante del IV Frente de Media Magdalena de las FARC.¹²⁸

Con el fin de prevenir lo que correctamente se percibía como una amenaza de conflicto creciente en el interior del país, el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), quien había sido uno de los acérrimos oponentes de Gaitán en el Partido Liberal y presidió su funeral, creó un nuevo programa de reforma agraria. Lleras también creó una organización campesina, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), para estimular el apoyo clientelista a la iniciativa.¹²⁹ Esta asociación se movía en direcciones radicales, mucho más allá de lo que Lleras Restrepo y los tecnócratas liberales habían visionado, especialmente en la Costa Atlántica, donde el latifundismo era más extensivo.¹³⁰ Sin embargo, bajo el decreto de Valencia 3398 de 1965 y la Ley 48, aprobada por el Congreso en 1968, los propietarios regionales orga-

128. "Antonio", en Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 270-71; Pizarro, "Revolutionary Guerrilla Groups", en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia*, pp. 174-78.

129. Palacios, *Entre la violencia*, p. 256; Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, p. 77.

130. Leon Zamosc, *The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981*, Cambridge, 1986; Silvia Rivera Cusicanqui, *The Politics and Ideology of the Colombian Peasant Movement: the Case of ANUC (National Association of Peasant Smallholders)*, Bogotá, 1987.

nizaron escuadrones de muerte según el modelo de los *pájaros* y tuvieron como blanco a la izquierda trabajadora y estudiantil para asesinatos selectivos en las ciudades.¹³¹ Esta continuidad se comparaba con una continuidad similar en la contrainsurgencia, cuya visión de guerra total con civiles era refinada y sistematizada en la Guerra Fría.

Contrarreforma, represión, resurrección

La audacia ideológica y la relativa legitimidad popular de los grupos guerrilleros no deberían llevarnos a exagerar su tamaño, o a pasar por alto el rápido cambio demográfico de las zonas rurales a urbanas en estos años. Para mediados de la década de los 70, el EPL prácticamente no existía; Fabio Vásquez había pasado los primeros años purgando las escasas filas del ELN y los *foquistas* fueron casi eliminados por un ataque violento de 30.000 soldados en Anorí, Antioquia en 1973. Las FARC aún estaban confinadas principalmente a las regiones de las tierras bajas al sureste de Bogotá que habían ayudado a colonizar. En las ciudades, mientras

131. Fernando Cubides, "From Private to Public Violence: The Paramilitaries", en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, p. 131. Betancourt y García, *Matones y cuadrilleros*, p. 135.

tanto, donde ahora vivían dos tercios de los colombianos, aunque la educación y los servicios de salud se expandieron, el desempleo aumentó bruscamente durante la década de 1960. Las políticas industriales proteccionistas no lograron generar empleos, por lo que las clases trabajadoras clase media y media baja vieron sus esperanzas desvanecerse. En 1969, la ANAPO ganó la mayoría de los concejos municipales y las asambleas departamentales.

El deterioro del Frente Nacional era claramente visible. En 1970, Rojas Pinilla, lanzándose como conservador con un programa contra el Frente Nacional, movilizó un discurso antioligárquico reminiscente del de Gaitán (complementado por una defensa reaccionaria de tradición católica, que perdía gradualmente terreno frente a la influencia de los medios de comunicación masivos) para ganar 39 por ciento del voto, principalmente proveniente de la clase trabajadora media baja. El Frente Nacional recurrió a un fraude de último minuto finamente disfrazado para negarle la victoria e imponer a su candidato, el conservador Misael Pastrana.

Una vez en el poder, éste financió obras públicas y remodelación urbana en un intento por generar empleo y la apariencia de una reforma, pero también apo-

yó un proceso de contrarreforma en el campo. Los ganaderos (Fedegan), empresarios de la agricultura y terratenientes (SAC), así como los industrialistas (ANDI) estaban unidos en su determinación para reanudar las reformas iniciadas bajo el período de Lleras Restrepo (o, como en Urabá hicieron los hacendados con la Ley 200 en 1936: voltearlas a su favor y para su beneficio). La reacción fue una respuesta a la toma de tierras de la ANUC que azotaron a Boyacá, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Magdalena Medio, los llanos orientales y la costa atlántica. En 1971, en Toribio (Cauca), se formó el Consejo Regional Indígena del Cauca para trabajar en propuestas de desarrollo local basadas en la recuperación de los resguardos que habían sido incorporados a grandes propiedades privadas. Mientras definían su meta como el logro de la autonomía indígena, miembros del CRIC se fueron adhiriendo tímidamente a las luchas de Quintín Lame y del PCC. Posteriormente, se enfocaron en la tierra como la base de la vida y cultura colectiva, el autogobierno local a través de cabildos y la formación de amplias alianzas nacionales populares con intelectuales, trabajadores y especialmente campesinos no indígenas, con el propósito de superar las barreras regionales, étnicas y de clases que obstaculi-

zan la unidad.¹³² En la frontera de Urabá, en extensas áreas ganaderas en el Valle de Sinú en Córdoba, donde la resistencia gaitanista fue fuerte en 1948, y en el vecino Sucre, las ANUC dirigieron un tercio de todas las marchas y toma de tierras que se llevaron a cabo a nivel nacional entre 1970 y 1973. El área cercana a la costa atlántica fue, así, el semillero de la lucha agraria en este período. Las ANUC, frustradas con los límites de cambio bajo el mando de Lleras, tenían el firme apoyo de los partidos de izquierda, un vigoroso movimiento universitario protestando por la privatización de la educación pública e insurgencias tratando de canalizar el movimiento hacia fines sectarios.

En enero de 1972, Pastrana unió a líderes de ambos partidos, así como a los gremios clave para forjar el “pacto” de Chicoral. A cambio del pago de impuestos, a los propietarios de las tierras se les prometió créditos fáciles, préstamos generosos y una distribución de la tierra aún más limitada. También se les tendió (gratuitamente) una mano para organizar la violencia con-

132. Sutti Ortiz, *Uncertainties in Peasant Farming: A Colombian Case*, London, 1973; CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), *Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC: Diez años de lucha, historia, y documentos*, Bogotá, 1978; Cristian Gros, *Colombia indígena: Identidad cultural y cambio social*, Bogotá, 1991; Jasmin Hristov, “Indigenous Struggles for Land and Culture in Cauca, Colombia”, en *Journal of Peasant Studies*, 32:1, enero 2005, pp. 88-117.

tra los campesinos y líderes de izquierda, coordinando sus esfuerzos con las fuerzas armadas. En 1971, diez años después de que Lleras Restrepo hubiese iniciado la reforma agraria con la Ley 135 y cinco años después de que la hubiese implementado como Presidente, a duras penas uno por ciento de las tierras que entraron en el ámbito de la reforma habían sido expropiadas. Los terratenientes con bases de poder regional formaron un sólido muro de oposición. Como aquellos experimentos realizados durante los años 30, otros más se realizaron con la legislación progresista en la década de 1960 y demostraron que las facciones de la élite que concordaban con la reforma no tenían la capacidad para alcanzar cierta hegemonía dentro de la clase dominante colombiana. El poder regional basado en el comercio y la riqueza por las tierras se interponía en el camino.

El presidente López Michelsen (1974-78), hijo de López Pumarejo, había sido un intelectual e importante actor político por derecho propio durante décadas y como fundador y líder del MRL había sido un feroz rebelde contra su partido durante el Frente Nacional. Era técnicamente el último en servir bajo el Frente Nacional. A través de caciques populares como Alfon-

so Barberena, líder de los poblados invadidos en Cali, cortejó el distrito electoral urbano que había apoyado Rojas Pinilla. López esbozó dos Colombias. La primera, relacionada con el café y la industria, incluía a Antioquia, los departamentos occidentales andinos (Valle, Caldas, Risaralda, Quindío) y el puerto caribeño de Barranquilla; recibía la mayor parte de la inversión gubernamental en infraestructura y servicios de gobierno. El 5 por ciento de la población dueña de más de la mitad de la tierra recibía la mitad del ingreso nacional y vivían y gobernaban para la primera Colombia. La segunda Colombia, que cubría 70 por ciento del territorio nacional, era donde los negros, indígenas y pobladores fronterizos vivían (los llanos y tierras bajas más al sur y al este y las costas del Pacífico y Atlántico). Estas regiones recibían poca inversión y tenían virtualmente ninguna presencia estatal, electricidad, servicios públicos o incluso mínima infraestructura.

Aunque los precios del café alcanzaron temporalmente nuevas alturas a mediados de la década de 1970, los abultados presupuestos estatales, los requerimientos de servicio de la deuda, el casi colapso de las industrias tradicionales y la oposición de la élite hicieron que las promesas de reforma e integración

nacional de López Michelsen se quedaran sin cumplir. Aunque López anunció su objetivo de convertir a Colombia en el “Japón de Suramérica”, fue el primer presidente del Frente Nacional en proponer medidas neoliberales: con el Chile de Pinochet como modelo, López exigió una liberalización del mercado, privatización de las empresas estatales y descentralización fiscal.¹³³ Los empresarios emergentes en el negocio de la marihuana y la cocaína ayudaron a este cambio de dirección al lavar dinero legalmente a través del Banco de la República.

El general Álvaro Valencia Tovar, que había peleado en Corea, Marquetalia y Anorí y era un seguidor de Ruiz, fue designado cabeza de las fuerzas armadas bajo el mando de López Michelsen. Como su mentor, recalcó la necesidad de la inversión social en educación, salud, infraestructura y crédito en áreas donde el apoyo comunista había predominado.¹³⁴ El general Luis Camacho Leyva, un abogado que veía las ideas radicales como un cáncer que necesitaba ser extirpado, reemplazó a Valencia; este sería el final de la “inversión social” como un componente de la contrainsurgencia de la

133. Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, pp. 269-70.

134. Como Tirofijo, el general Tovar consideraba que la oligarquía colombiana había cometido un error estratégico al lanzar la Operación Marquetalia en 1964. Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas”, pp. 41-42.

Guerra Fría. Camacho propuso modificar la Constitución de 1886 con el propósito de pasar una ley respecto a los delitos de opinión, específicamente apuntando a aquellos académicos de izquierda e intelectuales afiliados al partido. Convencido que la mayoría de los sindicatos de Colombia, las universidades, así como la comunidad, los vecindarios y las organizaciones campesinas estaban infectados de propaganda comunista, acusó públicamente a Gabriel García Márquez de tener vínculos con la guerrilla. No obstante, para 1974, las ANUC, el principal movimiento radical de oposición, habían sido reprimidas, cooptadas y arrendadas por el sectarismo de izquierda y los otros movimientos a duras penas tendrían el aplomo para forjar una coalición nacional para un cambio radical. Apenas sobreviviendo la primera fase (1964-74), las insurgencias rurales estaban inactivas.

Cocinándose a fuego lento estaba el descontento urbano, pero, éste tomó una forma dramática en 1974 cuando un nuevo grupo, el M-19 –llamado así por el 19 de abril, cuando le arrebataron las elecciones a Rojas Pinilla–, anunció su aparición robando la espada de Bolívar del museo histórico del centro de Bogotá. Compuesto por *anapistas* de clase media, así como por

jóvenes disidentes de las FARC y el PCC, el M-19 tuvo, desde el principio, un agudo sentido sobre cómo explotar mejor los medios de comunicación para cultivar la misma aura de bravuconadas románticas que rodeó a las guerrillas urbanas del Cono Sur, de las cuales algunos veteranos hinchaban las filas del “eme”.

El M-19 era un movimiento explícitamente nacional-popular con ambiciones electorales en la tradición de Gaitán, cuyo objetivo no era el derrocamiento del capitalismo o del Estado colombiano sino la apertura del sistema político existente para la competencia electoral; en esto, el M-19 era semejante al movimiento M-26 de Castro en la Cuba prerrevolucionaria.¹³⁵ Generó un amplio, aunque difuso, apoyo entre las clases media y trabajadora que votaron por Rojas Pinilla y López Michelsen y probó ser mucho más “popular” que las FARC o el ELN.

A mediados de la década de 1970 fue posible presenciar la propagación de protestas sobre los servicios públicos, dirigidas por la clase trabajadora en las periferias urbanas y movilizadas a través de asociaciones de vecinos y cooperativas en vez de por sindicatos. En

135. Eduardo Pizarro, “Elementos para una sociología de la guerrilla colombiana”, en *Guerra en Colombia*, Bogotá, 2004, p. 66.

1977, las tres confederaciones sindicales más importantes llevaron a cabo un paro cívico, razón por la cual el general Camacho aplicó castigos con extrema represión. De ahí en adelante, los altos índices de desempleo, los salarios cada vez más bajos, la decreciente seguridad social y el aumento del “sector informal” –en el que más de la mitad del proletariado colombiano estaría trabajando duramente para 1985– debilitaron aún más un movimiento laboral ya dividido.¹³⁶

La derrota del paro cívico estableció el escenario para la propagación de medidas enérgicas bajo el siguiente presidente liberal, César Turbay Ayala (1978-82). El general Camacho fue elegido para dirigir el asalto a miles de ciudades etiquetadas por el ejército, la policía, los servicios de inteligencia y un creciente número de organizaciones paramilitares como “subversivas”. Aquellos que eran arrestados, eran torturados, encarcelados o “desaparecidos” y los escuadrones de la muerte como el AAA (Alianza AntiComunista) aparecieron en el modelo argentino.¹³⁷ La violencia política se volvió mucho más intensa de lo que había sido la dé-

136. Pierre Gilhodes, “Movimientos sociales en los años ochenta y noventa”, en Álvaro Tirado Mejía, ed., *La nueva historia de Colombia*, vol. VIII, Bogotá, 1995, pp. 171-90.

137. Sobre tortura bajo el gobierno de Turbay, ver Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 165-88.

cada anterior y las fuerzas del general Camacho atacaron con particular fuerza al M-19. Por primera vez, las operaciones contrainsurgentes afectaban la vida diaria en las ciudades y, junto a los países del Cono Sur, Colombia comenzaba a recibir atención de parte del movimiento internacional de los derechos humanos.¹³⁸

El clima general a finales de la década de los 70 y principio de la de los 80, con los sindicatos urbanos y los movimientos civiles en retirada y la represión estatal en aumento, fue el propicio para que la guerrilla creciera. Sin embargo, aún no había un discurso de los “actores armados de la izquierda y la derecha” (como fuese dicho por primera vez por analistas del norte de El Salvador en la década de 1980). La represión brutal del gobierno de Turbay prorrateada y asociada con las esperanzas desatadas por la revolución nicaragüense y los procesos desarrollándose en El Salvador y Guatemala, les dio a las guerrillas un nuevo soplo de vida. Éstas argumentaban que el gobierno de Turbay no era diferente a las juntas militares del Cono Sur, al tiempo que en Nicaragua los sandinistas habían mostrado que la lucha armada era el camino para derrocar una dictadura.

138. Sánchez, “Intelectuales... Poder...Cultura nacional”, pp. 54-55; Kirk, *More Terrible than Death*, p. 62.

A pesar de la represión dirigida al M-19, éste comenzó sus primeras operaciones urbanas en 1978, bajo la vista del general Camacho. Al año siguiente, los militantes del M-19 robaron 4.000 pistolas de una armería en Bogotá y, en 1980, ocuparon la Embajada de República Dominicana con el enviado de los EE UU adentro –estas operaciones eran comúnmente llamativas y arriesgadas y no requerían de una amplia base social o movilización.¹³⁹ En 1980, el EPL, por su parte, dejó el maoísmo (lo que había llevado a numerosas divisiones internas) y se hizo camino en el campo ganadero de Córdoba y la zona bananera de Urabá, que luego disputaría con las FARC.¹⁴⁰

Sin embargo, esta última fase de crecimiento guerrillero tuvo lugar dentro de un clima político-económico de cambios rápidos. Había comenzado la reestructuración dentro de la oligarquía fragmentada durante el largo estancamiento de la manufactura industrial en la

139. Sobre M-19, ver Israel Santamaría en Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 78-86; Darío Villamizar, *Aquel 19 será*, Bogotá, 1995; Laura Restrepo, *Historia de un entusiasmo*, Bogotá, 1999; María Eugenia Vásquez Perdomo, *My Life as a Colombian Revolutionary: Reflections of a Former Guerrillera*, Philadelphia, 2005, trad. Lorena Terando.

140. Ana María Bejarano, “La violencia regional y sus protagonistas: El caso de Urabá”, en *Análisis Político*, 4, mayo-agosto 1988, pp. 56-70; Fernando Botero Herrera, *Urabá: colonización, violencia, y crisis del Estado*, Medellín, 1990; María Teresa Uribe, *Urabá: ¿región o territorio?*, Medellín, 1992; Clara Inés García, *Urabá: región, actores y conflicto, 1960-1990*, Bogotá, 1996; William Ramírez Tobón, *Urabá: Los inciertos confines de una crisis*, Bogotá, 1997.

década de 1960 y 1970. Algunas facciones importantes movieron sus inversiones de la producción hacia la especulación y la captación de alquileres. Se multiplicaron los nuevos enclaves, dominados por capital extranjero y la producción de una sola materia prima (como en las regiones petroleras de Arauca y Santander norte, el sector del carbón de la Guajira y la zona bananera en Urabá). Este último cambio les dio a las guerrillas las bases materiales para su expansión.

El negocio de la marihuana, inicialmente organizado por los Cuerpos de Paz veteranos y que rápidamente fue tomado por los contrabandistas colombianos, floreció en los departamentos del Cauca, César y Magdalena Medio y en la Guajira.¹⁴¹ Los negocios en el área de la construcción y de la banca se dispararon, ya que una nueva capa de capitalistas bandoleros dependientes de las rentas comenzó a adquirir la riqueza que les permitiría financiar la contrainsurgencia y enriquecerse a través de la economía de guerra.¹⁴² La base conservadora continuó encogiéndose.

141. Darío Betancourt y Martha Luz García, *Contrabandistas, marimberos y mafiosos: Historia social de la mafia colombiana (1965-1992)*, Bogotá, 1994, p. 47.

142. Sobre capitalistas arrendatarios bandidos, política y formación estatal en el sur de Italia y Sicilia, ver Pino Arlacchi, *Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism*, Londres, 1986. Ver también, Ciro Krauthausen, *Padrinos y mercaderes: Crimen organizado en Italia y Colombia*, Bogotá, 1998.

Aunque la fumigación de los campos de marihuana en el Cauca y Sierra Nevada de Santa Marta y la extradición a los EE UU de los líderes traficantes de marihuana comenzó bajo el gobierno de Turbay, la cocaína ya había reemplazado a la marihuana como la materia de exportación más rentable. Para comienzo de los años 80, los mafiosos de los narcóticos entraron en la política y las “drogas” se convirtieron en el pivote de las relaciones de gobierno EE UU-Colombia. El sector cafetalero estaba al comienzo del fin de su predominancia económica; el Partido Liberal tuvo un estímulo con el comercio de drogas que le permitió sobrevivir, mientras que, el Partido Conservador casi desapareció. Los tecnócratas modernizadores en Bogotá vieron disminuir aún más su ya limitado poder sobre los departamentos como nuevos accionistas políticos (más corruptos, cínicos y dispuestos a trabajar con la mafia de la cocaína que algunos de los caciques tradicionales) para dominar los escenarios políticos regionales y locales. El clientelismo provincial se modernizó y tanto la policía como el ejército asumieron roles más prominentes como defensores del “orden público”.

Fue dentro de este nuevo contexto que el ELN renació después de su aniquilación en Anorí, y desde comienzos de la década de 1980 empezaron a tener como blanco los enclaves transnacionales de exportación como parte de una nueva estrategia fundamental basada en el análisis del nuevo patrón de extracción de recursos del país. Aparecieron en las regiones petroleras de Arauca y Santander Norte, la zona minera de la Guajira, El Cerrejón, y las regiones de minería de oro del sur de Bolívar y el noreste de Antioquia, ofreciendo un nuevo modelo de revolución tomado de Centroamérica en vez de Cuba. Construidos sobre la base de la teología de la liberación, el ELN se unió a movimientos populares y trabajó cercanamente con los sectores más radicales del sindicato de trabajadores del petróleo, USO, al tiempo que el petróleo alcanzaba al café como el producto colombiano de exportación legítima a la cabeza. Lo que las FARC había hecho en sus primeros tiempos, el ELN lo hizo una vez que dejaron la teoría *foco* del Ché y se deshicieron de Fabio Vásquez. Construyeron el poder local apoyando a los movimientos populares.

Esta jugada surgió como respuesta a la competencia armada de la izquierda. En 1982, en su VII Congreso

Nacional, las FARC abandonaron su estrategia defensiva en teoría (ya lo habían llevado a la práctica) para proyectarse a través de todo el territorio nacional; un cambio simbolizado por las iniciales EP (Ejército del Pueblo) que fueron añadidas al nombre del grupo. Las FARC ya se habían expandido de sus bases en Caquetá, Meta y Putumayo hacia Urabá, Magdalena Medio y algunas áreas de los llanos al sureste (Guaviare, Vichada y Vaupés) que tenían mayoría indígena. Este fue el punto decisivo a partir del cual, alimentándose de los impuestos recaudados de la nueva y próspera industria de cocaína del país, las FARC se convertirían en una empresa militar dedicada a la expansión territorial y al control.

Durante el Frente Nacional, los gobiernos liberales trataron (y fallaron) de implementar la reforma agraria y derrotaron a las insurgencias armadas en las regiones recientemente colonizadas. Desde mediados hasta finales de la década de 1970, se trató de detener y hacer retroceder a una nueva ola de protestas populares radicales por parte de los trabajadores organizados, los estudiantes y los pobladores de la frontera urbana, junto a una nueva insurgencia guerrillera urbana, a través del mismo terror que era sancionado

por el Estado en la forma de escuadrones de la muerte. Designados para lidiar con la incapacidad del gobierno colombiano de detener la expansión de la insurgencia, estos escuadrones estaban estructurados de manera similar a aquellos que violaban a las sociedades de Centroamérica y el Cono Sur. El anticomunismo, santificado por la Iglesia católica, unió las piezas rotas del sistema bipartidista.

Sin embargo, a finales de los años 70 y comienzo de los años 80, la represión intensa disminuyó la autoridad estatal y creó un clima en el que las insurgencias de izquierda prosperaron. Este florecimiento, por su parte, desafió a los escuadrones de la muerte a consolidarse como fuerzas paramilitares regionales. La violencia política y criminal, alimentándose la una a la otra, y el homicidio se convirtieron en las causas principales de muerte entre los hombres, especialmente en las zonas fronterizas urbanas. Un importante cambio económico hacia la renta, la especulación de tierras y bienes raíces urbanos, así como las exportaciones de cocaína anunciaron la muerte de la república del café. Al mover la base productiva de la industria manufacturera y las exportaciones de café hacia los enclaves de exportación extrativista y las fronteras cocaleras, las corporaciones

multinacionales, la narcoburguesía y los políticos tecnocráticos encargados de “modernizar” y “reformular” el Estado colombiano crearon las condiciones necesarias para que resurgiera la guerrilla. Igualmente, la aceleración de la represión estatal y paraestatal proveyó las condiciones necesarias.

Negociando la guerra sucia (1982-1990)

No es sólo una guerra punitiva sino también una guerra preventiva... una guerra sucia... No es sólo una guerra contra el Estado o del Estado contra la sociedad civil; es una guerra de la sociedad entera contra sí misma. Es un suicidio colectivo.

*Gonzalo Sánchez,
“La degradación de la guerra” (1991)*

El presidente conservador Belisario Betancur inició un proceso de paz con las insurgencias en 1982, del que emergió una amplia izquierda electoral, vinculada a la mayor insurgencia guerrillera, como la primera expresión popular nacional desde el gaitanismo. En respuesta, las redes paramilitares locales y regionales desafiaron a Bogotá implementando una “guerra sucia” (caracterizada por altos niveles de tortura, masacre, desaparición y asesinato político) con impunidad. Cuando las negociaciones de paz se rompieron, la violencia política contra la amplia izquierda

–sancionada por el ejecutivo *ex post facto*– se disparó en proporción al creciente poder de los empresarios exportadores de cocaína.

Narco-política y paramilitarismo

Con eje en Medellín (como también había sido el caso del negocio de exportación del café), el negocio de transporte y procesamiento de cocaína unió a la primera Colombia de las tierras altas centrales y occidentales con la segunda Colombia de las tierras bajas del este y de las costas del Pacífico y Atlántico, a través de nuevas ciudades como Florencia y Villavicencio, así como por caminos y aeropuertos. Medellín recobraba así su gloria industrial desvanecida, convirtiéndose en el centro del único producto de exportación que los colombianos poseían y controlaban. Esto fue más fácil debido a la migración antioqueña al sur de la Florida y Jackson Heights, en Queens, lo que le proporcionó al conocido cartel de Medellín redes de distribución.¹⁴³

El creciente poder de la mafia aumentó por primera vez en las elecciones de 1982, cuando Pablo Escobar y otros miembros incursionaron en la política nacional,

143. De hecho, el cartel de Medellín era una serie de círculos concéntricos y traslapados; los vínculos entre ellos eran contingentes y frecuentemente efímeros. Para evitar confusiones, me ciño al uso convencional.

principalmente a través del Partido Liberal. La cocaína había superado al café y ganado un estimado del 30 por ciento de las exportaciones colombianas.¹⁴⁴ Escobar se convirtió en diputado alterno liberal en el Congreso bajo la tutela de Alberto Santofimio, uno de los jefes políticos (*caciques*) más corruptos.¹⁴⁵ La alianza se desarrolló después de que Escobar fuera expulsado del “nuevo liberalismo”, fundado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, quienes se oponían públicamente a la creciente influencia de los empresarios de la cocaína y disputaban la legitimidad de los caciques dentro del Partido Liberal, como era el caso de Santofimio.

Vinculados a los órganos represivos del Estado, la Iglesia católica y los dos partidos, los paramilitares fueron capaces de beneficiarse de las exportaciones de cocaína en una escala mucho mayor que las FARC. Le debían este rol lucrativo a su origen como escuadrones de la muerte de los carteles de droga y las hacien-

144. Kirk, *More Terrible than Death*, p. 82.

145. Escobar y sus socios, entre ellos su primo, Gustavo “Osito” Gaviria o “el Negro” Galeano, provenían de vecindarios de la clase trabajadora en Envigado y habían ganado experiencia de negocios en las guerras del tabaco en Urabá a comienzos de la década de 1970. La élite de Medellín inicialmente les prohibió que compraran dentro de la industria y les negó la membresía en sus clubs exclusivos. Los capos de Cali, que tenían antecedentes de clase media y clase media alta tuvieron mucho más éxito en integrarse discretamente en la oligarquía regional, aunque Chepe Santacruz tuvo que construir su propio club después de que le fuera prohibida la entrada al Club Colombia.

das ganaderas anticomunistas en el valle del Magdalena Medio. En 1981, narcotraficantes como Escobar, los Ochoas, Carlos Lehder, Víctor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha, organizaron el MAS (o “Muerte a los Secuestradores”), una fuerza paramilitar de derecha dedicada a librar a la región de “subversivos”. Ampliando los hallazgos del informe del abogado general de la República sobre el MAS, como ministro de Justicia Lara Bonilla expuso las conexiones entre oficiales del ejército activos y retirados, la policía, jefes de partido, hacendados ganaderos y narcotraficantes en la formación del MAS.

Al igual que los *pájaros* de la década de 1950, el radio de acción del MAS fue al principio estrictamente regional, pero pronto se ramificó. Gonzalo Rodríguez había trabajado como teniente bajo el mando de Gilberto Molina en las minas de esmeralda de Boyacá, donde cada *capo* tenía un aparato militar rudimentario para hacer cumplir el control sobre el trabajo y los competidores. Rodríguez y Víctor Carranza sirvieron como puentes entre el paramilitarismo financiado por el narcotráfico en Magdalena central y en las tierras bajas del sureste del Meta –es decir, entre la primera Colombia y la segunda. En 1983, como jefe de

la asociación de hacendados ganaderos en Antioquia (Fedegan), Pedro Juan Moreno Villa defendió al MAS en un debate público con Lara Bonilla en Puerto Berrío. Construyó otro puente que se extendía desde Magdalena Medio al noreste de Antioquia y Urabá.¹⁴⁶ El esbozo regional de un paramilitarismo burgués era cada vez más visible.

El líder paramilitar, Carlos Castaño, describe una formación más internacionalista en su autobiografía del año 2001, *Mi confesión*. En 1983, siendo un ex miembro de la patrulla de reconocimiento del Ejército, con 18 años y sirviendo en las filas del MAS, la familia de Castaño lo mandó a Tel Aviv, Israel, para que recibiera entrenamiento. Al dar detalles de cómo ordenó y participó en masacres de civiles, Castaño insiste en que copió “el concepto de las fuerzas paramilitares de los israelíes”. Como se describe más adelante, las lecciones aprendidas en el Líbano, la Ribera Occidental (Cisjordania) y Gaza fueron aplicadas en el Magdalena Medio. Castaño trabajaba bajo la dirección de su hermano narcotraficante, Fidel, también conocido como “Rambo”, un socio de Pablo Escobar, quien luego se dedicaría a tiempo completo a comandar los escuadro-

146. Sobre Rodríguez, ver Jorge Enrique Velásquez, “El navegante”, *Cómo me infiltré y engañé al Cartel*, Bogotá, 1992.

nes de la muerte paramilitares. La “Casa de Castaño”, como Fidel llamaba a su movimiento contrainsurgente regional, había comenzado su ascenso.¹⁴⁷

En 1984, Escobar ordenó el asesinato de Lara Bonilla, el ministro de Justicia de Betancur. La ofensa de Lara Bonilla había sido resistirse a la influencia de la mafia de la cocaína sobre la política del Partido Liberal al exigir que los jefes narcotraficantes, como Escobar, fuesen extraditados a los EE UU. La represión del negocio de la cocaína después del asesinato de Lara Bonilla ayudó a que saliera de la crisis en la que había caído en 1983. El día del entierro de Lara Bonilla, por ejemplo, en Calamar (Guaviare), el precio de un kilo de pasta de coca era de 200.000 pesos; una semana más tarde costaba 800.000 pesos. Las inversiones del narcotráfico en tierras, que inicialmente se concentraron en el Magdalena Medio, crecieron rápidamente.¹⁴⁸

Los exportadores de cocaína (quienes habían invertido fuertemente también en el área de las finanzas, la construcción y las comunicaciones) se fusionaron con las fuerzas de “autodefensa campesina” con la fi-

147. Romero, *Paramilitares y autodefensas*, pp. 124-40; idem, “Democratización política y contrareforma paramilitar”, en Sánchez y Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, pp. 337-76.

148. Molano, *Selva adentro*, p. 100.

nalidad de proteger sus propiedades recién adquiridas. Las mafias de las drogas también se alinearon con los jefes del Partido Liberal en las provincias, así como con miembros del ejército y la policía activos y retirados. Establecieron cada vez más los parámetros para la política colombiana.¹⁴⁹

“Apertura política”

Apoyado por el “nuevo liberalismo”, el presidente conservador Belisario Betancur (1982-86) hizo el primer intento de negociar un cese al fuego y una agenda de paz con las insurgencias, mientras que, su oponente liberal, López Michelsen, había exigido la derrota militar de las mismas en la frontera con Venezuela.¹⁵⁰ En un momento seguidor de Laureano Gómez, aunque por su temperamento un solitario en el sistema, Betancur lo movía la difícil y cada peor situación en la que se encontraba la mayoría y buscaba mejorarla. En 1982, como un primer paso, declaró una amnistía y liberó a más de mil activistas políticos y guerrilleros encarcelados bajo la draconiana “estatua de seguridad” de Turbay. Betancur señaló a la desigualdad social

149. Romero, *Paramilitares*, pp. 339, 345, 373.

150. Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, p. 275.

como la culpable de las enfermedades producidas por las guerrillas, e insistió en la supervisión a nivel ejecutivo, en vez de legislativo, de las negociaciones de cese al fuego (aunque cualquier reforma propuesta tendría que pasar primero por el Congreso).

Este fue el comienzo del período que Betancur llamó la “apertura política”. Ahí estaba la ventana a través de la cual podía vislumbrarse la desmilitarización de la vida política y una discusión seria de problemas como la exclusión política, la falta de educación, de servicios e infraestructura, la expropiación violenta y la negligencia gubernamental en el campo, el desempleo, así como la reducción de empleos en la industria manufacturera en las ciudades.

El fracaso del proceso puede explicarse fácilmente. Las guerras de contrainsurgencia financiadas por los EE UU en América Central estaban entrando en fases críticas, por lo que el contexto internacional le puso freno a una solución política negociada al conflicto militar en Colombia. El embajador de los EE UU, Lewis Tambs, acuñó el término “narco-guerrilla” en 1984, el año en que se implementó el cese al fuego, sugiriendo que las FARC eran una organización criminal en vez

de política.¹⁵¹ Esto surgió durante un período en el que, después de la visita de Ronald Reagan a Bogotá en diciembre de 1982, la “guerra contra las drogas” se convirtió en el tema principal en la diplomacia entre EE UU y Colombia. Betancur no tuvo nunca el apoyo del Ejército colombiano, que se oponía a las negociaciones de paz y a una solución política, tanto en el terreno institucional como sobre el principio de la Guerra Fría.¹⁵² Betancur tampoco tuvo un fuerte apoyo de ninguna facción de la clase dominante y dependía de un Congreso reacio a los cambios estructurales.

Algunos términos que favorecerían relativamente el hecho de que las guerrillas se unieran formalmente al terreno político desencadenaron reacciones por parte de las élites terratenientes locales y del alto comando de las Fuerzas Armadas Colombianas, quienes lucharon contra la política del gobierno central usando el te-

151. En 1989, junto a Oliver North, el mayor gen. Richard Secord, el antiguo Consejero de Seguridad Nacional John Poindexter, y el antiguo jefe de estación de la CIA en Costa Rica, Joseph Fernández, el ex embajador Tambs fue declarado *persona non-grata* en Costa Rica bajo el gobierno del presidente ganador de un Premio Nobel de la Paz, Arturo Arias. Como embajador, Tambs coordinó y cubrió a los contra nicaragüenses (una fuerza contrainsurgente irregular financiada por el narcotráfico). Luis A. Restrepo, “The Equivocal Dimensions of Human Rights in Colombia”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, p. 102.

152. Richani, *Systems of Violence*, p. 182, n. 7. Betancur ofendió al alto comando designando a un general de la Fuerza Aérea para que dirigiese a las Fuerzas Armadas y tratando de reducir el poder del ejército frente al de la policía.

ror contrainsurgente, financiado en parte por los ingresos de exportación de cocaína (de la misma manera como las fuerzas contra nicaragüenses luchaban por derrocar el régimen popular nacional sandinista).¹⁵³ En el valle de Magdalena Medio, los llanos orientales, el noreste de Antioquia y el sur de Córdoba, las élites agrarias más antiguas y la nueva élite comercial, financiera e industrial de la cocaína establecieron cabecillas regionales para ejércitos privados e imperios rurales.

Como en la Violencia, más que las guerrillas en sí mismas, que estaban presentes en las regiones mencionadas anteriormente, lo que irritaba a los narcotraficantes y a los terratenientes tradicionales por igual eran los procesos de autoorganización de los cuales la insurgencia guerrillera era sólo un aspecto. La autoorganización conducía a exigencias cada vez mayores de redistribución de la tierra, reorientación de los créditos y nuevas mejoras tecnológicas subsidiadas por el Estado. Encabezados por la Asociación

153. Para la geografía cambiante de la producción de narcóticos y la contrainsurgencia anticomunista en la Guerra Fría, comenzando con el apoyo de la CIA a la mafia corsa en los muelles de Marsella hasta los nacionalistas chinos en la frontera birmana de Yunnan, China, ver Alfred W. McCoy, *The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade*, New York, 1991. Lo que es interesante para nuestros propósitos es que, en Colombia, los terratenientes fundaron la contrainsurgencia rural a una escala mucho menor décadas antes de que el negocio de la droga se convirtiera en la fuerza motriz económica.

de Ganaderos (Fedegan), a través de la cual se organizaban las relaciones paramilitares con la sociedad civil, los oligarcas terratenientes decidieron que ya era tiempo de callar las demandas populares. Esto significaba muerte a los campesinos sin tierra, a los pequeños agricultores endeudados, a los proletarios rurales y a los movimientos urbanos para la vivienda, los servicios y la educación pública.

Las tres insurgencias que entraron en las negociaciones (FARC, EPL y M-19) vieron venir la represión pública y privada sancionada por el Estado. Explotaron contradicciones en el proceso de paz para afianzar su propia posición, llamando la atención sobre los crecientes abusos militares y paramilitares. Firmemente arraigados en las sabanas de Córdoba y en las zonas bananeras de Urabá, el EPL tenía una presencia mayor en los sindicatos y grupos comunitarios. Para el momento en que se había alcanzado un acuerdo, a finales de 1984, las FARC habían doblado su número de frentes, de catorce a veintiocho. En 1985, esperando que un ataque general en junio se convirtiera en una insurrección urbana y quejándose de las violaciones del ejército al cese al fuego, el M-19 se retiró de la tregua. En noviembre sus comandos organizaron un ataque al Palacio de Jus-

ticia en el centro de Bogotá, apresando a la Corte Suprema adentro y exigiendo negociaciones. El Ejército respondió atacando el edificio con un asalto en un tanque que resultó en la matanza de todos los que estaban adentro. Betancur postergó una decisión con respecto al alto comando; de haberles puesto objeciones, lo habrían derrocado.¹⁵⁴ La masacre marcó el principio del final del M-19 como fuerza político-militar.

Dentro del gobierno, la persona encargada de manejar los contactos con las insurgencias, Jaime Castro Castro, era el padrino político del cacique del Partido Liberal, Pablo Emilio Guarín, quien supervisaba la violencia anticomunista en Puerto Boyacá, una hacienda ganadera y puesto de avanzada paramilitar en el valle del Magdalena Medio. Uno de los campos de entrenamiento paramilitar ahí, posteriormente provisto de mercenarios israelíes y británicos, fue llamado en honor a Guarín. Durante el proceso de paz de Betancur, el Magdalena Medio se convirtió en el corazón territorial del cartel de Medellín. Se llevaba a cabo una “fumigación de la subversión” a través de desapariciones, desplazamientos y torturas. Oficiales

154. Ver Ana Carrigan, *The Palace of Justice: A Colombian Tragedy*, New York, 1994; para la versión de un sobreviviente, ver Humberto Murica Ballén, “Palacio en llamas”, en Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 405-13.

militares y de la policía activos y retirados y hacendados ganaderos, coordinaron con la XVI Brigada en Puerto Berrío, a lo largo de la frontera departamental de Boyacá en Antioquia.¹⁵⁵

El arquitecto de la “paz” en el valle del Magdalena Medio fue el general Farauk Yanine Díaz, graduado de la Escuela de las Américas, quien reconoció que la clave para retomar el área de las manos de las FARC y el PCC a principios de los años 80 era una estrategia contrainsurgente que incluyera “corazones y mentes”, la cual integraría al campesinado en el aparato de represión, bien fuese en forma de informantes o combatientes.¹⁵⁶ Yanine tuvo éxito donde el general Ruiz y otros fallaron durante las décadas de 1960 y 1970, así que Pablo Guarín lo consideraba una “superestrella... dentro del ejército”.

A medida que el proceso de paz se degeneraba, los desarrollos en el Magdalena Medio encontraban la

155. El XI Frente de las FARC, caracterizado por su violencia arbitraria, secuestros e insoportablemente altos niveles de impuestos, creó un clima de hostilidad tal que las fuerzas armadas y los paramilitares fueron capaces de obtener la colaboración de aquellos civiles más opuestos a las extorsiones de las FARC. Ver Medina Gallego, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico*, pp. 142-47.

156. *Ibid.*, pp. 159-66. Curiosamente, este capítulo sobre contrainsurgencia es pasado por alto en el libro de Charles Bergquist, “Waging War and Negotiating Peace: The Contemporary Crisis in Historical Perspective”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, p. 208; y Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, pp. 300-305.

aprobación oficial. En 1985, en un discurso que dio en la Plaza Jorge Eliécer Gaitán en Puerto Boyacá, Betancur declaró al pueblo “un modelo de paz” para el resto de la nación. Betancur nombró al general Yanine “el símbolo... de la resurrección del Magdalena Medio”.¹⁵⁷ Oficialmente, entonces, la paz era entendida como una contrainsurgencia exitosa basada en la “limpieza política” y en una colaboración más cercana entre los civiles y las fuerzas armadas. Las demostraciones ejemplares de violencia pública y privada se volvieron más y más comunes a medida que el MAS unía el terror con la impunidad.¹⁵⁸

A finales de 1985, las FARC formaron la Unión Patriótica (UP) con el PCC, como un frente civil designado para ayudar a consolidar una base de poder dentro del sistema político formal antes de deponer las armas.¹⁵⁹

157. *Ibid.*, pp. 163, 232-33; también Alejandro Reyes Posada, “Paramilitares en Colombia: Contexto, aliados y consecuencias”, en *Análisis Político*, 12, enero-abril 1991, pp. 35-41; idem, “Propiedad de la tierra y narcotráfico en Colombia”, en Álvaro Tirado Mejía, ed., *La nueva historia de Colombia*, vol. VIII Bogotá, 1995, pp. 23-33; Cubides, “From Private to Public Violence”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, pp. 127-49.

158. Yanine volvió a la Escuela de las Américas después de su triunfo en el Magdalena Medio como orador invitado. Más adelante, fue declarado culpable por planificar la masacre de 20 trabajadores bananeros en 1988 en Urabá. Garry Leech, *Killing Peace: Colombia's Conflict and the Failure of US Intervention*, New York, 2001, p. 27.

159. Estoy en desacuerdo con Molano, “Fórmulas”, quien argumenta que fue una estrategia “sabia”. Aunque no es fácil explicar en detalle una alternativa viable, las

La estrategia de política electoral armada trajo consigo grandes riesgos para los que apoyaban la UP, especialmente los sindicalistas y el cuadro del PCC. Pero para los activistas de colores ideológicos variados comprometidos con el cambio social progresivo, la UP se convirtió en un terreno de encuentro para los radicales. Una nueva generación buscaba superar el sectarismo de la década de 1970. La mayoría no tenía nada que ver con las FARC o el PCC, así que no se unieron a la doctrina leninista criolla de la “combinación de todas las formas de lucha”. Los militantes de la UP trabajaban por la paz, la justicia social y el “cambio revolucionario” a través del terreno electoral. En su compromiso por encontrar un camino democrático a la revolución, se asemejaban a la UP chilena de los años 60 y 70, si acaso, más destinados al fracaso.

Debido a la correlación de fuerzas, una política electoral social demócrata vinculada a la formación guerrillera más grande del país resultó en un vasto número de ejecuciones extrajudiciales de políticos y

FARC podrían haber aplicado las medidas estrictas de seguridad que la situación requería, protegiendo así a su gente y a sus aliados en el UP de riesgos innecesarios. “Cuándo comenzaron a asesinarlos, todos nos preguntamos: ¿Por qué no nos dieron entrenamiento militar?”. Como un ex militante de la UP expresó: “Nos están matando y ellos ¿qué hacen? Nada es la respuesta”. Steven Dudley, *Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia*, New York, 2004, p. 133.

militantes de izquierda, especialmente en regiones fronterizas. La facción “ortodoxa” de las FARC entendió esto y peleó por una militarización mayor.¹⁶⁰ Jacobo Arenas, el único proletario en el Alto Comando de abrumadora mayoría campesina, fue la fuerza motriz detrás de la UP. Su sueño no era, como en el caso de Salvador Allende, encontrar un camino parlamentario al socialismo, sino construir una máquina moderna de guerra con la cual luchar contra el Estado colombiano y el imperialismo estadounidense.¹⁶¹ En trágica confirmación de la posición ortodoxa de las FARC, dos años después de su fundación, quinientos militantes de la UP, incluyendo al candidato presidencial Jaime Pardo Leal (quien, en 1986, ganó más que cualquier otro candidato de izquierda en la historia colombiana) habían sido asesinados.

Pardo se dio cuenta de que la UP y los sindicatos tenían que ser independientes de las FARC si querían que se efectuara la reforma. Un disidente del PCC reflexionó de la siguiente manera: “Si no adoptábamos

160. Esta facción es actualmente dominante dentro del Estado Mayor de las FARC y su mayor representación está en Jorge Briceño, también conocido como “Mono Jojoy”, el comandante militar de las FARC.

161. Este es el planteamiento del libro de Dudley, *Walking Ghosts*, que ofrece una mirada más profunda a los debates que dividieron a los radicales de las FARC (también conocidos como “los ortodoxos”) de los social demócratas (“los perestroikas”) agrupados bajo la bandera de la UP.

la democracia y la paz en una manera que fuera perfectamente abierta, sino que continuábamos jugando en los dos niveles, con la UP y el partido en la esfera legal y las FARC en la guerra, estábamos destinados al holocausto”.¹⁶² El ala ortodoxa de las FARC no tenía ninguna intención de dejar ir su “instrumento político” y esta visión ganó adeptos a medida que se apilaban los cuerpos asesinados. Sin un análisis crítico, las FARC justificaron su existencia de ahí en adelante refiriéndose a lo que las familias de las víctimas llamaban como “genocidio político”.

La mayoría de los asesinatos a los seguidores de la UP fueron responsabilidad de Rodríguez, Víctor Carranza y los hermanos Castaño. Adhiriéndose a las declaraciones de las Fuerzas Armadas Colombianas al efecto de que la UP era apenas el “ala desarmada de la subversión”, declararon una guerra sin cuartel al partido como una forma de luchar contra las FARC. Los hermanos Castaño, cuyo padre había sido secuestrado y asesinado por las FARC después de haber pagado el rescate, tenían razones personales para proseguir su guerra contra civiles. Inicialmente al menos, Rodríguez y Carranza, su socio en la mafia de las esmeral-

162. Dudley, *Walking Ghosts*, p. 82.

das, se vengaron por una relación de negocios que salió mal.¹⁶³ Con este fin, financiaron operaciones de “limpieza política” para eliminar físicamente o desplazar a la fuerza a aquellos que abogaban por reformas democráticas radicales.

La clausura

Dentro de las FARC, sólo Alfonso Cano, único intelectual en la Junta de Jefes de Estado Mayor, veía cómo la élite emergente exportadora de cocaína comenzaba a suplantarse a las viejas y atacadas élites terratenientes en las regiones fronterizas, a través del paramilitarismo. El narco-paramilitarismo se compactó rápidamente como bloque opositor a las negociaciones de paz y a la apertura democrática de Betancur, considerando la movilización de masas y la progresiva política electoral como prueba de un grado inaceptable del avance político insurgente. Con

163. *Ibíd.*, p. 101. Aunque la contienda entre los narcotraficantes y las guerrillas generalmente se apunta a los secuestros, lo que llevó a la formación del MAS, las ganancias del negocio de la cocaína se encuentran en la raíz de la disputa. Aparentemente, las FARC habían robado mercancía de Rodríguez Gacha en uno de sus más grandes laboratorios de cocaína, *Tranquilandia*, descubierto en Meta por la Policía Nacional Colombiana y la DEA en 1984. Las 13,8 toneladas métricas de cocaína calculadas en 34 millones de dólares representaron la redada más grande de la historia. Ver Salazar, *La parábola*, p. 111; Kirk, *More Terrible than Death*, p. 86.

facciones de las Fuerzas Armadas, hacendados, narcotraficantes, políticos liberales y escuadrones de la muerte organizados y unidos en contra de él, a Betancur le faltó el poder para insistir en la reforma social, que le habría permitido aplacar las insurgencias. Al proceso de la “apertura política” emprendida por el Estado central se le oponían las élites regionales reagrupadas en defensa de la “propiedad privada” y el “orden público”.

La comunidad política nacional no incluía a las comunidades afro-colombianas, grupos indígenas, pobladores fronterizos, habitantes de las zonas marginales, feministas, defensores de los derechos humanos o ambientalistas que trabajasen con la UP, y mucho menos con la Izquierda Comunista, que había forzado la apertura. En Urabá y el Chocó, las comunidades campesinas, afro-colombianas o con una fuerte presencia afro-colombiana, hicieron de la UP su vehículo político, al igual que las comunidades mestizas de la frontera en aquellas zonas controladas por las FARC en el sur y el sureste (Meta, Caquetá). Las insurgencias apoyaban muchas de las quejas de los ya mencionados grupos populares radicales. A pesar de los esfuerzos por usar esas luchas para sus fines organizativos, una

movilización que contaba con el apoyo de las bases, en su mayoría autónoma, fue etiquetada como “subversión” y suprimida por el terror.

Una exagerada resistencia armada contribuyó con la debilidad y vulnerabilidad de los mismos movimientos con mayores posibilidades de aportar los cambios necesarios para una solución negociada. Los pájaros habían vuelto a surgir, esta vez bajo la apariencia del MAS y de los adolescentes asesinos que volvieron famosa a Medellín a nivel mundial. A diferencia de los pájaros de 1950 y 1960, los sicarios de los años 80 y 90 fueron contratados y protegidos (o incluso asesinados) por la mafia de la cocaína, y no por el Partido Conservador.¹⁶⁴ Con la “guerra contra las drogas” de Reagan –organizada fuera de Miami por el entonces vicepresidente George H.W. Bush, con el fin de combatir a las insurgencias de izquierda– el narcotráfico y la extradición serían el objetivo principal de las relaciones entre los gobiernos de los EE UU y de Colombia.

164. Para sicarios y guerra urbana en Medellín, ver Alonso Salazar, *No nacimos pa' semilla*, Bogotá, 1990; Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, “El sicariato en Medellín: entre la violencia política y el crimen organizado”, en *Análisis Político*, 14, septiembre-diciembre 1991, pp. 68-84; Ana María Jaramillo et al., *Cultura política y violencia en Medellín en los 90*, Medellín, 1999; Ramiro Ceballos Melguizo, “The Evolution of Armed Conflict in Medellín: An Analysis of the Major Actors”, en *Latin American Perspectives*, 28, 2001, pp. 110-131.

Bajo la presión de Washington, el gobierno de Virgilio Barco, que tomó posesión en 1986 –con una victoria liberal baja en votos– buscó la extradición del Cartel de Medellín. En una frase muy citada, Escobar declaró que prefería una “tumba en Colombia” que una celda en los Estados Unidos. Él y el grupo de traficantes que lideraba, conocidos como *Los Extraditables* dependían de los informantes dentro de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia (DAS, DOC, F-2) y respondían ordenando ataques a jueces, políticos y funcionarios de las fuerzas de ley. Aún así, algunos ministros clave, periódicos y facciones políticas dentro de ambos partidos expresaron su apoyo público a las fuerzas de “autodefensa” paramilitar, algunas de ellas con vínculos continuos con el Cartel de Medellín.

Cuando el movimiento paramilitar cobró mayor intensidad entre 1987 y 1988, la tasa de homicidios ya se había convertido en la principal causa de muerte entre la población masculina. Los movimientos sociales protagonizaron marchas masivas en las ciudades y en los campos, exigiendo un cambio progresivo y, en algunos casos, se acercaron a la insurgencia guerrillera, particularmente a las FARC y al ELN, quienes intentaron darle cuerpo. El alcance de los ataques de la derecha incluía

a estudiantes, profesores y distinguidos profesionales, tales como el Dr. Héctor Abad Gómez, un activista en derechos humanos del ala progresista del Partido Liberal. A su vez, el Senador liberal (y perenne candidato presidencial) Horacio Serpa, señaló: “En Colombia los crímenes por la manera de pensar se han institucionalizado y son drásticamente castigados nada más y nada menos que con la pena de muerte”.¹⁶⁵ Sumado a aquellos cuyas palabras y hechos eran considerados como “subversivos”, *los desechables* también estuvieron en la mira. Prostitutas, homosexuales, travestis, personas mentalmente enfermas y sin hogar, ladrones, pequeños distribuidores de droga y consumidores fueron asesinados en operaciones de *limpieza social*, que llegaron a generalizarse en Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Barranquilla. Oficiales de policía, activos y jubilados, eran tan destacados como traficantes y paramilitares. La violencia urbana comenzó a propagarse vertiginosamente.

Entretanto, las FARC habían comenzado seriamente su metamorfosis hacia un pequeño estado de cobros tributarios, al tiempo que los secuestros, la extorsión, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado comenzaron a aparecer en aquellas zonas donde recién

165. Horacio Serpa, “Guerra sucia, autodefensa y guerrilla”, en *Análisis Político*, 2, marzo-abril 1987, p. 140.

las FARC habían llegado.¹⁶⁶ A su vez, el ELN también crecía rápidamente. Para mediados de los años 80, la extracción de los impuestos de protección de la compañía alemana que se contrató para la construcción del oleoducto Caño-Limón en el Arauca (con la ayuda del gobierno de Kohl), así como de compañías petroleras transnacionales, le dieron al ELN los recursos necesarios para su expansión. El ELN encontró seguidores y reclutas en las universidades, en organizaciones comunales y vecinales y en sindicatos. Entre 1983 y 1988, creció en una tasa del 500 por ciento, y luego del proceso de paz, se hizo distinguir por su habilidad con el uso de tácticas terroristas –que incluían el secuestro, carros-bomba y sabotajes a oleoductos e infraestructuras– como sustituto para la insurrección.

Aunque en menor escala que las FARC, el ELN exigía una enmienda a las soberanías locales y regionales. En un ataque secreto del ELN, el cual no se había unido al cese al fuego, las FARC denunciaron “secuestro y todas las formas de terrorismo que atenten contra

166. Para un testimonio acerca del desarrollo de estas prácticas durante los inicios de la década de 1970 en el Frente VII de las FARC, el único controlado por Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y el Estado Mayor, ver “Antonio”, en Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 267-75. El hecho de que “Antonio” haya terminado trabajando para la inteligencia colombiana no significa que su vida dentro de las FARC en los años 70 sea menos convincente.

la dignidad y libertad humana”.¹⁶⁷ En 1987, las FARC y el ELN fundaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) con el M-19, el EPL, Quintín Lame y el pequeño grupo trotskista PRT.¹⁶⁸ Sin embargo, las promesas de una unidad insurgente no duraron mucho tiempo, ya que el ambiente de competencia sectorial que había adoptado la izquierda desde la década de 1930 perduraba.¹⁶⁹ No obstante, la CGSB le dio voz a un movimiento guerrillero que, al menos en términos económicos y militares, se había convertido en un formidable desafío para el ejercicio del gobierno central. Aunque hemos visto que para ese momento ya las FARC habían iniciado su transformación organizacional hacia un pequeño Estado de cobros tributario, es importante recordar cuánto se deterioró el conflicto a finales de los años 80 e inicios de los años 90 luego del fracaso del proceso de paz.

167. Alfredo Molano, “Fórmulas”, *El Espectador*, 15 septiembre 2002. El examen más minucioso del proceso de paz es “La insurgencia y las negociaciones: definiendo los límites del régimen político en Colombia”, de Mark Chernick, Ph.D. Columbia University, 1991. Ver Olga Behar, *Las guerras de la paz*, Bogotá, 1986.

168. A mediados de los años 80, en el Cauca, las FARC y la violencia militar y paramilitar en contra de las comunidades indígenas condujo a la formación de un grupo guerrillero regional, Quintín Lame, que depuso sus armas en 1991.

169. Las relaciones entre las FARC y el ELN variaban en el tiempo y según la región. En el 2005, en algunas áreas, tales como el sur de Bolívar o la Sierra Nevada de Santa Marta, las FARC y el ELN efectuaron ataques en conjunto sobre bases paramilitares, mientras que en el este (Antioquia y Arauca), las FARC le declararon la guerra al ELN.

En 1988, como parte de un esfuerzo oficial para democratizar las políticas regionales a través de la pérdida del control central, se institucionalizaron las elecciones locales por primera vez desde 1886, con el triunfo por parte de la UP de 16 alcaldías y 256 concejos municipales. El resultado inesperado hizo que aumentara la violenta competencia electoral, resultando en más operaciones de “limpieza política”. Estas operaciones buscaban lidiar con el avance de la UP, que amenazaba con romper el monopolio bipartidista a nivel local, especialmente en regiones fronterizas o periféricas. Los objetivos eran sindicalistas, organizadores de las comunidades, estudiantes, profesores, activistas indígenas, periodistas de la radio y maestros. Y como siempre, por encima de todo, eran campesinos.

En la región bananera, maderera y ganadera de Urabá, específicamente en Mejor Esquina, las masacres empezaron en abril de 1988, donde murieron 36 campesinos bajo las órdenes de Fidel Castaño y del alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio.¹⁷⁰ En Remedios, área minera al noreste de Antioquia, donde las fuerzas de la *contrachusma* habían arremetido contra los gaitanis-

170. Kirk, *More Terrible than Death*, p. 152. Cometidas durante la noche por hombres vestidos de civiles que llevaban capuchas, 20 masacres más tuvieron lugar en Urabá para 1990.

tas en los años 50, la UP ganó la alcaldía en 1988. Fidel Castaño envió a su más metódico asesino (un viejo combatiente de las FARC del Magdalena Medio) para un homicidio desenfrenado ese mismo año.¹⁷¹ Según investigaciones realizadas por la fiscalía, César Pérez, un congresista liberal del pueblo vecino de Segovia, había sido uno de los autores intelectuales del crimen; las fuerzas paramilitares de autodefensa de Puerto Boyacá también habían participado.¹⁷² En el valle de Sinú, en Córdoba, donde las juntas gaitanistas se habían formado luego del Bogotazo, el ELP y las FARC habían proliferado junto a fervientes movimientos civiles, estudiantiles y campesinos. En 1987, Fidel Castaño compró tierras en Valencia, mandó a asesinar al alcalde de la UP, desplazó a sus seguidores y desde allí expandió su dominio político a través del terror y las masacres.¹⁷³ De esta manera, los municipios de Valencia y Tierralta les fueron arrebatados a la UP y reconquistados por el Partido Liberal.

171. Dejó 43 personas muertas y 50 heridas en una noche. Hubo 154 soldados acuartelados en el Batallón Bombona. En 1983, Fidel Castaño había sido acusado de masacrar a 20 personas en Remedios y en Segovia, para el momento en el que él y Carlos servían como informantes de dicho batallón.

172. Romero, *Paramilitares*, pp. 200-201.

173. Dudley, *Walking Ghosts*, pp. 111-112, 147. En Meta, en coordinación con VII Brigada del Ejército en Villavicencio, los paramilitares que trabajaban para los zares de la esmeralda, Rodríguez y Víctor Carranza, asesinaron a 142 militantes de la UP y desaparecieron 11 en 1988.

Los líderes del Partido Liberal tenían mucho que perder con el surgimiento de la UP y se negaron a desaparecer de la política por un partido fundado por las FARC y el PCC. Al aliarse tan estrechamente con la contrainsurgencia, repitieron los mismos errores que el gobierno conservador cometió durante la Violencia. En la masacre de La Rochela, también en 1989, bajo las órdenes de Rodríguez, un grupo de sicarios asesinaron a nueve investigadores judiciales que estaban tras la pista de una masacre paramilitar cometida en el Magdalena Medio. Esto cambió las relaciones de los paramilitares con el gobierno central, quien ahora declaraba a más de 200 de sus miembros como ilegales.

Posteriormente, uno de los sicarios de Escobar asesinó al candidato presidencial de centro-izquierda y líder del “nuevo liberalismo”, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989.¹⁷⁴ Así como Lara Bonilla, Galán había sido coaccionado recibir financiamiento de Escobar a su campaña, y luego continuó con las fuertes denuncias contra los traficantes a favor de la extradición a

174. El padrino político de Escobar, Alberto Santofimio, fue arrestado en mayo de 2005 bajo los cargos de ser el autor intelectual del golpe, después de que el jefe de seguridad de Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye,” ofreciera su testimonio en el Ministerio Público. *BBC News*, 12 de mayo de 2005. En 1994, Luis Carlos Aguilar, alias “El Mugre”, quien llevó a Santofimio al encuentro con Escobar, hizo lo mismo. *El Tiempo*, 16 de mayo de 2005.

los Estados Unidos. Galán estaba seguro de que había ganado las elecciones en 1990. Su funeral fue motivo de luto nacional. Ese mismo año, sicarios que trabajaban para Fidel Castaño y Rodríguez le dispararon a dos candidatos presidenciales de izquierda: Carlos Pizarro, líder del M-19, y Bernardo Jaramillo, de la UP.¹⁷⁵ En esta ocasión, el tema no era dinero o extradición, sino las exigencias que los candidatos habrían hecho por la justicia social, la democratización del sistema político y una transformación de las estructuras.

Uno de los enemigos de la UP, Gonzalo Rodríguez, murió en 1989, después de que el Cartel de Cali infiltrara su organización con las mismas fuerzas que harían caer a Escobar cuatro años más tarde. Fidel Castaño, responsable de las muertes de Pizarro y Jaramillo, continuó concentrando fuerza, fortuna y tierras en Antioquia y Córdoba, mientras cultivaba sus gustos por el arte moderno en París, Nueva York, Londres y Madrid. 20 de los 42 cadáveres de la masacre de Puerto Bello (Urabá) de 1990 se hallaron en su hacienda de Córdoba, Las Tangas; un paramilitar testificó haber torturado a las víctimas allí mismo durante toda

175. Para un relato escalofriante de Carlos Castaño y su admisión abierta sobre la responsabilidad por las muertes de Jaramillo y Pizarro, ver Dudley, *Walking Ghosts*, pp. 203-4. El M-19 y la UP avanzaban hacia la unidad más allá del alcance de las FARC.

la noche.¹⁷⁶ En el Magdalena Medio (caracterizado por el procesamiento de petróleo y haciendas de ganado), al noreste de Antioquia (donde se encuentra el Frontino Gold Mining Co, además de numerosas haciendas), al sur de Córdoba (también con haciendas) y en los llanos del este (zona de haciendas y plantaciones de coca), la derecha paramilitar regional evitó que nuevas expresiones políticas entraran a la política formal. Las bases del movimiento de contrainsurgencia a nivel nacional habían sido establecidas sobre los cadáveres de los torturados, masacrados y “desaparecidos”, muy numerosos para ser contados, y muy peligrosos para ser investigados.

A finales de la década de 1980, los paramilitares borraron la amplia izquierda del mapa electoral, reforzaron los controles políticos clientelistas y empezaron a adquirir vastas extensiones de terreno, principalmente a través de la masacre y de la expropiación. Se enredaron cada vez más en el negocio de la cocaína, lo cual explica, en parte, la cercanía entre la política y el crimen organizado. Este proceso viene descrito en las tres regiones ya mencionadas en conexión con la violencia: el valle del Magdalena Medio, el noreste de

176. *Ibid.*, p. 151.

Antioquia y los laboratorios regionales de lo que más tarde se convertiría en un proyecto de contrainsurgencia nacional en Urabá. A finales de la década de 1980, saltaba a la vista que, a diferencia de las robustas insurgencias, las mafias de la cocaína tenían la capacidad de infiltrarse en ambos partidos, la policía, el ejército y los servicios de inteligencia del gobierno. A través del terrorismo urbano y el asesinato de jueces y políticos, hacían poner de rodillas al gobierno nacional –un hecho aún recurrente en la guerrilla. Todavía antes de que el “ajuste estructural” neoliberal por parte del FMI hubiera debilitado aún más la autoridad del Estado, un nuevo polo de soberanía ya viraba el centro del campo político hacia la derecha.

Paz fragmentada, soberanía parcelada **(1990-1998)**

Si no podemos ni queremos modificar las circunstancias que determinan estas manifestaciones de miseria, marginalización y desesperanza, ¡entonces eliminemos a las víctimas!

*Estanislao Zuleta, en Camacho y Camacho,
Ciudad y violencia (1990)*

La política electoral armada, que había empezado al final de la “apertura”, siguió operando luego de la clausura, con la eliminación de la amplia izquierda, fue la derecha paramilitar la que pudo avanzar. Grandes esperanzas se invertían en la Constitución progresista de 1991, pero su aprobación coincidía con la tasa de homicidios más alta de la historia colombiana, a la vez que una gran distensión de territorio se disputaba entre una pluralidad de lo que algunos analistas comenzaron a llamar “actores armados”. Sin embargo, el ajuste estructural neoliberal envolvía a las fronte-

ras urbanas y rurales en una crisis económica. La falta de empleo, especialmente entre los hombres jóvenes, hacía del negocio de narcóticos la principal fuente generadora de empleos del país, y mantuvo altos los niveles de reclutamiento tanto de la guerrilla como del paramilitarismo. En lugar de que las expectativas de empleo, educación, propiedad privada y participación política se estuvieran cumpliendo, éstas eran más bien eliminadas por medio de violentas expropiaciones. Más y más personas fueron “desplazadas” por la guerra civil, y en vez de traer consigo la apertura del sistema bipartidista, la desmovilización de varios movimientos guerrilleros más pequeños fue seguida por su desaparición física y política –o por la incorporación a las fuerzas paramilitares, que fueron las responsables de cometer una vasta mayoría de las masacres y actos de violencia política–. Sin embargo y a pesar de las derrotas locales y la violencia masiva –casi indiscriminada– infligida sobre los seguidores civiles, la expansión insurgente sobrepasó récords anteriores. Lo que la insurgencia ganó en cuanto al control territorial y crecimiento numérico lo perdió en cuanto a legitimidad política, pero debido a sus fuentes renovables de ingreso, no necesitaron más de aquella legitimidad política para consolidarse a nivel organizacional o territorial.

Así pues, la “paz fragmentada” no condujo al ejercicio de una mayor soberanía por parte del gobierno central, sino lo contrario: la “parcelización de la soberanía”.

Neoliberalismo a la Colombiana

Así como las múltiples soberanías y los territorios resquebrajados habían sido un rasgo característico del escenario político de los años 80, las insurgencias y el paramilitarismo también tuvieron saltos cualitativos en el control de los recursos, la población, el territorio y las rutas de transporte durante los años 90. Esto se logró recurriendo aún más al terror, especialmente del lado paramilitar, a la vez que las operaciones de contrainsurgencia progresivamente se fueron privatizando y subcontratando. Buscando cercar el rol directo de los estados sobre la represión, las élites tecnocráticas y modernizadoras, vinculadas al capital estadounidense y a sus instituciones de altos estudios, contribuyeron activamente con este desarrollo. La “promoción de la democracia” fue el nombre dado a la mezcla de medidas económicas neoliberales, reformas políticas y la “guerra contra las drogas” que caracterizó la situación del período post Guerra Fría.¹⁷⁷

177. William Avilés, “Paramilitarism and Colombia’s Low-Intensity Democracy”, en *Journal of Latin American Studies*, 38, 2006, pp. 381-84.

César Gaviria, tecnócrata educado en Harvard y elegido Presidente en 1990, convocó una Asamblea Constituyente para producir una nueva y más democrática Constitución (un segundo intento por romper el largo estancamiento político). Los grupos guerrilleros EPL, M-19, Quintín Lame y el PRT depusieron sus armas para participar en el proceso de paz, y como resultado de una renovada movilización indígena, la Constitución de 1991 otorgó derechos históricos de reconocimiento territorial a los pueblos indígenas.¹⁷⁸ También intentó hacer más eficiente el sistema judicial y limitar la autoridad del Ejecutivo, introduciendo la representación proporcional para la elección del Senado y la elección popular de los gobernadores departamentales, que anteriormente eran designados por el Presidente. La Constitución no hizo nada para frenar los poderes arbitrarios militares y policiales, ni siquiera para romper el dominio del sistema bipartidista, pues ésta no era su intención.

Los esquemas de Gaviria tenían muy poco del impulso moral detrás de los esfuerzos de Betancur y más bien producían resultados amargos. Los suministros

178. Ver Christian Gros, "Derechos indígenas y una nueva Constitución en Colombia", en *Análisis Político*, 19, mayo-agosto 1993, pp. 3-22. Dos años más tarde, en 1993, los afro-colombianos obtuvieron similares derechos bajo la Ley 70.

rígidos de la Constitución para la descentralización, que incluía las transferencias obligatorias del gobierno central hacia las provincias, fortalecía el poder de los dirigentes de los partidos locales, en especial el de los liberales. Esto incrementó la corrupción política que condujo al país hacia un déficit fiscal.¹⁷⁹ La descentralización abrió un espacio para la contienda electoral armada, ya que ahora los gobernadores departamentales así como los alcaldes debían ser electos directamente. Aprovechándose de la descentralización, los paramilitares ahora eran un equilibrio que competía con el poder insurgente, al tomar el control de las oficinas regionales y locales por medio del Partido Liberal, tal como los conservadores lo hicieron después de 1946.

El Partido Liberal había vuelto a obtener todos los municipios donde la UP había dominado a finales de los años 80 y los compartía con el nuevo EPL, el cual a mediados de la década de 1990 se alió con los dueños de bananeras, el ejército, los paramilitares y los dirigentes del Partido Liberal. Estos aliados aceptaron la estrecha unión y el vehículo político del ELP, siempre y cuando éstos no estuviesen en contra del monopolio de las políticas regionales o la concentración de riquezas

179. Unidad de Inteligencia Economista, *Colombia: Perfil del país, 2002-2003*.

de la tierra.¹⁸⁰ Aunque el Partido Liberal había recuperado su posición en regiones fronterizas como Urabá, se estaba volviendo más dependiente de su alianza con los paramilitares vinculados al tráfico de drogas.

Los artículos progresistas de la Constitución de 1991 eran letras muertas, ya que no había un “sujeto político” suficientemente poderoso que garantizara su ejecución.¹⁸¹ El ADM-19 perdió importancia, con sus antiguos militantes del M-19 asesinados o cooptados a entrar en la política tradicional. En Urabá, los antiguos cuadros políticos del EPL se habían integrado al aparato de “seguridad” paramilitar de Fidel Castaño.¹⁸² El terror sectario sobre la izquierda fortaleció las posiciones paramilitares y militares en enclaves estratégicos como Urabá. Entre 1991 y 1994, murieron allí en Urabá 274 militantes de Paz y Libertad (el partido político del EPL) principalmente a manos de las FARC.¹⁸³ Después de que el EPL se desmovilizara en 1991, las FARC

180. Romero, *Paramilitares*, pp. 178-89.

181. *Ibíd.*, p. 346; Camilo Castellanos, “A la nueva república le falta sujeto”, en *Colombia: Análisis al futuro*, Bogotá, 1992, pp. 9-28.

182. Para eliminación del M-19, EPL y Quintín Lame, ver Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero, *De las armas a la política*, Bogotá, 1999; Lawrence Boudon, “Colombia’s M-19 Democratic Alliance: Un caso de estudio en Nuevo partido Auto-destrucción”, en *Latin American Perspectives*, 116 (28:1), enero 2001, pp. 73-92.

183. *Idem*, “Introduction: Prospects for Peace”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, pp. 25-29.

lucharon por ocupar sus territorios para hacer frente a su influencia en el sindicato de los trabajadores bananeros. Esto empujó a los militantes del EPL a los brazos de su antiguo enemigo, Fidel Castaño, lo que condujo a ataques en aumento contra el sindicato desde ambos lados. Las milicias urbanas del EPL asesinaron a 17 activistas del PCC en diciembre de 1993, por lo que las FARC masacraron a 35 seguidores del EPL.

Eran inequívocos los signos de “bandalización” y “lumpenización” del conflicto armado, ya que los números de secuestros y homicidios rompían el récord mundial a finales de la década de 1980 e inicios de la década de 1990, con líneas cada vez más confusas separando la violencia política de la criminal. En 1991, aproximadamente 4.000 homicidios fueron la causa del 42% de todas las muertes en Medellín, lo que representó una tasa de 325 personas por cada cien mil, cinco veces más alta que los competidores no colombianos como Río de Janeiro y ocho veces más alta que en Sao Paulo.¹⁸⁴ En América Latina, solamente Perú había sido testigo de un comparable grado de ascenso y descenso del conflicto armado; pero, la economía de Perú, como otras en la región después de la crisis financiera

184. Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas”, en Sánchez y Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, p. 61.

de 1982, colapsaron, mientras que la economía colombiana se encontraba en los estándares de crecimiento establecidos por economistas neoliberales.

Gaviria puso en marcha la plataforma que López Michelsen anunció en los años 70, moviendo la economía hacia un modelo de negocios agrícolas de exportación, manufactura con capital intensivo, especulación en los alquileres de propiedades rurales y urbanas, así como también de explotación del petróleo, carbón y oro por parte de empresas multinacionales. Quizás debido a la entrada de narco-dólares, en contraste con el resto de Latinoamérica, la economía crecía sostenidamente en los años 80, a pesar de la multiplicidad en los tipos de violencia. Pero Gaviria pensaba que Colombia aún no había absorbido por completo el mensaje del Consenso de Washington. Por lo que lanzó un programa de reestructuración neoliberal a gran escala que disciplinara al sector público de la clase media, a la clase trabajadora organizada y al campesinado. Con la ayuda de Álvaro Uribe, para entonces senador del Partido Liberal, Gaviria degolló a la fuerza laboral del sector público al privatizar la salud y la seguridad social, estableciendo la autonomía del Banco Central, liberando la moneda y el sector financiero, reduciendo los aranceles y las cuo-

tas de importación, incrementando el impuesto sobre el volumen de ventas y flexibilizando el trabajo. Se firmaron contratos de exploración de petróleo con multinacionales, sobre cláusulas incluso más suaves que las existentes anteriormente.

Un efecto inicial de la reestructuración neoliberal fue alimentar el *boom* de la construcción financiado por el narcotráfico, lo que produjo el aumento de la inflación. Un reporte de la OCDE sobre las reformas de Gaviria concluía que, de todos los sectores productivos, los carteles de la droga estaban entre los más consistentemente favorables para las políticas neoliberales, incluso mucho más que otros grupos de industriales, terratenientes, exportadores modernos o servicios financieros (mucho menos las fuerzas armadas o la Iglesia).¹⁸⁵ Ellos prosperaron a expensas del dinero y comida de los productores agrícolas, quienes quedaron en la ruina debido a los bajos aranceles sobre las importaciones.

La narco-burguesía ayudó a enterrar lo que quedaba de la industria manufacturera nacional, ya que las importaciones por contrabando a través de Colón, Pa-

185 . Sebastian Edwards, *The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: Colombia*, Informe de la OECD 2001, pp. 39-41 y Tabla 3.3.

namá, demostraron ser la principal salida del lavado de dinero.¹⁸⁶ En 1988, contaban con un estimado de 1 millardo de dólares, o el 22 por ciento del total de importaciones, y gozaban del apoyo o complicidad de oficiales aduaneros y políticos. Las políticas industriales, agrarias y financieras eran dictadas en gran medida por los intereses de la narco-burguesía, la cual aceleró la reorientación hacia un capitalismo rentista y una reacción regional. La apertura económica fue un “*fait accompli*” años antes de que ésta se institucionalizara formalmente” bajo el gobierno de Gaviria.¹⁸⁷

Aunque a primera vista, Gaviria buscó negociar con las FARC, para 1992, éste había viró a la derecha, buscando una “guerra holística” al bombardear y ocupar sus cuarteles generales en mayo. Negoció con los traficantes, a quienes se les habían dado ligeras sentencias e inmunidad de extradición a cambio de confesiones y colaboración con el gobierno colombiano. Luego de recibir garantías de que la extradición le sería prohibida

186. Richani, *Systems of Violence*, pp. 101-9. Ver también, Francisco Thoumi, *La economía política del narcotráfico*, Bogotá, 1994.

187. En *ibid.*, p. 196 n. 53, una economía rentista se define como “aquella donde la formación de capital está basada principalmente en la extracción de recursos naturales y la especulación de la tierra... y en el desarrollo de la infraestructura comercial en oposición a la economía diversificada basada en la producción de bienes. El libre mercado y el proceso de incorporación a los mercados mundiales facilita las economías rentistas”.

en la nueva Constitución, Escobar se rindió y se construyó a sí mismo una prisión (La Catedral) en 1991, la cual dotó con guardaespaldas de su propia selección hasta que finalmente se escapó en septiembre de 1992. Para ese momento, paralizado por la paranoia, Escobar ya había asesinado a muchos de sus más cercanos socios y los había enterrado en los alrededores de La Catedral. Los sobrevivientes se unieron en su contra con el Cartel de Cali, la DEA, la CIA, la policía y los servicios de inteligencia colombiana, sectores del ejército, el DAS (el equivalente a la CIA en Colombia), el FBI y la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduana.¹⁸⁸

El ataque frontal de Escobar sobre el Estado lo forzó a ceder, pero el poder no estaba tan fragmentado como para que un solo empresario aguerrido pudiera sobrevivir a las fuerzas combinadas de sus numerosos enemigos. El cartel de Cali empleó una estrategia distinta a la empleada por Escobar, lo que garantizaba su supervivencia temporal en la guerra en su contra. El cartel de Cali, en vez de basarse en el terrorismo urbano para luchar contra su extradición a los Estados Unidos como lo había hecho Escobar, más bien se infiltró en la política, las instituciones oficiales y la alta sociedad. Sus inversiones

188. Mark Bowden, *Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw*, New York, 2002.

tenían más diversidad, su comportamiento era discreto, y a diferencia de Escobar, nunca experimentaron con el populismo antiimperialista, ni donaron viviendas o patrocinio disperso a clientes subalternos o a movimientos políticos regionales públicamente organizados.¹⁸⁹

La muerte del cartel de Medellín fue acelerada por la tendencia izquierdista de Escobar, pero por encima de todo, por su incapacidad de impedir que la presión de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos la fracturaran. Escobar aterrorizó a viejos socios de los cuales sospechaba que trabajaban con las autoridades. Por su parte, los miembros sobrevivientes del cartel de Medellín se aliaron con el cartel de Cali y con las ya mencionadas agencias gubernamentales de Colombia y Estados Unidos. Fidel y Carlos Castaño encabezaban el grupo de los “perseguidos por Pablo Escobar” (Los Pepes) y dirigían operaciones de terror en Medellín contra los familiares de Escobar, sus amigos, empleados, las familias de los empleados y contra todo aquel que permaneciera leal a él, quienes eran torturados, asesinados o “desaparecidos”.

189. Escobar se consideró a sí mismo un hombre de izquierda, un enemigo del imperialismo y la oligarquía, tuvo vínculos con el M-19 a principios de la década de 1980 y con el ELN a comienzos de la década de 1990. Alonso Salazar, *La parábola de Pablo: Auge y caída de un gran capo de narcotráfico*, Bogotá, 2002, pp. 85-87, 103, 268.

En lo que se refiere a la confrontación del barón de la cocaína y latifundista más poderoso del mundo, el gobierno colombiano delegó la represión a grupos que poco a poco se habían encargado de luchar contra las insurgencias, en coordinación con la “seguridad” del Estado y las fuerzas de inteligencia. La asociación del gobierno con los vínculos entre la contrainsurgencia y el crimen organizado debilitó la autoridad y soberanía estatal, y la influencia de los narcóticos en la política no terminó con la muerte de Escobar, la cual apenas quitó la cabeza más visible del asunto.

Gracias al futuro presidente Andrés Pastrana y al gobierno de los Estados Unidos, la presidencia del liberal Ernesto Samper (1994-98) estuvo envuelta en acusaciones sobre contribuciones multimillonarias a su campaña por parte del cartel de Cali. Los nexos de Samper con los estupefacientes permitieron a los Estados Unidos descalificar a Colombia en su lucha contra las drogas y dismantelar el cartel bajo la supervisión estadounidense, e inclusive suspenderle la visa a Samper. Luego de que fueran dismantelados los dos carteles, a mediados de la década de 1990, proliferaron cientos de sindicatos más pequeños y más descentralizados y su influencia seguía ejerciéndose, especialmente en el

Partido Liberal. Colombia se había convertido en el segundo productor más grande de hojas de coca después de Bolivia, cuya producción cayó vertiginosamente a partir de 1997 como resultado del “Plan Dignidad”, un programa de erradicación manual patrocinado por el gobierno estadounidense.

Tal como sucedió durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos y el ejército colombiano abogaron por una solución militar al conflicto político de Colombia. El futuro de la “guerra contra las drogas” se había convertido en la “Operación Esplendor” (antesala al Plan Colombia), una campaña de fumigación que usaba glifosato sin la pretensión de un desarrollo alternativo, la cual comenzó en el Guaviare, Caquetá y Putumayo en 1995-96. Como respuesta, las FARC organizaron a los cultivadores de coca entre el año 96 y el año 97 para protestar en contra de las fumigaciones y las promesas incumplidas respecto a la inversión social, demostrando que ellos aún tenían fuertes nexos con los pobladores de la frontera y los recolectores de coca (*los raspachines*). En Putumayo, los cultivadores de coca fueron acusados de “amenazar la seguridad nacional”. La idea era pintar a las FARC como una narco-guerrilla, con el

fin de descalificarla como potencial interlocutor en las negociaciones de paz –la primera táctica empleada por el entonces embajador Lewis Tambs. Bajo este esquema, a las FARC debía considerársele como otro “cartel” y, por lo tanto, un actor criminal en vez de político.¹⁹⁰ La fumigación menoscabaría su base económica, al menos en teoría.

Entretanto, un severo ajuste de la política monetaria por parte del Banco Central afectaba la inversión, llevando a la industria de la construcción a la recesión. El FMI, que en 1998 hizo un llamado para superar la peor crisis económica de Colombia desde los años 30, no pudo haber sido más compasivo: su programa de reforma estructural de 1999, que estuvo acompañado de un préstamo de cerca de 1,9 millardos de dólares, hizo provisiones para la “flexibilidad” en vista de los “eventos que estaban fuera del control gubernamental”. Demostrando el colapso de la base productiva en las áreas rurales, el porcentaje del PIB arrojado por la producción agrícola descendió del 43% en 1980 al 13% en 1998, mientras que las exportaciones de café representaron sólo el 3% del PNB en

190. Ver William Ramírez Tobon, “¿Un campesino ilitico?”, en *Análisis Político*, 29, septiembre-diciembre, 1996, pp. 67-72.

1996. Durante la década de 1990, las importaciones de alimentos se triplicaron de 215 millones de dólares a 715 millones.¹⁹¹ El área de cultivos de coca también se triplicó en la segunda mitad de aquella década. La producción de amapolas aumentó de 0 (en 1989) a 61 toneladas métricas (en 1998), al tiempo que Colombia seguía aportando el 40% de las importaciones de marihuana en los Estados Unidos, así como el 90% de las de cocaína.

Debido a la constante demanda de consumo en los EE UU, la “guerra contra las drogas” y las políticas neoliberales contribuyeron con el fenomenal crecimiento de la economía por concepto de la droga, mientras que los agricultores de coca se convertían en la solución a la prolongada crisis en el campo. El fracaso de la economía en los cultivos comerciales comenzó en la década de 1960 y se deterioró, en los años 70, con el cambio hacia el agro-negocio (soya, algodón, arroz). La violencia política se intensificó a partir de finales de la década de 1970 y durante toda la década de 1980; para la década de 1990, la coca se convirtió, para los pobladores de las fronteras en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vichada, Guainía, Vau-

191 . Richani, *Systems of Violence*, p. 145.

pés, Sucre, Córdoba, el Chocó, Bolívar, Santander y, en menor medida, Antioquia, el Huila, Tolima, Cauca y el Meta, en el único cultivo suficientemente rentable para superar los altos costos de transporte producto de la falta de infraestructura.¹⁹² Esto produjo hasta tres cosechas por año y permitió que los campesinos recuperaran sus inversiones en uno o dos años. Ya para 1998, 80 por ciento de la superficie de las áreas controladas por las FARC en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés estaban cubiertas de coca.¹⁹³

No pudo haber sido más estrecha la conexión entre las políticas agrícolas neoliberales (que exacerbaban el declive a largo plazo de los campos) y la expansión de cultivos ilícitos bajo la soberanía insurgente. Un campesino del sureste de Bolívar, brevemente señaló: “para comercializar un saco de papa o de yuca al campesino

192. Para la colonización de Guaviare y Vaupés, ver Molano, *Selva adentro*; y de Vichada y Guainía, idem, *Aguas arriba*, Bogotá, 1990. La historia de la frontera cocalera es estudiada en William Ramírez Tobón, “La guerrilla rural en Colombia: ¿Una vía hacia la colonización armada?”, en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, vol. 4, no. 2, 1981, pp. 199-209; Fernando Cubides et al., *Colonización, coca y guerrilla*, Bogotá, 1989; Alfredo Molano, “Algunas consideraciones sobre colonización y violencia”, en Catherine LeGrand et al., eds, *El agro y la cuestión social*, Bogotá, 1994, pp. 27-41; y para un resumen del debate, ver LeGrand, “Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debate”, en *El agro*.

193. Ricardo Rocha García, *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico*, Bogotá, 2000, p. 143.

le cuesta entre tres mil y cinco mil pesos (alrededor de 3,50 \$) y es vendido en el mercado entre 10 mil y 12 mil pesos, dependiendo de la demanda... la coca es mucho más fácil de plantar y procesar... no hay necesidad de transporte ya que los narcotraficantes la compran en el pueblo a 1.500.000 el kilo de pasta y lo exportan a otros destinos".¹⁹⁴ Las FARC suministraron una estabilidad mínima para aquellos que de algún modo pudieran haber sido apabullados por la liberación de la agricultura y el huracán de la violencia rural.

Avance insurgente

Durante la década de 1990, las dos insurgencias que quedaban, las FARC y el ELN, mostraban la paradoja fundamental de una creciente deslegitimación política acompañada de un sorprendente crecimiento organizacional. Durante la década de 1970 y 1980, las guerrillas contaron con la simpatía de una significativa minoría de productores culturales colombianos, y mantenían vínculos con algunos sindicatos. En noviembre de 1992, un grupo de los escritores e intelectuales progresistas más importantes del país (Gabriel García Márquez entre ellos) escribió una carta abierta

194. Richani, *Systems of Violence*, p. 71.

a las FARC y al ELN, llamándolos a reconocer que había pasado la página de la historia y que era momento de deponer sus armas y seguir la reforma por medio de términos pacíficos.¹⁹⁵

La coyuntura pos Guerra Fría fue testigo de la derrota electoral de los *sandinistas* y el triunfo de los neoliberales financiados por los EE UU en Nicaragua, el estancamiento del FMLN en El Salvador y la decadencia de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y, por supuesto, no menos importante, el colapso de la Unión Soviética. Mientras que en otros lugares los insurgentes tendían a cortar los tratos de patrocinio hechos con los gobiernos neoliberales en nombre de la democracia electoral, el libre mercado y la globalización, las FARC y el ELN se concentraron, por el contrario, en el aumento de la extracción de rentas y en el ejercicio del poder político a nivel local. Como en el pasado, su respuesta al aislamiento de las tendencias globales y hemisféricas fue aislarse aún más a sí mismos. El aferramiento del poder estatal se perdía de vista, pero apareció la posibilidad de controlar los concejos municipales y las alcaldías.

195. "The Letter of the Intellectuals", en Bergquist et al., *Violence in Colombia, 1990-2000*, pp. 214-16. Para la respuesta guerrillera, ver *ibid.*, 216-20. También, Gonzalo Sánchez, "A Response to the Guerrillas", en *ibid.*, pp. 220-23, publicado originalmente en *El Espectador*.

La función de asignación de impuestos al mercado de pasta de coca por parte de las FARC las colocó en uno de los primeros escaños de la cadena de circulación de mercancías que terminaba en las narices estadounidenses y europeas. Durante el largo reinado de los carteles de Medellín y de Cali, la producción de la pasta de coca fue llevada a cabo en las regiones de tierras bajas cultivadoras de coca de Bolivia y Perú –y en un grado mucho menor en el territorio de las FARC al sur de Colombia–, donde la hoja de coca era transformada en pasta por familias de agricultores, llevada luego por vía aérea a laboratorios en la selva atiborrados de productos químicos, hecha cocaína pulverizada, luego transportada a depósitos de almacenamiento, para finalmente llevarla a ciudades de Estados Unidos y Colombia en carros, camiones, autobuses, botes, y aviones pequeños y comerciales. Debido a que eran las FARC quienes ocupaban el territorio fuera de los centros urbanos, fueron ellas también quienes impusieron las reglas de las transacciones de mercado, pero no podían supervisar directamente la producción de cocaína o asegurar las redes de distribución en el exterior. Así pues, contrario a lo que el término “narco-guerrilla” sugiere, las FARC eran cualquier cosa menos un cartel.

Las FARC operaban como un pequeño estado paralelo colector de impuestos y muchos narcotraficantes pudieron establecer relaciones de trabajo con ellos, lo que señalaba la importancia de la posición de las FARC en el proceso de procesamiento de la pasta de coca. Sin el surgimiento de la economía de la pasta de coca en el sur y sureste durante los años 70 y 80, las FARC no habrían tenido ni una red geográficamente extensa de clientes semidependientes en las fronteras, ni un fondo de guerra multimillonario en dólares con el cual expandir sus operaciones. El ejército colombiano se habría visto enfrentado a la tarea de tomar una región aislada, en vez de alrededor de 40 por ciento del territorio nacional dividido por tres cordilleras e innumerables ríos.

Durante muchos años, las FARC regularon el mercado de la pasta de coca y sin su monopolio relativo sobre la violencia, los traficantes habrían podido destruirse entre ellos con interminables miniguerras en la selva. La imposición de la ley y el orden, así como el mantenimiento de una reserva de apoyo en las regiones fronterizas, le permitió a las FARC desviar exorbitantes sumas de riqueza por medio del cobro de un impuesto conocido como *el gramaje*. Esto formó parte

de un patrón de extorsión establecido durante la Violencia, en el cual eran empleados el secuestro, *la vacuna* (un impuesto de guerra) y *el boleteo* (cartas amenazadoras) como tácticas para conseguir fondos.

Sin embargo, al intentar explicar por qué, década tras década, el Estado había fracasado en la ruptura de las bases de la resistencia armada, otros aspectos cruciales entraron en juego. Las FARC habían sido, por décadas, la fuerza armada de un movimiento campesino; aunque ligadas al clientelismo y las rentas, sus lazos con muchas comunidades en las regiones del sur y sureste eran de vieja data. Estos eran territorios escasamente poblados de los cuales el gobierno colombiano nunca se había encargado; lugares sin infraestructuras ni servicios públicos, sin ni siquiera clientelismo partidista, pero que habían experimentado auges sucesivos de quinina y caucho. A partir de la década de 1950, se llenaron de personas que escapaban de la violencia en las tierras altas. A mediados de la década de 1960, las FARC respaldaron el agrarismo radical que había marcado la década de 1930 y 1940. Antes de la creación de las ANUC, en 1968, y la CRIC, en 1971, las FARC ya eran la fuerza más importante (aparte del PCC, al cual estaban orgánicamente vinculados) que hacía un lla-

mado al gobierno para que cristalizara las promesas de reforma agraria y de desarrollo infraestructural, para que creara cooperativas de crédito y proporcionara asistencia técnica y protección de precios.

Las FARC mantuvieron el legado de la democracia social agraria heredado de los años 30 y 40, combinándolo con las tradiciones de venganza propias del periodo de la Violencia de los años 50 y 60. Esta descripción de las políticas de la FARC aplica a los reductos históricos en el Meta, Guaviare y Caquetá, donde la autonomía de las FARC estaba más consolidada. Esta democracia social autoritaria, en el contexto de la economía ilícita de la cocaína de la década de 1970 y 1980, proporcionó una medida de seguridad y una garantía de los medios de subsistencia para las personas, que, de lo contrario, no habrían tenido nada. La ausencia del Estado les permitió a las FARC establecer redes verticales de mecenazgo y clientelismo, pero además construyeron sistemas de infraestructura (puentes, caminos, sistemas de riego), ofrecieron o supervisaron el suministro limitado de servicios básicos (agua, aguas servidas, atención médica, educación) y gobernaron tanto territorios como poblaciones.

En la década de 1980, la genuina simpatía en algunas de las “zonas liberadas” les dio a las guerrillas un apoyo importante. De hecho, en esa misma década, en el Meta, el Guaviare, Caquetá y Putumayo, la esperanza de la reforma agraria había sido dejada en el olvido; la economía de la coca fue la fiebre del oro en su momento. Las FARC ofrecieron la única protección disponible contra la brutalidad arbitraria de los traficantes en el Meta y el Guaviare.¹⁹⁶ Los mecanismos de control laboral a través del endeudamiento y los contratos que se hacían valer a través de asesinatos (bien fuera heredados del *boom* del caucho en el sureste o trasplantados de las minas de esmeraldas en las montañas de Boyacá¹⁹⁷) presentaban a las FARC como árbitros muy necesarios en los mercados laborales.

Hasta hace poco, la violencia de las FARC se había desarrollado según reglas predecibles, si acaso implacables, que pudieran garantizar el “orden” y la “estabilidad” en la frontera, mientras que el narco-terror

196. Para Caquetá, ver Juan Guillermo Ferro Medina, “Las FARC y su relación con la economía de la coca en el sur de Colombia: Testimonios de colonos y guerrilleros”, en Sánchez y Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*, pp. 411-42. Las FARC se opusieron inicialmente al cultivo de coca, pero la desesperante situación económica de los pobladores de la frontera los convenció de que habría que tolerarlo.

197. María Victoria Uribe, *Limpiar la tierra: Guerra entre esmeralderos*, Bogotá, 1992.

desencadenaba el “caos” e “incertidumbre”, particularmente en cuanto a los precios de la pasta de coca. Las FARC se asignaron tareas que el Estado no había sido capaz de llevar a cabo en aquellas zonas fronterizas del sur y el sureste pobladas por campesinos que huían de la violencia política y de la crisis agraria de las tierras altas. Las FARC eran el gobierno local y regional, y medidos por la vara del recuerdo colectivo, eran, inclusive en sus peores momentos, mejores que el gobierno nacional o los traficantes.

La expansión territorial y financiera de la guerrilla vino acompañada de mayores niveles de secuestros, asesinatos selectivos y carros-bomba; las mismas tácticas que Escobar convirtiera en rutina. Como en otros lugares, el terror de Estado proporcionó el combustible sin el cual el terrorismo insurgente no habría podido hacer combustión, pero en Colombia, ambos se complementaban por el narco-terrorismo de la mafia.

Mientras que para 1978, las FARC tenían 17 frentes en regiones periféricas, en 1994 ya eran 105 los frentes que operaban en 60% de los 1071 municipios colombianos.¹⁹⁸ Su liderazgo seguía estando dominado

198. El número de frentes de las FARC es tomado de Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas,” p.41.

por minifundistas campesinos (un intelectual de clase media y un banquero oligarca eran las únicas excepciones). Sólo 10% de las filas de las FARC eran de “clase media”, un 20% era clasificado como “clase trabajadora” “estudiantes” o “maestros de escuela” y un 70% de sus miembros eran considerados “campesinos” –principalmente proletarios rurales que trabajaban como agricultores y/o recolectores de coca. Mientras que de 30 a 40 por ciento de los combatientes y líderes de los niveles medios eran mujeres, los hombres mantenían el control sobre el Alto Mando.

Para 1996, el ELN tenía entre 4.000 y 5.000 combatientes, grandes milicias urbanas y redes de apoyo, así como una presencia en 350 municipios. Sus principales fuentes de ingreso provenían de los impuestos de protección, la extorsión, robos de bancos y secuestros.¹⁹⁹ Como rechazó entrar al negocio de la cocaína, el ELN desarrolló una notable dependencia de los secuestros, con lo que ganó eternas enemistades en las clases media y dominante, particularmente en las regiones. Al igual que en organizaciones guerrilleras latinoameri-

199. A diferencia de las FARC, el ELN se benefició mínimamente de la narco-economía –un legado de su trayectoria en la teoría de la liberación. Las plantaciones de coca florecieron en áreas donde el ELN tenía presencia al sur de Bolívar y en las montañas del Catatumbo al norte de Santander, que fueron tomadas por las AUC a finales de 1990.

canas anteriores (con las excepciones de las FARC y el EZLN de México) las posiciones de liderazgo de alto nivel eran del dominio exclusivo de intelectuales de clase media, pero los comandantes del ELN eran casi exclusivamente campesinos. Los reclutas provenían principalmente de familias minifundistas, pero el ELN tuvo también éxito atrayendo a estudiantes y jóvenes desempleados de ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar y Cúcuta. Fuera del Comité Central (que, como el Estado Mayor de las FARC, continuaba siendo bastión de exclusividad masculina) el 20% de los líderes del ELN eran mujeres, un número a duras penas proporcional a sus números en las bases.

A medida que se fueron expandiendo, las FARC y el ELN sufrieron procesos de racionalización burocrática –el principal objetivo de cada organización era consolidarse y proyectarse a sí misma.²⁰⁰ Con carencia de redes amplias de transporte y distribución, las FARC no estaban en posición de competir con las AUC en los mercados internacionales, pero le ofrecían alimentos, vestido, empleo, armamento de alta tecnología, un teléfono celular y un salario mensual a jóvenes empo-

200. Fernando Cubides, *Burocracias armadas*, Bogotá, 2005. Ver también, Francisco Gutiérrez, “Prólogo”, en Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Ramón, *El orden de la guerra: Las FARC-EP entre la organización y la política*, Bogotá, 2002, p. 10.

brecidos campesinos que no querían ser soldados del gobierno colombiano, ni soldados campesinos, espías o paramilitares. La edad promedio entre los combatientes de las FARC era de 19 años y se les pagaba 90 dólares mensuales.²⁰¹

Otro elemento que contribuyó con el crecimiento de las guerrillas fue la ruptura de las familias rurales como una unidad económica-cultural capaz de dar sustento y protección a sus miembros. El neoliberalismo había creado una generación de jóvenes rurales sin horizontes futuros ni seguridad personal: las FARC y el ELN les ofrecían la posibilidad de obtener ambas cosas.²⁰² Puesto que en el campo, las opciones eran extremadamente limitadas para las mujeres jóvenes, las FARC (en mayor medida que el ELN) ofrecieron oportunidades para el ejercicio del poder político-militar, especialmente para aquellas que no tenían educación secundaria. Muchas mujeres jóvenes sin estudios en las áreas rurales prefirieron la guerrilla a las posibilidades de desplazamiento, desempleo o prostitución.

201. Richani, *Systems of Violence*, p. 148.

202. Ferro Medina y Uribe, *El orden de la guerra*, pp. 66-74. Las mujeres campesinas buscan caminos de ascenso a través de un mayor dominio del alfabetismo básico y de la tecnología de las comunicaciones.

En 1996 y 1997, las FARC lanzaron un número de ofensivas militares, sin precedentes tanto en escala como en alcance, como para dramatizar la fragilidad de la soberanía del Estado: con divisiones de entre 300 y mil soldados, atacaron las bases del ejército en Las Delicias, Patascoy, San Miguel, Pueres, Caguán, San Juanito y San José. Las dudas que existían sobre la habilidad que tenía el ejército colombiano para responder estaban bien fundadas. Mientras que la proporción promedio a nivel mundial de personal administrativo por cada soldado era de 3:1, en Colombia era de 6:1. Además, el ejército tenía poca motivación para derrotar a las guerrillas.²⁰³ Debido a que una amenaza guerrillera más grande (real o no) representaba mayor presupuesto militar, mínima supervisión regulatoria, protección del escrutinio público y un centralismo institucional indiscutible, el ejército era el principal beneficiario de su propia ineffectividad.

Al igual que en el gobierno de Turbay (1978-82), durante el período de Samper, las Fuerzas Armadas Colombianas se presentaron como el último baluarte del Estado. Los gastos de defensa se dispararon a partir de 1995, y ya para el año 1998, eran tres veces más

203. Richani, *Systems of Violence*, p. 184 n. 23.

altos de lo que habían sido en 1994. Aún así, esto no generó una mayor efectividad en el combate, algo nada sorprendente debido a que la mayoría del dinero fue destinado a gastos administrativos. En 1997, de un total de 131.000 soldados, sólo 22.000 (o 20%) estaban listos para el combate. La ayuda de los EE UU tuvo un bajón de 1991 a 1996, período durante el cual la mayoría de la “ayuda” antidroga estuvo destinada a la policía, en vez del ejército, lo que fue motivo de crítica por parte de las organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos y Europa.

Con el ejército lisiado por su propia brutalidad e incompetencia, las insurgencias comenzaron a custodiar las comunidades, les proporcionaron servicios públicos y vigilancia regulatoria, determinaron las asignaciones presupuestarias, influyeron en la participación electoral, restringieron o permitieron la movilidad por la geografía e incluso fueron los árbitros de las disputas entre vecinos, amigos y familiares. Lo que es más importante, las FARC y el ELN recolectaron impuestos de los narcotraficantes, ganaderos, pequeños negociantes –hombres y mujeres– y propietarios de tierras de mediano y gran tamaño. Junto a los secuestros, la recolección de impuestos fue, quizás, una de las tá-

ticas guerrilleras menos aceptadas. Mientras que las AUC cobraban impuestos, la mayoría de los inversionistas, dueños de propiedades y negocios preferían pagar altas tasas por pagos de protección a fervientes defensores de la “propiedad privada” y la “libre empresa”. Lo mismo sucedía con las corporaciones extranjeras, particularmente en el sector petrolero, que tenían que pagar altas tarifas y estaban frecuentemente sujetos a las exigencias de inversión social por parte del movimiento insurgente campesino en las áreas de salud, educación e infraestructura. En Casanare y Arauca, por ejemplo, las insurgencias obligaron a la British Petroleum a invertir en escuelas, capacitación vocacional y proyectos de desarrollo local.

Las compañías petroleras y otras corporaciones multinacionales preferían invertir en ejercer presión al gobierno norteamericano para que incrementara la ayuda militar a Colombia, en vez de seguirle pagando a las insurgencias. Los dos actores más grandes en el mercado petrolero colombiano, Occidental y BP-Amaco, se fusionaron con otras firmas del área energética, incluyendo Enron, para formar una sociedad comercial colombo-americana en Washington. Se documentó su apoyo financiero al ejército y a los paramilitares. De-

bido a que los derechos de propiedad privada estaban impugnados en gran parte de Colombia, no fue una sorpresa que algunas corporaciones extranjeras le pagaran impuestos de protección a los paramilitares como una “póliza de seguro capitalista”.²⁰⁴

Contra-avance

Aunque la expansión guerrillera en la década de 1990 fue excepcional, el avance paramilitar fue aún más impresionante. Como hemos visto, la extorsión de la guerrilla y la amenaza que ellos representaban para la propiedad y la seguridad de las élites explicó parte de la reacción paramilitar, la cual empezó como una respuesta política al proceso de paz de Betancur en 1982-83, creció en la lucha por impedir la democratización de la descentralización política bajo el gobierno de Barco en 1987-88, y se contrajo después de la desmovilización de la guerrilla y la Asamblea Constituyente bajo el gobierno de Gaviria en 1991-92. Surgió nuevamente con el gobierno de Samper, aunque con un ritmo menor del que tuvo con el gobierno de Barco.

204 . La frase es tomada de Fernando Cubides, “From Public to Private Violence”, en Bergquist et al., eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, p. 133. Sobre las corporaciones multinacionales y los paramilitares, ver Richani, *Systems of Violence*, pp. 113-16; y Livingstone, *Inside Colombia: Drugs, Democracy and War*, pp. 80-99.

Ya que las insurgencias tuvieron pocos avances en lo político (no así en lo territorial y militar) durante el gobierno de Samper, hubo poco impulso para priorizar la expansión e integración política.

Cuando Fidel Castaño desapareció en 1994, Carlos Castaño se encargó del negocio familiar, fundando las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) ese mismo año. Durante el período de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia desde 1995 hasta 1997, las ACCU les quitaron a las FARC el corredor estratégico de Urabá hacia el Caribe, pactando alianzas con el ejército y otros bloques paramilitares regionales bajo el liderazgo de las ACCU.²⁰⁵ Encendido por la victoria en Urabá, el jefe de las AUC, Carlos Castaño, predijo que habría muchas, muchas masacres más bajo el modelo de Mapiripán, en el Meta.²⁰⁶

Ubicada en el corazón del territorio de las FARC, en la encrucijada de la economía de la coca, cerca de la frontera del Meta y Guaviare, Mapiripán era literalmente un caso de muertes predichas. El 12 de julio de 1997 dos vuelos charter de cincuenta “soldados” paramilitares volaron de Urabá al aeropuerto ubicado

205. Antioquia es uno de los tres departamentos –junto con el Chocó al sur y Córdoba al norte– donde se encuentra Urabá.

206. *El Tiempo*, 28 septiembre 1997.

en San José de Guaviare. El aeropuerto estaba bajo el control del Ejército, al lado de la base antinarcóticos del Batallón Joaquín París, para el momento la única base en Colombia desde donde se dirigían las operaciones de fumigación llevadas a cabo por los EE UU. En presencia del sargento a cargo de la seguridad del aeropuerto y un oficial de inteligencia del ejército, los paramilitares descargaron armas, uniformes y equipos de comunicación, que los soldados luego ayudaron a cargar en camiones que los llevarían a navíos. Para llegar a Mapiripán desde San José por río, pasaron por el punto de control de la Escuela Especial de Entrenamiento del Ejército Colombiano en Barracón, ubicada en una isla río abajo desde San José.

Entrenadores norteamericanos del 7° Grupo de Fuerzas Especiales ayudaban a instruir a su contraparte colombiana de la 2ª Brigada Móvil en planificación militar. La presencia paramilitar, reforzada con 180 tropas reclutadas localmente, pasó “desapercibida” porque el comandante del Barracón, el coronel Lino Sánchez, graduado de la Escuela de las Américas, había ayudado en la planificación de la masacre. Una vez en Mapiripán, los paramilitares se dedicaron a cinco días de tortura y asesinato, llevando al matadero del pueblo

a víctimas de su lista de “seguidores de la guerrilla”. Allí, entre llantos y gritos de ayuda que se escucharon en todo el pueblo, fueron destripados para que no pudieran flotar luego de ser arrojados en el río. El juez Leonardo Iván Cortés, quien luego huyó del país bajo amenazas de muerte, le escribió cartas y llamó por teléfono al ejército. El coronel Hernán Orozco afirmó que no tenía tropas disponibles, pero prometió avisar de ello a su superior, el general Uscátegui, quien estaba encargado de la VII Brigada en el Meta y el Guaviare, con cuarteles en Villavicencio. Como siempre, ni la policía ni el ejército llegaron sino hasta después de que finalizara la matanza.²⁰⁷

Irónicamente, como un eco del pedido del Ché Guevara de “muchos Vietnams”, la oscura profecía de Carlos Castaño se hizo realidad, al multiplicarse las masacres paramilitares de 286 en 1997 a 403 en 1999, principalmente en áreas de concentración de tierra y

207. *El Tiempo*, 26-28 enero de 2005; *Semana*, 30 enero de 2005; *El Espectador*, 6 febrero de 2006; “El secreto de los militares”, en *Semana*, 6 febrero de 2005. Para una descripción más detallada de la masacre, ver Kirk, *More Terrible than Death*, pp. 250-56. En marzo de 2005, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA declaró al Estado colombiano responsable por la masacre de Mapiripán. Junto con Carlos Castaño y otro líder paramilitar, el coronel Lino Sánchez fue sentenciado a 40 años, mientras que el sargento a cargo del aeropuerto de San José recibió 32 años de sentencia. Uscátegui y Orozco cumplieron 40 y 38 meses de cárcel, respectivamente.

diferenciación de clase.²⁰⁸ Luego de la ofensiva en Meta y Guaviare en 1997, las AUC se mudaron a Santander del norte, Santander, al sur de Sucre, a la parte de Urabá en el Chocó. La curva del crecimiento paramilitar coincidió en gran medida con la de las hectáreas destinadas al cultivo de coca, ya que, bajo la dirección de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, las AUC expandieron infinitamente su control sobre el proceso de producción, transporte y distribución de la cocaína. El número de masacres –la mayoría, aunque no todas, cometidas por paramilitares trabajando conjuntamente con el ejército o limpiándoles el camino- se cuadruplicaron durante la segunda mitad de la década de 1990.²⁰⁹

Los desarrollos en Urabá muestran cómo el desarrollo agroindustrial, las extensas haciendas ganaderas y la producción y el transporte de la cocaína iban mano a mano con un proyecto paramilitar de conquista del territorio regional, el cual consolidó los patrones de dominio racial y explotación de clases derivados del colonialismo. Como gobernador de Antioquia, Uribe comenzó a legalizar y regular las milicias antiguerrilla (Convivirs, o Cooperativas de Vigilancia Rural). Las Convivirs, gran idea de Rafael Pardo, ministro de

208. Livingstone, *Inside Colombia*, p. 10.

209. Richani, *Systems of Violence*, p. 120.

Defensa de Gaviria, eran estructuralmente similares a las Rondas Campesinas peruanas o las Patrullas de Defensa Civil guatemaltecas de la década de 1980. Fueron moldeadas en base a un programa en Córdoba que había agrupado a 950 hacendados en un sistema conectado por una red de comunicaciones de alta tecnología. Vinculado tanto al AAA del general Camacho como al MAS, el general Harold Bedoya encabezó las Fuerzas Armadas de Colombia desde 1994 hasta 1997 y apoyó abiertamente a las Convivirs. Para Bedoya, la colaboración civil con las fuerzas armadas era obligatoria. El Valle del Magdalena Medio fue el referente del general Bedoya.²¹⁰

Durante los dos años que Uribe fue gobernador de Antioquia, las Convivir desplazaron a 200.000 campesinos, principalmente de Urabá. Antioquia contó con el 18% de los desplazados a nivel nacional –más que ningún otro departamento– y el senador conservador antioqueño, Fabio Valencia Cossio, acusó a Uribe de “patrocinar a los paramilitares” que habían contribuido en un casi 400% con el incremento de la tasa de ho-

210. Kirk, *More Terrible than Death*, p. 192-93. Bedoya, para quien Human Rights Watch era una organización “al servicio directo” de las FARC, renunció en 1997 luego de que el presidente Samper rechazara tomar medidas mucho más represivas en contra del movimiento cocalero.

micidios.²¹¹ En la población vecina de Córdoba, donde el caudillo paramilitar Salvatore Mancuso dirigía una unidad de Convivir, éstos desplazaron a 10% de la población, sólo en 1995.

Bajo las provisiones de un estado de sitio y con la aprobación de Samper, Uribe creó en 1996 las “Zonas de Orden Público” bajo el mando del general Rito Alejo del Río –otro veterano del MAS, y protegido de Bedoya– y la XVII Brigada. El general Bedoya declaró que aquellos que se opusieran a estas zonas, “defendían los intereses de los narcotraficantes o de los subversivos”²¹². De acuerdo con el coronel Carlos Velásquez, quien sirvió bajo su mando, la primera jugada del general Del Río fue retirar las tropas de las áreas donde protegían a los civiles de las incursiones paramilitares.²¹³ En los cuatro municipios del eje bananero, la tasa de homicidios era de 500 por cada 100.000, en contraste con el 60 por cada 100.000 a nivel nacional (en los Estados Unidos era 8 por cada 100.00). Aunque el número total de homicidios en la zona bananera de Urabá era ya alta antes de que Uribe fuera electo go-

211. Citado en Romero, *Paramilitares*, p. 195.

212. Citado en *Ibid.*, p. 218.

213. Kirk, *More Terrible than Death*, p. 194. Luego de archivar un informe sobre la implicación de Del Río con los paramilitares, Velásquez fue despedido por el general Bedoya por falta de *esprit de corps*.

bernador (400 en el año 1994), empeoró durante su período: en 1995 se duplicó a 800; en 1996 aumentó a 1.200; y en 1997 fue de 700. En 1998, el año después de la salida de Uribe, la cifra cayó a 300.²¹⁴

En la década de 1950 y 1960, el general Ruiz había sido enfático sobre la importancia de la inversión social, pero en la era neoliberal, esa variable fue expulsada de la ecuación contrainsurgente. Continuando con la línea de la doctrina de seguridad nacional, cuando el Plan Cóndor lanzó su larga y sangrienta sombra sobre Suramérica en la década de 1970, el general Camacho creó y promovió grupos paramilitares durante el período de Turbay. La meta había sido reducir el nivel de violaciones de los derechos humanos atribuibles a la policía y a las Fuerzas Armadas colombianas mientras se aniquilaba “la subversión”. La presencia paramilitar se propagó progresivamente durante los periodos de Turbay, Betancur, Barco y Gaviria, pero dada la fragmentación regional del poder, las contrainsurgencias no estuvieron en la capacidad de funcionar como una fuerza unificada sino hasta mediados de la década de 1990.

De ahí en adelante, las contrainsurgencias se volvieron más efectivas en la generación de empleos, a

214. Romero, *Paramilitares*, p. 181.

la vez que se redistribuía la riqueza, el poder político y la propiedad hacia lo alto de la pirámide social de los blancos. El estado regional estaba preparado para buscar formas de “legalizar y regular” las milicias antiguerrilla, erosionando aún más la línea que separa la política del crimen organizado. Las agencias de represión estatal habían cometido más del 75% de las violaciones de los derechos humanos a finales de los años 80, pero para finales de la década de 1990, las AUC eran responsables de casi el mismo porcentaje, mientras que el ejército y la policía cometieron apenas un 5% del total de las violaciones.²¹⁵ Desde 1997 hasta el 2000, se duplicó el número de paramilitares.

Así se suponía que debía trabajar la contrainsurgencia privatizada y subcontratada. Amnistía Internacional, America’s Watch y otros grupos de derechos humanos señalaron conexiones estrechas entre las Convivir y los paramilitares. La unidad orgánica entre ambos era evidente: a fines de 1999 cuando la Corte Constitucional proscribió a las Convivir por numerosas masacres de civiles indefensos, su infantería pasó sencillamente a las filas de las AUC.

215. Alfredo Molano, “División creadora”, *El Espectador*, 8 de febrero de 2003.

Las víctimas eran cualquier cosa menos pasivas. Con el apoyo de grupos estadounidenses de derechos humanos como las Brigadas Internacionales de Paz, la Red de Apoyo de Colombia y la Fraternidad de Reconciliación, un movimiento “comunitario de paz” recobró fuerzas en Urabá a mediados de la década de 1990.²¹⁶ La violencia política contra los civiles alcanzó niveles impactantes, incluso para los estándares colombianos, ubicándose posteriormente entre los niveles más altos del mundo. Luego de que las ACCU desplazaran a 15.000 personas del área alrededor de las haciendas de Apartadó, con la ayuda de la Diócesis Católica y algunas ONG colombianas, los campesinos que se negaron a ser desplazados fundaron la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (con una población de 1.200 personas), en marzo de 1997. Las comunidades de paz como San José se establecieron como zonas neutrales multiétnicas fuera del gran sistema de guerra. Las adversidades, particularmente el asesinato de líderes, las masacres y los bloqueos económicos no frenaron el trabajo de las comunidades para vivir en paz sin tener que pagar un tributo a la autoridad militar. Gloria

216. El pacífico movimiento comunitario en Urabá comenzó a finales de la década de 1980 cuando los *tangueros* paramilitares de Fidel Castaño, conducidos por su hermano menor, Carlos, masacraron a civiles y despojaron a las comunidades por su apoyo a la UP.

Cuartas ganó reconocimiento internacional por sus esfuerzos para proteger la población civil como alcaldesa de Apartadó; ella acusó a soldados del gobierno de permitirle a las ACCU haber decapitado al niño César Augusto Rivera, delante de ella y de 100 niños más durante la inauguración de la “Semana de la Paz” en agosto de 1996. En una reunión de oficiales departamentales, el secretario de Gobierno de Uribe, Juan Moreno, públicamente acusó a Cuartas de ser vocera de las FARC, mientras que el general Del Río la demandó por difamación.²¹⁷

En vista de la represión masiva que provenía del paramilitarismo de derecha y de la insurgencia de izquierda, las comunidades de paz –como la de San José de Apartadó– lucharon por una visión diferente de la soberanía como la paz y la autodeterminación, al igual que por los derechos sociales colectivos y los derechos políticos y civiles individuales. Sin embargo, a finales del siglo XX, la represión organizada de la derecha y la hipertrofia militar de la izquierda armada condujeron a la relativa debilidad y la fragmentación de los movimientos populares radicales de Colombia. Como estos últimos eran considerados el “ala desarmada de

217. *Ibid.*, pp. 212-14.

la subversión”, los activistas de los movimientos se convirtieron en blanco para los asesinatos sistemáticos por parte del ejército y de los paramilitares desde finales de la década de 1970. Una década después, con un partido político de izquierda eliminado, ni las insurgencias ni la contrainsurgencia consideraron válida la distinción entre combatientes y civiles.

Bajo una economía de guerra capitalista y liberal, prevaleció en las fronteras urbanas y agrarias el individualismo anárquico y atomista, con el crimen organizado transformando la energía antisocial en un valor a través de la violencia, la intimidación y la eliminación física de la amplia izquierda.²¹⁸ Junto a la caída de los precios en 1989, los nexos de la mafia de las drogas y los paramilitares le pusieron el último clavo al ataúd de la república cafetalera construida a finales del siglo XIX. Las mafias de la cocaína inyectaron sangre fresca a las viejas élites terratenientes del campo, poniendo a los dos partidos tradicionales en sistemas de apoyo a la vida y revitalizando el latifundio como concentración geográfica del poder político y económico en regiones y municipios. Las corporaciones multinacionales des-

218. Fabio López de la Roche, “Cultura política de las clases dirigentes en Colombia: permanencias y rupturas”, en López de la Roche, comp., *Ensayos sobre cultura política colombiana*, p. 181.

cubrieron que esa “seguridad” narco-paramilitar les ofrecía las únicas garantías para la propiedad privada y el control laboral.

La descentralización política y la delegación de la represión (rasgos característicos de la década de 1990) debilitaron y deslegitimaron la autoridad del gobierno central que se suponía debían apoyar. La descentralización, proyecto favorito del Banco Mundial, significó que tanto gobernadores como alcaldes fueron electos popularmente por primera vez desde 1886, pero esto sólo exacerbó la falta de autoridad del gobierno central y estimuló la reducción del poder a nivel regional de los narco-terratenientes en el Partido Liberal.

Empleando tácticas de terror promovidas en la década de 1950, este bloque aisló exitosamente las políticas electorales del desafío de la amplia izquierda. Esto ayudó a las insurgencias a acelerar la tendencia hacia una expansión territorial durante la primera mitad de la década de 1990, mientras que, en la segunda mitad de la década, grupos paramilitares regionales anteriormente dispares se unieron en una organización integrada a nivel nacional. La guerra química financiada por los EE UU –que rociaba con el *round-up ultra* de Monsanto o glifosato las áreas tomadas por la

insurgencia al sureste– había regresado, y la presión del gobierno estadounidense sobre casi todos los aspectos de las políticas se incrementaba junto con los fondos para la “guerra contra las drogas”. Los gobiernos de Colombia y EE UU se hicieron la vista gorda en cuanto al alcance cada vez mayor de los paramilitares, enfocándose, por el contrario, en eliminar a las insurgencias de izquierda a través del fortalecimiento de la policía y el ejército colombiano.

Involución (1998-2002)

La guerra se paga en tierra... Nuestra historia
es una de constantes desplazamientos.

Alfredo Molano, Los desterrados (2002)

Desde finales de la década de 1990, el incremento de la guerra de contrainsurgencia en las selvas y llanos del sur y el sureste formó el eje de las políticas públicas, al tiempo que la expansión del ejército y los paramilitares acompañó las negociaciones de paz con las FARC. En 1998, la creación de una “zona desmilitarizada” del tamaño de Suiza en el sur, gobernada oficialmente por la insurgencia más grande del país, causó alarma en las regiones colombianas así como también en Washington. Durante el mandato de los presidentes Clinton y George W. Bush, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia implementaron el Plan Colombia: un paquete de ayuda de cinco años y 4 mil millones de dólares, del cual 80% estaba destinado al

ejército y la policía colombiana. La meta expresada del Plan Colombia era reducir la producción de narcóticos a la mitad en seis años y conquistar el 40% del territorio nacional que estaba en manos de los insurgentes.

Pactos electorales. Paz escurridiza

Los pactos para la paz con la guerrilla determinaron el resultado de las elecciones de 1998, de la misma manera en que lo hicieron los pactos con los paramilitares en el 2002. Las estrategias de campaña divergentes y los programas políticos compartían la meta en común de fortalecer la autoridad del gobierno central, pero subrayaban la prominencia de nuevas formas de clientelismo armado. El cambio de políticas –de la paz con la guerrilla a la paz con los paramilitares– condujo al final del monopolio bipartidista sobre la representación política y coincidió también con la intensificación de la participación del gobierno estadounidense en la guerra civil de Colombia.

Las guerrillas de izquierda y la contrainsurgencia de derecha, a pesar de estar excluidas de la política formal, ayudaron a determinar los resultados electorales en los niveles nacional, regional y local (alcaldes, con-

cejales, funcionarios municipales, gobernadores departamentales, representantes departamentales, diputados y senadores). Cuando el conservador Andrés Pastrana (1998-2002) fue electo Presidente, muchos estuvieron de acuerdo con que la promesa de negociar la paz con las FARC fue lo que le dio el triunfo, pero, muy rápido quedó en el olvido que el liberal Horacio Serpa también había hecho campaña sobre una plataforma de “paz”.

Serpa prometió negociar con el ELN más que con las FARC. Yendo en contra de los principios de la contrainsurgencia, ambos candidatos reconocieron el carácter político de las guerrillas, como lo hicieron los críticos más perspicaces de la izquierda: “Ellos no son simples bandidos, terroristas o narco-guerrillas, sino rebeldes con ideología, recursos y objetivos específicos en contra del orden existente”.²¹⁹ La reforma agraria, por ejemplo, fue una exigencia no negociable, al igual que lo fue la reorientación de la economía de un modelo de exportación neoliberal a un desarrollismo a nivel nacional que siguiera más o menos el modelo sueco. El Estado era un enemigo con el cual, al menos en teoría, era posible negociar. Pero en tanto las FARC conside-

219. Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas”, p. 64.

raran inválida la distinción entre los paramilitares y el ejército colombiano, la expansión paramilitar y las negociaciones de paz eran incompatibles. La mejor manera de describir la ideología de las FARC sería como un marxismo militarista fosilizado combinado con el liberalismo progresista criollo. Era la socialdemocracia autoritaria propia de un pequeño estado tributario con base en el campo y los pequeños poblados.

A diferencia de Pastrana y las FARC, Serpa y el ELN habían prometido ampliar la discusión sobre la guerra, la paz y los cambios sociales para incluir a “la sociedad civil”, un concepto en el cual las FARC no creían, ya que éstas tenían un entendimiento maniqueísta de “amigo y enemigo” de la política que no admitía la posibilidad de autonomía.²²⁰ Quizás de manera poco real, los agro-empresarios y hacendados, así como los campesinos, sindicalistas, estudiantes, organizaciones comunitarias, desempleados y los profesionales de clase media llevarían las demandas y propuestas. El ELN pidió que numerosos municipios en el Magdalena Medio fueran “desmilitarizados” (oficialmente reconocidos como territorio del ELN) con el fin de dirigir las negociaciones lejos del campo

220. Ferro Medina y Uribe Ramón, *El orden de la guerra*, pp. 129-30.

de batalla. El acuerdo, forjado en Mainz, Alemania, en julio de 1998, fue diseñado para dar pie a debates y discusiones sobre las inversiones y el desarrollo regional en el Valle del Magdalena Medio.

Como era previsible, el proceso de paz con el ELN fue saboteado por las AUC. Se habrían favorecido pequeños y medianos productores campesinos, demostrando la posibilidad de acuerdos regionales para su incorporación política y social, apoyados por la “comunidad internacional”, con inversiones en la salud, educación e infraestructura. Esto representaba una oportunidad para implementar una reforma agraria a pequeña escala que lidiaría no sólo con la distribución de tierras y títulos, sino también con asuntos relacionados con los créditos, distribución y transporte, que pudo haberle demostrado a los escépticos que el cambio progresista era posible a nivel local y regional. Pero las AUC, repitiendo la experiencia de Puerto Boyacá en el gobierno de Betancur, movilizaron a sus clientes y bloquearon las rutas de transporte en las principales arterias del país.²²¹ Ya que Serpa había per-

221. Omar Gutiérrez, “La oposición regional a las negociaciones con el ELN”, en *Análisis Político*, 52, septiembre-diciembre, pp. 34-50. La imagen del ELN estaba muy deteriorada por el sabotaje de los oleoductos en Machuca, Antioquia en 1998, que dejó un saldo de 70 muertos.

dido, la propuesta fue desechada y Pastrana favoreció la “paz fragmentada” (que prevaleció bajo el gobierno de Gaviria), negociando directamente con las FARC. Esto fue una prolongación de la guerra y del dominio tecnocrático neoliberal.

Sin embargo, Pastrana retiró las fuerzas armadas de una zona desmilitarizada de cerca de 16.200 hectáreas en el Caguán, región del Caquetá, en noviembre de 1998, como concesión preliminar a las FARC. En efecto, él reconoció que la soberanía de las FARC sobre la región era lógica, dado que éstas habían sido el único grupo en administrar ese territorio. A finales de 1999, Pastrana y las FARC aprobaron un programa de 20 puntos para la negociación, que incluía asuntos sobre la reforma agraria, derechos humanos, recursos naturales y reestructuración socioeconómica. Pero a Pastrana le faltó el poder o la voluntad para cumplir con las reformas –aparte de las medidas neoliberales austeras exigidas por el FMI a cambio de un préstamo de 1,9 millardos de dólares–. A pesar de algunos momentos importantes ocasionales (uno a principios del 2000, cuando representantes de las FARC y el gobierno colombiano fueron a un “tour de aprendizaje” de las capitales europeas; otro en junio de 2001, cuando las FARC liberaron a 363 policías y sol-

dados capturados a cambio de 11 –y no de 50 como habían prometido– de los suyos), el proceso de paz nació muerto. Las FARC se retiraron de las negociaciones preliminares entre finales de 1999 y 2000 debido a la poca voluntad o incapacidad del Gobierno para mandar sobre el ejército y las fuerzas paramilitares en expansión. La zona desmilitarizada sería luego utilizada para reunir a las víctimas de secuestros, que contaban varios cientos, y prepararse para futuras batallas.

El 20 de febrero de 2002, bajo una intensa presión del ejército, del bloque reaccionario en ascenso político y los medios de comunicación, Pastrana ordenó a las Fuerzas Armadas colombianas que retomaran las zonas desmilitarizadas de las FARC. Lo hizo con el respaldo internacional y los ataques del 11 de septiembre ayudaron a deslegitimar a las FARC tanto en Colombia como en el exterior. Debido a sus tácticas y a su mala interpretación del papel de las relaciones públicas en la política contemporánea, habían perdido la pequeña oportunidad para su legitimación política que el proceso de paz les había ofrecido. A pesar de la impopularidad de Pastrana cuando dejó el cargo, la mayoría de las poblaciones urbanas y rurales estaban convencidas de que el problema del país era la “inseguridad” –secues-

tros, tráfico de drogas, extorsión y terrorismo—. Las guerrillas, especialmente las FARC, eran por lo general, responsables de ello.

Pastrana montó el escenario para Uribe, cumpliendo lo que ningún otro Presidente había podido: Tirofijo, el legendario líder septuagenario de las FARC, se había convertido en el único político más impopular que el mismo Pastrana. Así pues, al incrementarse los secuestros, la extorsión y los asesinatos selectivos en nuevas proporciones atroces, entre 2001-2002, las FARC —y en menor medida, el ELN— ayudaron al ascenso de un gobernante de “mano dura” como Uribe. Entre 1997 y 2001, las FARC secuestraron a 3.343 civiles y el ELN a 3.412. El secuestro era el recurso más importante de financiamiento para el ELN y el segundo más importante para las FARC.²²² Las tácticas de las FARC, representadas para muchos en el atentado con una bomba de gas a una iglesia en Bojayá, Antioquia, en abril de 2002 (el cual incineró a 119 afro-colombianos, entre hombres, mujeres y niños), les hicieron ver mucho menos respetables de lo que ya eran antes.

222. Livingston, *Inside Colombia*, pp. 24-25. El ELN había secuestrado un avión comercial en Venezuela en 1999 y secuestrado a una congregación entera de una iglesia en Cali en el 2000, mientras que las FARC comenzaban sus expediciones de “pesca de milagros”, estableciendo bloqueos al azar en todo el país con la esperanza de encontrar ‘gente secuestrable’.

El único grupo de la clase dominante que apoyó el proceso de paz con las FARC fueron los *Cacaos*. Los *Cacaos* era un grupo de conglomerados financieros, industriales y de los medios de comunicación que, aunque era económicamente dominante en la década de 1990, no era capaz de dirigir como un todo a esa misma clase dominante a la que pertenecía. La importancia económica no se tradujo en mayor influencia política y para el proceso de paz generó un repudio vehemente por parte del Partido Liberal y otros grupos contrarios a las negociaciones de paz bajo el mandato de Betancur. Los terratenientes, cuya composición de clase cambió a medida que los especuladores narcotraficantes aumentaban sus rangos, se comportaban como antes, usando la violencia para concentrar la tierra y dominar la política local y regional. Trabajando con el Partido Liberal, las élites terratenientes tradicionales se fundieron con los nuevos ricos mercaderes de la droga, con agro-empresarios y con el ejército y la policía.

Políticamente, este bloque reaccionario fue mucho más fuerte que el de los *Cacaos*.²²³ De esta manera,

223. En *Systems of Violence*, p. 35, Richani escribe, “la nueva falla del conflicto que empezó a tomar forma en la década de 1980 está entre una economía rentista y una... economía campesina representada por campesinos pobres, colonos y comunidades indígenas y afro-colombianas cuyas tierras se convirtieron en el blanco de los especuladores... y de las compañías multinacionales”.

las FARC pueden a duras penas ser culpadas apenas de escepticismo, incluso cinismo. La historia colombiana les enseñó que la “negociación” significaba una preparación para la guerra y que la “amnistía” era un sinónimo para ejecución extrajudicial. Durante la presidencia de Pastrana, las AUC (aliadas con ganaderos, agro-exportadores, facciones del ejército y la policía, grupos de negocios e industriales y sectores influyentes de la Iglesia católica y el Partido Liberal) masacraron a la base social de las FARC y el ELN en cifras récord.²²⁴ De muchas maneras era una repetición, en un tono mayor, de la guerra orquestada durante el proceso de paz con Betancur; solo que ahora la implicación del gobierno norteamericano era mucho mayor, como también lo era el alcance de los paramilitares.

224. Muchas de las ganancias del ELN del período entre 1983 hasta 1996 estaban agotadas para el 2000. Estas fueron efectivamente retiradas de las bases tradicionales en el noreste de Antioquia y en el sur de Bolívar, donde se había regulado por mucho tiempo la producción de la coca así como las relaciones de mercado entre pequeños mineros del oro, comerciantes y capital extranjero; en la región del Catatumbo en Norte de Santander, donde el ELN reguló el mercado de la coca; en el valle Cimitarra en Santander, donde el grupo nació; y en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja, feudos del ELN hasta finales de 1990.

Plan Colombia

Con protestas populares, movilización y triunfos electorales de la centro-izquierda que se expandían por los Andes después del 2000, Colombia se convirtió en un aliado “geoestratégico” cada vez mayor para el Gobierno de los Estados Unidos. Con los gobiernos de Clinton y Bush, Colombia y EE UU implementaron el Plan Colombia, un paquete de “ayuda” de cinco años y 4 millardos de dólares, cuyo 80% estaba destinado para el ejército y la policía. El Plan Colombia fue aparentemente diseñado para combatir la explosión de la producción de narcóticos, porque pese a la desaparición del cartel de Cali en 1996, a finales de la década de 1990, *el negocio* estaba mejor organizado que nunca. Después de la caída de los dos carteles más importantes del país, la delegación de la represión y la descentralización política estuvo acompañada por la descentralización de la industria de narcóticos. Para 1999, las ventas de cocaína, marihuana y heroína colombiana generaron aproximadamente 46 millardos de dólares en ingresos, de los cuales la parte de Colombia fue de 3,5 millardos, una suma casi equivalente a los 3,9 millardos de dólares provenientes del petróleo, el principal producto de exportación colombiano. Esto se debió en parte a las

alianzas que se formaron entre los traficantes y las AUC –o, con menos frecuencia, las FARC–, alianzas difíciles de dismantelar por parte de oficiales no corruptos.

Las FARC tuvieron un ingreso estimado de 900 millones de dólares en 1999; en el 2000 el total de la producción de coca llegó a 136.200 hectáreas, 70% de las cuales estaban en el centro de las tierras de las FARC en el Guaviare, Caquetá y Putumayo.²²⁵ El general retirado Barry McCaffrey, el “zar de la droga” del presidente Clinton y antiguo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, instó a los legisladores norteamericanos a sumarse a la lucha contra el “narco-terrorismo” –argumentando que como las FARC funcionaban como un cartel, al luchar contra este grupo narco-terrorista, se libraba la guerra contra las drogas también–.²²⁶ En teoría, serían empleados helicópteros, tanques, aviones, radares, comunicaciones satelitales y entrenamientos

225. Bruce Bagley, “Drug Trafficking, Political Violence and US Policy in Colombia in the 1990s” (2001), disponible en: www.mamacoca.org. Las FARC trabajaron a través del cabecilla de las favelas de Río de Janeiro, Fernandinho, cuyo nexo, ‘el Negro Acacio’, el amo de la cocaína de las FARC, dirigió instalaciones de producción independientes y rutas de transporte a través de Venezuela, Guyana y el norte de Brasil. Fue el primero de una serie de comandantes de las FARC buscados para su extradición hacia los EE UU bajo cargos de narcotráfico. Ya para el momento en que fue escrito el libro, él se había convertido en material de leyenda y folklore a lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela.

226. En junio de 2005, McCaffrey fue enviado para evaluar prospectos para la ocupación norteamericana y la contrainsurgencia en Irak.

de vanguardia para luchar contra las drogas, pero, en la práctica serían empleadas para atacar a las FARC y su economía de guerra. Todo esto buscaba seguir las recomendaciones de la RAND (corporación de investigación y desarrollo), que solicitaba la derrota de las guerrillas –y no sólo su simple contención– citando los ejemplos de las *rondas campesinas* peruanas y las *guardias civiles* guatemaltecas en apoyo de una estrategia contrainsurgente militar-paramilitar más directa.²²⁷ Otro informe de la RAND planteaba el ejemplo de El Salvador en la década de 1980, para ilustrar cómo debía ser la política de Estados Unidos hacia Colombia.²²⁸

Aunque dentro de la “guerra contra las drogas” estaba incorporada la “guerra contra las drogas y el terrorismo” que comenzó en 2002, en Colombia había, además una historia acerca del petróleo:

Después de Venezuela y México, Colombia es la tercera fuente más grande de petróleo latinoamericano para EE UU –responsable por cerca del 3% de consumo estadounidense– aunque la mayoría de los recursos petroleros del país permanecen inexplorados hasta ahora... Podríamos

227. Angel Rabasa y Peter Chalk, *Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and its Implications for Regional Stability*, Santa Monica, 2001.

228. Gabriel Marcella, *Plan Colombia: Strategic and Operational Imperatives*, Santa Mónica, 2001.

añadir que, contrario a las percepciones populares, los Estados Unidos importan para su consumo interno más petróleo de Latinoamérica que del Medio Oriente y que Colombia comparte con Venezuela y Ecuador la Faja Petrolífera del Orinoco venezolana de la que se sospecha enormemente posee el yacimiento de hidrocarburos más grande del mundo. El futuro de las relaciones entre Venezuela y EE UU y, consecuentemente, del petróleo venezolano para el consumo estadounidense es incierto. La importancia del suministro de Colombia, presente y futuro, aumenta proporcionalmente.²²⁹

Estaba en juego, pues, el control del futuro de las reservas de petróleo de Colombia (que se cree que estén ubicadas en territorio de las FARC) así como contener la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. Colombia recibió mucha más ayuda que ningún gobierno fuera del foco principal de las guerras coloniales nuevas o viejas (estas últimas en el caso de los territorios ocupados en la Ribera Occidental y el este de Jerusalén).²³⁰

El Plan Colombia exigía una “arremetida hacia el

229. Aijaz Ahmad, “Colombia’s Lethal Concoction”, en *Frontline*, Delhi, 7 de abril de 2006, p. 59.

230. Adam Isacson, “Number Three No More”, 19 de abril de 2005, en: www.ciponline.org

sur”, es decir, Putumayo y Caquetá, zonas de cultivo de coca bajo el control de las FARC; la “ayuda antidroga” sería empleada, por lo tanto, para la contrainsurgencia. John Kerry argumentó desde el Senado que aunque “la línea entre los contra-narcóticos y la contrainsurgencia no es del todo clara en Colombia”, el gobierno de los Estados Unidos “no puede permitir que esto detenga... la extensión de la ayuda”.²³¹ Para las Fuerzas Armadas y la policía colombianas la “ayuda” se duplicó cada año, desde 1997 hasta el 2000, y aunque el Plan Colombia se había discutido ya desde mediados del año 1998, no llegó a ser prioridad para el Congreso estadounidense dominado por republicanos sino hasta mediados de 1999. El Bloque Oriental de las FARC causó una gran protesta internacional cuando mataron a tres activistas norteamericanos de los derechos indígenas que trabajaban con el pueblo indígena de U’wa para mantener a Occidental fuera de territorio U’wa.²³² Poco tiempo después, el ministro de Defensa colombiano (que no era amigo de los U’wa) renunció en protesta contra las negociaciones de paz en curso con las FARC.

231. Citado en Isacson, “John Kerry’s Statement”, 15 de octubre de 2004, en: www.ciponline.org

232. A diferencia del ELN, las FARC querían que continuaran las perforaciones sobre el territorio U’wa con el fin de sacarle rentas de protección a Occidental. Las FARC habían ejecutado anteriormente a combatientes del ELN por apoyar las exigencias de los U’wa. Kirk, *More Terrible than Death*, p. 227.

En agosto, el general McCaffrey visitó Bogotá con el subsecretario de Estado, Thomas Pickering, para solicitarle a Pastrana que diseñara una propuesta para fortalecer a las Fuerzas Armadas, profundizar la guerra contra las drogas y detener la hemorragia económica que había empezado en 1998. Menos de dos meses más tarde, el Plan Colombia circulaba en inglés; y ya para julio de 2000 se había firmado como ley –en Washington en vez de Bogotá–. El presidente Clinton rápidamente canceló las disposiciones para los derechos humanos (la enmienda Leahy) a finales de agosto de 2000, dándole una tácita aprobación a la colaboración militar-paramilitar y abriendo la puerta para el desembolso de 1,3 millardos de dólares en “ayuda”, 80% de la misma destinada al ejército y la policía. Como ya el Plan Colombia estaba listo para entrar en vigor, las AUC anunciaron su llegada a Putumayo con “limpiezas políticas” y masacres. Evidentemente, su misión era limpiar el terreno para una avanzada militar más rápida, la cual, como era de esperarse, se materializó en diciembre de 2000, en la forma de un batallón contra-narcóticos de mil hombres. Esto se diseñó para asegurar los cultivos de coca por un tiempo suficiente para que pilotos colombianos y mercenarios norteamericanos los fumigaran. Al cabo de un año, las AUC se habían convertido

en los años de la cocaína en Putumayo.²³³ Con el Plan Colombia, se movilizaron posteriormente hacia los departamentos vecinos de Nariño y Caquetá, zonas que luego se convertirían en dos de los departamentos más conflictivos y más dirigidos por la coca del país.

El Plan Colombia tuvo éxito en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la policía, así como al fumigar grandes franjas del campo, pero no debilitó la guerrilla ni resquebrajó el negocio de los narcóticos. Por el contrario, al fortalecer a los principales aliados de las AUC en el ejército y la policía, el Plan Colombia fortalecía a los paramilitares. El Plan no apuntaba las muchas áreas, especialmente en el norte, donde las AUC supervisaban el cultivo de coca, protegían pistas de aterrizaje y daban seguridad para el transporte. En una entrevista pública en el 2000, Carlos Castaño estimó que el 70 por ciento de los ingresos de las AUC provinieron del negocio de las drogas. El embajador de Pastrana en Washington, Luis Alberto Moreno, había estimado que era el 75%. El Plan Colombia no puso freno a este patrón; si algo hizo fue profundizarlo.

233. *Ibid.*, p. 260. Para un análisis de la fallas del Plan Colombia, ver Adam Isacson, “Putumayo, 5 Years into Plan Colombia”, 1° de agosto de 2005, en: www.ciponline.org; idem, “Did Plan Colombia Work? A Look at the Numbers”, 18 de enero de 2006, en: www.democracyarsenal.org

Trabajando o coordinando a menudo con el ejército colombiano, los paramilitares incrementaron las masacres, la expropiación y el desplazamiento desde 1998 hasta que entraron en las negociaciones en 2002, punto en el que detuvieron su violencia de titulares sin renunciar al terror como su táctica predilecta, o al tráfico de narcóticos y la expropiación como fuentes de poder. El incremento de los secuestros por parte de la guerrilla fue paralelo al aumento de las masacres paramilitares, pero lo primero estaba dirigido principalmente a la clase media y a los propietarios, mientras que lo segundo afectó principalmente a minifundistas campesinos, habitantes de la frontera, trabajadores rurales y comunidades de indígenas y afro-colombianos.

Lazos familiares

Al apuntar a los secuestros, las AUC y su candidato favorito, Álvaro Uribe Vélez, se aprovecharon de los temores de los dueños de inmuebles rurales y urbanos. A estos grupos les ofrecieron una “seguridad” ilusoria de las amenazas guerrilleras, a los jóvenes desempleados del campo y la ciudad les dieron trabajos en el floreciente negocio de la seguridad privada. Como al padre de Castaño, el padre de Uribe también había

sido asesinado por las FARC. Los fantasmas de la Violencia reaparecían: la superación del trauma personal y la restauración del honor familiar a través de la guerra contrainsurgente fueron rasgos distintivos de los personajes políticos de Uribe y Castaño.²³⁴ Estas historias personales fueron llevadas al poderoso efecto retórico, donde la mayoría de clase media y clase dominante se identificó con este tipo de sufrimiento, de la misma manera que lo hicieron las familias de los soldados, policías o paramilitares (sospechosos o verdaderos).

En consecuencia, el apoyo para Uribe y un “proceso de paz” con las AUC se difundió ampliamente y Uribe fue elegido con un simple programa bien definido: no habrían más intentos para tratar con la subversión. La solución a las guerrillas era eliminarlas. Los que se encontraban ejerciendo presión tras este giro de manera más importante eran el Partido Liberal, el alto mando militar, las compañías bananeras multinacionales, procesadoras de aceite de palma, magnates de las flores, narco-barones y hacendados ganaderos. Aunque por una parte financiaban la contrainsurgencia parcialmente privatizada, por otra parte, clamaban por una mayor violencia estatal contra las guerrillas, amplia-

234. Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia”, en Sánchez y Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, p. 50.

mente definidas para incluir a cualquiera que trabajase por el cambio social progresivo.²³⁵ Su candidato en las elecciones del 2002 fue Álvaro Uribe, quien era, según palabras del propio Carlos Castaño, “el hombre más cercano a nuestra filosofía”.

El corazón de esta filosofía partía de una visión particular del papel de los ciudadanos en el conflicto. Como Castaño lo planteó, “en la guerra, un civil desarmado es un término relativo. Dos tercios de las guerrillas están desarmadas, actúan como civiles y colaboran con las guerrillas”.²³⁶ En el centro de las políticas de “seguridad democrática” de Uribe estaba la noción de que el Estado necesitaba ciudadanos que colaboraran con las fuerzas armadas. Uribe ha dicho que “en las sociedades democráticas no hay neutralidad ciudadana frente al crimen. No hay distinción entre la policía y los ciudadanos”. Comparemos este señalamiento con el del general Bedoya: “Con respecto a los criminales, nadie puede ser neutral... La neutralidad no es posible. O estás con los terroristas, o estás en contra de

235. Ver Garry Leech, *Killing Peace: Colombia's Conflict and the Failure of US Intervention*, New York, 2001.

236. *El Tiempo*, 18 de enero de 1997. Citado en Mauricio Romero, “Democratización política y contra reforma paramilitar en Colombia”, en Sánchez y Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, p. 367.

ellos”.²³⁷ La visión de Bedoya, apuntamos, fue publicada antes del 11 de septiembre de 2001. Bastante parecido al gobierno de Bush en Washington, el de Uribe es una forma semiautoritaria de gobierno parlamentario que no respeta los derechos individuales ni las leyes internacionales.

Esto representó una extensión de la Guerra Fría. En la construcción de una red nacional de espías, “soldados campesinos” y familias “vigilantes de la selva”, Uribe siguió las ideas articuladas y practicadas por el general Ruiz en la década de 1960; de 1970 hasta la década de 1990 fueron los generales Yanine, Camacho, Bedoya y Del Río quienes encarnaron aspectos de esta filosofía. El general Yanine y Pablo Guarín la pusieron en práctica por primera vez en el Magdalena Medio a comienzos de la década de 1980. Se desarrolló aún más al noreste de Antioquia y al sur de Córdoba entre 1987-1990 con Fidel Castaño, y Carlos Castaño y el general Del Río la perfeccionaron en Urabá, cuando Uribe era el gobernador de Antioquia. Los civiles necesitaban colaborar con las Fuerzas Armadas, especialmente recolectando información de inteligencia –u otras cosas–. El objetivo de Uribe de reclutar un millón de

237. Citado en Kirk, *More Terrible than Death*, p. 193.

informantes pagos fue rápidamente sobrepasado: se habían registrado 1.500.000 más de lo planificado, en agosto de 2004. El ejército de Uribe de 20 mil “soldados campesinos” se apoyó en redes de inteligencia de parentesco y amistad, lo que significaba que por cada soldado campesino había quizás cuatro informantes no pagados. Lo mismo sucedió con las familias de los 36.500 “vigilantes de la selva”; a lo largo de la Costa Atlántica, éstos eran dominados por las AUC.

Los primeros pasos de Uribe como Presidente incluyeron declarar un estado de emergencia el 11 de agosto, apenas cuatro días después de que su ceremonia de inauguración recibiera la explosión de un mortero de las FARC, y “negociaciones” abiertas con las ACCU (bloque dirigente de las AUC). Con el fin de llevar todo esto a cabo, revocó la Ley 418 de 1997, que estipulaba que el gobierno no podía firmar acuerdos ni diálogos con un grupo carente de estatus político, y la reemplazó con la Ley 782 que quitaba la cláusula.²³⁸ Uribe además recaudó un impuesto especial para cubrir el esfuerzo de la guerra, suplementando al Plan Colombia. Tropas, aviones y tecnología de vigilancia estadouni-

238. Garry Leech, “Reinventing Carlos Castaño”, 30 de septiembre de 2002, en: www.colombiareport.org; Jaime Zuluaga Nieto, “Del paramilitarismo a la parapolítica”, *El Espectador*, 24 de julio de 2005.

denses operaban como apoyo –u orientación– en las campañas de “exterminio de bandidos” llevadas a cabo en zonas ricas en petróleo del Arauca, Sucre/Bolívar y regiones con cultivos de coca en el sur y sureste.

La “Ley Justicia y Paz”, aprobada en junio de 2005, daba impunidad a los paramilitares desmovilizados (ver capítulo 9 más adelante), pero daba pie a preguntas sin respuestas acerca de la historia familiar de Uribe. El congresista Gustavo Petro, antiguo militante del M-19, fue uno de los políticos opositores que denunció los lazos estrechos de Uribe con el narco-paramilitarismo. Estos alegatos salieron a flote mientras las AUC se preparaban para entrar en la política formal en el ciclo de elecciones de 2006, con sus recursos y armamentos intactos. Cuando Petro señaló que uno de los hermanos de Uribe y dos primos segundos tenían mucho que ganar con la nueva legislación, el *Miami Herald* difundió dichos alegatos, mencionando la conexión del padre de Uribe con los Ochoa y Pablo Escobar. En relación con los alegatos se mencionaban propiedades específicas –una de ellas, “La Carolina”, copropiedad del presidente Uribe con el hermano en cuestión– y grupos paramilitares (“Los 12 Apóstoles”, “Los R”).²³⁹

239. *El Tiempo*, 19 de mayo de 2005; “Investigarán relación de congresistas y paras”, *El País*, 20 de mayo de 2005; “Uribe niega tener vínculos con los ‘paras’ de

Aunque circunstancial, la evidencia llama a la reflexión. El padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, había estado consumiéndose en deudas en el barrio de clase media de Laureles, en Medellín, a mediados de la década de 1970, cuando un extraño revés de la fortuna lo catapultó hacia la riqueza e influencia como corredor de bolsa político, intermediario de bienes raíces y “traficante reconocido”.²⁴⁰ Se jactaba de poseer extensas haciendas de ganado en las sabanas del norte de Antioquia y el sur de Córdoba, siendo además parte de un grupo de narco-especuladores antioqueños que compraron tierras baratas en áreas donde las FARC y el EPL estaban activas.

Uribe Sierra estaba conectado por matrimonio con los Ochoa, una familia dominante antioqueña que se unió a los mafiosos socialmente ascendentes para formar el cartel de Medellín (y el MAS). Cuando Pablo Escobar lanzó su campaña “Medellín sin barrios marginales” en 1982, Uribe Sierra organizó una carrera de caballos que recogiera fondos para ayudarlo. Uribe

derecha”, *El Nuevo Herald*, Miami, 22 de mayo de 2005; Gonzalo Guillén, “Acusan a Uribe de proteger a un hermano y a dos primos, presuntamente asesinos”, *El Nuevo Herald*, 23 de junio de 2005.

240. Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína*, Bogotá, 1987, p. 72. Castillo fue tres veces ganador del premio Simón Bolívar, el premio más prestigioso del periodismo investigativo de Colombia. Él se enfocó principalmente en Uribe Sierra y su discusión sobre los narcotraficantes de derecha, pero también mencionó a Uribe Vélez.

fue asignado a su puesto como alcalde de Medellín en 1982 como un favor a Uribe Sierra por haber ayudado a financiar la campaña de Belisario Betancur. Fue rápidamente destituido por el entonces gobernador de Antioquia.

Durante el breve mandato de Uribe, los narcotraficantes se refirieron a Medellín como “el santuario”. Se ha insinuado que su remoción se produjo luego de su conspicua asistencia a una reunión del cartel de la droga de la región en la hacienda de Escobar ubicada en el Magdalena Medio. Cuando Uribe Sierra fue asesinado en su hacienda en 1983, el joven Álvaro voló a allá en el helicóptero de Escobar. El presidente Betancur e importantes miembros de la élite regional asistieron al funeral de Uribe Sierra, demostrando su voluntad de pasar por alto operaciones de negocios dudosos de las cuales ellos se habían beneficiado.

Una de las haciendas del presidente Uribe en Córdoba limitaba con una que pertenecía a Salvatore Mancuso, el paramilitar “empresario de la intimidación” que sirvió como comandante de las Convivir en Córdoba y se convirtió en una las figuras líderes de las AUC. Uribe fingió conocerlo como un compañero hacendado –igual como conocía a los Ochoa sólo como

comerciantes de caballos—. ²⁴¹ Como gobernador de Antioquia, el “Montesinos” de Uribe (para tomar prestada una frase de Molano) fue el secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa. Un ex jefe de la DEA de EE UU alegó que Moreno Villa fue el principal importador de permanganato de potasio (principal químico en el procesamiento de la cocaína) del país, entre 1994-98 –un período que coincide con el gobierno de Uribe—. ²⁴² Juan Moreno fue uno de los asesores de campaña de Uribe en 2002. El general Del Río, el “chupón” de Urbá, fue despedido por Pastrana debido a vínculos con los paramilitares, y celebró un acto de desagravio en respuesta. El evento, organizado en mayo de 1999 por el movimiento político de Juan Moreno y del general Bedoya, Fuerza Colombia, sirvió como plataforma de lanzamiento para la campaña presidencial de Uribe. Al igual que Moreno, el general Del Río fue un asesor de campaña. ²⁴³

241. Joseph Contreras, con la colaboración de Fernando Garavito, *El Señor de las Sombras: Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, 2000, pp. 35-43, 65-72, 92, 167. Contreras era el editor para Latinoamérica de la revista *Newsweek's* y Garavito un columnista político colombiano empujado al exilio por amenazas paramilitares.

242. Jeremy Bigwood, “Doing the US’s Dirty Work: The Colombian Paramilitaries and Israel”, citando un reporte de la DEA de 1998, en: www.narconews.com. Para Molano, ver “Peor el remedio”, en *El Espectador*, 1° de septiembre de 2002.

243. Romero, *Paramilitares*, pp. 193-94.

Basándose en su selección de amigos, vecinos, asesores y ministros, Antonio Caballero, posiblemente el más destacado humorista de Colombia (distinción obtenida después del asesinato político en 1999 de la persona que anteriormente era reconocida con ese título), notó que Uribe parecía aficionado a las malas compañías. ²⁴⁴ Cualquiera que fuera la naturaleza de su relación con el narco-paramilitarismo en Córdoba y Antioquia, la indignación con la cual el gobierno de Clinton y los medios norteamericanos trataron a Samper, contaminado apenas por recibir financiamiento en su campaña por parte de los señores de la droga, parecía cómico en retrospectiva.

Aunque había extraditado a más narcotraficantes que cualquier otro Presidente en la historia colombiana, los nexos de Uribe con las redes más íntimas del narco-mundo y sus peculiares formas de terrorismo parecían ser mucho más estrechos que los de Samper. Ni uno solo de los traficantes extraditados era un paramilitar con jerarquía. Sin embargo, inicialmente

244. En 2005, el caso contra el general Del Río fue desechado. Antonio Caballero, “Amenazas, malentendidos y malas compañías”, en *Semana*, julio de 2005; Ramiro Bejarano Guzmán, “El amigo secreto”, en *El Espectador*, 3 de julio de 2005; Gerardo Reyes y Gonzalo Guillén, “Amistad con un narco pone en aprietos a Uribe”, en *El Nuevo Herald*, 5 de julio de 2005; Adam Isacson, “President Uribe’s Shady Friend”, 12 de julio de 2005, en: www.ciponline.org.

Ver Contreras y Garavito, *El señor de las sombras*, p. 62.

Uribe fue cálidamente acogido por el gobierno de los Estados Unidos, así como por la oligarquía colombiana y la clase media. La revista *Semana* lo declaró en el 2002, el “Hombre del Año”. Esto fue porque no representó, a los ojos de la mayoría de los colombianos y políticos norteamericanos, a los narcos, paramilitares o a la política clientelista como era costumbre. Su imagen pública fue la de un verdadero creyente en la contrainsurgencia como un medio de extensión del poder estatal.

Como en coyunturas previas, a finales de la década de 1990 la fracción reformista de clase dominante no representó a su sector como un todo, mucho menos a la nación. En su guerra contra el Estado y sus aliados paramilitares, las guerrillas intensificaron las campañas de secuestro, extorsión, bombas e incluso masacres que acercaron la guerra al día a día de los habitantes de las ciudades y pueblos, de todas las clases, razas, géneros y generaciones. Avivadas por la histeria mediática, estas tácticas hicieron que una mayoría de votantes optaran, en una búsqueda quijotesca por la “seguridad”, por el autoritarismo de derecha alineado con los principios de contrainsurgencia de la Guerra Fría.

El filo del precipicio (2002-2006)

El presidente Uribe ha hecho que la sociedad colombiana profese la cultura del paramilitarismo...
En Colombia, estamos encaminados
hacia una mafia de Estado.

*Ramiro Bejarano,
anterior jefe del DAS (2006)*

El Plan Colombia fracasó en términos de erradicar la droga, pero triunfó en la modernización de las Fuerzas Armadas colombianas, a las que les faltaban armamentos, particularmente helicópteros, y, en especial, unidades de combate entrenadas. Los paramilitares consolidaron su influencia política, social y territorial en áreas que anteriormente estaban tomadas por la guerrilla. Al apuntar casi exclusivamente a las zonas de las FARC, el Plan Colombia ayudó a los paramilitares a integrar verticalmente su empresa criminal y convertirla en un instrumento político.²⁴⁵ El debate

245. Alfredo Molano predijo esto en “El día antes”, en *El Espectador*, 14 de mayo de

acerca del hecho de que la “Ley de Justicia y Paz” regulase la participación paramilitar dentro de la política oficial y en la sociedad civil se estructuró en torno a la oposición del recuerdo y la justicia versus la paz y el olvido. Esto fue una extraña forma de enmarcar el destino de un grupo que admitía haberse dedicado a las masacres, al tráfico de drogas y a la expropiación en su afán por erradicar las guerrillas.²⁴⁶

La necesidad de olvidar y perdonar sin verdad o justicia estaba relacionada, por supuesto, con el impulso de las AUC de entrar a la política formal, pero también con los lazos sistemáticos con la policía colombiana y las fuerzas armadas, documentados en informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de EE UU.²⁴⁷ El ELN, empujado al límite, había iniciado unas conversaciones preliminares de negociaciones con el gobierno de Uribe. Las FARC habían sido excluidas y –enfrentándose a 18.000 tropas movilizadas– sometidas a la mayor ofensiva

2000. Para todo esto, ver también Mario Murillo, *Colombia and the United States: War, Terrorism and Destabilization*, New York, 2004.

246. Ver Carlos Castaño, *Mi confesión*, Bogotá, 2001.

247. Ver Human Rights Watch, “State of War: Political Violence and Counterinsurgency in Colombia”, 1993; “Colombia’s Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States”, 1996; “The ‘Sixth Division’: Military-Paramilitary Ties and US Policy in Colombia”, 2001; “Colombia: Letting the Paramilitaries off the Hook”, 2005.

militar respaldada por los EE UU en la historia, bajo el Plan Patriota, al tiempo que aquellos que luchaban junto al Estado eran incorporados políticamente.

Un nuevo feudalismo

Entre 2003 y 2005, el poder electoral de la derecha armada puso en peligro el monopolio bipartidista por primera vez desde 1848. Al buscar la reelección y crear una estructura legal para legitimar la participación paramilitar dentro del Estado y la sociedad –ahora fusionados bajo el concepto de un “Estado comunitario”– Uribe dividió a su partido, fortaleciendo el gobierno central a través de vínculos con centros de poder regionales dispersos. La elección de Uribe marcó el final del ciclo histórico iniciado en 1982, ya que él no tenía en mente negociar con las guerrillas sin primero infligir una decisiva derrota militar. Ningún presidente desde Laureano Gómez se había identificado tanto con opiniones que ejercieran dominio sobre el alto mando militar, las élites regionales y sus aliados en el gobierno. La coalición reaccionaria nacida durante el proceso de paz de Betancur se endureció en contra de las reformas municipales de Barco y las reformas departamentales de Gaviria, y,

a través del paramilitarismo, las élites terratenientes y los gobiernos locales y regionales bloquearon tanto las reformas del gobierno central como las iniciativas de paz. Ahora tenían un aliado en la Casa de Nariño.

Luego de la llegada de Uribe a la Presidencia, los paramilitares intensificaron su control sobre el mecenazgo y la política.²⁴⁸ En las altas esferas había muchos comandantes que se volvieron paramilitares para enterrar los registros de lo que habían hecho como traficantes. Estos hombres eran conocidos principalmente por su reputación en los bajos fondos de la mafia: Francisco Javier Zuluaga, José Vicente Castaño (el hermano de Fidel y Carlos), Hernán y Jesús Giraldo, Rodrigo Tovar Puro (alias “Jorge 40”), Diego Fernando Murillo (alias “Don Berna”).²⁴⁹ Una vez iniciadas las negociaciones, todos excepto Castaño aparecieron con uniformes de comandantes paramilitares. Se les colocó un apodo que

248. *El Tiempo*, 27 de marzo de 2002. De acuerdo con el anterior ministro del Interior, Armando Estrada, candidatos simpatizantes de los paramilitares obtuvieron un tercio de los puestos del Congreso y del Senado.

249. Las políticas extranjeras de los EE UU dieron un giro momentáneo contra los paramilitares en febrero de 2004, y, siguiendo el patrón de su hermano Fidel en 1994, Carlos Castaño “desapareció” en abril de 2004. Misteriosamente, Carlos, quien se había comparado con Houdini en su autobiografía, predijo su propio acto de desaparición en una entrevista con un periodista norteamericano. En otro contexto, un consejero político de la Embajada de EE UU le predijo a un investigador de los derechos humanos que Castaño desaparecería una vez que hubiese cumplido su misión. Ver Steven Dudley, *Walking Ghosts*, pp. 198, 206; Robin Kirk, *More Terrible than Death*, p. 247.

hacía referencia a su oportunismo (“*los paracaidistas*”) y se dijo que estaban tratando de obtener sus *paraportes* para evitar la extradición a los EE UU.²⁵⁰

Córdoba –el bastión de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso– fue el lugar de nacimiento de “Colombia Viva”, un movimiento político diseñado para conseguir apoyo para la incorporación de las AUC a las instituciones del Estado. Santa Fe de Ralito, ubicado al sur del departamento, fue escogido por las AUC como lugar de negociaciones con el Gobierno. “Colombia Viva” eligió a dos congresistas de Córdoba en 2002. Las AUC ejercieron vigilancia sobre la Universidad de Córdoba, administrando el único hospital en la parte sur del departamento. En sus municipios de Tierralta y Valencia, consideradas las capitales políticas de las AUC, ambos alcaldes electos en el 2003 eran de “Colombia Viva”. Otros candidatos se retiraron argumentando ser amenazados por los paramilitares. Junto a otros dos, el 10 de abril de 2005, el congresista departamental, Orlando Benítez Palencia, fue asesinado por paramilitares del Bloque de Don Berna, Héroes de Tolová, en Valencia. Benítez hizo caso omiso a las advertencias de no lanzar su candidatura a la alcaldía allí.²⁵¹

250. *El Tiempo*, 12 de febrero de 2005.

251. *El Tiempo*, 23 de mayo de 2005.

Para Enrique Santos Calderón, editor de *El Tiempo*, los narcotraficantes, los paramilitares y los jefes políticos (*gamonales*) se habían fusionado a lo largo de la costa atlántica.²⁵² El departamento del Magdalena, controlado por Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar (alias “Jorge 40”), fue uno de los mejores ejemplos. El candidato a gobernador de las AUC, Trino Luna Correa, ganó en 2003 sin oposición. Otros candidatos renunciaron debido a amenazas y hostigamientos de los paramilitares y hubo más votantes que dejaron sus votos en blanco que los que votaron por Luna. Las AUC aseguraron la victoria de tres senadores así como de tres representantes. Cuando Efraín Escalante insistió en postularse como alcalde de Concordia, a pesar de las amenazas de las AUC, fue asesinado. En la capital de Magdalena, Santa Marta, los paramilitares rápidamente amasaron una fortuna al cobrarle impuestos a los camiones que transportaban bienes hacia los barcos contenedores que atracaban en los muelles más profundos del puerto. Todo el mundo, desde los vendedores ambulantes hasta los dueños de tiendas les pagaban estos impuestos.²⁵³ A través de Dibulla, Mingueo y Palomino, pueblos ubicados al pie de la Sierra Nevada

252. Alfredo Molano, “Sentando bases”, octubre de 2004, en: www.mamacoca.org

253. Adam Isaacson, “Peace or ‘paramilitarization’?”, julio 2005, en: www.ciponline.org

de Santa Marta a lo largo de la región fronteriza en La Guajira, movían drogas y armas sin ser molestados, a pesar de la presencia considerable de la policía y del ejército en los caminos.

En Magdalena y La Guajira, los paramilitares que trabajaban para Giraldo y “Jorge 40” controlaban los servicios de inteligencia, las apuestas, la prostitución, la seguridad privada, los asuntos de protección, contrabando, lavado de dinero y la mayor parte del negocio de la cocaína. La situación era similar en César, departamento ganadero donde “Jorge 40” una vez había servido como Secretario de Finanzas, donde, como en Magdalena, el gobernador se postuló sin oposición en 2003, luego de que otros candidatos reclinaran su postulación bajo las amenazas de las AUC. Allí, como en Magdalena, había ganado aunque la cantidad de votos en blanco superaba en número a los votos para él. En La Guajira, que tiene frontera con Venezuela y que, junto con César y Magdalena, forma parte de la región costera norte definida por la Sierra Nevada de Santa Marta, el alcalde y diez miembros del ayuntamiento fueron arrestados en Riohacha, la capital, en septiembre de 2004. Presuntamente, habían desviado los subsidios del bloque del sector sa-

lud para los paramilitares postulados por “Jorge 40” y Jesús Giraldo (hermano de Hernán y también buscado para su extradición a los Estados Unidos, bajo cargo de narcotráfico).²⁵⁴

Antioquia dio otro ejemplo de control paramilitar flagrante, y mientras una minoría lo cuestionó en privado, pocos se atrevieron a denunciarlo en público.²⁵⁵ A pesar de la aparente desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003, Diego Fernando Murillo (alias “Don Berna” en el bajo mundo, y dentro de las AUC alias “Adolfo Paz”) continuó mandando sobre la ciudad a un grado que Escobar apenas soñó. Nacido en Tulúa, Valle, centro de operaciones de los *pájaros* en la década de 1950, después de abandonar el EPL, Murillo era un sicario que fue ascendiendo en la organización de Escobar. Sobrevivió a varios asaltos de guerra sangrienta para convertirse en el jefe indisputable de la mafia de Medellín Estuvo de acuerdo con permanecer bajo la supervisión del gobierno en una hacienda en Córdoba.²⁵⁶ En 2005, comandó desde su asiento en la mesa de negociación

254. Idem, “Paramilitarism’s Inexorable Progress”, 28 de marzo de 2005, en: www.ciponline.org

255. *El Tiempo*, 20 de julio de 2005.

256. Adam Isacson, “Don Berna in Custody”, 31 de mayo de 2005, en: www.ciponline.org

en Santa Fe de Ralito a los bloques: Héroes de Granada, Calima, Libertadores del Sur, Pacífico y Héroes de Tolová hasta que “se entregó” a finales de mayo de 2005, cercana a la mesa de negociaciones, a cambio de beneficios políticos bajo la “Ley Justicia y Paz” que estaba en trámite. Posteriormente, fue llevado a una cárcel de máxima seguridad, en respuesta a las presiones del gobierno de EE UU luego del asesinato del congresista departamental de Córdoba, pero luego volvió a una prisión local justo al sur de Medellín en su propio territorio, donde siguió con sus negocios como siempre.

En el 2004, mientras su ejército privado trabajaba para tomar el control de los servicios de televisión por cable, los candidatos de don Berna obtuvieron 30 puestos como jefes de las Juntas de Acción Comunal en Medellín y se apoderaron de la construcción, los bienes raíces, las finanzas, el transporte, las ventas al por mayor y al por menor. A través de la infame “Oficina Envigado” don Berna supervisaba la extorsión, la recolección de información de inteligencia, la vigilancia, los sicariatos, reclutamiento y entrenamiento de asesinos, autorrobos, asalto de bancos, juegos de azar, prostitución, venta de drogas, lavado de dinero

y seguridad privada. A través de su ONG Corporación Democracia, don Berna había comenzado a seleccionar los candidatos para las elecciones legislativas de marzo de 2006.²⁵⁷

Incluso en Bogotá, algunos procesos similares estaban en curso. Los paramilitares controlaban el mercado principal de alimentos al por mayor así como los mercados *duty-free* (“*sanandresitos*”), sacándole provecho a la producción campesina local, a las redes de informantes no oficiales, a las ventas de CDs piratas y al alquiler de llamadas de celular. Se estima que los paramilitares percibieron alrededor de 400 millones de pesos (más de 160.000 dólares) mensuales de la extorsión sólo en los *sanandresitos*. También controlaban muchas de las redes de prostitución de la capital y participaban ampliamente en secuestros, extorsión y sicariato –las mismas tácticas contra las cuales se suponía que estaban luchando– con el fin de expandir sus propiedades. Estuvieron involucrados en la trata de blancas e invirtieron en tiendas, concesionarios de autos, estaciones de gasolina, construcción, juegos de azar, contrabando y moteles. Según un informe oficial, los paramilitares dominaban distritos marginales

257. Garry Leech, “An Unjust Demobilization”, 20 de junio 2005, en: www.colombiajournal.org

completos, como Ciudad Bolívar en el sur, utilizando a bandas para tomar el control de la economía local. Uno de los autores de dicho informe advirtió que Bogotá se estaba convirtiendo en algo similar a la Medellín de don Berna.²⁵⁸

En Bucaramanga, Santander, un delegado que participó en un proyecto de investigación comparativa sobre el paramilitarismo habló sobre la “don bernización” de la ciudad, donde se reclutaban a jóvenes pobres de los barrios del norte –comunidades 1 y 2 (53 vecindarios)– para trabajar en la economía ilegal dominada por la mafia paramilitar. El área metropolitana de Bucaramanga (AMB) estaba controlada conjuntamente por el Bloque Central Bolívar (BCB), bajo el mando de Iván Duque (“Ernesto Báez”), y el Bloque del Norte (BN) de “Jorge 40”. Almacenes y tiendas de todo tipo en La Cumbe y Bucarica en las comunas 1 y 2 pagaban seis mil pesos diarios (2,50 dólares) en impuestos, mientras que los mecánicos y zapateros en la Comuna 3 pagaban lo mismo. Los autolavados le cobraban a los choferes de autobuses dos mil pesos diarios (ocho mil si el chofer quería seguridad contra atracos). Los taxistas pagaban tres mil pesos y los vendedores ambulantes 500 pesos

258. *El Tiempo*, 2 de julio de 2005.

por el uso de los espacios públicos. El toque de queda empezaba después de las 9 p.m. y se les prohibía a las muchachas usar minifaldas o escotes. Los drogadictos, criminales, mujeres adúlteras y prostitutas eran “limpiados”. Aún así, como los demás paramilitares en el resto del país, en Bucaramanga reclutaban a hombres y mujeres jóvenes para trabajar en las lucrativas redes de droga y prostitución.²⁵⁹

Con el paso del tiempo, la mafia de la droga paramilitar organizó a la juventud desempleada en un ejército laboral contrainsurgente móvil y disciplinado. Esto iba más lejos de lo que Marx imaginó cuando describió el papel del lumpenproletariado en la Francia de mediados del siglo XIX. Habitantes desempleados de los barrios pobres, especialmente de Antioquia, el eje cafetalero y los Santanderes habían poblado gran parte de la Costa Atlántica. La colonización de la frontera cafetalera en el siglo XIX llevó a la fundación de nuevos municipios bajo el auspicio del Partido Conservador o Liberal; la segunda oleada de colonización, por su parte, fue hecha desde barrios pobres o pequeños pueblos en el interior hacia otros pueblos y barrios, principalmente aquellos de la periferia nacional que

259. *Vanguardia Liberal*, 19 de julio de 2005.

favorecían a las AUC. Mientras que las FARC habían abandonado la “combinación de todas las formas de lucha”, sus oponentes la emplearon más efectivamente que nunca.²⁶⁰ Estos se anotaron su primera victoria clave en las elecciones del Congreso, en marzo de 2002, en las cuales obtuvieron entre el 30 y el 35 por ciento de los escaños.

Sin embargo, una nueva generación de soldados había reemplazado a los duros veteranos de guerra creados en el molde de los Castaño y Mancuso. Estos no llevaban uniformes ni vivían en remotas regiones montañosas o de tierras bajas, sino que se desplazaban anónimamente en las ciudades y pueblos, desempeñando tareas cotidianas de administración, ocupación y acumulación. Eran más parecidos a *los pájaros* que a las tropas de Castaño. En el fondo, muchos de los nuevos reclutas estaban desarmados, y, a diferencia de las Convivir, no cargaban radiotransmisores colgados en el cinturón. En Valledupar, Santa Marta, Cartagena, las ciudades al norte costero; Bucaramanga y Barrancabermeja en los Santanderes; Villavicencio y Puerto Asís en las selvas del sur; Medellín, Cali y Bogotá en el corazón andino; o en Pereira y Manizales en

260. Álvaro Delgado, “El problema de fondo”, en *Actualidad Colombiana*, XXVI: 405, 27 abril 2005.

el eje cafetalero, podían ser vistos alquilando teléfonos celulares para llamar, atendiendo puestos de frutas, vendiendo CDs y lentes de sol, manejando taxis, encargados de talleres mecánicos, siendo guardias de edificios públicos y negocios privados, cobrando facturas, supervisando los movimientos dentro y fuera de los vecindarios, protegiendo a políticos y hombres de negocios, manejando sus motos haciendo diligencias y encomiendas, o sentados en restaurantes, bares, panaderías y cafés, escuchando a escondidas las conversaciones de la gente.

“Chaleco antibalas judicial”

A finales de junio de 2005, el Congreso colombiano (35% del cual estaba controlado por paramilitares, según Mancuso y José Vicente Castaño) aprobó la “Ley Justicia y Paz”, y, a finales de julio, Uribe la firmó a pesar de la controversia nacional e internacional. El director de la organización Human Rights Watch-Américas Watch advirtió que la ley “lavaría los registros criminales de los altos comandantes paramilitares, incluyendo a algunos de los señores de la droga más poderosos del país, al tiempo que les permite quedarse con sus riquezas y mantener su control sobre la ma-

yoría del país”.²⁶¹ Un superior “violentologista” predijo un escenario de italianización que “produciría un orden basado en el crimen y la crueldad” en el cual el “terror y la superconcentración de riquezas” serían los rasgos distintivos.²⁶²

Así como el discurso “antiterrorista” les negaba a las guerrillas la posibilidad de lograr reconocimiento político como actores anti-Estado, bajo el artículo 72 de la “Ley Justicia y Paz”, las AUC se aseguraron un estatus político como “subversivos” y “rebeldes”.²⁶³ Esto permitiría a los altos comandantes evitar sentencias prolongadas de cárcel y/o la extradición. Las sentencias serían de un máximo de seis años y medio. A un grupo de 20 fiscales se le daría un máximo de 60 días

261. José Miguel Vivanco y María McFarland Sánchez-Moreno, “A Bad Plan in Colombia”, en *International Herald Tribune*, 16 de mayo de 2005. La ONU estuvo de acuerdo, aunque con una típica blanda cautela. En “Colombia’s Paramilitaries”, en *International Herald Tribune*, 31 de mayo de 2005, el canciller colombiano Barco afirmó: “No puedo pensar en ningún proceso semejante en la historia moderna que haya sido tan democrático y abierto al debate libre y franco entre todas las partes interesadas”. Como las AUC, Barco excluyó a las víctimas de las atrocidades paramilitares de la lista de las “partes interesadas”. Esto violaba las leyes internacionales, como señalaron, entre otros, los abogados de José Alvear Restrepo.

262. Álvaro Camacho Guizado, “Paras y parapolítica”, en *El Espectador*, 12 de junio de 2005. “Violentología” es un campo interdisciplinario que ha actuado como el centro de gravedad de la historia y las ciencias sociales en Colombia desde la década de 1980. Camacho es un sociólogo pionero de la política, el crimen organizado y la violencia urbana.

263. Javier Zuluaga Nieto, “Del paramilitarismo a la parapolítica”, en *El Espectador*, 24 de julio de 2005.

para investigar los crímenes. No se desenmarañarían estructuras de mando, logística, rutas de transporte, finanzas, inversiones, alianzas políticas u otros aspectos del paramilitarismo que revelasen su parentesco con el poder oficial.

El senador Rafael Pardo, antiguo seguidor de Uribe –quien como ministro de Defensa de Gaviria propuso la idea de las Convivirs– ayudó en la coautoría de una ley que pedía la investigación en las estructuras financieras, militares y políticas de las organizaciones paramilitares, junto con alguna forma de compensación para las víctimas de los crímenes paramilitares contra la humanidad. Él sostuvo que la legislación “Justicia y Paz” hacía de “la justicia una farsa” y advertía que esto podría “conducir al establecimiento legal de un modelo político basado en el crimen organizado”.²⁶⁴ El ex presidente Gaviria, buscando salvar al Partido Liberal del colapso bajo la presión del uribismo, hizo eco de lo expresado por Pardo. “Las mafias se han apoderado de varios departamentos”, insistió, “no sólo en términos de drogas, sino en cuanto a la administración también... Uno ve al Presidente muy cómodo con estas

264. *El Tiempo*, 10 de abril de 2005. Ver también, “Subido de tono”, en *Semana*, 20 de mayo de 2005; John Otis, “Colombia podría sacrificar la justicia para buscar la paz”, *Houston Chronicle*, 21 de mayo de 2005; Alfredo Molano, “El Delete”, en *El Espectador*, 22 de mayo de 2005.

situaciones”.²⁶⁵ Los dos acordaron que la “Ley Justicia y Paz” de Uribe garantizaría la impunidad a los líderes del crimen organizado, facilitando la penetración de la mafia estatal en las regiones, ciudades y municipios.

Ya que el gobierno de Bush no financiaría sino una fracción del improvisado y legalmente dudoso proceso de desmovilización –cuyos costos el embajador Wood estimó en 170 millones de dólares– Uribe inicialmente miró hacia Europa y el resto del mundo. El embajador estadounidense William Wood calificó la aparición de Mancuso ante el congreso colombiano en julio del 2004 como “absurda” e insistió en que los paramilitares no eran actores políticos, sino más bien “criminales, traficantes de droga, asesinos y ladrones”. Aún así, en 2006, el gobierno estadounidense apartó 20 millones de dólares para destinarlos a su ostensible desarme.²⁶⁶

Como un reflejo del poder relativo de las organizaciones de derechos humanos en la Unión Europea comparado con los EE UU, los gobiernos europeos y las agencias de préstamo multinacionales, cuando se reunieron en Cartagena en febrero del 2005, pidieron

265. *El Nuevo Herald*, 14 de junio de 2005.

266. *Semana*, 10 de octubre de 2004.

que los crímenes paramilitares contra la humanidad fuesen castigados. Los desembolsos de fondos dependían de la aprobación de una legislación que ordenase la investigación, encarcelación y alguna otra forma de compensación. Siguiendo a la ONU, la Unión Europea rechazó contundentemente la “Ley Justicia y Paz” de Uribe calificándola de inaceptable de acuerdo con los estándares internacionales.²⁶⁷ El apoyo a las políticas de “seguridad democrática” y paz con los paramilitares (como quiera que estuviesen calificados) fue, sin embargo, una sorprendente retirada del apoyo a una paz negociada con las FARC y el ELN –el centro de la diplomacia de la UE desde la década de 1980 hasta los primeros años del gobierno de Pastrana.

En una muestra de cuánto había cambiado la política exterior de la UE, luego de haber accedido a la ocupación anglo-estadounidense de Irak, el ministro de Defensa alemán Hans Georg Wagner expresó en abril de 2005 su entusiasmo por la “seguridad democrática”.²⁶⁸

267. En julio de 2005, Uribe hizo un tour diplomático a Madrid y Londres para pregonar el esquema, calculando, correctamente tal como resultó, que encontraría caballos de Troya en la periferia de Europa a través de la cual pasar de contrabando la desmovilización en la agenda de política extranjera de la UE. En una discusión, de algún modo, acrítica sobre la lucha contra el terrorismo en Londres, Madrid y Bogotá, el *Financial Times* reconoció que “algunos políticos europeos” habían destacado las conexiones entre el ejército colombiano y los paramilitares.

268. “Secretario del Ministerio de Defensa alemán expresa su respaldo a política

El contraste entre el trato ofrecido a las AUC versus las FARC era notable. Las FARC nunca habían aceptado un cese al fuego con el gobierno de Pastrana, por lo que no se desprestigiaban al violarlo, como hacían las AUC a diario. El territorio de las FARC estaba en la mira para ser tomado a través del Plan Patriota.

El Plan Patriota ayudó a convertir el conflicto colombiano en una fuente de continua tensión diplomática regional. Aunque este plan de 700 millones de dólares fue en mayor parte financiado por el gobierno colombiano, también fue supervisado por 800 consejeros estadounidenses y 600 mercenarios y contó con los EE UU para apoyo logístico e inteligencia militar así como también con más de 100 millones de dólares en “ayuda” anuales. Este plan se inició a finales del 2003 con la finalidad de expulsar a las FARC de la zona central de 116 millas de extensión del Caquetá, Meta, Guaviare y Vaupés y extraditar a los líderes de las FARC a los Estados Unidos. El Plan Patriota era una expresión mayor de la Operación Marquetalia (más la extradición) y expandió la guerra hasta Venezuela y Ecuador; cerca de 20.000 tropas ecuatorianas se agruparon a lo largo de la frontera colombiana en abril de 2006, mientras

de seguridad democrática”, en: www.alpha.mindefensa.gov.co

que en Venezuela, más de 100 colombianos estuvieron en la cárcel por conspirar para asesinar a Hugo Chávez en coordinación con los paramilitares y el DAS colombianos (el servicio de inteligencia que responde sólo al presidente Uribe).

A los paramilitares se les permitió quedarse con las mejores tierras del país –cerca de la mitad de *toda* la tierra cultivable, de acuerdo con la Contraloría General de la República– junto con las redes más rentables de producción, transporte y distribución de narcóticos, sin mencionar los negocios legales de fachada. El proceso de “desmovilización” comenzó en noviembre de 2003, se aceleró a finales del 2004 y dejó a más de 30.000 ex paramilitares desmovilizados para marzo de 2005.²⁶⁹ Los comandantes declararon que, en vez de ir a la cárcel por los “excesos” cometidos en “defensa de la patria”, tomarían las armas nuevamente. La extradición a los Estados Unidos era impensable, al igual que las compensaciones a las familias de las víctimas. En abril de 2005, con las negociaciones a punto de resolverse, el vocero político de las AUC, Iván Duque (alias

269. Para el fracaso de las desmovilizaciones iniciales, ver Human Rights Watch, “Smoke and Mirrors: Colombia’s Demobilization of Paramilitary Groups” (2005), en: www.hrw.org; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Oficina de los Derechos Humanos en Colombia, “Consideraciones sobre la ley de ‘Justicia y Paz’”, 27 de junio de 2005.

“Ernesto Báez”) amenazó con “volver a las montañas”, pero una vez que Uribe firmó la “Ley Justicia y Paz”, Báez convocó a la formación de un movimiento político y describió con candor el proceso de formación paraestatal: “Hemos penetrado, de forma permanente, en el proceso político, construyendo las estructuras de poder regional y local... Nuestra meta es sobrevivir a la guerra y transformarnos en un movimiento democrático que le ofrezca a los votantes una alternativa”.²⁷⁰

Salvatore Mancuso anunció sus intenciones de hacer carrera política y elogió la ley de Uribe, por reconocer a las AUC como “actores políticos” –un objetivo mencionado por primera vez en la conferencia paramilitar protonacional en 1994.²⁷¹ Mancuso aseveró que ya que la ausencia del Estado en las zonas guerrilleras había obligado a los paramilitares a tomar las armas en “autodefensa”, las tropas de las AUC eran víctimas y, por consiguiente, tan merecedoras de las compensaciones como las víctimas de las atrocidades paramilitares.²⁷² José Vicente Castaño lo secundó, enfatizando

270. Citado en Luis Jaime Acosta, “Feared Colombian militias want political party”, *Reuters*, 21 de julio de 2005.

271. “No voy a volver al monte”, en *Semana*, 16 de abril de 2005; Jaime Zuluaga Nieto, “Del paramilitarismo a la parapolítica”, en *El Espectador*, 24 de julio 2005.

272. Para un análisis previo de la retórica paramilitar, ver Fernando Estrada Gallego, “La retórica de paramilitarismo: Análisis del discurso en el conflicto armado”, en *Análisis Político*, 44, septiembre-diciembre 2001, pp. 44-66.

los nexos familiares de las AUC con la política oficial colombiana y exigiendo que a los paramilitares se les diera un “chaleco antibalas judicial” contra la extradición y las sentencias en prisión. Él predijo que las AUC mejorarían su ya fuerte posición en el Congreso en las elecciones legislativas de marzo del 2006; su predicción se hizo realidad, pues los ciudadanos en 22 de los 32 departamentos de Colombia votaron más hacia la derecha de lo que lo habían hecho en el 2002.²⁷³ Al discutir los planes para postularse al cargo una vez que los “obstáculos judiciales” se esclarecieran, Mancuso sugirió que muchos de los antiguos comandantes de las AUC debieran seguir su ejemplo.²⁷⁴

Los resultados de las elecciones legislativas de marzo del 2006 sugirieron que, con cautela de la extradición, los paramilitares tomaron sus indicaciones del gobierno estadounidense. Por un lado, las órdenes de extradición para 50 comandantes de las FARC eran emitidas por un gran jurado de acusación federal

273. *Semana*, 5 de junio de 2005.

274. Aunque Murillo no cumplió con las funciones de su cargo desde su celda de prisión en un suburbio al sur de Medellín, él administró el poder real –opuesto al formal– en Medellín. Esto se demostró a finales de mayo 2005 cuando las autoridades colombianas comenzaron su “cacería”, la más grande desde la muerte de Pablo Escobar, y los transportistas paralizaron Medellín en respuesta. Sin ser una sorpresa y a diferencia de los sindicalistas, los transportistas de Murillo no enfrentaron los altos niveles de violencia estatal y paramilitar.

en el distrito de Columbia, con el ministro de Justicia estadounidense Alberto Gonzáles declarando en contra de toda la evidencia que las FARC eran responsables de la mayoría de la producción de cocaína en Colombia. Añadió que la acusación “atacaba al mero centro de la operación de narcóticos de las FARC que ha inundado nuestras comunidades con cocaína”.²⁷⁵ Por otro lado, la expulsión de un puñado de candidatos abiertamente paramilitares de los más prominentes partidos pro-Uribe llevó a un apoyo paramilitar mucho mayor a la maquinaria política tradicional. Esto camufló, aunque no disminuyó, el dominio paramilitar de la política en las regiones. Jorge 40, el amo de la costa norte, esperó a que los lineamientos políticos estuvieran en su lugar, para desmovilizarse justo antes de las elecciones en marzo de 2006. Al mantener un bajo perfil político, Jorge 40 obtuvo los resultados electorales más favorables de cualquier caudillo paramilitar.²⁷⁶

275. Jerry Seper, “U.S. seeks Colombian Rebels’ Extradition”, en *The Washington Times*, 18 de abril de 2006.

276. Forrest Hylton, “Colombia: Politics as Organized Crime?”, en *NACLA Report on the Americas*, mayo-junio 2006.

Tierra calcinada en la república ganadera

Se estima que los paramilitares expropiaron cerca de cinco millones de hectáreas entre 1997 y 2003 –la más grande toma de tierras en la historia de Colombia. Un analista colombiano aseguró que el poder de la clase dominante terrateniente hizo a Colombia sencillamente atávica, mientras otros apodaron al país como una “república ganadera”.²⁷⁷ La contra-reforma agraria llevada a cabo por fuerzas de “autodefensa”, como los paramilitares se llamaban a sí mismos, favoreció a las plantaciones de bananos y de palma, así como también a las compañías madereras y las haciendas ganaderas.²⁷⁸ Los números hablan por sí solos: en 1987, 35 millones de hectáreas fueron consagradas a la ganadería y en el 2001, fueron 41,7 millones. En 1984, las haciendas con más de 500 hectáreas ocuparon el 32,7% de la tierra; en 1996, ocuparon el 44,6%. En el 2001 era 61,2 %. Ya para el 2004, el 0,4% de los terratenientes poseían el 61% de todas las tierras con títulos, mientras que la pobreza rural se incrementó de 82,6% en 2001 a 85% en 2003.

277. Héctor-León Moncayo, “Las máscaras del poder”, en *Le Monde Diplomatique-Colombia*, julio 2002, pp. 4-5; Alfredo Molano, “República ganadera”, en *El Espectador*, 10 de noviembre de 2002.

278. Codhes, “¿Penas, tierras y extradición?”, en: www.codhes.org.co; “¿Hasta cuándo?”, en *El Tiempo*, 13 de junio de 2005.

Por supuesto, los números no pueden contar las historias de los desplazados, la mayoría de los que, además del trauma, viven la persecución y discriminación políticas en los nuevos lugares.²⁷⁹ Exceptuando, por supuesto, el gran revés político, era poco probable que más de un puñado de los desplazados regresara a su lugar de origen y aún menos probable era que sus tierras (la mayoría de ellas sin títulos de propiedad) se las devolvieran. Sólo uno de cada tres recibió ayuda de cualquier tipo por parte del Gobierno; y aunque se ha hablado mucho de los 15 millones de hectáreas de selva tropical destruida y sembrada de coca, entre 75 y 100 millones de hectáreas de selva se habían despejado para abrirle paso a la ganadería. El contralor general habló del “poder señorial de una franja antidemocrática” en los campos, calificando a los narcoparamilitares como los que ejercen el “poder real” en las regiones y municipios.²⁸⁰

279. Para algunas de estas historias, ver Molano, *The Dispossessed: Los Desterrados of Colombia*, Chicago, 2005. Para estadísticas, ver Dario Fajardo, “La tierra, el poder político y las reformas agraria y rural”, ILSA, Bogotá, 2002, citado en Moncayo, “Las máscaras”; Alfredo Molano, “Políticas enlatadas”, en *El Espectador*, 24 de noviembre de 2002.

280. “Autodefensas se apropiaron de las tierras en Urabá por la fuerza”, *El Tiempo*, 2 de julio 2005. En San Pedro de Urabá, donde había sido planificada la masacre de Mapiripán, las AUC hicieron una oferta que pocos hombres casados sostenes de hogar podían rechazar: “¿Quieres venderte a nosotros o quieres que te compremos luego a tu viuda?”. Los compradores potenciales en Urabá eran todos de la “empresa” –código para las AUC (tomado prestado, a propósito de las insurgencias).

Junto al incremento de la concentración de tierras, la expropiación y el desalojo, las fumigaciones aéreas bajo el Plan Colombia han sido una iniciativa muy costosa y destructiva que ha causado la propagación de infecciones respiratorias y de la piel en la población civil, especialmente en niños y en ancianos, destruyendo cultivos tanto lícitos como ilícitos y envenenando ríos y suelos.²⁸¹ No obstante, desde 2002 hasta 2004, Washington y Bogotá alegaron haber tenido un éxito sin precedentes en su campaña contra la coca; en diciembre de 2002, un estudio de la ONU aseveró que la plantación había sido cortada alrededor en un 30 por ciento a 252.000 acres.²⁸²

Durante el 2003, se destruyeron más de 35.000 acres mensualmente –según la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a comienzos de diciembre del 2003, aún las selvas en parques nacionales que contienen 70% del agua en Colombia y 10 millones de hectáreas de selva protegidas por el Estado, eran parte del juego–. En 2005, se llevó a cabo la fumigación y/o erradicación manual en el parque Tayrona, en Magdalena, La Macarena, en Caquetá y Catatumbo, en Santander

281. Para fumigación, ver Hugh O’Shaughnessy y Sue Branford, *Chemical Warfare in Colombia: The Costs of Coca Fumigation*, Londres, 2005.

282. “Colombia’s Politics”, en *Economist*, 5 de junio de 2003.

norte, en donde menos del 1% de la superficie estaba dedicada al cultivo de coca.²⁸³

En Putumayo, mucho más al sur, “los pueblos dedicados a la cosecha y producción de la cocaína han sido abandonados como si fuesen pueblos fantasmas del viejo oeste norteamericano, sus almacenes están vacíos y su gente se ha esfumado”.²⁸⁴ Se usaron dosis altamente concentradas del herbicida *roundup* ultra de Monsanto, mezclado con cosmo-flux, un compuesto químico antiguamente suministrado por el ICI que se usaba para que el glifosato se adhiriera a lo que tocara; tal fumigación fue parte integral del Plan Colombia después del año 2000. Al rociar este componente tóxico, los pilotos colombianos y mercenarios estadounidenses destruyeron peces, vida silvestre, ganado, ríos y cultivos legales, así como los campos de coca en todo el sur de Colombia.²⁸⁵ En muchos casos, los habitantes de zonas cocaleras simplemente volvieron a sembrar más allá de la zona fronteriza.

283. Alfredo Molano, “Fumigación de parques”, en *El Espectador*, 17 de diciembre de 2003; idem, “A dos fuegos”, en *El Espectador*, 1 de mayo de 2005.

284. T. Christian Miller, “Major Cocaine Source Wanes”, en *Los Angeles Times*, 8 junio 2003.

285. Darío González Vargas, “Armas químicas y biológicas en el Plan Colombia. Interrogantes sobre ‘la estrategia antinarcóticos’”, en Estrada Álvarez, ed., *El Plan Colombia y la intensificación de la guerra: Aspectos globales y locales*, pp. 421-49.

La guerra química necesita ser vista como parte de una estrategia más amplia de la contrainsurgencia. “La fumigación es un modo... cuyo objetivo oculto es sacar a los habitantes y campesinos de sus regiones para evitar que ayuden a... la subversión... Esto tiene la misma función que el terror paramilitar: secar el agua del mar”.²⁸⁶ Aún cuando la fumigación alcanzó niveles récords con aproximadamente 136.000 hectáreas rociadas, en 2004 aún quedaban 114.000 hectáreas. No hubo “mejoría”, ya que la producción neta de coca permanecía cercana a los niveles de 1999, al contrario del 50% menos, según estaba estipulado en las metas de los autores del Plan Colombia. Los precios de la cocaína y heroína en las calles estadounidenses siguieron bajando levemente, mientras que por cada 32 hectáreas de coca fumigada, sólo una era erradicada. La producción de coca en Colombia, incluyendo el número de hectáreas fumigadas, fue mayor en el 2005 que en el 2003 y se mantuvo apenas por debajo del registro establecido en el 2002. Para el 2006, era evidente que aunque las reducciones en 2002-2003 hubiesen sido un espejismo o no, el cultivo de coca había alcanzado niveles récord nuevamente, ya que los agricultores la resembraban, reubicaban o incluso ambas. La fumigación aérea de

286. Alfredo Molano, “A dos fuegos”, en *El Espectador*, 1 de mayo de 2005.

más de 2.500 millas cuadradas de territorio colombiano, la mayoría del cual era selva y bosques tropicales, con un estrecho costo económico de 160.000 dólares por milla cuadrada, solamente tuvo éxito en la reducción de la producción de coca localmente y a menudo de manera temporal.

Por supuesto, en ausencia de algún programa de sustitución de cultivo, el terror de la guerrilla y de la contrainsurgencia en las fronteras cocaleras solo puede aumentar, tal como lo reconocen hasta los estudios realizados por la Corporación RAND. Esto ha creado también problemas diplomáticos con los gobiernos vecinos en Quito y Caracas, los cuales aseveran que tanto el Plan Colombia como el Plan Patriota han llevado a crecientes violaciones de su soberanía. Pero esto no era un costo que haría que al régimen Bush-Uribe le temblara la mano.

La guerra como paz (2002-2006)

“Durante los últimos cinco años, los colombianos han protagonizado la única historia grandiosa de éxito en Latinoamérica.”

R. Nicholas Burns, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE UU (2006)

Unificando teoría y práctica

El Poder Ejecutivo en Washington aclamó las políticas de “seguridad democrática” de Uribe, que se basaban en la integración de civiles en las áreas represivas del Estado para poder vencer a las insurgencias y extender así la autoridad del gobierno central, como un modelo para la contrainsurgencia. Aunque no han tenido éxito contra las afianzadas insurgencias guerrilleras, las políticas de seguridad democrática le han permitido a las fuerzas paramilitares extender su control sobre la vida política, económica y social a nuevas regiones. Asimismo, estas políticas han re-

forzado el colonialismo interno y violado el Protocolo de Ginebra al controlar las relaciones entre civiles y combatientes.

Cualquier interpretación del conflicto armado lleva consigo ramificaciones específicas legales, políticas y militares.²⁸⁷ Usando argumentos presentados en un libro escrito por un asesor, a finales de enero de 2005, el presidente Uribe anunció a su cuerpo diplomático que en Colombia no existía ninguna guerra ni conflicto armado.²⁸⁸ Eso, obviamente, implicaría a las partes en guerra políticamente reconocidas. En lugar de eso, un Estado preparado militarmente y una sociedad civil estaban luchando (y, con la ayuda de la “comunidad

287. Eduardo Pizarro Leongómez, *Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, 2004; Francisco Leal, “La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, en *Análisis Político*, 50, enero-abril 2004, p. 96, escribe, “cualquier proceso de paz tiene que ver con la interpretación del conflicto armado, y si es erróneo, se cometen errores costosos”. Para una mirada al primer año de Uribe en el gobierno que examina las consecuencias prácticas de interpretaciones erróneas, ver Daniel Pécaut, *Midiendo fuerzas*, Bogotá, 2003.

288. José Obdulio Gaviria, *Los sofismas de la guerra en Colombia*, Bogotá, 2004. Gaviria, primo del fallecido Pablo Escobar, es un antiguo ideólogo que de la izquierda liberal se pasó a la derecha. Para una discusión sobre cómo llamar la actual fase de guerra, ver Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, 2001; Eduardo Posada Carbó, *¿Guerra civil? El lenguaje del conflicto colombiano*, Bogotá, 2001; Álvaro Camacho Guizado, William Ramírez Tobón, y Eduardo Pizarro Leongómez, en *Análisis Político*, 46, mayo-agosto 2002, pp. 137-80; Eric Lair, “El terror, recurso estratégico de los actores armados en Colombia”, en *Guerra en Colombia*, Bogotá, 2004, pp. 131-39; y Eduardo Pizarro, “¿Conflicto armado o amenaza terrorista?”, en *El Tiempo*, 26 de abril de 2005.

internacional” guiada por los Estados Unidos pronto vencerían) contra “el terrorismo”. El debate público en Colombia frecuentemente gira en torno a la semántica; y la significación del lenguaje político no se pierde para todos.²⁸⁹ Si el problema pudiera ser redefinido como “terrorismo”, significaría el final de las presiones para una solución negociada (es decir, política) al conflicto armado con las FARC.

En la época de Guantánamo y Abu Ghraib, la aprobación de nuevas nomenclaturas también le ha permitido a Uribe ignorar el II Protocolo de la Convención de Ginebra, el cual obliga tanto a los gobiernos como a los insurgentes a distinguir entre civiles y combatientes. Entretanto, Uribe avanzó en conversaciones preliminares sobre las negociaciones de paz con el ELN en La Habana, a tono con el modelo de paz fragmentada instaurado por primera vez por Gaviria. Después del 11 de septiembre de 2001, Alberto Gonzáles (antes de convertirse en el Fiscal General de los Estados Unidos) como consejero especial de la Casa Blanca, calificó al IV Protocolo de la Convención de Ginebra de “pintoresco” y “arcaico”, mientras que en junio de 2005, el presidente Bush calificó como “absurdo” un informe

289. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, p. 99. La visión le pertenece a Antonio Caballero.

de Amnistía Internacional sobre la tortura y abuso de los derechos humanos en Guantánamo. Uribe puede haber estado esperando sacarle provecho a las nuevas doctrinas imperiales en lo referente a antiterrorismo, derechos humanos y leyes internacionales.²⁹⁰

Aunque se encuentra más allá del objetivo y alcance de este libro, la relación entre el anticomunismo de la Guerra Fría y el antiterrorismo post Guerra Fría es digna de al menos breves consideraciones. Así como los contrainsurgentes de la Guerra Fría, durante la presidencia de Ronald Reagan, los líderes de la “guerra global contra el terrorismo” del presidente George W. Bush libraron viejas batallas bajo nuevos títulos. Las guerras coloniales en Irak y Afganistán eran similares a las de Vietnam, Guatemala y El Salvador, en tanto que los planificadores y comandantes eligieron como blanco a civiles, en lo que respecta a los planificadores y comandantes tomando a civiles como blancos como una manera de luchar contra las insurgencias armadas. El núcleo contrainsurgente del anticomunismo de la Guerra Fría se conservó en la “guerra mundial contra el terrorismo”, convirtiendo a Uribe y los generales colombianos en actores contemporáneos más que anacrónicos.²⁹¹

290. Isabel Hilton, “Colombia’s Drug Untouchables”, *The Guardian*, 13 de julio de 2005.

291. Romero, *Paramilitares y autodefensas*, pp. 235-37. Ver también, Pécaut, *Mi-*

Urabá: “El mismo cambio”

La teoría de la contrainsurgencia sostiene que, en una guerra de guerrillas, la distinción entre civiles y combatientes se rompe. En la práctica, el ejército colombiano no tuvo respeto por los derechos humanos o la Convención de Ginebra, por lo que no se enfrentaron a un tribunal civil hasta 1991. El ejército colombiano consideró la supervisión civil como un obstáculo para trasladar la guerra contrainsurgente contra el pueblo colombiano y la posición de Uribe fue la misma que la de los militares. Luego de la desintegración de la Unión Soviética y el Bloque Oriental, tanto Uribe como el alto comando colombiano mantuvieron una filosofía política arraigada en la Guerra Fría, pero reciclada bajo la rúbrica de “antiterrorismo”.

Un prominente sociólogo notó que las “hipótesis de guerra” de los generales eran “inmunes al cambio”.²⁹² Como si ilustrase las consecuencias de este enfoque, el 21 y 22 de febrero de 2005, cerca de la pacífica comunidad de San José de Apartadó, cuatro miembros de la comunidad, incluyendo a Luis Eduardo Guerra,

diendo fuerzas; Christan Parenti, *The Freedom: Shadows and Hallucinations in Occupied Iraq*, New York, 2004, p. 206; Greg Grandin, *Empire’s Workshop: Latin America and the Roots of US Imperialism*, New York, 2006.

292. Eduardo Pizarro, citado en Kirk, *More Terrible than Death*, p. 113.

uno de los líderes y fundadores de la zona, tres niños de 2, 6 y 11 años, respectivamente, y un adolescente de 17 años fueron asesinados. Algunos fueron degollados con machetes y sus cuerpos desmembrados.²⁹³ De acuerdo con residentes locales, quienes se rehusaron a testificar ante las autoridades correspondientes por temor a represalias, soldados del ejército fueron responsables. El ejército suministró declaraciones confusas y contradictorias acerca de sus acciones durante la masacre.

Algunos líderes, como Luis Eduardo Guerra, viajaron a los Estados Unidos y Europa para explicar su situación y los esfuerzos para mejorarla. Como resultado de la presión internacional, una corte interamericana de derechos humanos ordenó que los miembros de San José recibieran garantías de seguridad por parte del gobierno colombiano. La masacre de febrero, sin embargo, llevó a 152 al número total de miembros de la comunidad asesinados (19 de ellos a manos de las FARC) lo que demostró los límites de la solidaridad internacional.²⁹⁴

293. Ver Adam Isacson, "San José de Apartadó: Jesús Abad's disturbing account", 1° de abril 2005, en: www.ciponline.org

294. SOA Watch, citado en Bill Weinberg, "Uribe's 'Counter-Guerrilla' Campaign Targest Indigenous Models of Demilitarization", 6 de junio de 2004. El 9 de marzo de 2005, 32 congresistas norteamericanos, incluyendo a líderes republicanos de la Cámara y del Senado, enviaron al presidente Uribe una carta expresando su preocupación de que junto a los paramilitares locales, miembros de las XI y XVII

Sin embargo, los habitantes de San José, como practicantes de la neutralidad militante no violenta con fuertes vínculos hacia las organizaciones internacionales de derechos humanos, continúan insistiendo en que para vivir y producir en paz necesitan que todas las fuerzas armadas, incluyendo las tropas y policías del gobierno, permanezcan fuera de su comunidad.

Ellos amenazan con recoger y marcharse si el gobierno insiste en montar estaciones de policía en el poblado, lo que podría hacerlos blanco de las incursiones de la FARC. Sin embargo, el ex ministro de la Defensa, Jorge Alberto Uribe, dijo que no era posible que hubiese paz sin la protección de la policía y de las fuerzas armadas. El presidente Uribe fue más allá diciendo que: "Hay buenas personas en la comunidad, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores han sido señalados por las personas que viven allí como ayudantes de la FARC".²⁹⁵ Debido a las insurgencias izquierdistas,

brigadas pudieran estar involucrados. El jefe de la XVII Brigada, el general Héctor Jaime Fandiño Rincón, había estudiado en la Escuela de las Américas durante la era del Plan Cóndor. En una carta con fecha de 1° de julio de 2005, el demócrata Patrick Leahy y el republicano Richard Lugar, jefe del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, junto con otros 20 senadores, solicitaban a la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, no certificar al gobierno de Uribe por progreso en los Derechos Humanos. Entre otras atrocidades citaron la masacre en San José. Adam Isacson, "Human Rights Certification? Not Yet", 16 de julio de 2005, en: www.ciponline.org

295. En respuesta, la Alta Comisión de la ONU recordó a Uribe que la Corte In-

todas las formas de movilización y protesta social fueron tildadas de sospechosas, incluso criminales, ya que se pensó que los insurgentes las dirigían secretamente.

Esto llevó a la conclusión de que si los civiles que apoyaban a las guerrillas no eran primero identificados y luego cooptados o elegidos como blanco, ni el Estado ni sus tropas financiadas y entrenadas en los EE UU podrían ganar su guerra. A principios de abril de 2005, una estación policial había sido colocada en San José y la mayoría de los 400 habitantes que quedaban se habían ido para fundar un nuevo municipio, La Holandita, sin escuela, servicios médicos, electricidad, agua corriente o aguas servidas. Había solo un baño para toda la comunidad. En mayo, solo cinco familias permanecían en el poblado original, pero la policía estaba allí en grandes cantidades.²⁹⁶

Conforme a un modelo de desarrollo económico conducido por empresas de agroindustria y financia-

teramericana de los Derechos Humanos de la OEA pidió al gobierno colombiano garantizar la seguridad de todos los miembros de las comunidades. *El Tiempo*, 23 de marzo de 2005.

296. Hugh Bronstein, "Police in Population out after Colombian Massacre", *Reuters*, 10 de mayo de 2005; Winifred Tate, "A Visit to San José de Apartadó", 13 de junio de 2005, en: www.ciponline.org; comunicado público de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, "La verdad y la transparencia no son ambigüedad ni confusión", 14 de junio de 2004, en: www.codhes.org.co; Colombia Support Network, "The Massacre at Mulatos in Colombia", 26 de junio de 2005, en: colombiasupport.net

das por capital extranjero, antiguas tierras de la comunidad de San José fueron arregladas para ser utilizadas para el desarrollo de plantaciones de palmas africanas. Puesto que las plantaciones de palmas requerían de deforestación y fuerte irrigación representaban un peligro para ríos, selvas y comunidades.²⁹⁷ En su primera intervención pública, José Vicente Castaño se acreditó el aumento de las palmas africanas y la incursión de la agroindustria en Urabá. Castaño había invertido, convencido a otros de invertir y había salido en busca de nuevas regiones de inversión.

Conocidas como la estrategia entre bastidores, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización creada por Castaño, también conocido como "el profesor", ofrecieron una teoría rudimentaria de formación de Estado. Las AUC aseguraban regiones para la inversión y el Gobierno colombiano seguía a los inversionistas. "Hemos buscado a personas ricas para invertir en diversas regiones de todo el país, ésa es una de nuestras misiones como *comandantes*."²⁹⁸ De esta manera, la palma africana –implantada como estado de soberanía por la vía del terror y la expro-

297. Las cabeceras de cinco ríos se unen en San José: el Apartadó, Carepa, Currulao, Mulatos y Riogrande.

298. *Semana*, 5 de junio de 2005.

piación– representó una amenaza para la supervivencia de afro-colombianos y mestizos en San José, así como para las reservas indígenas a lo largo de los ríos Atrato, Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó y Salami.²⁹⁹ La comunidad de paz de San José agregó que “el exterminio del que hemos sido objeto por parte de las fuerzas armadas, las cuales han actuado claramente con paramilitarismo, no es invención nuestra ni es una cuestión de estadísticas. Nuestras víctimas tienen caras, historias y familias”.³⁰⁰

Cauca: “Regreso a la fuente”

Los grupos indígenas del Cauca están actualmente a la cabeza de los movimientos radicales populares en Colombia. Estos encabezaron la marcha más grande en la historia del Cauca (60.000 personas) en septiembre de 2004 contra la política de seguridad democrática y la propuesta del tratado de libre comercio con los Es-

299. Molano, “¿Qué hay detrás de San José?”, en *El Espectador*, 12 de marzo de 2005; el Consejo Comunitario de Curvaradó y Jiguamiandó, “Avanza la palma, la siembra ilegal con la complicidad de la Brigada 17”, 21 de julio de 2005, en: www.indymediacolombia.org. Los ríos mencionados arriba están situados en Urabá.

300. Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comunicado público, “La verdad y la transparencia no son ambigüedad ni confusión”, 14 de junio de 2004, en: www.codhes.org.co

tados Unidos.³⁰¹ En marzo de 2005, estos grupos indígenas organizaron un referéndum para el tratado de libre comercio en el que el 70% de la población participó con un resultado del 98% de los votos contra el tratado con EE UU. Este proceso fue considerado transparente por los observadores internacionales. Un ex alcalde de Caldoso, Vicente Otero, fue uno de los organizadores claves de la campaña y el 21 de mayo agentes del DAS registraron su casa y arrestaron a 20 ciudadanos y ciudadanas. La orden de allanamiento fue emitida para otras 200 personas.³⁰² Caldono, localizado en la misma área de zona de guerra de Toribío, Jambaló y Tocueyo, fue entonces destruido por una bomba de cilindro en julio de 2005 por las FARC.

El norte del Cauca, donde las insurgencias se habían incrustado por más de 20 años, se convirtió en una retaguardia estratégica, ya que el Plan Patriota eligió como blanco el otro lado de la cordillera en Caquetá y Meta. Los generales colombianos sostuvieron que la región del Macizo –donde las cordilleras orientales y centrales se dividen– se había convertido en un

301. Justin Podur, “Will People Power Have a Chance?”, 23 de abril de 2005, en: www.zmag.org

302. Bill Wienberg, “Uribe’s ‘Counter-Guerilla’ Campaign Targets Indigenous Models for Demilitarization”, 6 junio 2005.

segundo “Caguán”. Una referencia para las negociaciones entre la FARC y Pastrana en Caquetá. La escuela de Caldon fue, consecuentemente, convertida en cuarteles y sus campos deportivos fueron convertidos en helipuertos. De acuerdo con la oficina del alcalde 2.400 personas fueron desplazadas, más de la mitad fueron mujeres y niños.³⁰³

Cuando visitó Bogotá en abril de 2005, la secretaria de Estado, Condolezza Rice, pudo no haber estado conciente de la importancia de su inquebrantable apoyo a las causas contrainsurgentes. Cuando ella llegó, las FARC habían invadido el pueblo de Tacueyó.³⁰⁴ Las fuerzas armadas tomaron Toribio sólo después de nueve días de combate sostenido con las FARC, el cual comenzó el 14 de abril y se extendió a lo largo de 14 millas al norte de los Andes.³⁰⁵ Rice reiteró sin sentido crítico la especiosa alegación de Uribe de haber tomado control sobre todos los municipios colombianos –ignorante, aparentemente, de los eventos del norte

303. *Vanguardia Liberal*, 7 julio 2005.

304. En 1985, Tacueyó fue el sitio de la masacre más horripilante que se haya registrado. Paralizado por la paranoia, el comandante del Frente Rodrigo Franco, integrado por disidentes de las FARC cercanos al M-19, liquidó cerca de 180 de sus propios soldados, muchos de ellos Nasa.

305. Karl Penhaul, “Colombia troops take rebel-held town”, 28 de abril de 2005, en: www.cnn.com. Juan Forero, “Colombia War Spills into Indians Peaceful World”, en *New York Times*, 2 de mayo de 2005.

del Cauca y de la conmoción del alto mando—. Hablar de una “solución definitiva” en el conflicto armado de Colombia fue en el mejor de los casos producto de una desinformación y, en el peor, una mala señal. Siguiendo la iniciativa de Rice, Uribe prometió emprender “acciones definitivas” para “derrotar a los terroristas” en el norte del Cauca.³⁰⁶

Aunque Rice declaró que “las mejoras concretas en seguridad e imperio de la ley están fomentando una cultura de legitimidad en Colombia y un sentido de seguridad para sus ciudadanos”, los titulares de prensa rotundamente la contradijeron. El único grupo que implementó el imperio de la ley fue inmovilizado en el fuego cruzado entre las FARC y el ejército. El alto mando militar (cuatro de cuyos miembros fueron obligados a renunciar luego de que discreparon acerca de la efectividad de las operaciones conjuntas de tareas de fuerzas) había sido catalogado de torpe. Esto fue con mucho la más convincente demostración, hasta la fecha, de que las FARC eran tan militarmente capaces en 2005 como lo fueron en 1995, y que la seguridad democrática no había sido efectiva en derrotar a las **insurgencias**.³⁰⁷

306. “Uribe ordena una guerra sin cuartel para aplastar a las FARC”, *El Nuevo Herald*, 1 de mayo de 2005.

307. Para una crítica de la eficacia militar de las políticas de seguridad democrática

Los ataques, como los ocurridos en San José, ases-
taron en el corazón de los movimientos radicales en
Colombia. Las FARC no pudieron ser culpadas por los
hechos de San José. Toribio fue otra ilustración de su
actitud criolla colonial hacia los indígenas en el Cauca
y otras partes.³⁰⁸ La muerte de un niño de nueve años
y los daños causados con bombas cilíndricas de gas
fueron mostrados por todo el mundo. Los hombres y
mujeres Nasa movilizaron sus “guardias indígenas”,
que dieron un total de 7.000, y armados con varas de
madera, símbolo de posición de liderazgo, caminaron
hasta la posición de comando de las FARC en el tope
de la montaña para decirles que no lanzaran bombas
en el poblado.

Aquí estaban las políticas de seguridad democrática
basadas en la resolución de conflictos no violentos de
comunidades tradicionales no liberales que promovie-
ron el imperio de las leyes, la protección gubernamental
de derechos fundamentales, la participación política y
democrática y la soberanía popular. Sin embargo, Uribe,

ca, ver Francisco Leal, “La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, en *Análisis Político*, 50, enero-abril 2004, pp. 97-98.

308. Para un resumen de las relaciones de las FARC con los pueblos indígenas en el Cauca, ver Richani, *Systems of Violence*, p. 188, n. 15; Pablo Tattay, “FARC y población indígena: Una muestra de la relación con la población civil”, en *Las verdaderas intenciones de las FARC*, Bogotá, 1999, pp. 194-98. Tattay fue el vocero para el grupo guerrillero Quintín Lame en las negociaciones con el gobierno de Gaviria.

como lo hizo luego de la masacre de San José, insinuó
vínculos entre las comunidades y las FARC. A finales de
mayo del 2005 había ordenado arresto para 200 Nasa
acusados de mantener vínculos con la FARC.³⁰⁹ Como
hicieron con las FARC (y previamente con las AUC) los
líderes de la comunidad reiteraron al presidente Uribe
y al cuerpo militar la necesidad de librar sus territorios
de todos los grupos en el sistema de guerra.

En plena discusión sobre la presencia de policías y
militares y rechazando los presuntos lazos con la insur-
gencia en uno de los “concejos comunitarios” de Uri-
be, un grupo liderado por el congresista Nasa Daniel
Piñacué se fue en protesta contra la incompreensión del
Presidente sobre los modos Nasa de resolución de con-
flicto. La Organización Nacional de Indígenas (ONIC)
calificó al “concejo comunitario” como un “espectáculo
mediático” y explicó que los representantes de “diver-
sas instancias del gobierno orquestado por el Presiden-
te dialogaron entre ellos imponiendo su posición, sus
políticas e intereses, influyendo en los reportes e impi-
diendo preguntas o críticas”.³¹⁰ Claramente, Uribe y el
pueblo indígena tenían visiones incompatibles de auto-
ridad, democracia, seguridad y soberanía popular.

309. *El Tiempo*, 19 de mayo de 2005.

310. *El Tiempo*, 3 de mayo de 2005.

Mientras en San José, la policía llegaba a Toribio para quedarse.³¹¹ El Estado no permitiría la neutralidad de los ciudadanos en la guerra que había prometido ganar y demandaba la colaboración contra las FARC. Aquellos que se mantuvieran serían recompensados, mientras que los que no serían tildados de sospechosos. El líder comunitario Ezekiel Vitonás, quien viajó a New York para pronunciar un discurso ante las Naciones Unidas en mayo de 2005, criticó a Uribe: “Identidad, unidad, territorio y cultura son los cuatro pilares contemplados en la Constitución, pero la autodeterminación de los pueblos indígenas no es apoyada”. Vitonás especificó que “autodeterminación” significaba desarrollar una forma de vida y subsistencia basada en la tradición y defensa ante cualquier amenaza.³¹²

Los derechos indígenas y la autodeterminación merecieron ser mencionados en el Senado estadounidense durante su reunión de ayuda exterior de 2006. Pero no estaba en la lista de prioridades de Bush en Colombia. Haciéndose eco en la justificación de la política exterior estadounidense en El Salvador a prin-

311. “Indígenas dejan consejo por diferencias con el Presidente”, en *El Colombiano*, 1 de mayo de 2005.

312. Citado en “No vamos a obedecerle a nadie”, en *Vanguardia Liberal*, 3 de mayo de 2005.

cipios de la década de 1980, la secretaria de Estado, Rice, repetía que mientras continuaran las mejoras en cuanto a los derechos humanos, la erradicación de la cocaína y otros aspectos, Colombia estaba “encaminada”. Esto se adaptaba a la visión que el gobierno de Bush tenía en Irak, formada en parte, por veteranos de campañas contrainsurgentes en Centro América, para quienes El Salvador era usado como ejemplo de éxito imperialista. En enero del 2006 la secretaria Rice y Bush mencionaron a Colombia como una plantilla para la democracia contrainsurgente. Cada uno habló independientemente de la supuesta necesidad del gobierno iraquí de “limpiar” el territorio de las insurgencias y “mantener” los territorios libres de amenazas insurgentes. Este fue el lenguaje usado para explicar los objetivos del Plan Patriota. En el “noticiero de MacNeal/Leher” en diciembre de 2005, el presidente Bush puso de ejemplo a Colombia como el éxito imperialista en lo que él llamó el frente “corazón y alma”, empleando los términos “limpio y sostenido” en su “Estrategia Nacional para la Victoria en Irak” en enero de 2006.³¹³ Aparentemente, nada tiene tanto éxito como el éxito mismo.

313. Adam Isaacson, “Clear and Hold”, 5 de enero de 2006, en: www.ciponline.org

Conclusión: decreto de amnesia 314

Solo queremos olvidar el pasado.

*Manuel Mariano,
paramilitar desmovilizado (2006)*

Hacia finales del siglo XIX, las guerras civiles, frecuentes pero de pequeña escala, hicieron a Colombia representativa dentro de Latinoamérica, pero a partir de la Violencia de la década de 1940 y 1950 –un conflicto que dejó al menos 200.000 personas muertas– su curso histórico ha sido más violento que el de sus vecinos. A pesar de las diversas trayectorias, las políticas electorales social-democráticas apoyadas por las organizaciones radicales populares caracterizaron el escenario actual en Suramérica. En Colombia, al contrario, las insurgencias de izquierda fuertemente militares, la policía y las fuerzas armadas apoyadas por el imperio y una

314. Sobre la amnesia, ver Antonio Caballero, “Prólogo”, en Olga Behar, *Las guerras de la paz*, Bogotá, 1985, pp. 7-9.

semiautónoma y crecientemente poderosa coalición de narco-ejércitos privados de derecha despertó a los movimientos populares radicales. Los patrones de terror antiguerrilla contra civiles establecidos durante la Violencia fueron reforzados durante la Guerra Fría y reempacados bajo la rúbrica de anti-terrorismo luego del 11 de septiembre de 2001. No es la primera vez que, en respuesta a conflictos para lograr la paz y la justicia, el terror y la amnesia oficial se hayan convertido en la *lengua franca* de la sociedad y de la política colombiana.

La primera derrota histórica de las fuerzas radicales populares se dio en 1879. Aunque la lucha en el Cauca fue regional, los “independientes” liberales respaldaron la postura de Rafael Núñez en cuanto a la dominación, así que las implicaciones políticas fueron nacionales. En la “era del capital” (1848-76) algunos oficiales políticos colombianos fueron señalados por continuas movilizaciones populares, mientras grupos subordinados definieron nuevas ideas de ciudadanía y soberanía popular en el discurso y la práctica. En el Cauca, ex esclavos, personas de color libres, comunidades indígenas y pobladores fronterizos de Antioquia participaron en una vigorosa reunión político-republi-

cana en la que la equidad, la fraternidad y la libertad fueron ideas por las cuales luchar. Ellos lucharon por un lugar en la nueva república, desafiando la dominación racial y burocrática, los modos de explotación colonial y la configuración espacial del territorio. El Estado fue llamado a ayudarlos en sus esfuerzos, exigiendo ser jueces locales y regionales de los conflictos con los oligarcas hacendados. El potencial para una apertura política radical popular provocó un miedo tremendo entre la élite regional del Cauca. Esto ayudó a unirlos –a pesar de pronunciar diferencias políticas– en medio de un autoritario conservatismo hispano que asumió el mando por medio siglo.

A pesar del estallido de la Primera Guerra Mundial, la producción de café continuó superando los récords previos, las resistencias campesinas e indígenas y las rebeliones cambiaron las políticas de monopolio bipartidistas en acciones directas, experimentos locales en autogobiernos y nuevos partidos socialistas revolucionarios. Desafiaron el dominio de los terratenientes por la adquisición de la tierra basados en el lema “la tierra pertenece a los vástagos”. Los enclaves, respaldados por el recién formado partido comunista y los sindicalistas en la exportación del plátano, el aceite y el oro

presionaron a la administración liberal para promulgar un programa de reformas sociales y económicas para redistribuir la tierra y la riqueza, regular las relaciones entre la mano de obra organizada y el capital y decidir sobre el conflicto entre el gobernante y sus leyes. La Ley 200 de 1936, diseñada para darle títulos de tierra a los habitantes, no fue ni burguesa, ya que no eliminó el desafío para los derechos de propiedad privada, ni democrática, ya que no hizo que el derecho a la tierra fuera más difundido entre los campesinos, excepto a lo largo de los centros de café en donde un campesino ganaba un título de parcela de tierra y entraba a la clase media a través de grupos políticos y de las asociaciones de cultivadores de café.

Para explicar las peculiaridades colombianas, debo enfatizar cómo las experiencias de la Guerra Fría coinciden en parte, como en un montaje, con los modelos de leyes criollos de la oligarquía, anclados en un ultra moderado catolicismo, una dominación conservadora y exportaciones de café a partir de la década de 1880, lo cual integró parcialmente a los subalternos en la economía y la sociedad a través de políticas reaccionarias. Como los liberales pretendieron anular 50 años de dominio conservador, el

sectarismo partidario se propagó con una venganza en la década de 1930 y 1940, engendrando formas de guerra total que tuvieron como blanco a los civiles. Esto estimuló y fue estimulado también por el aumento de políticos de clase media, periodistas e ideólogos quienes agresivamente tomaron posición en los fines extremos del espectro político como medio de vida.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la política agraria en Colombia fue similar a la que luego Samuel Huntington llamaría, en el contexto de la guerra de Vietnam, “proyecto de urbanización forzado” –conduciendo al campesino a las ciudades a través de guerras de contrainsurgencia en el campo–.³¹⁵ Luego de la década de 1950 el sectarismo de la intraélite fue finalmente expulsado y las heridas inflingidas fueron suturadas por la contrainsurgencia anticomunista. Una vez que la élite civil renunció a la resolución militar del conflicto guerrillero, preservar el orden público se convirtió en asunto militar. Como la Escuela de las Américas, donde aproximadamente un tercio más de oficiales colombianos estudiaron en comparación con El Salvador, su más cercano competidor, Corea

315. Noam Chomsky, *At War with Asia: Essays on Indochina*, New York, 1972, p. 55; Mike Davis, *Planet of Slums*, New York, 2006, p. 56.

servió como escuela para hombres que luego ocuparon posiciones de liderazgo dentro de la milicia colombiana durante la guerra imperialista de Vietnam, Centroamérica y los Balcanes.

El estado de terror de la contrainsurgencia colombiana fue construido por políticos civiles quienes delegaron represión a los militares, más que los dictadores militares que destrozaron sus sociedades para salvarlas como pasó con Centroamérica y el Cono Sur. Permanentes guerras civiles y democracias parlamentarias duraderas, más que dictaduras militares, hicieron que Colombia sobresaliera; aún así, durante el Frente Nacional, el uso del estado de sitio fue la regla, no la excepción. Con el fin de la Guerra Fría, el rol directo de los militares en la contrainsurgencia disminuyó y la función paramilitar se incrementó. La trayectoria del ejército colombiano y de las élites civiles que gobernaron durante y después de la Guerra Fría formaron un lado de la historia de la guerra endémica colombiana y de su muy difundido terror político.

Desde la Primera Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1940 –como el capital de inversión de los Estados Unidos creció y los gobiernos aumentaron, Suramérica se expandió– las movilizaciones radi-

cales populares desafiaron los privilegios y derechos de propiedad de la fundada élite criolla, socavando la dominación racial y clasista a un nivel no visto desde la segunda mitad del siglo XIX. Como en 1860 la movilización fue acompañada por una reforma moderada. Sin embargo, desde mediados del siglo XX hubo un período repleto de guerras en Europa y Asia y la segunda oleada de reacción fue infinita y mucho más sangrienta, hasta incluso mucho más sofisticada tecnológicamente que la primera. Perversamente, los gobiernos de derecha y sus paramilitares del terror ayudaron a estimular las movilizaciones de izquierda en las décadas de 1960 y 1970 generando migraciones en dos direcciones: la primera hacia las fronteras urbanas de las ciudades de mayor crecimiento en Colombia; y la segunda hacia las fronteras agrarias, especialmente en las selvas del sur y las llanuras del este. En aquellos lugares, el poder del Estado, aún en su aspecto represivo, fue muy débil al gobernar. Dichas áreas demostraron ser terreno fértil para el crecimiento de las insurgencias, hasta que las operaciones de contrainsurgencia militar y paramilitar se aceleraron después del año 2000 con la aparición del Plan Colombia financiado por Estados Unidos.

Gracias a un cambio en la base productiva hacia la extracción de enclaves y a extensos negocios en la agricultura y la ganadería entre la década de 1980 y 1990, las guerrillas izquierdistas obtuvieron proyección militar, extensión territorial y poder local y a la vez perdieron sus ventajas en la política nacional, incrementando el uso de tácticas de terror que tradicionalmente habían sido empleadas contra ellos por sus oponentes. En Colombia ha habido insurgencias de guerrilla desde 1948, pero sus años dorados se mantuvieron desde 1978 hasta 1998. La guerrilla colombiana creció más rápido cuando su imagen pública había sido irremediablemente empañada.

Es por ello que con el apoyo institucional de muchos tipos, los opositores de la contrainsurgencia se propagaron e incrementaron con asombrosa velocidad la aceptación social entre 1997 y 2005 confiándose de privatizaciones, represiones descentralizadas y expropiaciones violentas de territorios. Esto fomentó una masiva reconcentración de tierra, riqueza y poder político. Durante la prolongada agonía y muerte del Frente Nacional, cuando el gobierno central intentó implementar reformas o negociar la paz con los insurgentes entre 1983-84, 1987-88, 1991-92 y

1998-99, los gobiernos regionales y locales además de los viejos y nuevos *latifundistas* –unidos de pies y manos con los paramilitares– emplearon el terror concentrado contra individuos, siendo testigos las comunidades.

Por ser considerados “el ala desarmada de la subversión”, los activistas que buscaban cumplir la promesa –socialismo democrático revolucionario– por la que Salvador Allende entregó su vida en Chile, se convirtieron en blancos de una campaña de asesinato militar y paramilitar sistemática a finales de la década de 1970. Una década después con la fundación del partido político Unión Patriota (UP), en gran parte exterminado, y con los candidatos de izquierda asesinados, ni la insurgencia ni la contrainsurgencia consideraban válida la distinción entre combatientes y civiles. En la década de 1990, bajo una guerra económica neoliberal, el individualismo anárquico prevalecía en las fronteras rurales y urbanas con un desbordado crimen organizado y una fuerte presencia de valores antisociales capitalistas basados en la violencia, la intimidación y el exterminio de la izquierda electoral.³¹⁶

316. Fabio López de la Roche, “Cultura política de las clases dirigentes en Colombia: Permanencias y rupturas”, en López de la Roche, comp., *Ensayos sobre cultura política colombiana*, p. 181.

Las mafias de las drogas le inyectaron sangre fresca a las más antiguas élites de hacendados en el campo, colocándolos efectivamente a ellos y a los dos partidos tradicionales en “sistemas de apoyo de la vida” en regiones y *municipios*. Las corporaciones multinacionales encontraron que los narco-paramilitares ofrecían la única garantía de “seguridad” para la propiedad privada y las ofertas de empleo. Junto con el colapso de precios de 1989, los nexos con los carteles de la droga y los paramilitares dieron el último paso hacia la destrucción de la república cafetalera construida a finales del siglo XIX. Los traficantes se convirtieron en los más poderosos *latifundistas* del país. En el nuevo orden que ellos instalaron en diversas regiones del país “la tierra pertenece al expropiador”.³¹⁷ Después de China, Colombia es quizá el más grande contrarrefor-mista agrario en el mundo; pero a diferencia de China, en Colombia la contrarreforma no ha sido precedida por una reforma de tierra.³¹⁸

Diversas maneras de tortura, asesinato, masacre y disposiciones similares a las promovidas en la Violencia

317. Alfredo Molano, “La tierra es para quien la expropia”, en *El Espectador*, 17 de octubre de 2004.

318. Para el proceso dirigido por el Estado en China, que se basa en la deuda y los impuestos en vez de en la expropiación violenta, ver Yiang Lin, “Dark Side of the Chinese Moon”, en *New Left Review*, 32, marzo-abril 2005, pp. 131-40.

cia fueron revividas a través de nuevas vías organizadas a finales del siglo XX en Colombia. Se crearon 21 nuevas dinámicas prematuras debido principalmente al tremendo impacto del comercio de narcóticos, al avance político-territorial del paramilitarismo y al incremento de la intervención militar estadounidense. Sin embargo, la presencia del pasado, especialmente de los hechos de la Violencia, era palpable.³¹⁹ Sánchez enfatizó que “sin darnos cuenta descubrimos que solo habíamos escrito la introducción para el análisis del presente. En ningún otro campo de estudio ha tenido el pasado tanta fuerza en el presente –o el presente tanta fuerza en el pasado”.³²⁰

En las regiones periféricas donde la producción de productos de exportación y la extracción de recursos naturales predominaba, los afro-colombianos, los indígenas y los pobladores fronterizos vivían bajo un terror ilimitado –durante la Violencia y nuevamente a finales del siglo XX.³²¹ Eventualmente, esto fue una realidad para aquellos que vivían en los centros de café

319. Para una nota sobre la legalidad de la Violencia, ver Álvaro Camacho Guizado, “El ayer y el hoy de la violencia en Colombia: continuidades y discontinuidades”, en *Análisis Político*, 12, enero-abril 1991, pp. 27-42.

320. Sánchez, “Reseña: *Orden y violencia*”, por Daniel Pécaut”, en *Análisis Político*, 2, septiembre-diciembre 1987, p. 164.

321. Idem, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas”, p. 25.

donde se promovieron muchas tácticas por primera vez en la década de 1950. La proliferación del sicariato, el secuestro y la extorsión dieron origen a una aptitud histórica de circularidad y repetición trágica. Para muchos, la esperanza de un futuro era difícil de sostener, ya que existían motivos para un profundo pesimismo. Este es el vacío al que Álvaro Uribe entró.

La represión de la derecha y el crecimiento desmedido de la resistencia armada explicaban la relativa debilidad y fragmentación de los movimientos radicales populares en Colombia. Mirando el pasado, está claro que siempre que el centro de la política colombiana se incline hacia la redistribución –de la riqueza, los recursos y el poder político– o hacia las negociaciones de paz con los insurgentes, el cambio será razonable. El poder político permanece vinculado a los hacendados quienes controlan la riqueza y el territorio. A mediados de la década de 1990 el emporio de los *capos* de la droga paramilitares llegó a ser más inclusivo, mejor organizado y estrechamente ligado a los funcionarios públicos. El negocio de la droga ya no dependía de los carteles centralizados y este cerrado grupo generó mucho más que cualquier otra industria en el país. Ninguna fracción de la oligarquía colombiana ha-

bía unido a otros grupos en torno a un proyecto por la hegemonía a nivel nacional. Ninguno había liderado o dirigido a otras fracciones en el fortalecimiento del Estado-nación, los derechos de propiedad y las ofertas de empleo. Como resultado, a principios del siglo XXI los narco-paramilitares –los defensores privados del Estado y de la propiedad privada– colocaron más y más restricciones en las elecciones locales, regionales e incluso nacionales.

El poder disperso de un centro político debilitado atestó a la parcialización de la soberanía. Aún si el pasado precedente no significase nada, la emulación de los hechos de la contrainsurgencia venezolana en Falcón a principios de la década de 1960 o de Fujimori en Ayacucho y el valle de Huallaga en la década de 1990, requeriría una capacidad para movilizar a un electorado campesino hostil tanto a las guerrillas como a las sutilezas del clientelismo anticomunista. Esto nunca ha existido en las selvas y llanuras tropicales del sur y sureste de Colombia. Queda ver si la llegada del ejército colombiano, antecedida o seguida por la ocupación paramilitar, puede crearla. Observar la tierra desde el cielo y hacer imposible la vida económica en las zonas rebeldes es una táctica con antecedentes, en los inicios

de la Guerra Fría. Esto evoca el terrible eslogan acuñado por Zuleta en el epígrafe del capítulo siete: “Si no podemos y no queremos modificar las circunstancias que determinan estas manifestaciones de miseria, marginalización y desesperación, entonces déjenos eliminar a las víctimas”. Sin embargo, una estrategia de este tipo no ha alterado la primera condición de las guerrillas y de las movilizaciones radicales populares –un orden político excluyente. Puede haberlas hecho más fuertes.

Aunque Colombia es hoy en día excepcional dentro de América Latina, gracias a su continua guerra civil, generalmente podría ser más representativa que Bolivia, en donde las movilizaciones populares han establecido fuertes restricciones al estado de violencia y han permitido la nacionalización de los recursos de hidrocarburos, así como un cambio en la representación política más allá de las minorías dominantes de criollos y mestizos. Me he enfocado en explicar el carácter excepcional de la violencia política de Colombia desde los años cuarenta, pero el capítulo final sugiere que con los presidentes Bush y Uribe Colombia pudiera haberse convertido en un modelo de “exitosas” contrainsurgencias y democracias de “baja intensidad” en el mundo.

Con la bendición de Washington y las instituciones financieras internacionales en la década de 1990, la riqueza y el poder estaban concentrados a niveles extraordinarios por excluyentes sistemas parlamentarios democráticos, caracterizados por elecciones regulares y políticas económicas neoliberales. El Salvador, Nicaragua y Guatemala podrían ser ejemplos de la región latinoamericana en donde el excesivo aumento del crimen, la impunidad y los sombríos asesinatos políticos por la mafia abrieron paso a “exitosas” contrainsurgencias, a excepción del FMLN (Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí) y el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), que resistieron exitosamente, aunque de manera casi irreconocible, la transición de ejército a partido electoral.³²² Como muchas democracias de mercado emergentes más allá del Atlántico norte, destacan características endémicas y étnicas raciales en conflicto, altos niveles de violencia e impunidad y una potente fusión de la política con el crimen organizado. Irak y Afganistán pudieran ser otros ejemplos de sociedades donde las insurgencias políticas, económicas neoliberales y elecciones “democráticas” toman lugar en medio de la creciente impu-

322. William I. Robinson, *Transnational Conflicts: Central America, Social Change and Globalization*, New York, 2003.

nidad del crimen organizado, exceptuando que ambos países están bajo la ocupación de Estados Unidos y son, por consiguiente, excepcionales.

Como parte de la formación Estado-nación, otras “democracias de baja intensidad” en Latinoamérica establecieron comisiones oficiales para la verdad, tras períodos de gobiernos de Estados Unidos financiando el terrorismo de Estado.³²³ En el caso colombiano, la incorporación de paramilitares a las elecciones y a la vida pública –la fusión de la política y el crimen organizado– oficialmente tuvo como premisa el cumplimiento de la indiferencia con precedentes en la Guerra Fría. Por medio de la ley de “Justicia y Paz”, Álvaro Uribe ha admitido el crimen paraestatal, ocultando sus crímenes en una bruma para luego sumirlos en el olvido, logrando la justificación de aquellos que fueron amnistiados por Rojas Pinilla en 1950.

Al menos hay tres diferencias significativas entre aquel momento y el presente. Primero, la falta de vín-

323. Greg Grandin, “The Instruction of Great Catastrophe: Truth Commissions, National History and State Formation in Argentina, Chile and Guatemala”, in *American Historical Review*, 110:1, febrero 2005, 46-67. Para un estudio comparativo de comisiones de la verdad y legislación sobre crímenes contra la humanidad, ver Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, “Procesos públicos de esclarecimiento y justicia de crímenes contra la humanidad”, en *Análisis Político*, 50, enero-abril 2004, pp. 52-71.

culos de mecenazgo con cualquiera de los partidos ha hecho que las guerrillas izquierdistas tengan pocas probabilidades de tomar parte en la amnistía; con el gobierno de Uribe, las FARC al menos estarán en la mira para eliminarlos como “terroristas”. Segundo, la coalición regional de bloques paramilitares es mucho más fuerte en relación con los dos partidos y el gobierno central de lo que fue hace cincuenta años. Su estrategia de acumulación de capital y su evolución como un Estado paralelo les da un considerable nivel de relativa autonomía del Estado que las creó. Tercero, el sistema de bipartidismo está colapsando ante el impacto del uribismo. Cualquiera que sea el futuro entre conservadores y liberales es poco probable que sobreviva intacta la propuesta de integración paramilitar al Estado y a la sociedad.

Proponiendo un análisis del pasado para posesionarlo en el presente, he situado debates públicos acerca de la memoria y la justicia, considerando lo que aconteció antes. Los modos coloniales de dominación política, la explotación económica y la discriminación étnica/racial no acabaron con las guerras de independencia, sino que entraron en una nueva etapa de donde aún tienen que salir. El momento actual es cierta-

mente uno de los más sombríos para Colombia, pero si el pasado es una guía, éste también deberá pasar.

Corrientes radicales-populares no han demostrado nada, sino una gran resistencia al recrearse a sí mismos en circunstancias de extraordinaria dificultad, a pesar de las sucesivas oleadas de terror de Estado, paramilitar, e incluso insurgente. Estos movimientos han luchado para mantener un Estado responsable para sus ciudadanos y fortalecer el dominio de las leyes, de acuerdo con los derechos constitucionales. Han ofrecido, por lo tanto, un modelo diferente de autoridad, enraizado en formas colectivas no liberales de democracia, al ofrecido por el Estado o las insurgencias, para no hablar de los paramilitares. Comparados con los Nasa en el Cauca, la comunidad de paz de San José o los afro-colombianos y las comunidades indígenas en el Chocó, las FARC y las contrainsurgencias han empobrecido la visión de democracia militar, seguridad, autonomía y soberanía. Observando el pasado colombiano, podríamos trazar la esperanza una vez más en el hecho de que los movimientos populares-radicales han surgido para reivindicar la autodeterminación dentro de una organización política más pacífica, equilibrada y justa.

ÍNDICE

Prólogo	5
Introducción	13
Recordando a Colombia	13
Contexto	13
Objetivo	27
Los temas	31
Republicanismo radical y popular (1848-1880)	47
Desde el comienzo hacia abajo	48
Desde el final hacia arriba	54
<i>Termidor</i> tropical	62
De la reacción a la rebelión (1880-1930)	65
Capitalismo cafetalero y clientelismo	66
Ascendencia antioqueña	73
¿Un nuevo mundo?	79
La pausa liberal (1930-1946)	85
Populismo incipiente	87

Dos pasos hacia atrás	91	Involución (1998-2002)	243
Hacia la Violencia	96	Pactos electorales. Paz escurridiza	244
La Violencia (1946-1957)	103	Plan Colombia	253
El Bogotazo como revolución fallida	106	Lazos familiares	260
La Resistencia y la Reconquista	110	El filo del precipicio (2002-2006)	271
Dictadura de la Guerra Fría	121	Un nuevo feudalismo	273
El Frente Nacional: cierre político (1957-1982)	129	“Chaleco antibalas judicial”	284
Contrainsurgencia	130	Tierra calcinada en la república ganadera	294
Insurgencia	142	La guerra como paz (2002-2006)	301
Contrarreforma, represión, resurrección	149	Unificando teoría y práctica	301
Negociando la guerra sucia (1982-1990)	167	Urabá: “El mismo cambio”	305
Narco-política y paramilitarismo	168	Cauca: “Regreso a la fuente”	310
“Apertura política”	173	Conclusión: decreto de amnesia	319
La clausura	184		
Paz fragmentada, soberanía parcelada (1990-1998)	197		
<i>Neoliberalismo a la Colombiana</i>	199		
Avance insurgente	214		
Contra-avance	228		

Imprenta **Nacional**
y Gaceta **Oficial**

ISBN: 978-980-7238-21-2

